



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO**  
FACULTAD DE DERECHO

LA PROBLEMÁTICA TEÓRICO PRÁCTICA DEL PROCESO CONSTITUCIONAL  
EN MÉXICO (1987-2012)

TESIS  
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  
DOCTOR EN ESTUDIOS JURÍDICOS

PRESENTA  
M. EN D. JUAN RIVERA HERNÁNDEZ

TUTOR ACADÉMICO:  
DR. CARLOS EDUARDO MASSÉ NARVÁEZ

TUTORES ADJUNTOS:  
DR. VÍCTOR ALEJANDRO WONG MERAZ  
DR. RODOLFO RAFAEL ELIZALDE CASTAÑEDA

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, JUNIO 2017

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. RAZÓN DEL ESTUDIO.....	15
--------------------------------------	----

### **CAPÍTULO PRIMERO** PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

I. OBJETO DE ESTUDIO.....	27
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	27
III. JUSTIFICACIÓN.....	31
IV. HIPÓTESIS.....	33
V. OBJETIVOS.....	34
1. <i>Objetivo general</i> .....	34
2. <i>Objetivos particulares</i> .....	34
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	34
VII. MARCO TEÓRICO.....	35
VIII. ESTADO DEL CONOCIMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO.....	35
IX. METODOLOGÍA GENERAL.....	35

### **CAPÍTULO SEGUNDO** EL ENJUICIAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN

I. ENJUICIAMIENTO EN EL DERECHO PROCESAL HISPÁNICO.....	39
II. CONTROL CONSTITUCIONAL.....	40
1. <i>Control de constitucionalidad</i> .....	52
2. <i>Sistemas de control de constitucionalidad</i> .....	56
III. JUSTICIA CONSTITUCIONAL.....	62
1. <i>Sistema de justicia constitucional americano</i> .....	65
2. <i>Sistema de justicia constitucional europeo</i> .....	66
IV. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.....	68
1. <i>Tribunal, Corte o Sala constitucional</i> .....	72
2. <i>Evolución de la jurisdicción constitucional</i> .....	73
V. DEFENSA CONSTITUCIONAL .....	77
VI. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.....	81



### **CAPÍTULO TERCERO**

#### **SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO**

I. ORIGEN DEL PROCESO.....	87
II. CONCEPCIONES DE LA NATURALEZA DEL PROCESO.....	91
1. <i>Contrato</i> .....	98
2. <i>Cuasicontrato</i> .....	99
3. <i>Relación jurídica</i> .....	100
4. <i>Situación jurídica</i> .....	102
5. <i>Entidad jurídica compleja</i> .....	103
6. <i>El proceso como institución</i> .....	104
7. <i>Concepciones menores</i> .....	108
III. EL PROCESO CONSTITUCIONAL.....	109

### **CAPÍTULO CUARTO**

#### **LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES EN LA LEY FUNDAMENTAL DE 1917**

I. ENJUICIAMIENTO CONSTITUCIONAL.....	115
II. LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES VIGENTES.....	131
1. <i>Acción de inconstitucionalidad</i> .....	131
2. <i>Amparo</i> .....	133
3. <i>Amparo político-electoral</i> .....	134
4. <i>Controversia constitucional</i> .....	136
5. <i>Facultad de investigación de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos</i> .....	138
6. <i>Habeas data</i> .....	139
7. <i>Juicio de revisión constitucional electoral</i> .....	139
8. <i>Juicio político</i> .....	141
9. <i>Procedimientos ordinario y especial sancionador</i> .....	141
10. <i>Queja ante comisiones de derechos humanos</i> .....	145
11. <i>Recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y juicio electoral</i> .....	146
12. <i>Desaparición del poder en las entidades federativas</i> .....	149
13. <i>Cuestión política</i> .....	150
14. <i>Límite territorial</i> .....	153
15. <i>Procedimiento de remoción de las personas a cargo de las consejerías electorales de los organismos públicos electorales</i> .....	154
16. <i>Constitución y registro de partidos políticos nacionales y locales</i> .....	156
17. <i>Responsabilidad administrativa y hechos de corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción</i> .....	159
18. <i>Proceso penal</i> .....	160
19. <i>Procedimiento individual, colectivo o intersindical de los trabajadores de los Poderes de la Unión</i> .....	160
20. <i>Proceso de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de</i>	

<i>una manera general, todo contrato de trabajo.....</i>	161
21. <i>Proceso de fiscalización de recursos federales.....</i>	162
22. <i>Proceso de justicia cívica e itinerante.....</i>	163
23. <i>Proceso laboral de servidores electorales en materia federal.....</i>	164
24. <i>Justicia agraria.....</i>	165
25. <i>Proceso de registro de candidaturas para ser votadas en todos los cargos de elección popular.....</i>	165
26. <i>Conflicto o diferencia laboral entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su personal.....</i>	165
27. <i>Proceso ante la Corte Penal Internacional (subsidiario).....</i>	166
28. <i>Ideas para la teoría general del proceso constitucional.....</i>	166
<b>III. SISTEMATIZACIÓN.....</b>	168
1. <i>Los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos vigentes en la ley fundamental de 1917.....</i>	169
2. <i>Esquema de los procesos constitucionales.....</i>	170

## **CAPÍTULO QUINTO**

### **PROPUESTA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES**

<b>I. LA PARTE PROCESAL DEL ORDEN FUNDAMENTAL.....</b>	175
<b>II. PROPUESTA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES.....</b>	178
1. <i>Cuestión de inconstitucionalidad.....</i>	179
2. <i>Omisión de inconstitucionalidad.....</i>	181
3. <i>Amparo, amparo político-electoral, omisión de inconstitucionalidad, procedimientos ordinarios y especiales sancionadores locales.....</i>	182
4. <i>Opinión consultiva de los tribunales constitucionales.....</i>	182
5. <i>Amparo interamericano (subsidiario).....</i>	184
6. <i>Opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (subsidiario).....</i>	186
7. <i>Ideas para la teoría general del proceso constitucional y su actualización.....</i>	187
<b>II. SISTEMATIZACIÓN EN PROSPECTIVA.....</b>	188
<b>CONCLUSIONES.....</b>	193
<b>FUENTES DE INFORMACIÓN.....</b>	203
<b>ANEXOS.....</b>	218
<b>I. TESIS JURISPRUDENCIALES Y PRECEDENTES.....</b>	218
<b>II. DOCUMENTOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1987.....</b>	257
<b>III. ARTÍCULOS PÚBLICADOS DURANTE EL DOCTORADO.....</b>	275
1. <i>Massé Narváez, Carlos E. y Rivera Hernández, Juan, “La hermenéutica en la</i>	

interpretación conforme de los derechos humanos en el orden jurídico mexicano”, *Metodos. Revista de ciencias sociales*, 2014, vol. 2, núm. 1, mayo.

2. “El derecho procesal electoral del estado de Querétaro”, *Revista expresiones. Letras ciudadanas a favor de la democracia*, México, Instituto Electoral de Querétaro, núm. 13, año 3, septiembre-diciembre de 2013.

3. *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, 1ra. y 2a. ed., México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, con las siguientes voces:

A. *Caso Miguel Vega*

B. *Amparo Agrario*

C. *Constitución Federal de 1824*

D. *Homine libero exhibendo*

E. *Recurso “obedézcase pero no se cumpla”*

F. *Justicia mayor*

G. *Jurisfirma*

H. *Manifestación de personas*

I. *Procesos constitucionales de la libertad*

4. “El amparo local en México: Análisis procesal constitucional”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Enrique Uribe Arzate (coord.), *Derecho procesal constitucional local. Nuevas expresiones a la luz del paradigma de los derechos humanos, una guía práctica*, México, Porrúa, 2014, núm. 103.

5. “La libertad en el goce de los derechos fundamentales basada en precedentes” *Revista expresiones. Letras ciudadanas a favor de la democracia*, México, Instituto Electoral de Querétaro, núm. 20, año 7, mayo-agosto 2016, pp. 46 y 47.

## INTRODUCCIÓN. RAZÓN DEL ESTUDIO

... ninguna disciplina jurídica ofrece tan brillante futuro como la antaño modesta ciencia procesal, ya que el proceso tiende a invadir y a abarcar todo el inmenso campo del Derecho.\*

El lunes 10 de agosto de 1987, se publicó en el *Diario Oficial de la Federación*,<sup>1</sup> una reforma que perfilaba la delineación del proceso constitucional de amparo “para mantener incólume la supremacía de la Constitución... el respeto y exacto cumplimiento del orden jurídico nacional,”<sup>2</sup> mediante las instancias del recurrente.<sup>3</sup>

Con relación al orden jurídico de las entidades federativas, en el 2000 se establecieron procesos constitucionales dirigidos a la realización de sus constituciones,<sup>4</sup> protegiéndose de manera subsidiaria, la supremacía del orden fundamental.<sup>5</sup>

---

\* Fix Zamudio, Héctor, “La garantía jurisdiccional de la constitución mexicana (ensayo de una estructuración procesal del amparo),” *Tesis de licenciatura*, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1955, p. 66.

<sup>1</sup> “Decreto por el que se adicionan la fracción XXIX-H al artículo 73, la fracción I-B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107; se reforma el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el artículo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107; y se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987), consultado el 27 de enero de 2017.

<sup>2</sup> Texto de la exposición de motivos de la referida reforma. Disponible en el anexo II. Documentos de la reforma constitucional de 1987.

<sup>3</sup> Cfr. Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad. Con referencia a los ordenamientos Alemán, Suizo y Austriaco*, trad. Héctor Fix Zamudio, México, UNAM, Instituto de Derecho Comparado, Imprenta Universitaria, 1961, p. 98.

<sup>4</sup> Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “La regulación de los mecanismos de control constitucional en las entidades federativas (esbozo comparativo)”, en González Oropeza, Manuel y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coords.), *La justicia constitucional en las entidades federativas*, México, Porrúa, 2006, p. 1053.

<sup>5</sup> Del análisis sistemático de los artículos 133 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la naturaleza jurídica de la supremacía constitucional que defiende el cumplimiento del orden fundamental. La naturaleza jurídica indicada tiene sustento en el enunciado del artículo 133 que dispone: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el

En 2011, se configuró el proceso constitucional de acuerdo con las reformas en materia de derechos fundamentales,<sup>6</sup> de amparo<sup>7</sup> y en términos del enjuiciamiento contenido en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con el cumplimiento de las sentencias condenatorias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió contra del Estado mexicano.<sup>8</sup>

Por lo tanto, en el periodo de veinticinco años (1987-2012), y un lustro más, los procesos constitucionales se han dirigido a la realización del orden jurídico mexicano y, lo más importante, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.<sup>9</sup>

---

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”, así como tiene su fundamento en el enunciado del artículo 41 que establece: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 5 de febrero de 2017. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_050217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_050217.pdf), consultado el 13 de febrero de 2017.

<sup>6</sup> “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, el 10 de junio de 2011. Disponible en: [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011), consultado el 27 de enero de 2017.

<sup>7</sup> “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, el 6 de junio de 2011. Disponible en: [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011), consultado el 27 de enero de 2017.

<sup>8</sup> Desde 1999 existe jurisprudencia mediante la cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enjuiciado al Estado mexicano en asuntos relativos a 10 sentencias de casos contenciosos, 9 resoluciones de convocatoria de audiencia de casos contenciosos, 40 sentencias de medidas provisionales, 2 resoluciones de solicitudes de medidas provisionales, 2 sentencias de opiniones consultivas, 1 sentencia en otros asuntos relativo a la solicitud de ampliación de presuntas víctimas y negativa de remisión de prueba documental, 15 resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia, en términos de lo previsto por el “Buscador de Jurisprudencia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>, consultado el 30 de diciembre de 2016. Con excepción del dato consistente en las 2 sentencias de opiniones consultivas, cuyo información no estuvo disponible en el referido buscador, sino que este dato forma parte de la obra de Roa, Jorge Ernesto, *La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, *Temas de Derecho Público no. 94*, Bogotá, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2015, pp. 196-201 y 206-212.

<sup>9</sup> De la identificación del proceso del maestro Carnelutti, se obtiene el sustento teórico de la realización de las normas materiales: “... el propio Guarneri reconoce, en pos de Carnelutti, que componiéndose el proceso de hombres y de cosas, cuya organización resulta indispensable para que satisfagan su objetivo final, en él existe un conjunto de normas de orden puramente técnico, instrumental, dirigidas a la realización de las normas materiales, o sea a la de los fines que el legislador asigna a la jurisdicción: no componen directamente un conflicto de intereses, sino que

Sin embargo, su entendimiento teórico y práctico es ambiguo, lo que motiva a dudas, incertidumbre o confusión, en la interminable problemática del control del poder y de la eficacia de los derechos de las personas.

Justamente, el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con las normas constitucionales puede ser analizado por la teoría general del derecho procesal;<sup>10</sup> sin embargo, este enjuiciamiento también es examinado por otras teorías<sup>11</sup> que lo conciben con sus propios conceptos y principios, al tiempo que le asignan diferentes denominaciones que no tienen el mismo sentido y alcance, porque "... se han manejado con bastante imprecisión respecto a la tutela de las normas fundamentales".<sup>12</sup> Estas denominaciones del enjuiciamiento son control, justicia, jurisdicción y derecho procesal, constitucionales.

Asimismo, la aplicación práctica de los procesos constitucionales no tiene univocidad en el derecho que los regula, sino se requiere un amplio conocimiento en las normas para saber cuáles son las que se deben utilizar para instarlos.<sup>13</sup>

---

sirven para componerlo, atribuyendo un poder en vez de imponer una obligación." Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1a. reimp. 1992, t. I, p. 388.

<sup>10</sup> El enjuiciamiento indicado se inspira en la definición de la teoría general del proceso del maestro Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, quien la concibe como la exposición de los: "principios, conceptos e instituciones comunes a todas las ramas de *enjuiciamiento* del derecho procesal (énfasis propio)". Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, "La teoría general del proceso y la enseñanza del derecho procesal", *Revista Iberoamericana de derecho procesal* Madrid, España, 1968, p. 5.

<sup>11</sup> Por ejemplo, en el concepto de defensa constitucional, el profesor Héctor Fix Zamudio refiere: "*La protección de la Constitución es materia de la Ciencia Política en General, de la Teoría del Estado y del Derecho Constitucional* (énfasis original)". Fix Zamudio, Héctor, "La garantía jurisdiccional... *op. cit.*", p. 66.

<sup>12</sup> Fix-Zamudio, Héctor, *Introducción al derecho procesal constitucional*, México, FUNDAP, 2002, p. 70.

<sup>13</sup> Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Compendio de derecho procesal constitucional* con el subtítulo *Legislación, prontuario y bibliografía*, 4ta. ed., México, Porrúa, 2008 (la 1ra. ed. se realizó en 2003). En esta compilación se encuentra: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; Ley Reglamentaria del Artículo 76 Constitucional; Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Código Federal de Procedimientos Civiles; Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Estatuto y Reglamento de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Declaración para el reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo tanto, para una posible solución del problema indicado es necesario analizar el objeto de estudio, con fundamento en la teoría general del derecho procesal.

Igualmente, una base para la realización del referido análisis es observar lo dispuesto por el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que establece que las partes dogmática y orgánica<sup>14</sup> son los componentes de la Constitución.<sup>15</sup>

Sin embargo, se tiene la idea que el orden fundamental tendría tres partes: la *dogmática* que reserva derechos fundamentales; la *orgánica* que establece la configuración, representación y ejercicio del poder; y, la *procesal* que se dirige a la realización del derecho del orden fundamental.

De la parte procesal mencionada dependería la vida misma de la Constitución. Sin esta parte quedaría el imperativo orgánico que prevé la revolución que devolvería la vida al orden constitucional violado, ignorado o incierto.<sup>16</sup>

En este contexto, la existencia de la parte procesal puede realizarse previendo los procesos constitucionales en el propio texto constitucional;<sup>17</sup> o bien, dicha parte procesal puede crearse en un título de la Constitución de Querétaro; o, se puede

---

<sup>14</sup> La idea de las partes del orden fundamental puede estar relacionada con las acepciones de "Constitución formal" y "Constitución material". Cfr. Huerta Ochoa, Carla, "Constitución en sentido formal" y "Constitución en sentido material, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. I, pp. 191-195.

<sup>15</sup> "Artículo 16o.- Toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución." Disponible en: <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/22/pr/pr19.pdf>, consultado el 30 de enero de 2017.

<sup>16</sup> La parte orgánica del orden fundamental contiene el título noveno nombrado "De la inviolabilidad de la Constitución que dispone: "Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, *tan luego como el pueblo recobre su libertad*, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta (énfasis añadido)." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 5 de febrero de 2017. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_050217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_050217.pdf), consultado el 13 de febrero de 2017.

<sup>17</sup> Cfr. De manera enunciativa y no limitativa, como se prevé en los artículos 99, 102, 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 5 de febrero de 2017. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_050217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_050217.pdf), consultado el 13 de febrero de 2017.

ordenar la emisión del “código de procesos constitucionales”, tal como ahora de manera implícita lo dispone el artículo 1, con relación a los procesos constitucionales de la libertad, conforme lo indicado en el apartado siguiente: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea, parte, así como de las *garantías para su protección...*”

Sin perjuicio de la manera en que cómo se ordene la existencia de la parte procesal, se observa que si es necesario sistematizarla y se pueda salvaguardar en la vida actual la paz y la justicia, en beneficio de las generaciones.

De esta manera, sin acudir a la revolución, se tiene la convicción que los procesos constitucionales pueden asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y la representación, configuración y ejercicio del poder, en los Estados Unidos Mexicanos.

Guiados por el maestro Eduardo J. Couture, quien al examinar el problema de la naturaleza del proceso, precisó: “Este tema no sólo es una investigación teórica. La conclusión a que se llegue tiene consecuencias prácticas de especial importancia.”<sup>18</sup> Se puede mencionar que toda vez que el estudio teórico del objeto de estudio permite examinar la realización del derecho constitucional, en el propio análisis de los procesos constitucionales es inherente también su estudio práctico, elementos que conforman la razón de la denominación de la investigación.

La tesis se integra por cinco capítulos, las conclusiones y anexos. Los capítulos se denominan: Protocolo de investigación, el enjuiciamiento de la Constitución, sobre la naturaleza jurídica del proceso, los procesos constitucionales en la ley fundamental de 1917 y propuesta de procesos constitucionales.

El capítulo primero es el protocolo de la investigación, mediante el cual se establece el planteamiento del problema, la justificación, la hipótesis, los objetivos, el marco teórico, el estado del conocimiento del objeto de estudio y la metodología general.

El capítulo segundo distingue las nociones que identifican el enjuiciamiento de las normas fundamentales.

---

<sup>18</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho procesal civil*, 3a. ed., Buenos Aires, Roque Depalma Editor, 1999, p. 124.



El capítulo tercero describe el concepto de proceso constitucional, con base en la teoría general del proceso.

El capítulo cuarto especifica los procesos constitucionales vigentes en la ley fundamental de 1917.

En el capítulo quinto discute la ampliación de la defensa de la constitución y propone, para tal efecto, la implementación de otros procesos constitucionales.

Enseguida, se enlistan las conclusiones de la investigación y se anexan algunos documentos que configuran el objeto de estudio.

Si en la obra que se refiere descubre la existencia del derecho procesal constitucional,<sup>19</sup> el procesalista Niceto Alcalá-Zamora y Castillo mencionaba: “*Los Ensayos no son más que el fruto de perseverancias. Contra viento y marea, he querido continuar siendo procesalista. A la crítica le toca ahora decirme si el tomo que entrego a su juicio significa el triunfo de la tenacidad o el fracaso de la testarudez. Por mi parte, habida cuenta de las circunstancias en que se ha escrito el libro, me daría por satisfecho con que no se le repute un paso atrás respecto de mis trabajos precedentes (énfasis original).*”<sup>20</sup> Entonces, la tesis es continuidad de las investigaciones de estudiante universitario,<sup>21</sup> de licenciatura<sup>22</sup> y de maestría,<sup>23</sup> que muestran deficiencias propias en la ilusión de querer ser procesalista constitucional.

---

<sup>19</sup> “...*Descubrimiento procesal (1944-1947)*. El procesalista español N. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, en sus primeros años de exilio en Argentina (1944-1945) y luego en México (1947), advierte la existencia de una nueva rama procesal y le otorga denominación. En Argentina, al titular su obra *Estudios de Derecho procesal (civil, penal y constitucional)* en 1944; y al año siguiente de manera expresa señala que la institución del amparo debe ser considerada dentro del Derecho procesal constitucional, en una reseña que realiza a un comentario de un libro en la *Revista de Derecho Procesal* (1945). Y en México en las referencias que realiza en su clásica obra *Proceso, autocomposición y autodefensa (contribución al estudio de los fines del proceso)*, en 1947.” Ferrer-Mac Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen Científico (1928-1956)*, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 83.

<sup>20</sup> Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, *Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional*, Buenos Aires, Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina, 1944, p. 11.

<sup>21</sup> Rivera Hernández, Juan, “Derecho procesal constitucional del Estado de México”, *Revista El Jurista, Barra de Abogados del Estado de México*, México, Primera Época, núm. 2, enero-junio 2009, pp. 163-192.

<sup>22</sup> Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias de la Sala Constitucional del Estado de México,” *Tesis de licenciatura*, México, Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAEM Amecameca, 1o. de julio de 2009.

<sup>23</sup> Rivera Hernández, Juan, “El amparo local en México. Análisis procesal constitucional”. *Tesis de Maestría*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, 2 de agosto de 2013.

## DEDICATORIAS

*A mis padres Martín Leonardo Rivera Bautista y María de Lourdes Hernández Flores, con eterno agradecimiento por mucho y por todo*

*A mis hermanos Kari, Daniel Martín, Lulú, su esposo Javier y mi primer sobrino Christopher Javier, con gran afecto*

*A Claudia Méndez López, con gran afecto al ser mi compañía a un año y medio*

*A mis abuelitas Margarita Flores Hernández y Ubi Catalina Bautista Rodríguez, por la felicidad de tenerlas conmigo*

*A todos mis familiares y amigos*



## **AGRADECIMIENTOS**

*Al Dr. Carlos E. Massé Narváez, por su valiosa tutoría en la  
investigación realizada y su apoyo en mi ingreso  
a los estudios de postgrado en el Doctorado en Estudios Jurídicos*

*A la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México,  
por la distinción de conferirme el Doctorado en Estudios Jurídicos*

*Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al  
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por permitirme aplicar  
los procesos constitucionales respectivos,  
en mi desempeño laboral*

*Al Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, por sus estudios y continuidad  
en el esfuerzo para fundamentar la investigación científica del  
Derecho procesal constitucional y con motivo de nuestro encuentro  
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a una década (2007)*

*A todos mis familiares y amigos*



**CAPÍTULO PRIMERO**  
**PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN**



## **CAPÍTULO PRIMERO**

### **PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN**

#### **I. OBJETO DE ESTUDIO**

El objeto de estudio es la parte procesal del orden fundamental y los procesos constitucionales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente de 1917.

#### **II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

En la exposición de motivos de la reforma constitucional materia de examen,<sup>24</sup> se señalaba el 21 de abril de 1987:

...

Si las proposiciones que esta iniciativa contiene merecen la aprobación del Poder Constituyente Permanente, el control de la constitucionalidad, que atañe al todo social, quedará sujeto básicamente al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, con sede en el Distrito Federal, y el control de la legalidad se atribuirá a los tribunales colegiados de circuito, que tienen su sede en los lugares que son cabecera de los propios circuitos, diseminados en todo el territorio nacional, con lo cual se culmina el proceso de descentralización de la justicia federal y se acerca la justicia al pueblo.<sup>25</sup>

...

De esta manera, el “legislador constitucional”<sup>26</sup> propuso que el órgano vértice de impartición de justicia de la nación, conociera, de modo principal, de los conflictos

---

<sup>24</sup> “Decreto por el que se adicionan la fracción XXIX-H al artículo 73, la fracción I-B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107; se reforma el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el artículo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107; y se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987), consultado el 27 de enero de 2017.

<sup>25</sup> Disponible en el anexo II. Documentos de la reforma constitucional de 1987.

<sup>26</sup> Se considera que el “legislador constitucional” puede ser compatible con las exigencias de la comprensión contemporánea del Estado Constitucional, sin embargo en la tradición jurídica para



relacionados con las disposiciones constitucionales, mediante su enjuiciamiento a través del proceso constitucional de amparo.

Pero, al enjuiciamiento lo denominó control de constitucionalidad, un concepto que no sería del derecho procesal, sino del derecho constitucional, y en esa virtud, se dificultaría el entendimiento de la parte procesal de la Constitución.

Precisamente, el enjuiciamiento atañe también al todo social y le corresponde a los jueces, como lo indicaba la referida exposición de motivos, pero, también, de manera análoga, a las autoridades que sin ser formalmente jueces, les corresponde ejercerlo para solventar los conflictos constitucionales de su competencia.

En este sentido, el enjuiciamiento en el procesal constitucional sería ejercido por las autoridades que conocen de los procesos constitucionales, en contraste, para los estudios constitucionales, el control de constitucionalidad es ejercido por los jueces.

La diferenciación expuesta no es menor, porque se evidencia que con base en la ideología del derecho constitucional, los conflictos de normas constitucionales solo era un tema de jueces, en este caso, de los jueces que conocen del proceso constitucional del amparo.

Sin embargo, de conformidad con las ideas para una teoría general del proceso constitucional,<sup>27</sup> se observaría que el ejercicio del enjuiciamiento indicado, correspondería a las autoridades, quienes tienen que seguir un proceso para asegurar el cumplimiento del orden fundamental.

Además, en dicha exposición de motivos se observa otra imprecisión del proceso constitucional de amparo:

...

El control de la constitucionalidad es el juicio que permite afirmar la existencia de concordancia, formal y material, entre la norma inferior y la norma suprema que es la constitución; la concordancia material se analiza respecto del contenido de la norma creada y el contenido de la parte dogmática de la Constitución, y la concordancia formal se concluye por el respeto del órgano y

---

referirse a dicha autoridad, se utilizan los conceptos de “poder reformador”, “constituyente permanente”, entre otros. Desde un punto de vista ideal, el legislador constitucional sería lo más cercano al concepto del legislador racional del jurista Carlos Santiago Nino. Cfr. Nino, Carlos Santiago, *Introducción al análisis del derecho*, 9a. ed., Barcelona, Ariel, 1999, pp. 328 y 329.

<sup>27</sup> Vid. *Infra*. Ideas para una teoría general del proceso constitucional.

procedimiento para la creación de la norma inferior, con las disposiciones contenidas en la parte orgánica de la Constitución.<sup>28</sup>

...

De lo anterior se desprende que al proceso constitucional se le nombró *juicio o control de constitucionalidad*.<sup>29</sup>

Sin embargo, el proceso y el control de constitucionalidad no pueden ser considerados lo mismo, porque el primero se dirige a la realización de las normas constitucionales, y el control de constitucionalidad es la actividad mediante la cual se analiza si existe o no esa realización, esto es, el control de constitucionalidad sería el contenido del proceso constitucional,<sup>30</sup> al tiempo que desde la perspectiva del procesalismo se debe denominar enjuiciamiento.<sup>31</sup>

Sin embargo, tal confusión es un problema que sustenta la ambigüedad en la comprensión de la defensa del orden fundamental.

Por otra parte, también la exposición de motivos mencionaba:

...

La presente iniciativa respeta y ratifica todos los principios que rigen a nuestro juicio de amparo, por haber probado su eficacia como medio de defensa para mantener incólume la supremacía de la Constitución y el respeto y exacto cumplimiento del orden jurídico nacional; el juicio de amparo constituye la más perfecta salvaguarda de los derechos y libertades del individuo frente a la eventual actuación ilícita o extralimitada de cualquier autoridad; el juicio de amparo ha merecido el reconocimiento nacional e internacional como el

---

<sup>28</sup> Disponible en el anexo II. Documentos de la reforma constitucional de 1987.

<sup>29</sup> También en la época, al proceso constitucional de amparo se le denominaba juicio o recurso: "...considerando dichos términos equivalentes, no obstante su diverso significado, ya que el recurso es un medio de impugnación y juicio es el equivalente tradicional hispánico de proceso, (aún cuando estrictamente 'juicio' signifique el razonamiento del juez en el fallo Héctor Fix Zamudio, "La garantía jurisdiccional... *op. cit.*, p. 108.

<sup>30</sup> Esta idea puede encontrarse en una jurisprudencia de 1991 de los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el juez de Distrito no viola los derechos fundamentales de quien le pide el otorgamiento de la protección de la justicia federal, puesto que, precisamente tiene como función el examen analítico del acto de autoridad reclamado o el examen de la realización de las disposiciones fundamentales que prevén dichos derechos o ejercer el enjuiciamiento constitucional, a fin de constatar si en ese acto hubo o no violaciones a los derechos de la persona o quejoso, pues en todo caso, su proceder de ser equívoco, sólo podría entrañar infracciones a las normas rectoras del proceso constitucional de amparo. Jurisprudencia, 8a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo VIII, Agosto de 1991, Tesis: V.1o. J/12, p. 123, registro: 222065. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>31</sup> *Vid. Infra*. Enjuiciamiento en el derecho procesal hispánico y control de constitucionalidad.

proceso singular, que mediante un mismo procedimiento y con la misma finalidad, substituye diversos medios parciales que otras legislaciones regulan.<sup>32</sup>

...

De lo anterior se desprende que en 1987 se indicaba que el amparo era un “proceso singular” que había probado su eficacia para defender los derechos de las personas, la supremacía constitucional, así como la tutela del “respeto y exacto cumplimiento del orden jurídico nacional”.

Sin embargo, tal inicio de consolidación del amparo como proceso “singular” o proceso constitucional, sería insuficiente para proteger jurídicamente el contenido de la Ley fundamental de 1917.

Precisamente, la parte dogmática del orden fundamental reserva los derechos fundamentales que pueden ser realizados mediante el amparo, el cual “... no ha escapado a la observación de los procesalistas extranjeros que han estudiado la institución (Piero Calamandrei y Mauro Cappelletti) y que se han mostrado asombrados de su amplitud protectora.”<sup>33</sup>

No obstante, la parte orgánica de la Constitución también requiere de un enjuiciamiento que se dirija a la realización de la representación, configuración y ejercicio del poder que la Constitución contiene, así como procesos constitucionales que encaucen a la efectividad de su parte dogmática que reserva derechos políticos electorales, situación que el amparo no puede hacerlo, porque no procede para exigir la protección de los referidos derechos,<sup>34</sup> ni para enjuiciar una ley recientemente

---

<sup>32</sup> Disponible en el anexo II. Documentos de la reforma constitucional de 1987.

<sup>33</sup> Fix Zamudio, Héctor, “Estudios sobre la jurisdicción constitucional mexicana”, en Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional... op. cit.*, p. 177.

<sup>34</sup> Cfr. Los procesos constitucionales establecidos en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 23 de mayo de 2014. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf>, consultado el 31 de enero de 2017. También en la jurisprudencia con motivo de la resolución de una acción de inconstitucionalidad en diciembre de 2007, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: “Los derechos de participación política establecidos en las fracciones I y II del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías individuales o derechos fundamentales, en primer término, porque participan de la posición de supremacía que tiene dicho precepto constitucional, de lo cual deriva que no sean disponibles en su núcleo esencial para los poderes constituidos; en segundo término, porque suponen una relación de interdependencia con las demás normas sobre derechos y libertades reconocidas en la norma suprema (sin libertad de expresión sería imposible el ejercicio efectivo del derecho de voto; al mismo tiempo, sin un gobierno sujeto a la legitimidad del voto público y a elecciones periódicas, sería difícilmente garantizable el goce efectivo de las demás garantías

emitida, a la cual se señale su presunción de inconstitucionalidad,<sup>35</sup> por indicar algunos ejemplos.

Desde esta perspectiva, el amparo tiene que ser acompañado por más procesos constitucionales en la defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

En consecuencia, es necesario distinguir el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con las normas constitucionales de otras denominaciones que tienen diferente sentido y alcance; describir la naturaleza del proceso constitucional, con base en la teoría general del derecho procesal; especificar los procesos constitucionales vigentes en ley fundamental de 1917; y, discutir la ampliación de la defensa de la Constitución, mediante la propuesta de implementación de otros procesos

### III. JUSTIFICACIÓN

El profesor Fernández Segado indicaba la razón de la defensa de la Constitución: “se puede llegar a la conclusión de que el pensamiento contemporáneo sobre la defensa de las normas constitucionales es heredero de una larga y persistente tradición a través de los siglos, pues en el fondo, como bien advierte Fix Zamudio, no es sino un reflejo permanente lucha de los seres humanos por su libertad frente al poder político, a través de un orden jurídico superior.”<sup>36</sup>

De la misma manera, puede encontrarse dentro de los antecedentes constitucionales que el artículo 171 de la Constitución Federal de los Estados Unidos

---

constitucionales); en tercer lugar, porque las pretensiones y expectativas que forman su objeto son claves para la organización y el funcionamiento del sistema democrático constitucional que la norma suprema trata de establecer. En ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de su atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a sus respectivas esferas de competencia jurisdiccional.” Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, P./J. 83/2007, p. 984, registro: 170783. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>35</sup> Cfr. Acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 5 de febrero de 2017. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_050217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_050217.pdf), consultado el 13 de febrero de 2017.

<sup>36</sup> Fernández Segado, Francisco, *La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano*, México, UNAM-IIJ, 2004, pp. 4 y 5.

Mexicanos de 1824, dispuso con gran anhelo y soñada pretensión: “Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los poderes supremos de la Federación y de los Estados”.<sup>37</sup>

De ese modo, el incumplimiento del orden fundamental tiene que ser enjuiciado, porque los conflictos constitucionales producen el crecimiento de los problemas en la realidad política, económica, social y jurídica.<sup>38</sup>

Para el profesor Héctor Fix Zamudio<sup>39</sup> el análisis de la tutela del orden fundamental inició con la emisión de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de octubre de 1789, y después a través de los estudios doctrinales de Jorge Jenillek, León Duguit, Rodolfo Reyes y Hans Kelsen, quien desarrolló la idea de la garantía jurisdiccional de la constitución y propuso la creación de la Corte Constitucional en la Carta Federal austriaca de 1920.<sup>40</sup>

En este sentido, el profesor Hans Kelsen nombró a los procesos constitucionales “garantías para la protección de la Constitución” y determinó: “Estas garantías constituyen los medios generales que la técnica moderna ha desarrollado con relación a la regularidad de los actos estatales en general. Las *garantías preventivas* tienden a advertir la realización de actos irregulares. Las *garantías represivas* reaccionan contra el acto irregular una vez realizado, tienden a impedir la reincidencia en el futuro, a reparar el daño causado, a hacerlo desaparecer, y eventualmente, a reemplazarlo por un acto regular (énfasis original).”<sup>41</sup>

Con base en lo anterior, para el profesor Héctor Fix Zamudio se extendió la concepción de las garantías constitucionales como instrumentos de tutela de las disposiciones fundamentales para lograr su restitución cuando hubiesen sido desconocidas o violadas o existiera incertidumbre de las mismas, lo que trascendió a

---

<sup>37</sup> Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion-federal/historicos/1824.pdf>, consultado el 25 de enero de 2017.

<sup>38</sup> Cfr. Conclusión primera de Rivera Hernández, Juan “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*”, pp. 163 y 164.

<sup>39</sup> Cfr. Fix Zamudio, Héctor, *Introducción al derecho...* *op. cit.*, p. 76.

<sup>40</sup> *Ídem.*

<sup>41</sup> Kelsen, Hans, *La garantía jurisdiccional de la constitución (La justicia constitucional)*, Rolando Tamayo y Salmorán (trad.), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Defensoría de los Derechos Humanos, 1a. reimp., 2016, p. 34.

la denominación que se adoptó en las cartas surgidas con posterioridad a la segunda guerra mundial. Es el caso de Italia de 1948, Portugal 1976, España 1978, Perú 1979, Paraguay 1992, Brasil 1988 y Colombia 1991.<sup>42</sup>

De esta manera, se obtiene la constante profusión de los estudios sobre la defensa del orden fundamental, porque como se indicó en otro documento:

...  
Defender la Constitución no es una actividad sencilla, requiere de la contribución, complementación y construcción de propuestas teóricas y su aplicación práctica para asegurar el cumplimiento de sus imperativos... el hombre (las personas) ha buscado defender un ordenamiento que tiene cierta importancia para organizar su convivencia y para reservar un conjunto de derechos que provienen de su propia naturaleza, lo que propició que dicho ordenamiento tuviera preeminencia sobre cualquier autoridad y ley, y que frente a su incumplimiento se generaran ideas para resarcir su menoscabo.<sup>43</sup>

En consecuencia, la parte procesal del orden fundamental recibiría el nombre de declaración de derechos (Francia, 1987), garantías de derecho público sociales, políticas y jurídicas (Jellinek), garantías preventivas y represivas (Duguit), garantías preventivas, represivas y reparadoras (Reyes), garantías para la protección de la Constitución (Kelsen) y garantías constitucionales (Fix Zamudio).

En la investigación la parte procesal indicada la integran los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos,<sup>44</sup> a la luz del contenido del derecho procesal constitucional, de los que depende la vida misma del orden fundamental que estableció el pueblo. Sin ella quedaría la revolución, el cual devolvería la vida al orden constitucional violado, ignorado o incierto.

#### IV. HIPÓTESIS

La Constitución de cada nación tendría no solo las partes dogmática y orgánica como lo ha establecido el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; sino que el orden fundamental tendría tres: la *dogmática* que

---

<sup>42</sup> Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, *Introducción al derecho...* op. cit., pp. 82-87.

<sup>43</sup> Cfr. Conclusión segunda, Rivera Hernández, Juan "Hacia nuevas competencias..." op. cit., pp. 163 y 164.

<sup>44</sup> Vid. *Infra*. Capítulo Cuarto. Los procesos constitucionales en la ley fundamental de 1917.

reserva derechos fundamentales, incluidos los derechos nacionales de fuente internacional; la *orgánica* que establece la configuración, representación y ejercicio del poder; y, la *procesal* que realiza el derecho de la Constitución.

De la parte procesal dependería la vida misma del orden fundamental. Sin ella quedaría el imperativo orgánico que prevé la revolución, el cual devolvería la vida al orden constitucional violado, ignorado o incierto.

## V. OBJETIVOS

### 1. *Objetivo general*

Sustentar la tesis de las tres partes del orden fundamental.

### 2. *Objetivos específicos*

*Primero.* Distinguir, comparar y especificar las denominaciones que se le han asignado al enjuiciamiento de las normas fundamentales.

*Segundo.* Describir el concepto de proceso constitucional, con base en la teoría general del proceso.

*Tercero.* Especificar los procesos constitucionales vigentes en la ley fundamental de 1917.

*Cuarto.* Discutir la ampliación de la defensa de la constitución y proponer, para tal efecto, la implementación de otros procesos constitucionales.

## VI. BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía de la investigación se inserta al final de las conclusiones.

## VII. MARCO TEÓRICO

El marco teórico es desarrollado en los capítulos segundo y tercero, para fundamentar la hipótesis de las tres partes del orden fundamental.

## VIII. ESTADO DEL CONOCIMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO

El estado del conocimiento del objeto de estudio es analizado en los capítulos cuarto y quinto, para fundamentar la hipótesis de las tres partes del orden fundamental.

## IX. METODOLOGÍA GENERAL

La metodología general de la investigación es analítica y descriptiva.





## **CAPÍTULO SEGUNDO**

### **EL ENJUICIAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN**



## **CAPÍTULO SEGUNDO**

### **EL ENJUICIAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN**

En el amanecer del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no ha sido necesaria una revolución que, basada en la violencia, exija la vigencia de los derechos del pueblo y la creación de otra Constitución.

Una de las razones de lo indicado es que el ideario político y el orden normativo son ley fundamental en la nación independiente, porque en 100 años el legislador constitucional ha deliberado<sup>45</sup> las ideas de los padres creadores, para asumir las decisiones que conciertan los factores políticos, jurídicos, sociales y económicos, en nombre del pueblo.

Sin perjuicio que los constituyentes lo previeron en el documento primigenio, el legislador constitucional ha concertado que las normas fundamentales sean eficaces mediante el enjuiciamiento, para que se solvente a través de procesos constitucionales, la exigencia de la libertad en el goce de los derechos fundamentales,<sup>46</sup> así como la representación, configuración y ejercicio del poder.

#### **I. ENJUICIAMIENTO EN EL DERECHO PROCESAL HISPÁNICO**

El enjuiciamiento de la Constitución, se sustenta en la definición de la teoría general del derecho procesal del maestro Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, quien la

---

<sup>45</sup> “La deliberación ha sido descrita, en una definición mínima, como ‘una conversación en la que los individuos hablan y escuchan consecutivamente’ antes de tomar una decisión colectiva.” Gambetta, Diego, “¡Claro!: Ensayo sobre el machismo discursivo”, en Elster, Jon (comp.), *La democracia deliberativa*, España, Gedisa, 2000, p. 35.

<sup>46</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “La libertad en el goce de los derechos fundamentales basada en precedentes” *Revista expresiones. Letras ciudadanas a favor de la democracia*, México, Instituto Electoral de Querétaro, núm. 20, año 7, mayo-agosto 2016, pp. 46 y 47. Disponible en: [http://www.ieeq.mx/contenido/revista/file/2016/expresiones\\_20.pdf](http://www.ieeq.mx/contenido/revista/file/2016/expresiones_20.pdf), consultado el 31 de diciembre de 2016.

concibe como la exposición de los principios, conceptos e instituciones comunes a todas las ramas de *enjuiciamiento* del derecho procesal.<sup>47</sup>

En tal sentido, en una de las obras que contiene la relación de los ensayos del procesalista español, se denomina a un volumen “Constitución y enjuiciamiento”, mediante el cual desarrolla los escritos sobre la significación y funciones del tribunal de garantías constitucionales; la justicia, según la Constitución española de 1931 y sus leyes complementarias; repercusiones procesales-civiles de la Constitución; la Constitución y el enjuiciamiento criminal, entre otros.<sup>48</sup>

De ese modo, se desprende que el apartado de la obra mencionada existió la preocupación por analizar los procesos constitucionales que eran competencia del tribunal constitucional español, estableciéndose la relación entre el orden fundamental y el enjuiciamiento.

Así, se observa que el maestro español prefirió explicar la cuestión de mérito mediante el enjuiciamiento, sin utilizar el concepto de “control de constitucionalidad”, tan reiterado por la doctrina y la jurisprudencia.<sup>49</sup>

Por esta razón, se considera que el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con las disposiciones constitucionales tiene su origen en el derecho procesal, mediante, por ejemplo, el apartado “Constitución y enjuiciamiento” de los ensayos del procesalista Niceto Alcalá-Zamora y Castillo.

Además, al analizar lo que denominó la concepción menor de la naturaleza del proceso del profesor Francisco Carnelutti,<sup>50</sup> el procesalista español respecto a la referida noción indicó: “Digamos, de paso, que a través de esa relación de juicios, la voz *enjuiciamiento*, felicísimo hallazgo de la terminología española, pasaría a primer

---

<sup>47</sup> Cfr. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, “La teoría general del proceso y la enseñanza del derecho procesal”, *Revista Iberoamericana de derecho procesal* Madrid, España, 1968, p. 5.

<sup>48</sup> Cfr. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, *Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional*, Buenos Aires, Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina, 1944, pp. 503-622.

<sup>49</sup> Vid. *Infra*. Control constitucional.

<sup>50</sup> Con relación a este planteamiento, el procesalista español mencionó: “Siempre Carnelutti, pero ahora de nuevo en el plano de teoría general del proceso y no en el de la particular de una de sus ramas, ha propugnado en fecha reciente, dentro de la tonalidad mística que desde hace varios años viene imprimiendo a sus escritos, el *retorno al juicio* (énfasis original).” Cfr. Carnelutti, Francisco, “Torniamo al giudizio”, en *Scritti in onore di Antonio Scialoja* y publicado en “Riv. Dir. Proc.”, 1949, I, pp. 165-174. Cit. por Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1a. reimp. 1992, t. I, p. 403.

plano y podría invocar a su favor el inestimable respaldo del artículo que comentamos (énfasis original).<sup>51</sup>

En este sentido, como justificación de tal hallazgo, el autor consultado mencionó que los procesalistas españoles no lo supieron valorar debidamente, y puede considerarse que lo mismo sucede con los procesalistas contemporáneos, además que el enjuiciamiento:

...como epígrafe o título de los códigos respectivos es netamente superior a proceso (o procesal), con acepciones extraprocesales, y a procedimiento, que además de ese defecto, ofrece el de su insuficiencia para extenderse a la totalidad del horizonte procesal. En cambio, enjuiciamiento, vinculado en un sentido al juicio (más concretamente: al juicio judicial, aunque por analogía se aplique a veces en otros órdenes) y que refleja, además, el desarrollo de la actividad procesal necesaria para llegar a la obtención de ese juicio, representa, en cierto modo, un término que abarca a un tiempo el proceso y el procedimiento.<sup>52</sup>

De lo anterior se desprende que el origen del enjuiciamiento se ubicó tanto en la legislación como en la doctrina.<sup>53</sup>

De esta manera, se utilizaba en los títulos de la legislación de la época, la cual también era analizada por la doctrina, por ejemplo, en los ensayos contenidos en la obra que se refiere descubre la existencia del derecho procesal constitucional;<sup>54</sup> pero,

---

<sup>51</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1a. reimp. 1992, t. I, p. 403.

<sup>52</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, "Aciertos terminológicos e institucionales del derecho procesal hispánico", *Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia*, abril-junio de 1948, núm. 38, t. X, p. 58.

<sup>53</sup> El profesor Beceña mencionaba que en su origen el enjuiciamiento tuvo un uso legal y doctrinal. Cfr. Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, "Aciertos terminológicos e institucionales... *op. cit.*", p. 58.

<sup>54</sup> "...*Descubrimiento procesal (1944-1947)*. El procesalista español N. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, en sus primeros años de exilio en Argentina (1944-1945) y luego en México (1947), advierte la existencia de una nueva rama procesal y le otorga denominación. En Argentina, al titular su obra *Estudios de Derecho procesal (civil, penal y constitucional)* en 1944; y al año siguiente de manera expresa señala que la institución del amparo debe ser considerada dentro del Derecho procesal constitucional, en una reseña que realiza a un comentario de un libro en la *Revista de Derecho Procesal* (1945). Y en México en las referencias que realiza en su clásica obra *Proceso, autocomposición y autodefensa (contribución al estudio de los fines del proceso)*, en 1947." Ferrer-Mac Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen Científico (1928-1956)*, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 83.

tal uso, como argumentación a rúbrica,<sup>55</sup> era insuficiente para comprender la naturaleza del proceso.

Sin embargo, la relación de dicho vocablo con el juicio o, por analogía, con las determinaciones de las autoridades que no eran formalmente jueces, representaba el desarrollo de una actividad en el proceso y un término que incluyó las acepciones proceso y procedimiento.

Ahora bien, una definición del enjuiciamiento fue realizada por el profesor Joaquín Escriche, entendiéndola como: “El orden y método que debe seguirse con arreglo a las leyes en la formación e instrucción de una causa civil o criminal, para que las partes puedan alegar y probar lo que les convenga y venir el juez en conocimiento del derecho que les asista y declararlo por medio de su sentencia.”<sup>56</sup> Esta definición pudiera ser coincidente con los estadios procesales del proceso común alemán del siglo XVI, que mencionó el procesalista Chiovenda,<sup>57</sup> quien determinó: “...el proceso es el campo donde se desenvuelve la jurisdicción.”<sup>58</sup>

De estos comentarios doctrinales se obtiene que el enjuiciamiento se realiza en el proceso, el cual se integra por una orden de actividades que relacionan

---

<sup>55</sup> Vid. Huerta Ochoa, Carla, “Argumento a rúbrica”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. I, pp. 191-195.

<sup>56</sup> Escriche, Joaquín, “Enjuiciamiento”, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, París, Librería Rosa, Bouret y C., 1851, p. 620.

<sup>57</sup> “... el proceso común alemán se haya constituido de una manera propia suya: su base fue el proceso ordinario italiano (que se usaba en el tribunal cameral del Imperio, por eso se llamaron cameralistas los escritores que la cultivaron como Gaill † 1587 y Mynsinger † 1588; pero los defectos de este último antes fueron exagerados que reprimidos. Excluida completamente la publicidad y la oralidad y toda inmediata relación entre el juez y los litigantes; dominado el proceso por el poder dispositivo de las partes, sostenidos los estadios procesales para la contestación, la réplica, la duplica, la triplica, la cuádruplica, debiendo el demandado, sin embargo, producir todas sus excepciones al mismo tiempo y no pudiendo el actor deducir en la réplica nuevas circunstancias y pruebas, sino para refutar las producciones del demandado, lo mismo éste en la duplica y así sucesivamente (principio de preclusión). Esto constreñía a las partes a condensar sus posibles excepciones y deducciones en el primer escrito, aun las contradictorias ente sí, la una para el caso de que la otra fuese repelida (principio de la eventualidad). Pero habiéndose conservado la sentencia probatoria del proceso germánico el pleito se dividía en dos partes, una destinada exclusivamente a las afirmaciones que terminaba con la sentencia ordenando la prueba, cuya sentencia obligatoria para las partes y el juez, decidía virtualmente el pleito. La otra destinada exclusivamente a las pruebas que terminaba con la sentencia definitiva. (énfasis original).” Chiovenda, José, *Principios de derecho procesal civil*, trad. José Casáis y Santaló, Madrid, Editorial Reus, 1922, t. I. p. 10.

<sup>58</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría general... op. cit.*, t. I, p. 406.

jurídicamente a las partes y a la autoridad, para que se emita una determinación en la causa correspondiente.

En tal sentido, la definición de Joaquín Escriche fue considerada por el procesalista Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, una vez que realizó ciertas precisiones, como: "... la mejor definición de enjuiciamiento dentro del criterio legal..."<sup>59</sup>

De ese modo, el vocablo fue considerado en la definición de la teoría general del derecho procesal del profesor español, y ante esta situación, la noción sigue permeando en los estudios del proceso constitucional, dado que se considera que el maestro Niceto Alcalá-Zamora y Castillo advirtió la existencia del derecho procesal constitucional, y al ser discípulo de él quien se considera fundador conceptual y sistemático de dicha materia, se tiene la siguiente idea: "...ALCALÁ-ZAMORA y FIX-ZAMUDIO. Maestro y discípulo deben ser considerados como los fundadores del Derecho procesal constitucional entendida como disciplina autónoma procesal.... Uno «descubrió» la existencia de la disciplina científica y el otro le otorga «contenido sistemático», con la intención manifiesta de definir su naturaleza y perfil como rama autónoma procesal."<sup>60</sup>

La palabra enjuiciamiento se utiliza en el lenguaje ordinario con la voz "enjuiciar". El diccionario de la *Real Academia Española* otorga tres acepciones a dicha voz: "1. tr. Someter una cuestión a examen, discusión y juicio. 2. tr. *Der.* Instruir, juzgar o sentenciar una causa. 3. tr. *Der.* Sujetar a alguien a juicio."<sup>61</sup> En tanto que, el profesor Joaquín Escriche define este vocablo como: "Instruir una causa con las diligencias y documentos necesarios para que se pueda determinar en juicio alguna acción, - y juzgar, sentenciar o determinar alguna causa."<sup>62</sup>

De esta manera, enjuiciar los conflictos relacionados con las normas fundamentales sería someter la conducta que viola u omite la Constitución o genera incertidumbre acerca de sus significados<sup>63</sup> a examen en un proceso constitucional,

---

<sup>59</sup> El profesor Beceña mencionada que en su origen el enjuiciamiento tuvo un uso legal y doctrinal. Cfr. Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, "Aciertos terminológicos e institucionales... *op. cit.*, p. 59.

<sup>60</sup> Ferrer-Mac Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional... op. cit.*, p. 86.

<sup>61</sup> Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=FTC8Q9m>, consultado el 22 de diciembre de 2016.

<sup>62</sup> Escriche, Joaquín, "Enjuiciar", *Diccionario razonado de legislación... op. cit.*, p. 620.

<sup>63</sup> Rivera Hernández, Juan "Hacia nuevas competencias de la Sala Constitucional del estado de México," *tesis de licenciatura*, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 1o. de julio de



sin que necesariamente se dicte una sentencia o una determinación por los jueces en su acepción formal, dado que se tiene la idea que dicha determinación es competencia de las autoridades que conocen de los procesos constitucionales, los cuales son objeto de la disciplina procesal, considerándose de esta manera que: “el Derecho procesal constitucional *ha hecho posible el objetivo de hacer de la Constitución una norma jurídica* (énfasis original).”<sup>64</sup>

Desde esta perspectiva, el derecho procesal constitucional examina el enjuiciamiento de los conflictos constitucionales, así lo ha expuesto su fundador conceptual y sistemático,<sup>65</sup> el maestro Héctor Fix Zamudio, quien indicó en una entrevista que se le realizó:

...pues eso del derecho procesal constitucional, que no es nuevo, y Ferrer me atribuye que yo lo desarrollé, no bueno pues en una idea muy elemental, yo lo planteo en mi Tesis de Licenciatura.

Don Niceto Alcalá, que era mi maestro. Pero es muy fácil, si hay un derecho procesal civil, penal, administrativo, laboral ¿cómo se llama la rama del derecho que estudia los procedimientos, las estructuras y los organismos que ven los problemas constitucionales? Derecho procesal constitucional. No es algo, digamos algo muy complejo.

En España todavía no ocurre mucho esto. Se ha observado más en Latinoamérica. Pero es lo mismo, ellos hablan de justicia constitucional, yo también tengo por ahí algún libro. Yo hablo de justicia constitucional, pero realmente pues el contenido, no se oponen. El procesal constitucional es la materia que estudia estos aspectos, y la justicia es simplemente el contenido...<sup>66</sup>

De lo anterior se obtiene que así como existe, por ejemplo, un derecho procesal civil o penal, mediante el cual se estudian los procedimientos, las estructuras y los

---

2009, p. 29. (Énfasis original). Rivera Hernández, Juan, “Los jueces constitucionales y la resolución de los límites territoriales”, *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, México, Porrúa, núm. 16, julio-diciembre 2011, p. 227. La idea se sustenta en los planteamientos formulados por el profesor Héctor Fix Zamudio, véase por ejemplo “La garantía jurisdiccional de la constitución mexicana (ensayo de una estructuración procesal del amparo)”, *tesis de licenciatura*, México, UNAM-Facultad de Derecho, 1955, p. 66.

<sup>64</sup> Valadés, Diego, “Prólogo” en, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Panorámica del derecho procesal constitucional y convencional*, Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 33.

<sup>65</sup> Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional... op. cit.*, pp. 65-138; cfr. Rivera Hernández, Juan, “Derecho procesal constitucional... op. cit.”, p. 174.

<sup>66</sup> Rivera Hernández, Juan, “El amparo local en México. Análisis procesal constitucional”. *Tesis de Maestría*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2 de agosto de 2013, p. 300.

organismos relacionados con los conflictos civiles y penales; entonces, el derecho procesal constitucional tiene: "...Una tercera connotación (que) refiere a su carácter científico; es decir, a la disciplina que estudia de manera sistemática la jurisdicción, magistratura, órganos, garantías, procesos, principios y demás instituciones para la protección de la Constitución desde la ciencia del derecho."<sup>67</sup> Y también puede considerarse que mediante el derecho procesal constitucional, de modo general, se realiza el derecho constitucional.

Ciertamente, como se estableció en otro documento: "...se desarrolló lo que en *sentido amplio* se puede identificar, como el *enjuiciamiento de las conductas de acción y omisión que violan o ignoran los mandatos y prohibiciones de la Constitución, generando con motivo de la presencia de tales conductas, su incumplimiento e ineficacia*; situación que dio pauta a la elaboración de... estudios para la comprensión de lo que en teoría se conoce como *la defensa de la Constitución*. En tal circunstancia se concibieron diversas denominaciones que identifican a dicho enjuiciamiento... (énfasis original)"<sup>68</sup>

Tales denominaciones son "defensa, control, justicia, jurisdicción y derecho procesal, todo ello con el calificativo de *constitucional*... (las cuales)... se han manejado con bastante imprecisión respecto a la tutela de las normas fundamentales,"<sup>69</sup> generándose que el análisis de la eficacia de las normas constitucionales sea objeto de estudio del "derecho constitucional, la ciencia política, la filosofía del derecho, el derecho internacional, entre otras disciplinas."<sup>70</sup> Lo que abarca a un tiempo "... un problema (que) deriva en el *nomen iuris* que debe atribuirse a la disciplina jurídica encargada del estudio del control de constitucionalidad (o el enjuiciamiento de los conflictos constitucionales) de las leyes, y en general de la supremacía constitucional. Así, se suele referir al 'derecho

---

<sup>67</sup> Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Derecho procesal constitucional", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal... op. cit.*, p. 459.

<sup>68</sup> Rivera Hernández, Juan, "Derecho procesal constitucional... *op. cit.*", p. 166.

<sup>69</sup> Fix Zamudio, Héctor, *Introducción al derecho procesal constitucional*, México, FUNDAP, 2002, p. 19.

<sup>70</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, "El amparo local... *op. cit.*", p. 11. Cfr. Fix Zamudio, Héctor, "La garantía jurisdiccional... *op. cit.*", p. 66.

procesal constitucional' como sinónimo de 'justicia constitucional' o 'jurisdicción constitucional'." <sup>71</sup>

En consecuencia, es necesario circunscribir las denominaciones indicadas con la finalidad de evidenciar la ambigüedad del entendimiento que ofrecen sobre el enjuiciamiento de los conflictos constitucionales.

En esa virtud, debe advertirse que las denominaciones mencionadas tienen diferente sentido y alcance.

## II. CONTROL CONSTITUCIONAL

El procesalista Héctor Fix Zamudio menciona: "Desde el ángulo rigurosamente jurídico, hemos, tomado en consideración que los vocablos 'control'....y 'defensa de la Constitución' son demasiados amplios, pues abarcan todo el conjunto de medios que se utilizan para lograr, tanto el funcionamiento armónico y equilibrado de los órganos de poder, como la imposición coactiva de los mandatos fundamentales, en el supuesto de violación o desconocimiento de la superlegalidad constitucional." <sup>72</sup>

En el mismo sentido, el jurista Jorge Fernández Ruiz señala: "En la doctrina se emplea la locución control constitucional en alusión a los dispositivos jurídicos creados para asegurar la vigencia efectiva de los preceptos constitucionales y, en consecuencia, invalidar los actos o normas que la contradigan, en aras de la supremacía constitucional." <sup>73</sup>

En tal vertiente, "el constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramírez... nos dice que la palabra 'control' en este sentido de garantía de las normas constitucionales, connota a la vez: defensa, vigilancia y en cierto modo, jurisdicción." <sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Derecho procesal constitucional", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal... op. cit.*, p. 459.

<sup>72</sup> Fix Zamudio, Héctor, *Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional (1940-1965)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1968, pp. 13 y 14. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/675/3.pdf>, consultado el 14 de febrero de 2017.

<sup>73</sup> Fernández Ruiz, Jorge, "Control constitucional por órganos administrativos", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal... op. cit.*, p. 216.

<sup>74</sup> Cit. por Fix Zamudio, Héctor, *Veinticinco años... op. cit.*, p. 13.

Desde esta perspectiva, el control constitucional sería equiparado con lo que comprende la noción defensa constitucional; pero, la diferencia entre dichos conceptos sería que el control constitucional tiene su origen desde el momento en que se elaboraron tanto las primeras Constituciones norteamericanas como la Constitución francesa, y la defensa de la Constitución nace en la antigüedad,<sup>75</sup> a manera de fenómeno histórico social del derecho procesal constitucional desarrollado por el profesor Eduardo Ferrer Mac-Gregor.<sup>76</sup>

Justamente, desde la perspectiva doctrinal el término analizado tiene diversas connotaciones, y desde el punto de vista del Poder Judicial de la Federación son 1095 tesis jurisprudenciales que en su rubro o en el texto contemplan al vocablo,<sup>77</sup> sin la limitación de que se siga previendo este término en tesis que se emitan posteriormente.

Con base en el derecho constitucional, en particular, con en la teoría de la constitución, el profesor Manuel Aragón ubica los elementos de este vocablo, los cuales los relaciona con otro pensamiento: la teoría del control.

En este sentido, el profesor Manuel Aragón menciona: “parece evidente que la teoría de aquella ha de incluir la teoría de éste... (y denomina)... al control como el vehículo a través del cual se hacen efectivas las limitaciones del poder.”<sup>78</sup>

Sin embargo, el autor señala que bajo esta metodología existe “la imposibilidad de un concepto único de control,”<sup>79</sup> porque, como se ha indicado, por cada teoría de la Constitución elaborada, habría una propia descripción construida para la ley fundamental.<sup>80</sup>

Ahora bien, para el maestro español Manuel Aragón los elementos en los que recae el control son: “las normas jurídicas (incluida la ley en los países con

---

<sup>75</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, pp. 41 y 42.

<sup>76</sup> Ferrer-Mac Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional... op. cit.*, pp. 56 y 64.

<sup>77</sup> Dato obtenido de las páginas de internet del Semanario Judicial de la Federación (<http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/ResultadosV2.aspx?Epoca=1e3e1fd8f8fcfd&Apendice=1ffdfdfcf&Expresion=%22control%20constitucional%22&Dominio=Rubro,Texto&TATJ=2&Orden=1&Clase=TesisBL&bc=Jurisprudencia.Resultados&TesisPrincipal=TesisPrincipal&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&Hits=20>) con 1084 tesis jurisprudenciales, y del IUS Electoral de la Coordinación de Jurisprudencia de Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (<http://www.te.gob.mx/IUSE/>) con 11 de ellas. Consultado el 2 de febrero de 2017.

<sup>78</sup> Aragón, Manuel, *Constitución, democracia y control*, México, UNAM, 2002, p. 121.

<sup>79</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 123 y ss.

<sup>80</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, pp. 3 y 42.

jurisdicción constitucional), los actos del gobierno y de la administración, del Poder Legislativo y del Judicial (En los países, como el nuestro, donde existe un control de la constitucionalidad que lo incluye), la mera “actividad” o “comportamiento” del gobierno (responsabilidad política), y la lista podría, sin duda, ampliarse.”<sup>81</sup>

De esta manera el control constitucional tiene la acepción de actividad sobre quien se ejerce.

Por otra parte, para explicar al control constitucional, la doctrina también lo relaciona con quien lo realiza. En este sentido el profesor García Belaunde refiere:

El control constitucional, se puede llevar a cabo de muchas maneras. Pero el concepto de control constitucional puede involucrarse dentro de un concepto más amplio, que es el de defensa de la Constitución. Hay muchas maneras de hacer un control. Por ejemplo, el Presidente de la República al vetar una ley puede decir que es inconstitucional y está usando un mecanismo de control constitucional. Y esto es evidente. Ahora, en sentido estricto, el control se hace fundamentalmente a través del Poder Judicial, en los casos que la Constitución y la ley lo establecen, y en forma más calificada, a través del Tribunal Constitucional.<sup>82</sup>

En el mismo sentido, el profesor Aragón menciona que quienes ejercen el control son: “agentes...[como]...: tribunales de justicia, cámaras parlamentarias y sus comisiones, parlamentos individuales, grupos parlamentarios, órganos de gobierno en sentido propio e incluso órganos de la administración, órganos específicos, no exactamente administrativos, de fiscalización o de inspección (de la actividad financiera del Estado o, en general, de todas las administraciones públicas), grupos de interés institucionalizados, opinión pública, cuerpo electoral, etcétera.”<sup>83</sup>

En tal sentido, el órgano del Estado que tiene como función ejercer el control constitucional, al interpretar la norma suprema de manera sucesiva en el tiempo también incorpora nuevos elementos que surgen de varias fuentes, así Tribunal

---

<sup>81</sup> Aragón, Manuel, *Constitución, democracia y control... op. cit.*, p. 124.

<sup>82</sup> García Belaunde, Domingo, *De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional*, 4 ed., Lima, Editora Jurídica Grijley, 2003, p. 116.

<sup>83</sup> Aragón, Manuel, *Constitución, democracia y control... op. cit.*, p. 124.

Constitucional, por ejemplo, tiene una responsabilidad mancomunada en la garantía y en la actualización de la Constitución como expresión del contrato social.<sup>84</sup>

De lo anterior se desprende que el control constitucional obtiene otra acepción vinculada con el sujeto o la parte que lo realiza por corresponderle esta función.

Más, los estudios jurídicos también vinculan al vocablo en examen con los procesos.

Sobre el particular, el profesor José Antonio García Becerra nombra a su obra “Los medios de control constitucional en México”, en la cual menciona: “Para el ejercicio del control constitucional se requiere de la existencia de medios de control o defensa de la Constitución, que son los procedimientos que se encuentran previstos por la Ley fundamental con el fin de protegerla y salvaguardarla.”<sup>85</sup>

En consecuencia, para este sector de la doctrina la denominación control constitucional tendría las acepciones de actividad, sujeto y proceso (el profesor Manuel Aragón identifica al proceso como objeto),<sup>86</sup> las últimas son de uso recurrente en las tesis jurisprudenciales.

El control constitucional como sujeto se puede encontrar en las tesis jurisprudenciales que tienen por rubro:

1. Impedimento. La causal prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la ley de amparo, no se actualiza por el hecho de que el juez de control constitucional, como juez de instancia, dicte en un juicio diverso al natural, una determinación judicial que está estrechamente relacionada con el acto reclamado.<sup>87</sup>
2. Repetición del acto reclamado. Para promover el incidente relativo, es indispensable que previamente el órgano de control constitucional realice el

---

<sup>84</sup> Cfr. Valadés, Diego, “Estudio introductorio”, en Häberle, Peter, *El Estado constitucional*, 2a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, p. L.

<sup>85</sup> García Becerra, José Antonio, *Los medios de control constitucional en México*, México, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Cuadernos Jurídicos 12, 2001, p. 9 y 10.

<sup>86</sup> Cfr. Aragón, Manuel, “El control de constitucionalidad en la constitución española de 1978”, *Revista de estudios políticos*, Madrid, nueva época, núm. 7, enero-febrero de 1979, p. 171.

<sup>87</sup> Jurisprudencia, 10a. Época, Plenos de Circuito, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, Tesis: PC.I.C. J/37 K (10a.), p. 1919, registro: 2012820. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

pronunciamiento correspondiente en el que califique si está o no cumplida su ejecutoria de amparo, de lo contrario, la denuncia respectiva es improcedente.<sup>88</sup>

3. Sentencia protectora en el juicio de amparo. Corresponde al órgano de control constitucional verificar su cumplimiento conforme al artículo 196 de la ley de la materia.<sup>89</sup>

4. Error judicial. Elementos de su configuración y su corrección por los órganos de control constitucional.<sup>90</sup>

5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su aplicación directa corresponde indistintamente a todas las autoridades ordinarias o de control constitucional, siempre y cuando no desapliquen, para ese efecto, una ley secundaria.<sup>91</sup>

6. Queja, agravios en la. Resultan infundados los que se hacen valer contra un juez de distrito cuando éste actúa como órgano de control constitucional.<sup>92</sup>

7. Pruebas. El órgano de control constitucional no puede sustituirse al criterio de la autoridad responsable y apreciarlas directamente.<sup>93</sup>

8. Garantías individuales, el órgano de control constitucional no puede violar las.<sup>94</sup>

---

<sup>88</sup> Tesis Aislada, 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Tesis: I.5o.P.11 K (10a.), p. 2223, registro: 2012035. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>89</sup> Tesis Aislada, 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Tesis: I.5o.C.7 K (10a.), p. 2596, registro: 2012035. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>90</sup> Tesis Aislada, 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Tesis: I.3o.C.24 K (10a.), p. 2001, registro: 2003039. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>91</sup> Tesis Aislada, 9a. Época, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIX, Enero de 2009, Tesis: 2a. CLXII/2008, p. 781, registro: 168177. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>92</sup> Jurisprudencia, 9a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo VI, Diciembre de 1997, Tesis: I.6o.C. J/8, p. 622, registro: 197281. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>93</sup> Tesis Aislada, 8a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Tesis: I. 6o. T. 90 K, p. 512, registro: 210063. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>94</sup> Tesis, 7a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, Volumen 217-228, Sexta Parte, registro: 246920. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

De lo anterior se obtiene que al menos en la séptima, octava, novena y décima época de las tesis jurisprudenciales de los Tribunales Colegiados de Circuito y Plenos de Circuito del Poder Judicial de la Federación, así como, de las Salas y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el control de constitucional es considerado un sujeto, al emplearlo en los rubros de dichas tesis con la denominación órgano de control constitucional.

El control constitucional como proceso, se puede encontrar en las tesis jurisprudenciales que tienen por títulos:

1. Constituciones locales. Dentro de sus medios de control constitucional pueden establecerse mecanismos para supervisar y ordenar que se subsanen omisiones legislativas o normativas.<sup>95</sup>
2. Derechos de participación política a votar y ser votado. Son derechos fundamentales protegidos a través de los procesos de control constitucional establecidos en la constitución federal, de acuerdo al sistema competencial que la misma prevé.<sup>96</sup>
3. Control constitucional. El artículo 117, fracción V, de la constitución federal, no faculta al Congreso de la Unión para instituir un medio de esa naturaleza a través de una ley ordinaria, como la ley federal de competencia económica.<sup>97</sup>
4. Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Diferencias entre ambos medios de control constitucional.<sup>98</sup>
5. Juicio de revisión constitucional electoral. Es el medio de impugnación procedente para que los partidos políticos controviertan las resoluciones que se

---

<sup>95</sup> Jurisprudencia, 10a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Tesis: P./J. 24/2012 (10a.), p. 237, registro: 2012820. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>96</sup> Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Tesis: P./J. 83/2007, p. 984, registro: 170783. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>97</sup> Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XIX, Marzo de 2004, Tesis: P./J. 12/2004, p. 1164, registro: 181999. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>98</sup> Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XII, Agosto de 2000, Tesis: P./J. 71/2000, p. 965, registro: 191381. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.



emitan por los tribunales electorales de las entidades federativas dentro de los procedimientos sancionadores locales.<sup>99</sup>

6. Competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La tiene para conocer de posibles violaciones a normas constitucionales no electorales.<sup>100</sup>

De lo anterior se desprende que para las tesis jurisprudenciales de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el control de constitucional es considerado un proceso u objeto, al emplearlo para mencionar que el amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y el juicio de revisión constitucional electoral, son medios de control constitucional.

Con independencia de las anteriores precisiones, la doctrina continúa dando explicaciones sobre el sentido y alcance del control constitucional. En este sentido: “La locución ‘control constitucional’ conlleva tres vertientes conforme a la teoría constitucional contemporánea: control político, control jurisdiccional y control social...”<sup>101</sup>

### *1. Control de constitucionalidad*

Ahora bien, la acepción “control constitucional” como actividad, tiene mayor arraigo en la doctrina y en la jurisprudencia, preferentemente al vincularlo con la idea

---

<sup>99</sup> Jurisprudencia 35/2016, Quinta Época, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual menciona que el juicio de revisión constitucional electoral se trata de un auténtico medio de control constitucional. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>100</sup> Jurisprudencia 22/2002, Tercera Época, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que menciona que el juicio de revisión constitucional electoral se constituye como un medio de control constitucional en la materia. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>101</sup> *Cfr.* Del Rosario Rodríguez, Marcos Francisco, “Control de constitucionalidad”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal... op. cit.*, p. 222.

de “cualidad de constitucional”,<sup>102</sup> pero bajo la denominación “control de constitucionalidad”.

Al respecto, el profesor Manuel Aragón indica “...también son muy variadas las modalidades que el control puede adoptar: control previo y posterior, de legalidad de constitucionalidad, de oportunidad, de eficacia e incluso de absoluta libertad en la apreciación (característica, entre otras, del control genuinamente político).”<sup>103</sup>

De este modo: “Los medios a través de los cuales se pretende asegurar el cumplimiento de la Constitución han recibido distintas denominaciones, cuya creencia de identidad proviene, más que de un tratamiento diferenciado del mismo objeto, de la propia indeterminación de éste. De ahí que parezca necesario, pues, delimitar qué clase de custodia de la Constitución se corresponde con el llamado «control de constitucionalidad»”.<sup>104</sup>

El criterio doctrinal puede coincidir con la exposición de motivos de la reforma constitucional materia de análisis, y de manera importante se obtiene de la misma lo siguiente: “El control de la constitucionalidad es el juicio que permite afirmar la existencia de concordancia, formal y material, entre la norma inferior y la norma suprema que es la constitución; la concordancia material se analiza respecto del contenido de la norma creada y el contenido de la parte dogmática de la Constitución, y la concordancia formal se concluye por el respeto del órgano y procedimiento para la creación de la norma inferior, con las disposiciones contenidas en la parte orgánica de la Constitución.”<sup>105</sup>

De lo anterior se desprende que se le atribuye el nombre de “juicio” o “control de constitucionalidad”, al proceso constitucional; sin embargo, y posiblemente por la

---

<sup>102</sup> Este significado coincide con la definición de la voz “constitucionalidad”, del *Diccionario de la Real Academia Española*. Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=ARVzOfc>, consultado el 3 de febrero de 2017.

<sup>103</sup> Aragón, Manuel, *Constitución, democracia y control... op. cit.*, p. 124.

<sup>104</sup> Aragón, Manuel, “El control de constitucionalidad... op. cit.”, p. 171. En este orden de ideas Manuel Aragón señala: “Como en toda función de aseguramiento, habría que partir de los dos presupuestos básicos que lo conforman: la situación de peligro y las medidas a tomar para conjurarlo.” *Ídem*.

<sup>105</sup> *Cfr.* Disponible en el anexo II. Documentos de la reforma constitucional de 1987.

preocupación del tratamiento político que se le dio en la legislación y en la doctrina de la época, el proceso recibió tales denominaciones.<sup>106</sup>

Justamente, el tema sería analizado desde una perspectiva política, dada la misma naturaleza de la Constitución, y tal visión nubló la idea consistente en que con reformas constitucionales, como la examinada, se proponía el enjuiciamiento, a través de procesos constitucionales, de los conflictos relacionados con la parte dogmática de la Constitución; así, el diseño político hubiese cedido a un diseño jurídico del orden fundamental; pero ello no sería parte de la agenda constitucional, de ahí puede surgir la ambigüedad expuesta y la problemática para el entendimiento del objeto de estudio.

No obstante, el proceso y el control de constitucionalidad no pueden ser considerados lo mismo, porque el proceso se dirige a la realización de las normas constitucionales y el control de constitucionalidad es la actividad mediante la cual se analiza si existe o no esa realización, esto es, el control de constitucionalidad sería el contenido del proceso constitucional,<sup>107</sup> al tiempo que se tiene que dejar atrás el vocablo “control de constitucionalidad” que es del derecho constitucional, porque desde la perspectiva del procesalismo se tiene que denominar enjuiciamiento.<sup>108</sup> Sin embargo, tal distinción es un problema que sustenta, como se indica, la ambigüedad en la comprensión del objeto de estudio.

Conviene mencionar que para el profesor Manuel Aragón el control de constitucionalidad tiene una descripción en amplio y estricto sentido:

---

<sup>106</sup> También en la época, al proceso constitucional de amparo se le denominaba juicio o recurso: “...considerando dichos términos equivalentes, no obstante su diverso significado, ya que el recurso es un medio de impugnación y juicio es el equivalente tradicional hispánico de proceso, (aún cuando estrictamente ‘juicio’ signifique el razonamiento del juez en el fallo Héctor Fix Zamudio, “La garantía jurisdiccional... *op. cit.*, p. 108.

<sup>107</sup> Esta idea puede encontrarse en una jurisprudencia de 1991 de los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el juez de Distrito no viola los derechos fundamentales de quien le pide el otorgamiento de la protección de la justicia federal, puesto que, precisamente tiene como función el examen analítico del acto de autoridad reclamado o el examen de la realización de las disposiciones fundamentales que prevén dichos derechos o ejercer el enjuiciamiento constitucional, a fin de constatar si en ese acto hubo o no violaciones a los derechos de la persona o quejoso, pues en todo caso, su proceder de ser equívoco, sólo podría entrañar infracciones a las normas rectoras del proceso constitucional de amparo. Jurisprudencia, 8a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo VIII, Agosto de 1991, Tesis: V.1o. J/12, p. 123, registro: 222065. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>108</sup> *Vid. Supra.* Enjuiciamiento en el derecho procesal hispánico.

En sentido lato, el control de constitucionalidad es el procedimiento a través del cual determinados órganos del Estado comprueban si ciertos actos lícitos de los poderes públicos están conformes con la Constitución, decidiendo su anulación o inaplicación en caso contrario.

En sentido estricto, el control de constitucionalidad no es más que la consecuencia jurídica de una cualidad también jurídica de la Constitución: su carácter de norma suprallegal. Carácter que resultaría inoperante si no existiese un procedimiento para garantizarlo.<sup>109</sup>

De lo anterior se obtiene que para el derecho constitucional el control de constitucionalidad en sentido amplio se identifica con el enjuiciamiento constitucional que comprueba si los actos de los órganos del poder público son conformes o compatibles con el orden fundamental, anulándolos o inaplicándolos en caso contrario. Desde este enfoque se puede identificar que el control de constitucionalidad tiene la acepción de actividad.

A su vez, desde la visión estricta el control de constitucionalidad, en el mismo sentido que el maestro español, el profesor italiano Luigi Ferrajoli menciona: "... el rasgo distintivo del constitucionalismo será la existencia positiva de una *lex superior* a la legislación ordinaria, con independencia de las diversas técnicas adoptadas para garantizar su superioridad: ya sea la estadounidense y, más en general, americana; del control difuso, a través de la no aplicación de las leyes constitucionalmente inválidas, debida (sic) a la estructura federal de los Estados Unidos, o bien la europea del *control concentrado*, a través de su anulación, generada, en cambio, en el siglo pasado por el «nunca más» formulado frente a la experiencia de los totalitarismos fascistas.”<sup>110</sup>

De los criterios de los profesores Manuel Aragón y Luigi Ferrajoli, se infiere que el sentido estricto del control de constitucionalidad se relaciona con la supremacía constitucional disponible en la parte orgánica del orden fundamental, en esa virtud, se vincula con el derecho constitucional y no se identificaría con la acepción de actividad del control constitucional.

---

<sup>109</sup> Aragón, Manuel, "El control de constitucionalidad en la constitución española de 1978", *Revista de estudios políticos*, Madrid, nueva época, núm. 7, enero-febrero de 1979, p. 172.

<sup>110</sup> Ferrajoli, Luigi, "Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista", p. 19. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30355.pdf>, consultado el 2 de febrero de 2017.

## 2. Sistemas de control de constitucionalidad

Para explicar al control de constitucionalidad, se ha implementado también diversas categorías de clasificación.

El profesor José Ramón Cossío refiere que el control de constitucionalidad es concentrado y difuso, en tal sentido:

...cuando se habla de control concentrado de constitucionalidad se alude a los procesos en los que la norma considerada contraria a la Constitución de manera expresa se impugna, precisamente, por considerarse específicamente contraria a ésta... la norma, sea el objeto central de la impugnación... el proceso se encaminará a demostrar, evidentemente, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma en cuestión... (y) se cierra el círculo procesal. Lo impugnado (la norma) queda reflejado en la parte decisoria de la sentencia, sea esto de manera expresa o por remisión, necesariamente expresa, a la parte considerativa de la sentencia.<sup>111</sup>

Como se observa, el control de constitucionalidad concentrado se identifica en este apartado de la obra del autor consultado, con la expedición de una norma que genere un conflicto con las disposiciones constitucionales, esto es, la norma es el conflicto a resolver. Sin embargo, desde esta perspectiva, en el que el clásico objeto susceptible de control son las leyes o normas, puede oponerse la perspectiva del profesor Manuel Aragón, en el sentido de que aquellas representan una de las variadas formas de ejercer el poder, por lo tanto la perspectiva sería incompleta.

A pesar de esto, se origina un nuevo contexto identificado con el nombre de control de la constitucionalidad de las leyes; el cual tiene como variación (sin afectar el entendimiento del término) en el intermedio de la construcción conceptual de referencia, la partícula *la*.<sup>112</sup>

Ahora bien, como se ha indicado,<sup>113</sup> en esta decantación del alcance del término, también el control de la constitucionalidad de las leyes se clasifica en otras dos vertientes.

---

<sup>111</sup> Ramón Cossío, José, *Sistemas y modelos del control constitucional en México*, 2ad. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 172.

<sup>112</sup> Rivera Hernández, Juan, "Hacia nuevas competencias..." *op. cit.*, p. 44.

<sup>113</sup> *Ibídem*, pp. 45 y 46.

La primera creada en el año de 1803, fecha en que se inaugura la *judicial review* que consistió en la actividad procesal en la que todos los jueces en estricto sentido, al encontrarse frente una norma inconstitucional, tenían que dejarla de aplicar. Entorno que sirvió como una nueva clasificación a la que se denominó control *difuso* de la constitucionalidad de las leyes.

Por otra parte, con la instauración del Tribunal Constitucional en las naciones de Checoslovaquia y Austria en 1920, como “encargado de la defensa de la Constitución y el único organismo autorizado para asegurar su cumplimiento, por lo que los jueces ordinarios debían de abstenerse de conocer asuntos que implicaran una aplicación o interpretación de la Constitución misma”;<sup>114</sup> en consecuencia, se originó la clasificación que se designó control *concentrado* de la constitucionalidad de las leyes.

Ahora bien, con relación al control de constitucionalidad difuso, el profesor José Ramón Cossío menciona que en cuanto a este control:

... desde una perspectiva pragmática... lo que podría verse es que el juzgador procediera de la siguiente manera: uno, que expusiera en la parte considerativa de la sentencia los argumentos por los cuales llegó a considerar que cierto precepto es, efectivamente, contrario a la Constitución; dos, que con base en esa conclusión decidiera no aplicar el precepto tenido por inconstitucional al caso concreto; tres, que se hiciera cargo de todas las consecuencias que ello implica para la solución del correspondiente litigio; cuatro, que resolviera el caso con base en los elementos normativos “restantes” y, finalmente, que en los puntos resolutivos se plasmara esta última decisión, pero no la correspondiente a la constitucionalidad en tanto la misma, insisto, no formó parte de la litis a resolver..

...

... la Suprema Corte estableció en la sentencia “Radilla 2” la posibilidad del control difuso para la totalidad de los juzgadores del país (Cuando en la sentencia se habla de los jueces, se está aludiendo a la totalidad de los órganos federales, estatales y del Distrito Federal que realizan funciones jurisdiccionales. Ello incluye a los tribunales militares, a los agrarios, a los electorales, a los contencioso-administrativos (y sus antecedentes fiscales), a las juntas y a los tribunales burocráticos, etcétera), teniendo como base, en lo que hasta ahora llevo dicho, cualquier precepto constitucional. Con ello se superó la vieja y cíclica discusión en torno a su aceptación, sus modalidades, alcance y efectos. Es verdad que el reconocimiento de este control tiene hasta

---

<sup>114</sup> Rivera Hernández, Juan, “Derecho procesal constitucional... *op. cit.*, p. 168.

ahora una base exclusivamente jurisprudencial y, por lo mismo, está sujeto a las contingencias propias de éste (cambios de integración, modificación del criterio mismo, etcétera). Sin embargo, también lo es que el Pleno de la Corte lo tiene reconocido en este momento y ello significa, dicho de manera abreviada, que la supremacía constitucional encuentra una pluralidad de garantes en una diversidad de procesos y para fines específicos.<sup>115</sup>

Como se observa, el control de constitucionalidad difuso se identifica con el examen de la realización del derecho constitucional por parte de los órganos jurisdiccionales, esto es por parte de los jueces; no obstante, desde la perspectiva del enjuiciamiento, dicho examen correspondería a las autoridades que lo ejerzan, sin ser formalmente jurisdiccionales y sin que necesariamente el proceso culmine en una sentencia *judicial* y sin perjuicio que los jueces constitucionales sean las autoridades terminales que decidan el conflicto constitucional.<sup>116</sup>

Más, siguiendo esta perspectiva que, pudiéramos señalar corresponde al derecho constitucional, se han emitido tesis jurisprudenciales relacionadas con el tema *difuso*, por ejemplo las que tienen por títulos:

1. Control constitucional y control de convencionalidad difuso. Sus características y diferencias a partir de la reforma al artículo 1o. de la constitución federal, publicada en el diario oficial de la federación el 10 de junio de 2011.<sup>117</sup>
2. Control constitucional concentrado o difuso. Las autoridades administrativas no están facultadas para realizarlo.<sup>118</sup>
3. Control difuso. Su ejercicio en el juicio contencioso administrativo.<sup>119</sup>

---

<sup>115</sup> Ramón Cossío, José, *Sistemas y modelos del control... op. cit.*, pp. 176 y 179.

<sup>116</sup> En una jurisprudencia se indica "...subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad". Cfr. Jurisprudencia, 10a. Época, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación*, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.), p. 984, registro: 2006186. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>117</sup> Tesis Aislada, 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Tesis: III.4o.(III Región) 2 K (10a.), p. 4319, registro: 2000071. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>118</sup> Tesis Aislada, 10a. Época, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación*, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Tesis: 2a. CIV/2014 (10a.), p. 1097, registro: 2007573. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

4. Control difuso de constitucionalidad ex officio. Sus presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia.<sup>120</sup>

De lo anterior se desprende que en las tesis jurisprudenciales de Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el control de constitucional difuso es considerado para esquematizar qué, dónde, quien y cuando se debe realizar en realidad este enjuiciamiento.

Se puede destacar que en las tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no existe el pronunciamiento para la realización del examen difuso, posiblemente no ha sido necesario realizar esa distinción en virtud de que se ha concentrado el entendimiento, en el ejercicio total y pleno del enjuiciamiento de los conflictos políticos electorales<sup>121</sup> relacionados con las disposiciones constitucionales, pero si se ha pronunciado con relación al interés difuso para promover los respectivos procesos constitucionales.<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> Jurisprudencia, 10a. Época, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación*, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.), p. 984, registro: 2006186. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>120</sup> Jurisprudencia, 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/8 (10a.), p. 953, registro: 2005057. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>121</sup> De estos derechos se puede destacar: "Sin derechos políticos, la gente no puede estar segura de sus derechos personales, pero sin derechos sociales, los derechos políticos seguirán siendo un sueño inalcanzable, una ficción inútil o una broma cruel para aquellos muchos a quienes la ley, formalmente, les garantiza tales derechos. Si los derechos sociales no están asegurados, los pobres y los indolentes no podrán ejercer los derechos políticos que en teoría poseen" Zygmunt Bauman, tiempos líquidos". *Cit.* por Nieto Castillo, Santiago, publicación de Facebook, 18 de enero de 2017, a las 6:55 horas.

<sup>122</sup> *Cfr.* Jurisprudencia 10/2015: "Acción tuitiva de interés difuso. la militancia puede ejercerla para impugnar actos o resoluciones emitidos por los órganos intrapartidistas (normativa del partido de la revolución democrática)"; Jurisprudencia 8/2009: "Desistimiento. es improcedente cuando el medio de impugnación es promovido por un partido político, en ejercicio de una acción tuitiva del interés público"; Jurisprudencia 3/2007: "Procedimiento administrativo sancionador electoral. los partidos políticos tienen interés jurídico para impugnar la resolución emitida"; Jurisprudencia 10/2005: "Acciones tuitivas de intereses difusos. elementos necesarios para que los partidos políticos las puedan deducir"; Jurisprudencia 10/2003: "Procedimiento administrativo sancionador electoral. los ciudadanos denunciantes están legitimados para apelar la determinación emitida"; Jurisprudencia 15/2000: "Partidos políticos nacionales. pueden deducir acciones tuitivas de intereses difusos contra los actos de preparación de las elecciones"; Tesis LXIX/2015: "Desistimiento. es improcedente cuando el ciudadano que promueve un medio de impugnación, ejerce una acción tuitiva del interés público"; Tesis XXVIII/2005: "Desistimiento de la impugnación en contra de la integración de un tribunal local. es legalmente inadmisibile". Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.



El profesor Manuel Aragón también expone su clasificación del control de constitucionalidad en los siguientes términos:

Aunque los procedimientos de control varían en los distintos países, puede, sin embargo, establecerse alguna clasificación, siendo la más frecuente la que agrupa las formas de control de constitucionalidad en dos tipos: sistemas de control político y sistemas de control judicial, según que el órgano que lo desempeñe pertenezca a una u otra categoría. No obstante, habría que señalar que el control político en sentido objetivo, esto es, en atención a su propia naturaleza y no a la del órgano que lo realiza, es incompatible con el significado propio del control, ya que sólo a través de un razonamiento jurídico (y no por motivos de oportunidad política) puede comprobarse cuando un determinado acto del poder contraviene o no lo establecido en la Constitución. En ese sentido, el verdadero control de constitucionalidad es siempre un control jurídico y, en la práctica, el grado de perfección de los sistemas existentes es directamente proporcional a la idoneidad técnica que para el conocimiento del Derecho quepa atribuir al órgano encargado de ejercitarlo. De ahí que se considere al control judicial como el más óptimo sistema de control de constitucionalidad.<sup>123</sup>

Como se observa, para la doctrina del derecho constitucional, el control de constitucionalidad se clasifica en político y jurídico, pero se considera que el verdadero es el segundo, por su *idoneidad técnica* y por ser el *más óptimo* dado que es desempeñado por el judicial.

De este modo, puede señalarse que desde el procesalismo, el enjuiciamiento mediante procesos constitucionales, necesariamente exige la técnica de quien lo desempeñe, esto es, la deben observar a quienes el maestro español los considera autoridades *políticas* y no necesariamente dicha técnica estaría a cargo de los jueces, porque la finalidad es la misma: solucionar los conflictos que violan, ignoran u omiten el orden fundamental.

Así, el control de constitucionalidad tendría más clasificaciones, tal y como el que puede derivarse del título de un estudio perteneciente al procesalista italiano Mauro Cappelletti: “El control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado.”<sup>124</sup> Esta clasificación pudiera originar el control político de la

---

<sup>123</sup> Aragón, Manuel, “El control de constitucionalidad en la constitución española de 1978”, *Revista de estudios políticos*, Madrid, nueva época, núm. 7, enero-febrero de 1979, pp. 173 y 174.

<sup>124</sup> Trad. Gómez Lara, Cipriano y Héctor Fix-Zamudio, prol. E. Medina, México, UNAM, 1966.

constitucionalidad de las leyes, en el que se incluiría al Senado Francés de 1799, como a la teoría del poder moderador y neutral (el monarca, el presidente del *reich*, el jefe de estado) que funge como el guardián del orden constitucional, y que representaba, según Lorenz von Stein, “la forma clásica del verdadero constitucionalismo”.<sup>125</sup>

Como se ha expuesto,<sup>126</sup> el control constitucional puede desarrollarse desde diversos contextos, por ello, se genera gran número de significados según el sentido o modo en que sea examinado, de manera que con base en el pensamiento del maestro Héctor Fix Zamudio se puede mencionar el control constitucional es genérico, abarca todo tipo de sistemas para revisar el ejercicio de autoridad que tienen los órganos del poder; estos controles pueden ser políticos ejercidos por los órganos políticos, unos sobre otros, o bien pueden ser judiciales o jurisdiccionales,<sup>127</sup> y que se prefiere identificar como el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con las disposiciones fundamentales, mediante los procesos constitucionales.

En consecuencia, desde nuestra perspectiva el control constitucional tiene un significado estático y dinámico. Como acepción estática por estimarse como un planteamiento teórico o del derecho constitucional donde se expondrían las conductas o resultados de estas que pueden ser cotejadas, comprobadas, revisadas o examinadas, con el contenido de las diferentes disposiciones constitucionales, con el objeto de reconocer si han cumplido, o no, la ley fundamental; siendo que quizá en el sentido de esta primer acepción, no se produzca un efecto sobre la realidad, pero generaría una regulación o autocontrol sobre las conductas y sus consecuencias, porque establecería los parámetros para apearse a la Constitución, conformando una especie de precepto moral de mandato o prohibición, esto es, un control constitucional subjetivo,<sup>128</sup> ejemplificado con la *protesta constitucional*.<sup>129</sup>

---

<sup>125</sup> Cit. por Schmitt, Carl, *La defensa de la constitución*, Barcelona, 1931, p. 165; Cit por, De Vega García, Pedro, “Jurisdicción constitucional... *op. cit.*, p. 101.

<sup>126</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, pp. 41, 46 y 47.

<sup>127</sup> Fix Zamudio, Héctor, “Panorama de la justicia constitucional en México. Conferencia magistral”, en Córdova Vianello, Lorenzo y César Iván Astudillo Reyes (coords.), *Seminario reforma y control de la Constitución: Implicaciones y límites*, México, IIJ, versión dvd, disco 1, 3º de febrero de 2009.

<sup>128</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, p. 41.

<sup>129</sup> En la ley fundamental de 1917 se establece que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, tiene que prestar la protesta de guardar la

El segundo significado de control constitucional sería como acepción dinámica, en el que las conductas o resultados de estas, tendrían que ser cotejadas, comprobadas, revisadas o examinadas con el orden fundamental, para que las mismas ya no sólo se reconozcan como cumplidoras o no de los preceptos constitucionales, sino que aquellas desarrollen, o en su defecto, se sometan a los imperativos establecidos por la propia Constitución, entorno que podría denominarse control constitucional objetivo,<sup>130</sup> y que es propio del ejercicio del enjuiciamiento en el derecho procesal, mediante el cual se omitiría la referencia al control de constitucionalidad que, como se ha mencionado y por las limitaciones de su alcance, sería del derecho constitucional.

### III. JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Con base en lo señalado en el apartado del control constitucional, el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con la Constitución no solo corresponde a los jueces en su sentido formal.

Sin embargo, toda vez que las denominaciones justicia y jurisdicción constitucional se utilizan para identificar al referido enjuiciamiento, de manera breve se tiene la necesidad de exponer el contenido de estos términos.

Para el profesor Manuel Aragón la justicia constitucional: "...no está basado en una comprensión formal, sino material, de tal manera que se refiere a la totalidad de la actividad judicial de aplicación de la Constitución, ya sea realizada por tribunales especializados o por tribunales ordinarios, ya sea practicada de manera concentrada o difusa."<sup>131</sup>

Con base en ello, el control constitucional en su acepción de actividad sería la que se relaciona con el desempeño de los jueces, dándose el origen a la

---

Constitución y las leyes que de ella emanen. Cfr. Artículos 85, 97, 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 5 de febrero de 2017. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_050217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_050217.pdf), consultado el 13 de febrero de 2017.

<sup>130</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, "Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, p. 41.

<sup>131</sup> Aragón, Manuel, "La justicia constitucional en el siglo XX. Balance y perspectivas en el umbral del siglo XXI", *La ciencia del derecho durante el siglo XX*, México, UNAM, 1998, p. 166. Cit. por Astudillo Reyes, César I., *Ensayos de justicia constitucional en cuatro ordenamientos de México: Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas*, México, UNAM, 2004, p. 1.

denominación justicia constitucional, de manera que es una amplitud intermedia del control constitucional.

En este sentido, para el maestro Héctor Fix Zamudio: “El término de justicia constitucional es un término intermedio en cuanto a su extensión, es un control, por supuesto, es un examen de las facultades y de los resultados de esas facultades que tienen los órganos del poder a través de esa separación o establecimiento de facultades propias que pueden ser objeto de revisión por los otros órganos del poder, los famosos *checks and balances*, pero encomendados a órganos jurisdiccionales o inclusive algunos administrativos.”<sup>132</sup>

De lo anterior se desprende que el enjuiciamiento de los conflictos constitucionales es realizado por órganos no estrictamente jurisdiccionales, sino también por autoridades administrativas, las que invariablemente deben observar el debido proceso y que incluso les corresponde la aplicación práctica de los procesos constitucionales.<sup>133</sup>

El maestro Héctor Fix Zamudio concibe a la justicia constitucional como “el conjunto de procedimientos de carácter procesal, por medio de los cuales se encomienda a determinados órganos del Estado, la imposición forzosa de los mandamiento jurídicos supremos, a aquellos otros organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones, que para su actividad se establecen en la misma Carta Fundamental.”<sup>134</sup>

Desde esta perspectiva, a la justicia constitucional pudo reconocérsele su importancia, debido a que se le atribuyó la imposición forzosa de la Constitución y de esta manera a los jueces se les puede considerar sus últimos guardianes, dado que su juicio emitido en la sentencia, no puede ser incumplido a la luz del dogma de la división de poderes.

Precisamente, la parte orgánica del orden fundamental establece un sistema de pesos y contrapesos, con el objeto de que el poder limite al poder. Este imperativo orgánico lo expone el profesor Duverger: “la estructura de las instituciones políticas en las democracias liberales descansa en un principio célebre, el de la separación de

---

<sup>132</sup> Fix Zamudio, Héctor, “Panorama de la justicia constitucional... *op. cit.*”

<sup>133</sup> *Vid. Infra*. Capítulo cuarto. Los procesos constitucionales en la ley fundamental de 1917.

<sup>134</sup> Fix Zamudio, Héctor, *Veinticinco años de evolución... op. cit.*, p. 15.

poderes. Se le remonta al autor inglés John Locke, en su Tratado de gobierno civil (1690), y a Montesquieu en su Espíritu de las leyes (1748). Todos los regímenes políticos conocen una división entre varios órganos gubernamentales, cada uno más o menos especializado en una función. La separación de poderes, en el sentido preciso del término, no solamente consiste en esta división del trabajo: implica también que los distintos órganos gubernamentales sean independientes unos de otros.”<sup>135</sup>

Desde esta perspectiva, la justicia constitucional asume una función relevante en la política al representar el freno a la no realización del derecho constitucional, dado que existe el “principio de ‘sujeción del juez a la ley’, que es la base de la ideología judicial heredada de la Revolución francesa.”<sup>136</sup> Tal sujeción observaría la idea de justicia del profesor John Rawls, quien menciona sobre el particular: “Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales.”<sup>137</sup>

En atención a que el vocablo en examen se debe a la figura del juez, el profesor Lucio Pegoraro refiere: “No existe por naturaleza ninguna tipología de justicia constitucional, sino solo las clases forjadas por la doctrina constitucionalista y sobre todo comparatista, tomando en cuenta los modelos cada vez individualizados en la experiencia histórica, o contruidos a partir de la búsqueda de un elemento unificador, y llegando a la propuesta de un tipo ideal”.<sup>138</sup>

De este modo, la justicia constitucional tiene su sustento en el derecho constitucional debido a que pretende unificar el entendimiento de los jueces a cargo del enjuiciamiento de los conflictos constitucionales, pero también con la intención de obtener un ideal de dicho funcionario; aunado a que también se ha pretendido

---

<sup>135</sup> Duverger, Maurice, *Instituciones políticas y Derecho constitucional*, España, Ariel, 1970, p. 178.

<sup>136</sup> Cfr. Gudiño Pelayo, José de Jesús, “Lo confuso del control difuso de la Constitución”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), *Procesos constitucionales. Memoria... op. cit.*, p. 462.

<sup>137</sup> Rawls, John, *Teoría de la justicia*, trad. de María Dolores González, 2da. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 17.

<sup>138</sup> Pegoraro, Lucio, “Justicia constitucional (tipología)”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. II, p. 840.

clasificar a los jueces, porque para la doctrina sustantiva no todos los jueces son constitucionales.

El profesor Eduardo Ferrer Mac-Gregor señala que se debe al maestro Piero Calamandrei<sup>139</sup> la “caracterización de los sistemas de justicia constitucional.”<sup>140</sup>

Sin embargo, a pesar de que la doctrina continúa explicando tal caracterización, definiéndola también con los vocablos modelos o tipología,<sup>141</sup> se considera importante referir brevemente la perspectiva del profesor Calamandrei.

### 1. Sistema de justicia constitucional americano

También conocido como revisión judicial o *judicial review of legislation* o sistema judicial difuso o sistema americano, las características del sistema de justicia constitucional americano, en términos del maestro Piero Calamandrei, son: difuso, incidental, especial y declarativo.<sup>142</sup>

1. Es *difuso* (también denominado desconcentrado), porque el juez civil, comercial, penal, laboral, etc., puede declarar la inconstitucionalidad de las normas a aplicar para la solución de los conflictos que conoce.
2. Es *incidental* porque la ley sospechosa de inconstitucionalidad no es susceptible de impugnación directa.
3. Es *especial* porque las soluciones a los conflictos sólo recaen a las partes en conflicto (*inter partes*), y para el caso concreto; la ley definida como inconstitucional, sigue vigente, solamente se inaplica en el caso judicial específico donde se estimó inconstitucional.

---

<sup>139</sup> En su obra Calamandrei, Piero, “La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile”, en *Opere Girridiche*, del mismo autor, Napoli, Morano, 1968, t. III, p. 350. *Cit.* por Fix Zamudio, Héctor, “Breves reflexiones sobre el concepto... *op. cit.*, p. 278.

<sup>140</sup> *Derecho procesal constitucional. Origen... op. cit.*, p. 108.

<sup>141</sup> *Cfr.* Pegoraro, Lucio, “Justicia constitucional (modelos)” y “Justicia constitucional (tipología)”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal... op. cit.*, pp. 839-842.

<sup>142</sup> En esta parte de la exposición se sigue los criterios vertidos por: Fernández Segado, Francisco, *La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano*, México, UNAM-IIJ, 2004, pp. 25-58.

4. Es *declarativo* porque en la revisión judicial, en sentido estricto, el juez no anula ley, sino que declara una nulidad preexistente: principio *stare decisis*. Así, los efectos declarativos son retroactivos (*ex tunc*), hacia el pasado; y dado el carácter incidental de la demanda, se limita al caso concreto (*inter partes*). Así, de conformidad con el procesalista Calamandrei, se trata de un control especial y no general.

En consecuencia, el sistema de justicia constitucional americano es difuso, incidental, especial y declarativo.

## 2. Sistema de justicia constitucional europeo

También se le denomina autónomo, austriaco, concentrado, modelo europeo, continental europeo, austriaco-kelseniano, europeo-kelseniano, *verfassungsgerichtsbarkeit* o sistema especializado concentrado. De manera que las características del sistema de justicia constitucional expuesto por el maestro Piero Calamandrei son: concentrado, principal, general y constitutivo, competencia del Tribunal Constitucional:<sup>143</sup>

1. Es *concentrado* por ser ejercido por un único y especial órgano constitucional, en esa virtud, el Tribunal Constitucional asume el monopolio del examen o revisión de las facultades y los resultados de esas facultades que tienen los diferentes órganos de poder, así como la vinculación de ese ejercicio para el resguardo de los derechos fundamentales.
2. Es *principal* porque el proceso constitucional ante el órgano jurisdiccional competente se inicia por el sujeto público o individual legitimado por la Constitución o la ley; por ello, es de impugnación directa, en vía principal.
3. Es *general* porque la intención de las resoluciones de anulación de leyes inconstitucionales tienen efectos generales (*erga omnes*), por ello el beneficio de la expulsión de la norma que contradice la Constitución, se ve reflejada a los

---

<sup>143</sup> Se siguen los criterios vertidos por: Fernández Segado, Francisco, *La justicia constitucional... op. cit.*, pp. 25-58.

sujetos a quienes la ley aún no haya ocasionado un agravio o menoscabo personal y directo.

4. Es *constitutivo* porque la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad opera con efectos *ex nunc*, hacia el futuro, respetando en cuanto al pasado la validez de la ley declarada inconstitucional. A este respecto, el maestro Hans Kelsen a fin de evitar los inconvenientes que surgían del vacío jurídico desencadenado por la anulación de una norma, defendió la conveniencia de diferir los efectos de la anulación. De este modo se habilitó al Tribunal Constitucional para prever una prórroga para la entrada en vigor de los efectos de la sentencia de anulación y cuya razón de ser, como reconoció el propio filósofo del Derecho Hans Kelsen,<sup>144</sup> consistía en permitir al legislador suplir la norma cuestionada por una diferente que fuese compatible con el orden fundamental, antes de que la anulación se hiciera efectiva.<sup>145</sup>

En consecuencia, el sistema de justicia constitucional europeo es concentrado, principal, general y constitutivo.

De manera que con motivo de las características atribuidas al sistema concentrado, se considera que el maestro italiano Piero Calamandrei fue el primero en Italia en establecer de manera clara las bases de una jurisdicción constitucional, sobre todo a partir de la obra publicada en 1950: *La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile*, Padova Cedam”.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> Cfr. Kelsen, Hans, “Judicial Review of Legislation. Comparative Study of the Austrian and the American Constitution”, *The Journal of Politics*, vol. 4, núm. 2, mayo de 1942, p. 84.

<sup>145</sup> Si bien a estas alturas la connotación *justicia constitucional* quizá puede haber sido delimitada, Héctor Fix Zamudio a distinguido un *sistema soviético de justicia constitucional*, en el cual se “deposita en los órganos legislativos la tutela de la supremacía constitucional.” *Veinticinco años de evolución... op. cit.*, p. 18.

<sup>146</sup> También existe traducción al español de la obra del maestro italiano: “La ilegitimidad constitucional de las leyes en proceso civil” en su obra *Instituciones de derecho procesal civil (Estudios sobre el proceso civil)*, trad. Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Liberia El Foro, vol. III, pp. 21 y ss.; en concreto, pp. 32 y 33; *Cit.* en Fernández Segado, Francisco, *La justicia constitucional... op. cit.*



#### IV. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

De conformidad con lo establecido en el apartado de la justicia constitucional, el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con la Constitución que corresponde a un órgano concentrado denominado tribunal, corte, sala constitucional es la base del entendimiento de la jurisdicción constitucional.

Por tanto, el concepto del sistema de justicia constitucional europeo sería el sustento de la denominación jurisdicción constitucional.

En tal sentido, el profesor Domingo García Belaunde refiere:

...cuando Europa adopta el modelo jurídico de Constitución y deja de lado el modelo político que lo acompañó en todo el siglo XIX. Aparece así el concepto de “jurisdicción constitucional” primero en Francia y de uso extendido —si bien por poco tiempo— y luego en el mundo germano, por iniciativa y gestión de Kelsen. En efecto, la Quinta Conferencia Alemana de Profesores de Derecho Público, que se lleva a cabo en Viena del 23 al 25 de abril de 1928, está dedicada a la “jurisdicción estatal” y es ahí donde Kelsen presenta una larga como meditada ponencia sobre el tema que, curiosamente, no tiene título alguno... Este texto de 1928 es, sin lugar a dudas, un clásico que habrá de tener larga influencia, pero no en la versión alemana, que se publica en 1929, sino en la versión francesa que, traducida por su discípulo Charles Eisenmann, se publicará en 1928, arreglada y con título específico: “La garantía jurisdiccional de la Constitución”. En su traducción, si bien fidedigna, Eisenmann se tomó, sin embargo, algunas licencias: Kelsen usó en la versión alemana el concepto “jurisdicción constitucional” y Eisenmann, seguramente sin entender mayormente la diferencia, utilizó indistintamente dos vocablos: jurisdicción constitucional y justicia constitucional como si fueran sinónimos. Aquí, pues, se introdujo la primera distorsión, explicable en el contexto francés, en donde se hablaba de administración de justicia, justicia civil y otras por el estilo.<sup>147</sup>

De lo anterior se desprende que la denominación jurisdicción constitucional tiene sustento en la caracterización de la Constitución como instrumento jurídico, y desde la perspectiva práctica así como doctrinal, se le atribuye al profesor de Viena, integrante del tribunal constitucional y conferencista sobre la materia en 1928, el análisis de la denominación, la que se indica fue distorsionada o

---

<sup>147</sup> García Belaunde, Domingo, “Jurisdicción constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de derecho procesal op. cit.*, p. 798.

explicada de manera ambigua, en el contexto francés con el vocablo justicia constitucional.

En este sentido, la jurisdicción constitucional "...se corresponde con un entendimiento formal, de tal modo que se identifica con un tribunal especializado cuyo cometido es aplicar la Constitución..."<sup>148</sup>

También la acepción jurisdicción constitucional constituye el "...conjunto de mecanismos procesales destinados a defender la Constitución, sea en su aspecto dogmático o en el orgánico. Dentro de ella, tienen destacada importancia el control constitucional de las leyes y la defensa de los derechos fundamentales."<sup>149</sup>

En tal sentido, el maestro Domingo García Belaunde refiere: "la jurisdicción constitucional nació en un momento para proteger la pirámide jurídica, o sea, la jerarquía normativa, pero luego se amplió a los derechos fundamentales, dependiendo esto también del modelo o sistema que cada país ha creado o adoptado."<sup>150</sup>

Como se observa, la jurisdicción constitucional perfilaba el diseño técnico y óptimo del enjuiciamiento, y desde esta perspectiva del derecho sustantivo, el profesor Hans Joachim menciona:

El concepto de la jurisdicción constitucional se basa en la primacía de la idea de Derecho sobre el poder del Estado. Su punto de partida es la concepción de que también la acción política se encuentra subordinada a la egregia idea del Derecho; que esta idea le traza sus obligaciones y sus límites. De ahí que entre los fundamentos de la jurisdicción constitucional se encuentre el de que las fuerzas políticas en conflicto respeten una plataforma común de convicciones básicas, expresadas en la Constitución, y los valores fundamentales allí establecidos. Sólo sobre este supuesto puede tener lugar la lucha entre las fuerzas políticas, con sujeción a las reglas de juego de una leal competencia, de la manera establecida para el caso por el procedimiento ante la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional queda descartada cuando en la realidad constitucional no se da el consenso acerca de los valores básicos de la Constitución. Globalmente considerado, el

---

<sup>148</sup> Aragón, Manuel, "La justicia constitucional en el siglo XX. Balance y perspectivas en el umbral del siglo XXI", *La ciencia del derecho durante el siglo XX*, México, UNAM, 1998, p. 166. *Cit.* por Astudillo Reyes, César I., *Ensayos de justicia... op. cit.*, p. 1.

<sup>149</sup> García Belaunde, Domingo, *Derecho procesal constitucional*, Colombia, Temis, 2001, p.129.

<sup>150</sup> García Belaunde, Domingo, "Jurisdicción constitucional", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de derecho procesal... op. cit.*, p. 799.

sistema de la jurisdicción constitucional sólo puede funcionar cuando las fuerzas políticas están dispuestas a someterse al fallo de los jueces y a aceptarlo lealmente.<sup>151</sup>

De acuerdo con este planteamiento del profesor Hans Joachim, puede fundamentarse el adecuado funcionamiento de la jurisdicción constitucional, esto es, la conciencia constitucional de reconocer la importancia y respeto de la Constitución mediante las acciones de los diversos individuos que representan y ejercen el poder, así como el sometimiento de dichos individuos a la resolución del juez que decide la forma de aplicación, de las diversas disposiciones fundamentales para asegurar el cumplimiento de la Constitución misma.

Conforme los planteamientos de los profesores Aragón, Belaunde y Joachim, el elemento que permite identificar o distinguir a la jurisdicción constitucional de los nombres comúnmente equiparados con la defensa de la Constitución, es el órgano a quien le corresponderá aplicar las normas fundamentales, con ello, se encauza a la pronunciación del derecho (que es la acepción jurídica del vocablo jurisdicción, esto es, decir el derecho), a un tribunal especializado, que a través de las garantías constitucionales<sup>152</sup> o procesos constitucionales, soluciona los conflictos relacionados con las disposiciones fundamentales.

Ahora bien, dentro de los estudios de la teoría procesal se señala que la jurisdicción es una sola, pero siendo una, la misma se atribuye a diversos órganos que la propia Constitución o la ley señalan.

En consecuencia, lo que existe es una sola jurisdicción, pero a los tribunales, salas o jueces, aquella se les ha otorgado; de suerte que aquellos tienen una parte del todo que conforma la jurisdicción.

En tal virtud, la teoría procesal ha ideado fragmentos de jurisdicción, que se canalizan a los diferentes órganos encargados de la impartición de justicia en un determinado territorio, sobre cierta materia y sobre ciertos individuos. Dichos

---

<sup>151</sup> Joachim Faller, Hans, "Defensa constitucional por medio de la jurisdicción constitucional en la república federal de Alemania", trad. Haller, Carlos E., en *Revista de estudios políticos...* op. cit., p. 67.

<sup>152</sup> Vid. Concepto de "Defensa de la Constitución" del maestro Héctor FIX Zamudio.

fragmentos de jurisdicción son conocidos dentro de esta teoría como competencia, lo que significa que “la competencia es la medida de la jurisdicción.”<sup>153</sup>

En esta vertiente, el profesor Domingo García Belaunde refiere:

En un país, todos los jueces legalmente investidos tienen jurisdicción. Pero solo pueden intervenir en los casos para los cuales tengan competencia (en función de territorio, materia, cuantía, etc.). Y la tienen en virtud de las reglas que les asignan el conocimiento de determinados asuntos.

Por tanto, decir que hay jurisdicción constitucional solo cuando existe un tribunal *ad hoc* y al margen del poder Judicial, es confundir los planos, ya que todos los tribunales tienen *jurisdicción*, sin excepción alguna, y más bien lo que existe, debidamente distribuida, es la competencia por medio de los jueces y tribunales especializados. Y esta es, en palabras de Alsina, la actitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado. Por tanto si la Suprema Corte, cúspide del poder Judicial, tiene competencia (dada por la Constitución) para declarar y resolver en asuntos constitucionales, todo lo demás es irrelevante. En primer lugar, tener competencia; en segundo lugar, resolver; y finalmente, ejecutar: estos son, en síntesis, los pasos que se dan.<sup>154</sup>

De la idea del profesor García Belaunde se desprende que la jurisdicción es una sola, y también se debe indicar que la misma “tiene diversas manifestaciones o campos diferentes sobre las cuales se aplica, y por ello, metafóricamente se habla de jurisdicción civil o jurisdicción penal.”<sup>155</sup>

Por lo tanto, como aspecto fundamental que distingue la defensa, control y justicia constitucional, de la jurisdicción constitucional, se precisa que el órgano especializado a cargo de la aplicación de la Constitución, ha recibido el nombre de tribunal constitucional.

En consecuencia, el maestro Héctor Fix Zamudio indica: “...el concepto jurisdicción constitucional resulta demasiado limitado... pues en estricto sentido sólo comprende el estudio de la actividad de verdaderos tribunales, formal y materialmente considerados, que conozcan y resuelvan las controversias de naturaleza constitucional de manera específica, es decir que los citados tribunales

---

<sup>153</sup> García Belaunde, Domingo, *Derecho Procesal... op. cit.*, pp. 15 y 16.

<sup>154</sup> *Ibídem*, p. 16.

<sup>155</sup> Prieto Castro, L., “Derecho procesal civil”, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1964, t. I, p. 102.

están especializados en la decisión de los conflictos de carácter constitucional... (por lo que se configuran) como órganos jurisdiccionales especializados.”<sup>156</sup>

### 1. *Tribunal, corte o sala constitucional*

Entre algunos significados que describen a este tipo de órganos especializados en la resolución de los conflictos constitucionales, identificados en la doctrina generalmente con los nombres de tribunales, cortes, salas Constitucionales u órganos *ad-hoc*; se encuentra el del Francés Louis Favoreu quien menciona: “un tribunal constitucional es una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente en materia de los contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de éste como de los poderes públicos... Un tribunal supremo, o incluso la cámara constitucional de un tribunal supremo pueden ser jurisdicciones constitucionales, pero no son tribunales constitucionales.”<sup>157</sup>

Por otra parte, para el jurista Jorge Carpizo: “... son órganos jurisdiccionales, especializados en la defensa de la Constitución y de los derechos humanos; en que se examinan si las leyes, actos administrativos y sentencias, están de acuerdo con las disposiciones constitucionales, y hacen valer en todo caso la supremacía constitucional, con lo cual se fortalece el sistema jurídico del país y se reafirma que la vida social y política, tiene que correr en los cauces normativos; específicamente constitucionales.”<sup>158</sup>

El maestro Héctor Fix-Zamudio menciona que son verdaderos tribunales, similares a los de carácter ordinario, pero especializados en la resolución de conflictos constitucionales. También indica:

Hans Kelsen (considera)... que son órganos jurisdiccionales por que tienen como función, la aplicación del derecho; y, junto a Calamandrei afirman que deben considerarse como legisladores negativos; en este sentido Gaetano Azzariti italiano, estimo que la jurisdicción constitucional y la anulación *erga*

---

<sup>156</sup> *Veinticinco años de evolución... op. cit.*, p. 15.

<sup>157</sup> *Los tribunales constitucionales*, trad. De Vicente Villacampa, Barcelona, Ariel, 1994, p. 13.

<sup>158</sup> *Nuevos estudios constitucionales*, México, UNAM, 2000, p. 28.

*omnes* de los preceptos considerados inconstitucionales por dicho tribunal implicaba una función diversa de la judicial y de todos los del Estado, pues al lado de tres poderes había surgido uno nuevo *el poder de control o de legitimidad constitucional*; y el italiano Nicola Jaeger consideró que dicho tribunal debía considerarse como un órgano constitucional de carácter *supremo, titular de la soberanía y continuador de la obra y voluntad del constituyente* (Énfasis original).<sup>159</sup>

El jurista Eduardo Ferrer Mac-Gregor refiere que “entendemos por tribunal constitucional a los altos órganos judiciales o jurisdiccionales situados dentro o fuera del poder judicial, independientemente de su denominación, cuya función material esencialmente consista en la resolución de los litigios o conflictos derivados de la interpretación o aplicación directa de la normativa constitucional.”<sup>160</sup>

## 2. Evolución de la jurisdicción constitucional

El profesor Eduardo Ferrer Mac-Gregor menciona que la evolución de los tribunales constitucionales tiene tres etapas:<sup>161</sup>

1. La primera etapa se constituye por el nacimiento de los tribunales constitucionales durante los primeros años posteriores a la Primera Guerra Mundial. En este primer periodo se crean el Tribunal Constitucional de Checoslovaquia, la Alta Corte constitucional de Austria (1920) y el Tribunal de Garantías Constitucionales previsto en la Constitución republicana Española de 1931.
2. La segunda etapa se constituye por la expansión de los tribunales constitucionales, fundamentalmente en Europa Occidental a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo se inicia con la reinstalación de la Corte constitucional austriaca en (1945), y enseguida se

---

<sup>159</sup> Fix Zamudio, Héctor, “Breves reflexiones sobre la naturaleza, estructura y funciones de los organismos jurisdiccionales especializados en la resolución de los procesos constitucionales”, en Vega Gómez, Juan y Corzo Sosa, Edgar (coords.), *Tribunales y justicia constitucional. Memoria del VII Congreso del Derecho Constitucional*, México, UNAM, 2002, pp. 207-209.

<sup>160</sup> “Los tribunales constitucionales y la suprema corte de justicia de México”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, 5a. ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2006, t. I., p. 243.

<sup>161</sup> Cfr. *Ibídem*, pp. 244-246.

crean los Tribunales Constitucionales de Italia 1948, de Alemania (1949), el Consejo Constitucional francés (1959), el Tribunal Constitucional turco (1961, 1982); y el Tribunal Constitucional yugoslavo (1963, 1974).

### 3. La tercera etapa:

... surge a partir de la década de 1970, con la expansión de dichos tribunales. Así se crean los tribunales constitucionales portugués (1976, 1982), griego (1975, Tribunal Especial Superior), español (1978), y belga (1980, denominado Tribunal de Arbitraje). Posteriormente también estos órganos especializados en materia constitucional se expandieron en Europa del Este y en la ex Unión Soviética, Polonia (1982, 1986, 1997), Hungría (1989), Croacia (1990), Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y Eslovenia (1991), Albania, Eslovaquia, Estonia, Lituania, Macedonia, República Checa y lo que resta de Yugoslavia-federación de Serbia y Montenegro (1992), República Federativa Rusa, actualmente unida con Bielorrusia (1993), Moldavia (1994), Bosnia-Herzegovina (1995), Letonia (1996) y la República de Ucrania, actualmente integrante de la Comunidad de Estados Independientes (1996). En esta tercera etapa deben incluirse también la Corte Constitucional de Sudáfrica (1994, 1997), los Altos Tribunales constitucionales en Madagascar (1975) y en Egipto (1979), así como el Tribunal Constitucional surcoreano (1987), entre otros. En América Latina el panorama fue distinto, debido a que se adoptó con sus particularidades en cada país el sistema americano de control judicial de las leyes. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX se fueron creando paulatinamente tribunales, cortes y salas constitucionales, influenciados por el modelo europeo. Así, en la actualidad existen cuatro cortes o tribunales constitucionales que se encuentran fuera del poder judicial (Chile, Ecuador, Guatemala y Perú), dos tribunales constitucionales situados dentro del Poder Judicial (Bolivia y Colombia) y cinco salas constitucionales autónomas que forman parte de las Cortes Supremas (El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua y Venezuela).<sup>162</sup>

De este modo se observa que existe el acuerdo que las funciones que desarrollan los organismos especializados en la solución de los conflictos constitucionales tienen naturaleza jurisdiccional, pero también existe una variedad de opiniones sobre la esencia de dichos organismos, ya que se afirma que es un legislador o paralegisador, es un organismo jurisdiccional, o bien que es un órgano del poder diverso de los tres clásicos, supremo e inclusive titular de la soberanía y continuador de la obra así como la voluntad del constituyente.<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> *Ibídem*, p. 246.

<sup>163</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, "Hacia nuevas competencias... *op. cit.*", p. 56.

En este sentido, las confusiones que se han producido sobre dichos órganos puede surgir de la falta de diferenciación de las funciones encomendadas a los mismos y su esencia como órganos encargados de ejercer el poder público en lo que concierne a la aplicación de la Constitución, es decir, con ello resulta que no se ha determinado específicamente el tipo y material sometido a revisión o examen; las garantías constitucionales o procesos constitucionales diseñados para realizar dicha revisión; el momento en que este se verificará, etc.<sup>164</sup>

No obstante, se infiere que estos tribunales, cortes, salas con el calificativo *constitucionales*, son órganos jurisdiccionales especializados competentes en el conocimiento y resolución de los conflictos constitucionales.

Como se ha indicado,<sup>165</sup> parece que la importancia de dicho tribunal, corte o sala constitucional, trasciende de modo determinante en la estructura y configuración del poder público.

La situación es que por realizar la aplicación definitiva de los imperativos que contienen las Constituciones, así como determinar a quién corresponde las atribuciones de los órganos depositarios de las funciones públicas en caso de conflicto; como también por ser el último defensor de los derechos fundamentales; en consecuencia, se establece un órgano con una función solemne e inigualable a otra función pública, dado a que su objetivo final es fundamental, asegurar el cumplimiento de la Constitución.

Por ello siempre, su naturaleza, existencia, configuración y funcionamiento será una situación abierta al diálogo, pero se tiene la convicción que la labor técnica del enjuiciamiento competencia del tribunal constitucional, tiene que ser realizada en todos y cada uno de los procesos constitucionales que se dirigen a la realización del derecho constitucional, sin perjuicio que al tribunal constitucional le corresponda la solución definitiva de los conflictos relacionados con el orden fundamental.

Ahora bien, si esta situación de diálogo, de acercamiento, de punto de convergencia para asegurar el cumplimiento de la propia Constitución no encuentra un punto de conciliación; se presentará un desacuerdo que inevitablemente originara

---

<sup>164</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 56 y 57.

<sup>165</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 57 y 58.



un cataclismo que propicie el incumplimiento de los preceptos constitucionales. De ahí que:

... no suponemos que la jurisdicción constitucional pueda brindar una defensa eficaz contra un golpe revolucionario. En este contexto da lo mismo que las fuerzas anticonstitucionales ataquen al ordenamiento básico del Estado mediante la acción directa o lo intenten con otros medios. Si el legislador pretende imponer su voluntad, está en sus manos reformar la ley reguladora del Tribunal Constitucional Federal o duplicar el número de los magistrados, colocando en los nuevos cargos a personalidades complacientes; puede también (si fuese necesario, a través de una reforma constitucional y contando con la imprescindible mayoría calificada) restringir las atribuciones del Tribunal o suprimirlo totalmente... Ciertamente es que la jurisdicción constitucional representa un valioso instrumento para la defensa de la Constitución; sin embargo, en razón de su propia estructura no es lo suficientemente apta para proteger el libre orden constitucional, en situaciones extremadamente críticas, contra los enemigos de ese orden. La defensa del orden constitucional, en tales situaciones, sólo está asegurada cuando la Constitución ha echado raíces en el pueblo y cuando éste la acepta con todos sus derechos y sus obligaciones. El destino político de un Estado fundado en la libertad se encuentra, en definitiva, en manos del pueblo. Un Tribunal Constitucional no puede ser él solo guardián de la Constitución, más bien tienen que ser guardianes de la Constitución todos los ciudadanos del Estado.<sup>166</sup>

De acuerdo con lo anterior se obtiene que el guardián último de la Constitución será el pueblo, de ahí que el tribunal constitucional sólo puede hacer efectivo el cumplimiento de la Constitución únicamente cuando los representantes del poder público y el pueblo se sientan identificados con su orden fundamental, situación que debe estar presente siempre en las actividades implementadas para la salvaguarda y custodia de la misma.

Por ello, como se menciona, de la parte procesal de la ley fundamental dependería la vida misma del orden fundamental que estableció el pueblo. Sin esta parte quedaría el imperativo orgánico que prevé la revolución, el cual devolvería la vida al orden constitucional violado, ignorado o incierto.<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> Joachim Faller, Hans, “Defensa constitucional por medio de la jurisdicción constitucional en la república federal de Alemania”, trad. Haller, Carlos E., *Revista de estudios políticos*, Madrid, nueva época, núm. 7, enero-febrero de 1979, p. 68.

<sup>167</sup> La parte orgánica del orden fundamental contiene el título noveno nombrado “De la inviolabilidad de la Constitución que dispone: “Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y

En consecuencia, se puede citar como ejemplo de la diferencia entre la *jurisdicción constitucional* con la *justicia constitucional*, lo siguiente: “el término de justicia es más amplio que el de jurisdicción cuando se habla de jurisdicción constitucional estamos hablando estrictamente del control procesal, del proceso constitucional,”<sup>168</sup> y del órgano especializado, tribunal, corte o sala constitucional, que conoce de él.

Sin embargo, el tribunal constitucional no desarrolla el proceso constitucional por sí mismo, por *mutuo proprio*, sino que esa actividad corresponde a otros órganos y a los integrantes del mismo pueblo,<sup>169</sup> quienes incluso colaboran con el tribunal constitucional en el enjuiciamiento constitucional y en la búsqueda oficial de la verdad del cumplimiento, o no, del orden constitucional.

## V. DEFENSA CONSTITUCIONAL

Desde una concepción moderna, para el jurista Mauro Cappelletti “... la norma constitucional no es otra cosa que un ensayo, tal vez imposible y casi podríamos calificarlo de *fáustico*, pero profundamente humano y digno de ser intentado, de transformar en derecho escrito los supremos valores, la pretensión de *encerrar* de *definir* en una norma positiva, lo que por su naturaleza es inasible e indefinible: lo absoluto.”<sup>170</sup>

---

vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, *tan luego como el pueblo recobre su libertad*, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta (énfasis añadido).” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 5 de febrero de 2017. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_050217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_050217.pdf), consultado el 14 de febrero de 2017.

<sup>168</sup> Fix Zamudio, Héctor, “Panorama de la justicia... *op. cit.*”

<sup>169</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*”, p. 58.

<sup>170</sup> Cit. por Fix Zamudio, Héctor, *Veinticinco años de evolución... op. cit.*, p. 13. El planteamiento del maestro Cappelletti es citado por Pedro de Vega al idioma italiano, según se observa en el siguiente apartado: “Invero, nella concezione moderna la norma costituzionale altro non è che il tentativo —forse impossibile, forse “faustiano”, ma profondamente umano— di trasformare in diritto scritto i supremi valori, il tentativo di fermare, di “definire” insomma, in una norma positiva, ciò che per sua natura è inarrestabile, indefinibile, -Assoluto. La giustizia costituzionale è la garanzia di quella “definizione”; ma è anche, nello stesso tempo, lo strumento per renderla accettabile, adattandola alle concrete esigenze di un destino di perenne mutabilità. Capelletti, Mauro, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Milán, 1973, p. 61.” Cit. por De Vega Pedro,

Así, como se ha indicado "...la Constitución se ha convertido en una norma jurídica con eficacia inmediata a favor de los grupos humanos que tuvieron a bien unificar sus ideales, valores y demás conceptos esenciales en ella..."<sup>171</sup>

En consecuencia, la Constitución es el ordenamiento preponderantemente escrito establecido por el pueblo para que por su medio se autodetermine, reserve derechos humanos, unifique su poder y señale la forma en que el mismo será representado, configurado y ejercido, lo que en conjunto conforma su contenido básico y abstracto. En virtud de esto se puede deducir que es en un solo ordenamiento en el que se refleja la cohesión y la unificación de las convicciones e intereses comunes en una época y lugar determinado. Pero como creación humana, la Constitución no es perfecta, sino se va adecuando al periodo de vida en que tenga que ser cumplida, de ahí que su actualización representa una forma de protección, para que se evite su sustitución.<sup>172</sup>

De esta manera, "defender la Constitución no significa únicamente mantenerla intangible en abstracto, sino también, y con mucha mayor frecuencia, exigir su aplicación o resistir la infracción de sus preceptos."<sup>173</sup> De modo que "... tiene que concebirse a la Constitución como norma jurídica suprema vinculante del propio pueblo, del ordenamiento jurídico que emana de ella y de la organización de las funciones públicas del Estado... Proceder de otro modo (menciona el profesor Pedro de Vega cuando entiende a la Constitución como realidad normativa) supondría condenar la teoría constitucional y la labor de los constitucionalistas al más menesteroso y errante de los quehaceres (énfasis original)."<sup>174</sup>

El procesalismo científico creó el concepto de defensa de la Constitución:

---

"Jurisdicción constitucional y crisis de la constitución", *Revista de estudios políticos*, Madrid, nueva época, núm. 7, enero-febrero de 1979, p. 93. En esta cita textual agrega el profesor Capelleti a su vez que la *justicia* es la garantía de aquella definición de la Constitución, pero es también, al mismo tiempo, la herramienta para que la misma sea aceptable, adaptándose a las necesidades concretas de un futuro que se encuentra en perpetua mutabilidad, en constante cambio.

<sup>171</sup> Rivera Hernández, Juan, "Consideraciones generales de la Constitución frente a su defensa", *Revista Conciencia-Política*, México, El Colegio de Veracruz, núm. 19, nueva época, p. 144.

<sup>172</sup> Cfr. Conclusión Primera. Rivera Hernández, Juan, "Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, p. 167.

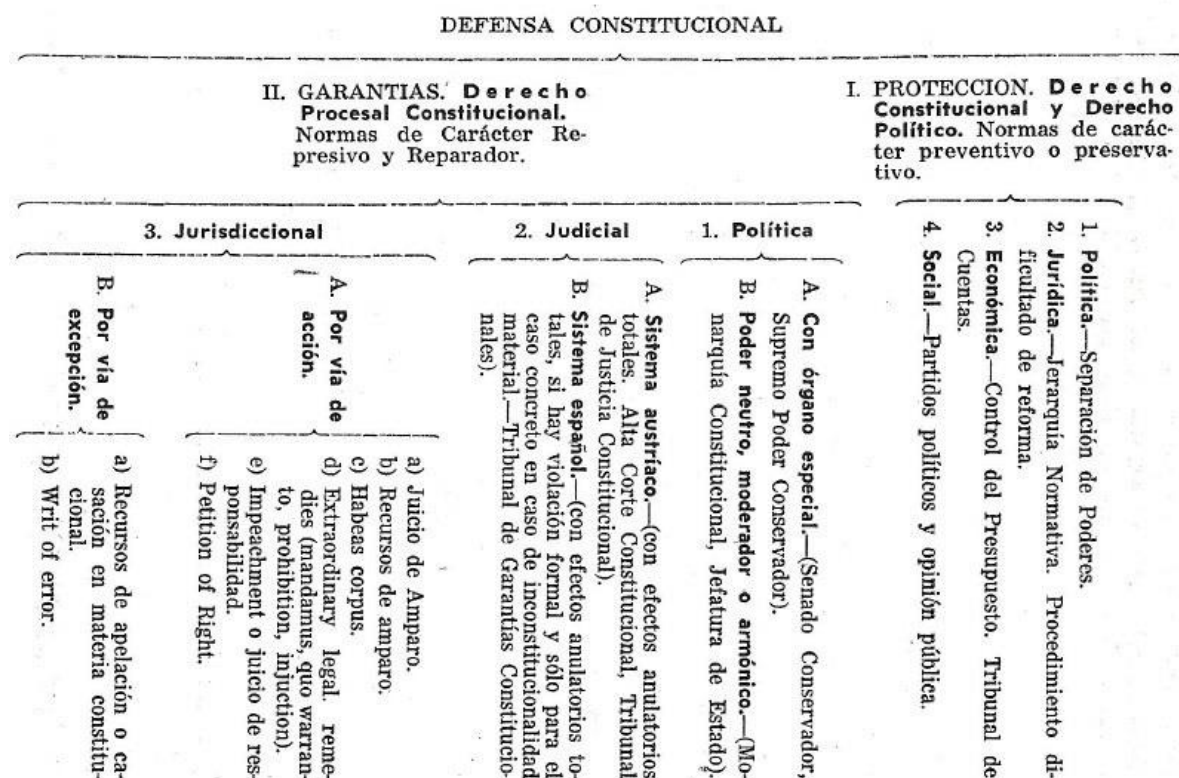
<sup>173</sup> Fix Zamudio, Héctor, *Introducción al derecho procesal... op. cit.*

<sup>174</sup> Rivera Hernández, Juan, "Consideraciones generales de la Constitución... *op. cit.*, p. 95.

1)... De esta manera y como idea provisional y aproximada, podemos afirmar que la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normatividad constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento...

Para efecto de sistematizar una materia tan extensa y compleja es preciso un ensayo de clasificación, no obstante el convencimiento de que toda división es forzosamente artificial. En este sentido, consideramos que el concepto genérico de "defensa de la Constitución" puede escindirse en dos categorías fundamentales, que en la práctica se encuentran estrechamente relacionadas: la primera podemos denominarla de manera convencional, como protección de la Constitución; la segunda que ha tenido consagración en varias cartas fundamentales contemporáneas, comprende las llamadas garantías constitucionales.<sup>175</sup>

2) El anterior concepto ha sido resumido en los siguientes términos:<sup>176</sup>



<sup>175</sup> Fix Zamudio, Héctor, *Introducción al... op. cit.*, p. 70.

<sup>176</sup> Fix Zamudio, Héctor "La garantía jurisdiccional... op. cit.", p. 98.

3) Consideramos que en el derecho procesal constitucional contenido en el concepto de defensa constitucional, se puede incluir los procesos constitucionales de opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como la cuestión de inconstitucionalidad implantada implícitamente en el artículo 1 de la Ley Fundamental de 1917.<sup>177</sup>

Con base en lo anterior, el maestro Héctor Fix-Zamudio señalaba que “la *protección* de la Ley Fundamental,... se contrae a todos aquellos métodos establecidos para preservar las normas fundamentales y mantener su vigencia, por lo que tienen un carácter eminentemente *preventivo* o *preservativo* (énfasis original).”<sup>178</sup> Con estos métodos se pretende mantener la regularidad constitucional, que la infraestructura de instituciones, que derivan de la unificación del poder del pueblo y de la forma en que este es representado, configurado y ejercido, como conjunto de derechos reservados por dicho pueblo y que no se incluyen en el ejercicio del poder público tengan un suelo firme donde puedan instituirse<sup>179</sup> y servir a quien los ha ordenado establecer.<sup>180</sup>

En este sentido, el jurista mexicano considera que la *Protección de la Constitución*, es y creemos, ha sido y será: “materia de la Ciencia Política en General, de la Teoría del Estado y del Derecho Constitucional;”<sup>181</sup> por lo que para efectos de su mejor comprensión la clasifica en cuatro grandes rubros: protección política, protección jurídica, protección económica y protección social.

Por otra parte, las garantías constitucionales son “los instrumentos predominantemente procesales que están dirigidos a la reintegración del orden

---

<sup>177</sup> Vid. *Infra*. Capítulo quinto. Propuesta de procesos constitucionales.

<sup>178</sup> Fix Zamudio, Héctor, “La garantía jurisdiccional... *op. cit.*, p. 66.

<sup>179</sup> Con relación al vocablo *institución* Hauriou señala: “las instituciones representan en el derecho, como en la historia, la categoría de la duración, de la continuidad y de lo real”. *Cit. Ibídem*, p. 106.

<sup>180</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, p. 34.

<sup>181</sup> Fix Zamudio, Héctor, “La garantía jurisdiccional... *op. cit.*, p. 66.

constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder.”<sup>182</sup>

La garantía constitucional como instrumento de protección o proceso constitucional permite enjuiciar o componer los conflictos constitucionales, lo que significa que con base en las normas impuestas por el constituyente o el legislador constitucional, esta composición representa la manera más civilizada para estructurarlos y darles solución mediante la heterocomposición<sup>183</sup> o el enjuiciamiento.

Asimismo, se debe precisar que estos procesos constitucionales han “superado la concepción histórica derivada de la Revolución francesa, de acuerdo con la cual se calificaba de garantías constitucionales, no a los instrumentos de tutela, como en la actualidad, sino a los derechos individuales de la persona humana consagrados en un texto constitucional, como todavía se observa en algunos textos fundamentales latinoamericanos, entre ellos la Carta Federal mexicana de 1917.”<sup>184</sup> Por lo que precisamente este significado moderno de las garantías constitucionales es el que conforma “... la materia de estudio del derecho procesal constitucional.”<sup>185</sup>

## VI. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Para el procesalista Cipriano Gómez Lara el derecho procesal constitucional “se erige como el conjunto de preceptos que regulan el proceso constitucional; es

---

<sup>182</sup> Fix Zamudio, Héctor, *Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional*, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, 5a. ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2006, t. I, p. 273; del mismo autor *Introducción al... op. cit.*, pp. 72 y 73; mismo autor, *Veinticinco años de evolución... op. cit.*, pp. 17 y 18. Asimismo véase Rodríguez Domínguez, Elvito A., “Derecho procesal constitucional. Precisiones conceptuales”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal... op. cit.*, pp. 489 y 490; Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Aportaciones de Héctor Fix Zamudio... op. cit., p. 10.

<sup>183</sup> Cfr. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, *Proceso, autocomposición y autodefensa (Contribuciones a los fines del proceso)*, 1ra. reimpresión de la 3ra. ed., México, UNAM-IIJ, pp. 12-25.

<sup>184</sup> Fix Zamudio, Héctor, *Breves reflexiones... op. cit.*, p. 283. En estos términos señala este mismo autor: “Sobre el concepto tradicional de las ‘garantías constitucionales’ como equivalentes a los derechos individuales de la persona humana establecidos en un texto constitucional, Cfr., León Duguit, *Trate de droit constitutionnel*, París, 1924, tomo III, págs., 561 t ss., Maurice Hauriou, *Principios de derecho público y constitucional.*, trad. De Carlos Ruiz del Castillo, Madrid, s.f., págs., 95-100; A. Esmein, *Éléments de droit constitutionnel française et comparé*, 7ª ed., revisada por Henri Nèzard, París, Recueil Sirey, 1921, tomo I, págs., 559-563.” *Ibidem*, pp. 283 y 284.

<sup>185</sup> Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Aportaciones de Héctor Fix Zamudio... op. cit., p. 10.

decir, se ocupa de los engranajes adjetivos que hacen viables las garantías nacidas de los ordenamientos fundamentales.”<sup>186</sup>

El maestro Domingo García Belaunde considera que en esencia el derecho procesal constitucional “abarca el estudio de las categorías procesales insertas en la Carta fundamental, y si bien se trata de una rama del derecho procesal todavía no se deslinda por completo del derecho constitucional, y comprendería el análisis de la jurisdicción, proceso y órganos, todos ellos de naturaleza constitucional.”<sup>187</sup>

El derecho procesal constitucional para el profesor Germán J. Bidart Campos, se encuentra vinculado con la jurisdicción constitucional, y que “sintéticamente es el que regula el proceso constitucional y que tiene por objeto la materia constitucional.”<sup>188</sup>

Para el maestro Osvaldo Alfredo Gozaíni, el derecho procesal constitucional no sólo comprende lo que contemporáneamente se designa con el término garantías constitucionales, sino también forma parte de su estudio las instituciones procesales reguladas por las normas fundamentales, como los derechos de acción y el debido proceso.<sup>189</sup>

El profesor Elvito A. Rodríguez Domínguez refiere que el derecho procesal constitucional es aquella disciplina que se ocupa del estudio de las garantías constitucionales, las que consisten en instrumentos procesales, que sirven para efectivizar el respeto de la jerarquía normativa que señala la Constitución y el respeto y cumplimiento de los derechos humanos que la Carta magna establece.<sup>190</sup>

---

<sup>186</sup> Gómez Lara, Cipriano, “La teoría general del proceso y el derecho procesal constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, 5ª ed., prólogo de Héctor Fix Zamudio, México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación A.C., 2006, T.I, p. 372.

<sup>187</sup> García Belaunde, Domingo, “Sobre la jurisdicción constitucional”, en Quiroga León, Aníbal (comp.), *Sobre la jurisdicción constitucional*, Lima, Pontificia Universidad Católica de Perú, Fondo Ed., 1990, pp. 33-37.

<sup>188</sup> Cfr. Bidart Campos, Germán J., *La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional*, Buenos Aires, Ediar, 1987, pp. 257-260.

<sup>189</sup> Cfr. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, *El derecho procesal constitucional y los derechos humanos (vínculos y autonomías)*, México, UNAM, 1995, pp. 84-86.

<sup>190</sup> Cfr. Rodríguez Domínguez, Elvito A., *Derecho procesal constitucional*, Lima, Grijley, 1997, p. 9-31.

El maestro Néstor Sagües, autor del vocablo constitución convencionalizada,<sup>191</sup> indica que el “derecho procesal constitucional, es el sector del derecho procesal, ocupado en afianzar la supremacía constitucional, que tiene por fin el análisis de la jurisdicción constitucional, que cuenta con dos sectores fundamentales: a) la magistratura constitucional, órgano de la jurisdicción constitucional; y, b) los procesos constitucionales, que son aquellos especialmente programados para tutelar la supremacía constitucional.”<sup>192</sup>

El procesalista Jesús González Pérez la define como “el conjunto de normas que regulan el proceso constitucional y más específicamente... [el] conjunto de normas referentes a los requisitos, contenido y efectos del proceso constitucional.”<sup>193</sup> Asimismo, señala que “solo empleando la técnica propia del derecho procesal podrán replantearse correctamente, y en consecuencia, resolverse felizmente, los problemas que plantean las normas reguladoras del proceso constitucional.”<sup>194</sup>

El jurista mexicano Héctor Fix Zamudio describe “el derecho procesal constitucional como la disciplina jurídica, situada dentro del campo del derecho procesal, que se ocupa del estudio sistemático de las instituciones y de los órganos por medio de los cuales puede resolverse los conflictos relativos a los principios, valores y disposiciones fundamentales, con el objeto de reparar las violaciones de los mismos.”<sup>195</sup>

Recientemente, en el *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional* se define a la disciplina en estudio.<sup>196</sup>

En consecuencia, puede describirse al derecho procesal constitucional mexicano como el sector del derecho procesal encargado del estudio de las

---

<sup>191</sup> Cfr. Sagües, Néstor Pedro, “Constitución convencionalizada”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de derecho procesal... op. cit.*, pp. 186-189.

<sup>192</sup> Sagües, Néstor Pedro, *Derecho procesal constitucional de la provincia de Santa Fe*, Argentina, Rubinzal-Culzoni, 1994, p. 11.

<sup>193</sup> González Pérez, Jesús, “Prólogo”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen... op. cit.*, p. 14.

<sup>194</sup> González Pérez, Jesús, *Derecho procesal constitucional*, Madrid, Civitas, 1980, pp. 50-51.

<sup>195</sup> Fix Zamudio, Héctor, “Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.), *Derecho procesal... op. cit.*, pp. 118 y 119.

<sup>196</sup> Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Derecho procesal constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de derecho procesal... op. cit.*, pp. 458-461.



garantías constitucionales mexicanas o los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los autoridades que en colaboración o junto con ellas, realizan actividades correspondientes a una magistratura especializada.<sup>197</sup>

Finalmente, el derecho procesal constitucional examina el enjuiciamiento de los conflictos constitucionales y se dirige a la realización del derecho constitucional.

---

<sup>197</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, "Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, p. 109.

### **CAPÍTULO TERCERO**

#### **SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO**



### **CAPÍTULO TERCERO**

#### **SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO**

El enjuiciamiento de los conflictos relacionados con las disposiciones constitucionales tiene su origen en el derecho procesal.

En este sentido, se tiene que dejar atrás la noción “control de constitucionalidad” que es del derecho constitucional, porque desde la perspectiva del procesalismo se debería denominar enjuiciamiento.<sup>198</sup>

De manera que para sustentar esta afirmación, enseguida se realiza una breve descripción de la naturaleza del proceso constitucional, con base en la teoría general del proceso.

#### **I. ORIGEN DEL PROCESO**

Como parte del programa ideado para la descripción del proceso constitucional, el profesor Eduardo Ferrer Mac-Gregor refiere las líneas de tal labor: “El Derecho procesal constitucional, como una disciplina autónoma procesal, necesariamente tendrá una cobertura mayor en su objeto de estudio y con enfoques diversos, debiendo crear sus propios conceptos, categorías e instituciones que la distingan de las demás ramas procesales. En todo caso, debe privilegiarse el estudio interdisciplinario de la disciplina constitucional y la procesal para llegar a posturas más avanzadas en su desarrollo.”<sup>199</sup>

Como se observa, existe la necesidad de crear el propio concepto de proceso constitucional y distinguirlo de otras disciplinas a la luz de la teoría general del derecho procesal, para ello esto se pudiera apoyar del derecho constitucional, pero sin confundirlo con sus conceptos.

---

<sup>198</sup> *Vid. Supra*. Enjuiciamiento en el derecho procesal hispánico y control de constitucionalidad.

<sup>199</sup> Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen... op. cit.*, p. 30.

Desde esta perspectiva, se tiene que revisar la teoría general del proceso para replantear<sup>200</sup> y obtener la idea sobre la naturaleza del proceso constitucional.

A manera de inicio de los estudios del procesalismo, el profesor Eduardo J. Couture menciona: “Para la ciencia del proceso, la separación del derecho y de la acción constituyó un fenómeno análogo a lo que representó para la física la división del átomo.”<sup>201</sup> Esta separación de la acción del derecho representaría el origen del proceso.

Precisamente, con relación a este origen, el procesalista Niceto Alcalá-Zamora y Castillo advierte: “Se admite, en general, que el derecho procesal *como ciencia*, arranca de Oscar Bülow... pero conviene poner un poco los puntos sobre las íes, para no formarse una idea equivocada acerca de lo que esa afirmación representa. Porque el derecho procesal existe antes, muchísimo antes de Bülow, y nada digamos del proceso (énfasis original).”<sup>202</sup>

De este modo, el origen del proceso se relaciona no propiamente con el objeto de estudio, sino con la acción de la cual se discutía su contenido entre el que correspondía al derecho romano y al derecho germánico.

Al respecto, el profesor Eduardo J. Couture indica: “Una famosa discusión acerca del contenido de la *actio* romana y la *Anspruch* germánica, culminó con el reconocimiento de que no existía coincidencia entre ambas.”<sup>203</sup> En este sentido, el procesalista español refiere: “... en Alemania antes de Bülow hay un Wetzell y la polémica de Windscheid y Muther acerca de la acción, y más atrás aún, en pleno siglo XVII, Benedicto Carpzov.”<sup>204</sup>

Derivado de los planteamientos de la doctrina procesal, se puede considerar una primera concertación: de aquella polémica entre Windscheid y Muther, cuyas proyecciones del debate han sido escrupulosamente registradas por el profesor Chiovenda, y al tiempo de que el texto de esta polémica fue traducida en la obra

---

<sup>200</sup> Cfr. González Pérez, Jesús, *Derecho procesal constitucional*, Madrid, Civitas, 1980, pp. 50-51.

<sup>201</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho procesal civil*, 3a. ed., Buenos Aires, Roque Depalma Editor, 1999, p. 63.

<sup>202</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1974, t. II, p. 294.

<sup>203</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho...* *op. cit.*, p. 63.

<sup>204</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría...* *op. cit.*, p. 294.

*Polemica intorno all'actio*;<sup>205</sup> se obtiene que la concertación sobre que la separación de la acción del derecho, originaría la ciencia del derecho procesal.

De manera que este acontecimiento ha sido denominado por la doctrina como el descubrimiento de la autonomía de la acción, porque se desprende del derecho civil o material o subjetivo, para obtener el derecho procesal su inicio científico.<sup>206</sup>

En este sentido, el profesor Hector Fix Zamudio señala:

La acción debe considerarse como una de las categorías procesales fundamentales conjuntamente con las nociones de proceso y de jurisdicción, y por este motivo ha sido objeto de un desarrollo doctrinal muy significativo, que parte del concepto de acción como derecho subjetivo material, que se caracterizaba como el mismo derecho sustantivo llevado al proceso, la que predominó desde el derecho romano clásico hasta la segunda mitad XIX, cuando los juristas alemanes e italianos postularon el concepto de la autonomía de la acción frente al derecho sustantivo, y esta autonomía como lo señaló correctamente el insigne procesalista uruguayo Eduardo J. Couture, implicó una transformación radical de la doctrina procesal que puede equipararse a la revolución que significó para la física clásica la desintegración del átomo. El derecho procesal se transformó en una disciplina autónoma de carácter científico, que se independizó del dominio del derecho sustantivo, con lo cual, como lo señaló gráficamente el genio de Francesco Carnelluti, paso a ser de la Cenicienta de la ciencia del derecho, a una de sus ramas más dinámicas.<sup>207</sup>

Sin obviar la referida polémica sobre la acción, bajo el epígrafe “procesalismo científico”, el maestro Niceto Alcalá-Zamora y Castillo indica: “... se inicia en Alemania el derecho procesal científico. Este momento se suele localizar en una fecha: 1868, en que Oscar Bülow publica en Giessen su célebre libro *La teoría de las excepciones procesales y de los presupuestos procesales (Die Lehre von den Processsinnreden und die Processvoraussetzungen)* y concibe el proceso como relación jurídica que progresivamente se desenvuelve.”<sup>208</sup> Con igual idea, el profesor Ignacio Medina Lima menciona: “Se debe al profesor de las Universidades de

---

<sup>205</sup> Cfr. Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, p. 63.

<sup>206</sup> Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen... op. cit.*, p. 44.

<sup>207</sup> Fix Zamudio, Héctor, “Prólogo”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *La acción constitucional de amparo en México y España (Estudio de derecho comparado)*, 4a. ed., México, Porrúa, 2007, p. XXII.

<sup>208</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría... op. cit.*, p. 308.

Giessen, Tübingen y Leipzig, Oskar von Bülow, la obra inicial de la moderna ciencia del proceso.”<sup>209</sup>

Así, el análisis del “proceso como una relación jurídica” origina que esta perspectiva fuese utilizada posteriormente por otros autores para integrar esta segunda fase del inicio de la autonomía del Derecho procesal, dirigida al examen del objeto de estudio: el proceso.

En consecuencia, el origen científico del proceso o la etapa de consolidación científica del derecho procesal tiene origen con los aportes doctrinales derivados de la polémica de Windscheid y Muther, así como las ideologías de Bülow, Kohler, Stein, Degenkolb y A. Wach.<sup>210</sup>

Sin perjuicio de estas precisiones del origen del proceso, el procesalista Niceto Alcalá Zamora y Castillo desarrolla la evolución de la doctrina procesal, mediante la cual identifica el periodo primitivo que relaciona con fragmentos de la Biblia, la *Instituta* de Gayo, folletos del juicio contra Socrates, así como la retórica y oratoria de Grecia y Roma; la escuela judicialista que surge en Bolonia y que a decir de Chiovenda, tal surgimiento en Bolonia representa para el derecho procesal lo que Roma para el derecho civil; tendencia de los prácticos que contempla en España la manifestación de la materia procesal más como un arte que como una ciencia; procedimentalismo identificado como producto fundamentalmente francés y su advenimiento obedece a una causa política, la revolución francesa, y otra jurídica, la codificación napoleónica; y finalmente, el procesalismo científico.<sup>211</sup>

De ese modo, el procesalista español agrupa en cuatro sectores la exposición de figuras y corrientes más destacadas: germánico, italiano, español y latinoamericano.<sup>212</sup>

Entre los autores italianos se pueden mencionar a Francesco Carnelutti, Piero Calamandrei, E. Redenti, E. T. Liebman, Salvatore Satta, E. Allorio, U. Rocco, V. Manzini, E. Betti, M. T. Zanzuchi, V. Denti, V. Andrioli, E. Florian, Mauro Capelletti. Entre los doctrinarios alemanes se pueden mencionar a Hellwig, Schönke, Stein,

---

<sup>209</sup> Medina Lima, Ignacio, *Breve antología procesal*, México, UNAM, 1973, p. 153.

<sup>210</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*”, pp. 75 y 76.

<sup>211</sup> Cfr. Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría...* *op. cit.*, pp. 293-307.

<sup>212</sup> Cfr. *Ibídem*, p. 309.

Kich, Rosenberg, Goldschmidt. En cuanto a los autores españoles se pueden referir a F. Beceña, L. Prieto-Castro, Jaime Guasp, M. de la Plaza, E. Gómez Orbaneja, M Fenech, etc. Ente los autores latinoamericanos en primer término tenemos a los espacialmente ubicados en este lugar pero nacidos en el viejo continente, entre los cuales se encuentran R. de Pina Milán, “N. Alcalá-Zamora y Castillo (en México), S. Sentís de Melendo y M. Finzi (en Argentina), E. T. Liebman (en Brasil) y J. Goldschmith (en Uruguay). Entre las figuras latinoamericanas que coadyuvaron notablemente al desarrollo científico procesal, se encuentran E. J. Couture (Uruguay), R. Podetti, H. Alsina, E. B. Carlos, J. A. Clariá Olmedo (Argentina) y A. Buzaid (Brasil), entre otros.”<sup>213</sup>

En consecuencia, el inicio del proceso se debe a la aceptación de la autonomía de la acción frente a la materia sustantiva y su análisis científico tiene su origen en 1868 cuando se entiende al proceso como una relación jurídica, bajo el apercibimiento de que es: “... sorprendente que algunos procesalistas sudamericanos presenten esta teoría (del procesalismo científico) como *principalmente* forjada por el procesalismo italiano, que tiene mérito más que sobrados para no tener que despojar al alemán de ninguno de sus títulos y que, iniciado bastantes años después que el germánico, recibió la tesis de la relación jurídica perfilada hasta en sus menores detalles.”<sup>214</sup>

## II. CONCEPCIONES DE LA NATURALEZA DEL PROCESO

Como parte de los conceptos sobre la naturaleza del proceso, el autor José Vizcarra Dávalos menciona: “Etimológicamente la palabra proceso, de uso relativamente moderno, proviene del latín *processus* que significa acción de ir hacia adelante. En su acepción general nos dice E. Pallares, que la palabra proceso significa ‘un conjunto de fenómenos, de actos o de acontecimientos que suceden en el tiempo y que mantienen entre si determinadas relaciones de solidaridad o vinculación’. Agrega que el proceso jurídico ‘es una serie de actos jurídicos que se suceden regularmente en el tiempo y se encuentran concatenados entre sí por el fin

---

<sup>213</sup> Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen... op. cit.*, p. 46.

<sup>214</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría... op. cit.*, t. II, p. 308.



u objeto que se quiere realizar con ellos’.”<sup>215</sup> Con base en lo anterior, en la perspectiva de este autor el proceso posee el fin de ir hacia delante que es lo que unifica a los actos del proceso.

En el análisis del vocablo en estudio, el autor Dorantes menciona que el proceso deriva de *procedere* que significa en una de sus acepciones, avanzar, camino a recorrer, trayectoria a seguir hacia un fin propuesto o determinado. En un sentido amplio, para dicho autor el proceso se sustenta en la idea de un estado dinámico correspondiente a cualquier fenómeno que se desenvuelve o desarrolla. Finalmente, en el campo estrictamente jurídico procesal, indica que el proceso es el conjunto de actos jurídicos, relacionados entre sí, que se realizan ante o por un órgano jurisdiccional con el fin de resolver un litigio.<sup>216</sup>

En cuanto al origen de la palabra proceso, al analizar un escrito del maestro Francisco Carnelutti, el procesalista Niceto Alcalá determinó: “Vuelta, por un lado, a la tradición romana, ya que el nombre *procedura* es de importación francesa, y proceso, si bien de ascendencia latina, se propaga por influencia germánica.”<sup>217</sup>

Para el profesor Kelley: “El proceso es la serie de actos realizados por el órgano regulador, las partes y los terceros, relacionados entre sí por el fin que se persigue, que es satisfacer las pretensiones de las partes.”<sup>218</sup> De este concepto se observa el considerarlo como relación de actos con el fin de satisfacer una pretensión.

Por otra parte, para los autores Saíd y González Gutierrez: “... el proceso es una forma heterocompositiva y estatal de solución de conflictos; es una figura autónoma de cualquier otra, pues posee notas propias muy claras que lo distinguen. El proceso como institución compleja tiene como fin resolver o componer litigios, y la doctrina ha reiterado que el proceso es definido por su fin y que su rasgo teleológico

---

<sup>215</sup> Vizcarra Dávalos, José, *Teoría general del proceso*, 14 ed., 1a. reimp., México, Porrúa, 2015, p. 150.

<sup>216</sup> Dorantes Tamayo, Luis Alfonso, *Teoría del proceso*, 13a. ed., México, Porrúa, 2013, p. 245.

<sup>217</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1a. reimp. 1992, t. I, p. 403.

<sup>218</sup> Kelley, Santiago A., *Teoría del derecho procesal*, 10a. ed., México, Porrúa, 2015, p.103.

es principalísimo para bien definirlo... (y proviene)... del latín *procedo*: ir adelante...”<sup>219</sup>

El autor Carlos Arellano García consulta al *Diccionario de derecho procesal civil*, y con relación al objeto de estudio señala que el proceso jurídico es una serie de actos jurídicos que se suceden regularmente en el tiempo y se encuentran concatenados entre sí por el fin u objeto que se quiere realizar con ellos. Lo que da unidad al conjunto y vinculación a los actos es precisamente la finalidad que se persigue y configura al proceso como institución. Con base en esta idea, propone un concepto de proceso jurisdiccional que lo entiende como “... el cúmulo de actos, regulados normativamente, de los sujetos que intervienen ante un órgano del Estado, con facultades jurisdiccionales, para que se apliquen a las normas jurídicas para la solución de la controversia o controversias planteadas.”<sup>220</sup>

Desde la perspectiva del maestro Ignacio Medina Lima el proceso representa un: “...insuperable dispositivo para el mantenimiento de la paz entre los hombres, que es el proceso jurisdiccional.”<sup>221</sup>

Hace la precisión el maestro Rafael de Pina: “Acerca de la naturaleza del proceso se han formulado diferentes teorías, entre las cuales la más reciente es la que afirma que es una institución, dando a esta palabra un contenido muy distinto del que se le ha atribuido tradicionalmente... Para mí, el proceso es una relación jurídica, lo que no quiere decir que no sea una institución jurídica, entendida ésta de modo distinto a como la entiende, principalmente Guasp... substituir el concepto de relación jurídica por el de institución jurídica, no tiene en su favor ventaja alguna y, por el contrario, ofrece la desventaja de que se presta a interpretaciones a todas luces peligrosas.”<sup>222</sup>

El procesalista Eduardo J. Couture considera: “Podemos definir, pues, el proceso judicial, en una primera acepción, como una secuencia o serie de actos que

---

<sup>219</sup> Saíd, Alberto y González Gutiérrez, Isidro M., *Teoría general del proceso*, 4a. reimp., México, Editorial Iure Editores, 2006, pp. 303-304.

<sup>220</sup> Cfr. Arellano García, Carlos, *Teoría general del proceso*, 18a. ed., 3a. reimp., México, Porrúa, 2015, p.

<sup>221</sup> Medina Lima, Ignacio, *Breve antología procesal... op. cit.*, México, UNAM, 1973, p. 12.

<sup>222</sup> De Pina, Rafael, *Derecho procesal (temas)*, México, 2a. ed., México, Ediciones Botas, 1951, pp. 194, 201 y 203.

se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión.”<sup>223</sup>

Al considerar la trilogía estructural de la ciencia del proceso denominada así por el procesalista Ramiro Podetti,<sup>224</sup> el maestro José Ovalle Favela considera al proceso como un conjunto de actos que realizan las partes, el juzgador y los demás sujetos que intervienen en el mismo, con la finalidad de lograr la composición del litigio por medio de la sentencia, y expone con relación al análisis del objeto de estudio que: “El proceso puede ser analizado desde diferentes puntos de vista. Si se examina *cómo se desarrolla*, se estará contemplando su o sus procedimientos. Si se estudia *para qué sirve el proceso*, se estará enfocando su *finalidad* (como medio de solución de litigio... Pero si se reflexiona sobre *qué es el proceso*, se estará analizando su *naturaleza jurídica* (énfasis original).”<sup>225</sup>

El maestro Cipriano Gómez indica: “Entendemos por proceso un conjunto complejo de actos del estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo.”<sup>226</sup>

El procesalista Eduardo J. Couture menciona:

A la idea de proceso se llega por confrontación con las otras soluciones posibles para dirimir conflictos de intereses con relevancia jurídica.

Producido un quebrantamiento de las previsiones hipotéticas contenidas en la ley, los fines de ésta se frustran y debe arbitrarse una solución que haga cesar el conflicto.

En este caso, cuando menos, tres soluciones son posibles:

a) La llamada autotutela...

b) La sumisión o renuncia total o parcial... autocomposición...

e) El proceso. En este caso las partes dirimen su controversia ante la autoridad y quedan sometidas, expresa o tácitamente, a la decisión de ésta.

El proceso resulta ser, en este sentido, en el cúmulo de actos de la conducta jurídica, un medio idóneo para dirimir imparcialmente, por acto de juicio de la autoridad, un conflicto de intereses con relevancia jurídica.

---

<sup>223</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, pp. 121 y 122.

<sup>224</sup> Podetti, Ramiro J., “Trilogía estructural del proceso”, *Revista de derecho procesal*, Buenos Aires, 1944, núm. 1, pp. 113-170.

<sup>225</sup> Cfr. Ovalle Favela, José, *Teoría general del proceso*, 6a. ed., 15a. reimp., México, Oxford, 2015, pp. 50 y 183.

<sup>226</sup> Gómez Lara, Cipriano, *Teoría general del proceso*, 10a. ed., 18a. reimp., México, Oxford, 2015, p. 107.

En el plano de la doctrina el proceso es uno solo, aunque el conflicto se produzca en distintos ámbitos del derecho.

La materia puede hacer variar la competencia, la composición de los tribunales, las formas de tramitación, hasta la eficacia misma de los distintos procesos. Pero siempre habrá un común denominador a toda esa serie de actos: su carácter ya destacado de medio idóneo para dirimir, mediante un juicio, un conflicto de intereses jurídicos, por acto de la autoridad.<sup>227</sup>

De lo anterior se obtiene la finalidad del proceso, que indica la doctrina procesal es la solución de un conflicto por un quebrantamiento de la ley o por la existencia de conductas, sea de acción u omisión, que violan, omiten o generan incertidumbre de las disposiciones normativas, lo que al tiempo se dirige a defender y asegurar el cumplimiento del derecho sustantivo.

Desde esta perspectiva, el procesalista Eduardo J. Couture señala: “El proceso es, por sí mismo, un instrumento de tutela del derecho...”<sup>228</sup> En contra, el procesalista Chiovenda, quien establece:

... los organismos jurisdiccionales... (e)n el proceso desarrollan una función pública y esta es la *actuación de la ley*, o sea, del derecho en sentido objetivo. Este es, el fin del proceso, no la *defensa* de derechos subjetivos como muchos afirman. En primer lugar, no siempre se encontraría en el proceso el derecho subjetivo a defender, por ejemplo, cuando la sentencia rechaza la demanda; pero, además si el derecho subjetivo no es sino la expectación de un bien garantizada por el Estado; el titular del derecho que se dirige al Estado, no pide una cosa que afirma tener, ya la *garantía* de su expectación, sino la actuación de esta garantía que es la ley (énfasis original).<sup>229</sup>

Así, tanto el proceso como instrumento de tutela por sí mismo del derecho (Couture) o como actuación de la garantía de la ley (Chiovenda), se dirigen a la realización del derecho, la realización del derecho constitucional en el particular, bajo la teoría general del derecho procesal.

Se pudiera considerar en la perspectiva de realización del derecho, la afirmación del maestro Héctor Fix Zamudio, quien considera al “proceso como el más eficaz y constante instrumento para la evolución del derecho, especialmente para la

---

<sup>227</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho procesal... op. cit.*, pp. 9 y 10.

<sup>228</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, p. 148.

<sup>229</sup> Chiovenda, José, *Principios de derecho procesal civil*, trad. José Casaís y Santaló, Madrid, Editorial Reus, 1925, t. I, p. 83.

de los Códigos fundamentales.”<sup>230</sup> En esa virtud, el procesalista mexicano entiende al proceso como el conjunto armónico y ordenado de actos jurídicos, en vista de la composición de la litis de trascendencia jurídica, que implica la vinculación de las partes con el juzgador y que se desenvuelve a través de una serie de situaciones jurídicas que se van sucediendo según las partes actúen en relación con las expectativas, posibilidades, cargas y deliberación de cargas que les son atribuidas (que no excluyen la existencia de derechos y obligaciones de las partes).<sup>231</sup>

De esta manera, tal y como se observa del concepto del maestro mexicano, se establece una serie de ideas que tienden hacer la distinción de los conceptos que corresponden al derecho sustantivo, en el particular, los derechos y obligaciones de las partes, de los conceptos del procesalismo y los presupuestos procesales.

Precisamente, como parte de lo que consideró una concepción menor de la naturaleza del proceso expuesta por el profesor Podetti, relativa a la afirmación del poder vinculatorio de la ley para imponer a los sujetos del proceso y sus órganos la realización del diversos actos, con sanciones de diversa naturaleza en caso de incumplimiento, el procesalista Niceto Alcalá-Zamora y Castillo mencionó: “... el ‘incumplimiento’ (o mejor dicho: la no realización) de actos procesales no se reprime siempre... con ‘sanciones diversas’ sino con la conminación de un riesgo procesal.”<sup>232</sup>

De este modo, con la afirmación del maestro español, se infiere que el concepto por incumplimiento de actos en el derecho procesal no es *sanción*, sino la conminación de un riesgo procesal, como la preclusión, *ficta confessio*, prosecución del juicio en rebeldía, sustitución de la voluntad del obligado por la del juez en condenas a la emisión de una declaración de voluntad; todos estos conceptos son del derecho procesal y no del derecho sustantivo, tal como constituiría el enjuiciamiento frente al control del constitucionalidad que no pertenecería a un concepto del procesalismo, sino al derecho constitucional.<sup>233</sup>

---

<sup>230</sup> Fix Zamudio, Héctor “La garantía jurisdiccional... *op. cit.*, p. 14.

<sup>231</sup> *Ibídem*, p. 160.

<sup>232</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría... op. cit.*, t. I, p. 420.

<sup>233</sup> *Vid. Supra*. Control constitucional.

En esta dinámica por el establecimiento de los conceptos que sustenten la naturaleza del objeto de estudio, el procesalista Niceto Alcalá-Zamora y Castillo indicó: “Será triste no haber encontrado una explicación satisfactoria a la naturaleza del proceso; pero a ese convencimiento se llega con sólo pensar que Chiovenda y Godschmidt, las dos figuras cumbres de la ciencia procesal en Italia y Alemania en los últimos tiempos, han sostenido opiniones contradictorias y atacado, respectivamente, la opinión contraria. Y no queda otro remedio que seguir investigando y que seguir construyendo hasta dar con la fórmula que llene todas las exigencias.”<sup>234</sup>

El profesor Eduardo J. Couture desarrolla los temas jurisdicción, acción, excepción y proceso en estricto sentido, esto para determinar la naturaleza del objeto de estudio y tratar exponer su naturaleza, en la perspectiva del carácter ontológico y determinar a qué categoría corresponde en sustancia.<sup>235</sup>

Tal exposición se considera importante porque con independencia de fijar su postura en la elección de la categoría del proceso como institución, sin perjuicio de que el procesalista español sobre el particular advierta: “Couture con su proverbial nobleza, abandonó clara y categóricamente la concepción institucionalista del proceso... en vista de las objeciones a ella formuladas”;<sup>236</sup> se realiza el análisis de las categorías generalmente aceptadas: contrato, cuasicontrato, relación jurídica, situación jurídica, entidad jurídica compleja e institución.<sup>237</sup>

Más, como ha sido el mundo de las ideas, pudiese existir aún el “... magno problema constituido por la naturaleza del proceso, donde las oscuridades y las sombras acaso sean aún mayores que en orden a la acción.”<sup>238</sup>

---

<sup>234</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría... op. cit.*, p. 415.

<sup>235</sup> Cfr. Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, p. 4.

<sup>236</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría... op. cit.*, p. 449.

<sup>237</sup> Se sigue la exposición del procesalista uruguayo. Cfr. Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, p.125, en adelante.

<sup>238</sup> Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría... op. cit.*, p. 380.

## 1. Contrato

La naturaleza del proceso como contrato, en términos del procesalista uruguayo, significa la relación que liga al actor y al demandado, que se continuó denominando, sin que como tal lo sea, *litis contestatio*, es de orden contractual, y tanto el actor como el demandado se encuentran vinculados con el mismo lazo que une a los contratantes.<sup>239</sup>

De manera que la referida *litis contestatio* tiene su relación con las disposiciones jurídicas romanas, conforme lo indica el procesalista Cipriano Gómez Lara: “La teoría del proceso como contrato encuentra su antecedente en el derecho romano, como sucede con la teoría de la acción. En el derecho romano, por el carácter de fórmula y por la actitud que se presuponía a las partes, surge la figura de la *litis contestatio*, con la calidad de un verdadero contrato entre los contendientes.”<sup>240</sup>

El profesor José Ovalle Favela explica cómo se desarrolla este contrato al referir: “... en la primera fase (*in iure*) de este proceso el magistrado expedía la fórmula en la que fijaba los elementos para la decisión del litigio y designaba al *iudex* que debía conocer del mismo en la segunda fase... Al acuerdo que las partes expresaban respecto de la fórmula, sin el cual no se podía pasar a la segunda etapa, se denominaba *litis contestatio* (énfasis original).”<sup>241</sup>

En términos del maestro Couture, “Al comienzo, el proceso se desenvuelve como una deliberación más que como un debate. Las partes exponen su derecho ante el pretor, hablando libremente, tanto entre sí como con el magistrado. De estas circunstancias, y del carácter de la formula, se infiere que durante esta etapa del derecho romano, no puede existir *litis contestatio* si las partes de común acuerdo no lo quieren. Más que un juicio, este fenómeno debe considerarse como un arbitraje ante el pretor.”<sup>242</sup>

---

<sup>239</sup> Cfr. Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, p. 125.

<sup>240</sup> Gómez Lara, Cipriano, *Teoría general del proceso... op. cit.*, p. 236.

<sup>241</sup> Ovalle Favela, José, *Teoría general del proceso... op. cit.*, p. 184.

<sup>242</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, p. 126.

Como se observa, considerando al proceso en la categoría del contrato, puede indicarse que el objeto de estudio tiene su sustento en el derecho privado.

Por lo tanto, como crítica a esta naturaleza jurídica del contrato como intento de sistematización, el procesalista uruguayo determinó: “Sólo subvirtiendo la naturaleza de las cosas es posible ver en el proceso, situación coactiva, en la cual un litigante, el actor, conmina a su adversario, aun en contra de sus naturales deseos, a contestar sus reclamaciones, el fruto de un acuerdo de voluntades.”<sup>243</sup>

## 2. Cuasicontrato

El maestro Niceto Alcalá-Zamora y Castillo señala con relación al cuasicontrato como naturaleza jurídica del proceso que: “... aun siendo errónea, no ha dejado de impulsar la marcha del derecho procesal, y cuyo eco resuena todavía.”<sup>244</sup>

Al respecto, la concepción contractual del proceso como concepto subsidiario, y en más de un caso solidario, fue la base para que se hablara de un cuasicontrato judicial, así en términos del maestro Couture: “...los autores alemanes, valiéndose del texto de la ley 3, ff. *de peculio*, le han reconocido el carácter de un cuasicontrato: *in iudicio quasi contrahimus*.... la concepción del juicio como cuasicontrato procede por eliminación, partiendo de la base de que el juicio no es contrato, ni delito, ni cuasidelito. Analizadas las fuentes de las obligaciones, se acepta, por eliminación, la menos imperfecta.... (pero) el fragmento *De peculio* no dice lo que se le atribuye, sino ‘porque así como en la estipulación se contrata con el hijo, así se contrata en el juicio... etc.’. La fórmula no es, pues, la del cuasicontrato, sino más llanamente la del contrato.”<sup>245</sup>

Con base en este planteamiento del derecho civil y las referencias a un entendimiento diferente a la perspectiva original de siempre haberse considerado en realidad un contrato y no como fue mal interpretado, el procesalista Alcalá mencionó: “Las viejas explicaciones privativas debemos, pues, considerarlas definitivamente

---

<sup>243</sup> *Ibidem*, pp. 127 y 128.

<sup>244</sup> Alcalá-Zamora Castillo, Niceto, *Proceso, autocomposición y autodefensa. Contribución a los fines del proceso*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 3a. ed., 1a. reimp. 2000, p. 107.

<sup>245</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, pp. 129 y 131.



sepultadas, aunque todavía conserven algunos partidarios entre quienes, en el foro y hasta en la cátedra, siguen la evolución del pensamiento procesal con extraordinario retraso.”<sup>246</sup>

### 3. *Relación jurídica*

Para el maestro Eduardo J. Couture, la doctrina dominante concibió al proceso como una relación jurídica, y dicha relación jurídica era en cuanto varios sujetos, quienes investidos de poderes determinados por la norma, actuaban en vista de la obtención de un fin.<sup>247</sup>

De esta manera, puede indicarse:

...la relación jurídica, que con casi cien años de vida [hoy ya rebasados] y con más del siglo si retrocedemos a los precursores directos de Bülow Hegel y Bethrnann-Hollweg), ha prestado a nuestra disciplina el inmenso servicio, que todos reconocen, de transformarla en verdadera ciencia, pero que no ha salido indemne ni mucho menos de los embates de la crítica, se plantea la cuestión de si nos hallaremos en un callejón sin salida o si para escapar del atolladero habrá que formular nuevas teorías. A nuestro entender, ni lo uno ni lo otro: probablemente bastará con una reelaboración a fondo, muy a fondo, de la teoría de la relación jurídica, a fin de limpiarla de antinomias y variantes, de vitalizarla con la incorporación de nuevas categorías y conceptos y de convertirla en efectiva columna vertebral —la cabeza estaría siempre representada por la jurisdicción— para la sistemática del proceso, tanto en el terreno doctrinal como en el campo legislativo, puesto que, a manera del capítulo inicial sobre las acciones en los códigos mexicanos... acaso sea la intrascendencia de semejante concepción, en las dos direcciones mencionadas, la causa principal de que no se haya impuesto en toda la línea. Pero esa elaboración rebasa con mucho... que quizá algún día realicemos.<sup>248</sup>

Sin perder de vista la anterior afirmación, con apoyo en el resumen del maestro Couture, se tiene que la forma en que están ordenados tales poderes y la relación entre los diversos sujetos del proceso, tiene las siguientes orientaciones:

Por un lado, el procesalista uruguayo indicaba que se halla una primera corriente de ideas que concibe esta relación como dos líneas paralelas que corren

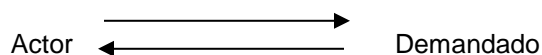
---

<sup>246</sup> Alcalá-Zamora Castillo, Niceto, *Proceso, autocomposición y autodefensa... op. cit.*, p. 379.

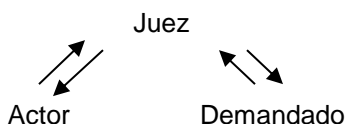
<sup>247</sup> Cfr. Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, p. 132.

<sup>248</sup> Alcalá-Zamora Castillo, Niceto, *Proceso, autocomposición y autodefensa... op. cit.*, p. 448.

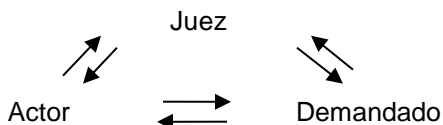
del actor al demandado y del demandado al actor (KOHLEK).<sup>249</sup> Razonamiento que lo representó de la siguiente manera:



Enseguida, el maestro Eduardo J. Couture refirió: “Por otro lado, se sostiene que tales vínculos no pueden expresarse con líneas paralelas, sino en forma de ángulo. En la relación debe comprenderse al juez, que es un sujeto necesario de ella y hacia el cual se dirigen las partes y el cual se dirige a las partes. No existe, en cambio, para esta tendencia, ligamen ni nexo de las partes entre sí: ellas están unidas sólo a través del magistrado (HELLWIG).”<sup>250</sup> Idea que fue representada en los siguientes términos:



Finalmente el maestro uruguayo indicó: “Por otro, una tercera corriente considera la relación procesal en forma triangular. No se trata solamente de relaciones de partes a juez y de juez a partes, sin nexo o ligamen de las partes entre sí. Por el contrario, existen vínculos entre las partes que vienen, en cierto modo, a cerrar el triángulo (WACH).”<sup>251</sup> Razonamiento que fue explicado de la siguiente manera:



Por lo tanto, la proposición correcta para el maestro Couture es la relación jurídica procesal que se compone de relaciones menores y que ellas, como la forma

<sup>249</sup> Cfr. Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, p. 134.

<sup>250</sup> *Ídem.*

<sup>251</sup> *Ídem.*

triangular, no sólo ligan a las partes con los órganos de la jurisdicción, sino también a las partes entre sí.<sup>252</sup>

### 3. *Situación jurídica*

El procesalista Goldshmidt criticó la naturaleza de la relación jurídica y con base en ello, surgió la categoría de la situación jurídica. “El proceso no es relación, según este particular modo de ver, sino situación, esto es, el estado de una persona desde el punto de vista de la sentencia judicial, que se espera con arreglo a las normas jurídicas.”<sup>253</sup>

En esta categoría se establecen conceptos del derecho procesal, como lo refiere el maestro Couture:

... En efecto; dentro de la concepción general de la situación jurídica existen dos partes distintas que es necesario diferenciar. Por un lado, la que entronca con la teoría general y con la filosofía del derecho; por otro, la que es precisamente técnica y tiende a configurar categorías de derechos procesales en particular. La crítica se ha dirigido más bien hacia esta parte, dándose el curioso contraste que mientras por un lado se refutan ciertos aspectos de detalle y de terminología, por otro se van admitiendo cada día con mayor acentuación, especialmente en nuestros países, las ideas de esta doctrina. Tal es lo que ocurre con la adopción unánime en el léxico procesal moderno del concepto de cargas procesales, de su distinción entre actos procesales y negocios jurídicos, de su precisa clasificación de los actos procesales, etc.<sup>254</sup>

De lo anterior se desprende que conceptos del derecho procesal, se sustentan en la naturaleza de la situación jurídica, como lo son las cargas procesales, de su distinción entre actos procesales y negocios jurídicos, de su precisa clasificación de los actos procesales, etc; y dentro de los cuales se pudiera incluir el enjuiciamiento constitucional.

---

<sup>252</sup> *Ibídem*, p. 135.

<sup>253</sup> *Ibídem*, p. 136.

<sup>254</sup> *Ibídem*, pp. 138 y 139.

#### 4. Entidad jurídica compleja

Al analizar un artículo del profesor Gaetano Foschini, considerada por el maestro español como una concepción menor de la naturaleza del proceso, el jurista Niceto Alcalá-Zamora Castillo indicó que en opinión de Gaetano: "... el proceso se presenta como la *combinación* de una *pluralidad* (actos, relaciones y situaciones) y de una *unidad* (coordinación de dichos elementos), determinante de *una entidad jurídica compleja* (énfasis original)."<sup>255</sup>

En tal sentido para el maestro Couture, ese proceso es, en consecuencia, como dice Gaetano, una entidad jurídica compleja. Pero con esa proposición sólo se fijó un punto de partida, por lo mismo no lograría su misión de explicar la naturaleza del proceso, esto porque la inquietud científica consiste en proceder por sucesivas descomposiciones y reconstrucciones, a aislar elementos y coordinarlos de nuevo para volcarlos luego en la gran unidad de la ciencia,<sup>256</sup> y por lo mismo, es inviable referir que el proceso es una entidad jurídica compleja, sobre todo frente a las siguientes observaciones del procesalista español:

1. El conjunto de actos no es propiamente el proceso, sino el procedimiento;
2. El conjunto de actos se produce también, fuera del área procesal, en cualquier otro campo de actividad jurídica;
3. Habría sido preferible hablar de actividad y no de actos, con objeto de abarcar tanto las actuaciones en estricto sentido como el procedimiento;
4. Si bien en castellano no es posible llevar a cabo la fusión de hecho y acto mediante el simple juego de un paréntesis, como hace Foschini en italiano (*fatto*), trátase de conceptos distintos, no refundibles ni intercambiables;
5. La doctrina de la relación jurídica procesal tiene numerosas variantes, de muy distinto alcance, como se ha establecido en el apartado anterior, y Foschini no se ha preocupado de indicar por cuál de ellas se inclina, y
6. La posibilidad de combinar las doctrinas de la relación y de la situación jurídicas ha sido expresa y enérgicamente rechazada por Goldschmidt y si

---

<sup>255</sup> Alcalá-Zamora Castillo, Niceto, *Proceso, autocomposición y autodefensa...* op. cit., p. 379.

<sup>256</sup> Cfr. Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho...* op. cit., pp. 139 y 140.

bien ello no impide que se acometa la empresa, no cabe, en cambio, presentar la segunda como elemento estático, cuando tiene carácter esencialmente dinámico.<sup>257</sup>

##### 5. *El proceso como institución*

La idea que el proceso es una institución, se encuentra expresa o implícitamente expresada en los estudios que franceses como Renard, Hauriou, Delos y Gurvcht, quienes destinaron a fundar la concepción institucional del derecho.<sup>258</sup>

El procesalista Guasp resume la concepción institucional del proceso en cinco ideas, así se le puede atribuir el análisis de esta categoría, y al mismo tiempo el procesalista español le responde en términos de la siguiente tabla, lo que representa la postura de Niceto Alcalá contra Guasp que explicó la naturaleza del proceso como institución.<sup>259</sup>

El proceso como institución	
Jaime Guasp	vs Niceto Alcalá-Zamora y Castillo
1. El proceso es una realidad jurídica de tendencia permanente; pueden nacer y extinguirse continuamente procesos concretos, pero la idea de una actuación estatal de pretensiones fundadas sigue siempre en pie.	1. La distinción entre el proceso en abstracto y los procesos en concreto, se compagina sin la menor dificultad con cualquiera de las concepciones acerca de la naturaleza de aquél y, por tanto, no es privativa de la tesis institucionalista. Habría, además, que poner en entredicho la supuesta permanencia del proceso, al menos si Guasp la refiere al mismo como fenómeno histórico y no cual categoría jurídica: en cuanto al pasado, probablemente los juicios son mucho menos antiguos que la humanidad, y respecto del futuro, no hagamos

<sup>257</sup> Cfr. Alcalá-Zamora Castillo, Niceto, *Proceso, autocomposición y autodefensa... op. cit.*, pp. 440 y 441.

<sup>258</sup> Cfr. Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, p. 141.

<sup>259</sup> Cfr. Alcalá-Zamora Castillo, Niceto, *Proceso, autocomposición y autodefensa... op. cit.*, pp. 426 y 428.

	<p>profecías. Todavía, aun aceptada su idea del proceso como instrumento para la "actuación estatal de pretensiones", éstas no siempre son "fundadas".</p>
<p>2. El proceso tiene carácter objetivo; su realidad se determina, no por la actitud de las voluntades a las que se debe la actividad que lo integra, sino por la significación de la idea objetiva, superior a dichas voluntades.</p>	<p>2. De acuerdo con su noción de la institución procesal (confunde el molde que da forma, con la funda que se adapta a la forma, y mediante ese expediente, todo se convertiría en institución) el carácter objetivo del proceso se relacionaría con la actuación o denegación de pretensiones, y que en lugar de creer que la pretensión, concebida como un simple elemento objetivo de la acción y no como contrapuesta a ella, y engastada dentro de la corriente dualista y abstracta acerca de la segunda, rendirá mejores servicios a la doctrina del proceso que no conforme a la visión de Guasp.</p>
<p>3. El proceso no sitúa a los sujetos que en él intervienen en un plano de igualdad o coordinación, sino en un plano de desigualdad o subordinación; la idea jerárquica es también consustancial con el concepto de proceso,</p>	<p>3. No compartimos la alarma política de De Pina frente a esta conclusión 3, aun cuando, dada la ideología de Guasp y el uso y abuso del vocablo jerarquía en la lamentable literatura falangista, comprendamos que aquél la haya mirado con recelo y hasta que la ponga en cuarentena. A nuestro entender, sin embargo, hay aquí tan sólo un eco de ideas carneluttianas a propósito del difícil deslinde entre la actividad jurisdiccional y la administrativa.</p>
<p>4. El proceso no es modificable en su contenido por las voluntades de los sujetos procesales, sino dentro de límites reducidos que no pueden, en modo alguno, extenderse a la alteración de la idea fundamental del mismo.</p>	<p>4. Muchísimo antes de que la teoría institucionalista fuese puesta en circulación por sus primeros paladines, había proclamado ya la doctrina alemana que el proceso no es modificable por la voluntad de sus sujetos sino dentro de restringidos límites (Bülow) y, por consiguiente, tampoco esta "consecuencia" puede presentarse como rasgo peculiar de la tesis de Guasp.</p>
<p>5. El proceso es adaptable a la realidad de cada momento, sin que la</p>	<p>5. Si hemos creído descubrir la huella de Carnelutti, aquí no sería difícil vislumbrar la influencia de Calamandrei, espíritu a</p>

consideración del respeto a situaciones subjetivas anteriores tenga la misma fuerza que en una relación de tipo contractual.	cubierto de toda sospecha de reaccionarismo, cuando hablaba de la relatividad de la acción, término que Guasp ha reemplazado por proceso. Por nuestra parte estimamos que la relatividad no es ni de la acción (Calamandrei) ni del proceso (Guasp), sino de la jurisdicción.
--	---

Por otra parte, frente a las críticas de la categoría defendida en algún momento y que se analiza en este apartado, el maestro Eduardo J. Couture mencionó: “Consideramos hoy que nuestra posición tuvo más que ver con el interés de renovar el material de conceptos de que se sirve nuestra ciencia, que con el aprovechamiento que de ellos puede hacerse en el campo de la doctrina y de la jurisprudencia.” De esta manera en el siguiente cuadro se enlista el contraste de la postura institucional del proceso del profesor Couture:<sup>260</sup>

Fundamentación de la tesis del proceso como institución	
Primer Eduardo J. Couture (Guasp)	vs Segundo Eduardo J. Couture
1. El proceso es una realidad jurídica permanente, ya que pueden nacer y extinguirse procesos concretos, pero la idea de una actuación estatal sigue siempre en pie;	Guasp autor de esta concepción ha dado a nuestra adhesión a ella, un valor superior a su mérito. Nuestro agradecimiento no obsta a que proclamemos hoy que nuestro pensamiento ha debido plegarse en retirada, por lo menos hasta el día en que la concepción institucional del derecho proyecte sus ideas hacia planos más rigurosos de la dogmática jurídica. Consideramos hoy nuestro deber subrayar, apenas, que el vocablo institución sólo puede ser utilizado en su primera acepción, la común y genérica, que no excluye la concepción del proceso como relación jurídica. En cuanto a sus otros atributos de objetividad, permanencia, jerarquía, subordinación a los fines públicos, etc., pueden destacarse en una exposición
2. El proceso tiene carácter objetivo, ya que su realidad queda determinada más allá de las voluntades individuales	
3. El proceso se sitúa en un plano de desigualdad o subordinación jerárquica.	
4. El proceso no es modificable en su contenido por la voluntad de los sujetos procesales.	
5. El proceso es adaptable a las necesidades de cada momento.	

<sup>260</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, p. 144.

	<p>sistemática, como es la función del proceso y su relación con el interés individual (el proceso (civil o penal) ampara al individuo y lo defiende del abuso de la autoridad del juez, de la prepotencia de los acreedores o de la saña de los perseguidores) y social-pública (corresponde compartir la teoría que señala al proceso como el medio idóneo de asegurar la <i>lex continuitatis</i> del derecho, su efectividad en la experiencia jurídica), su fin social, proveniente de la suma de los fines individuales.</p> <p>.</p>
--	---

Desde la crítica externa, el profesor Alcalá<sup>261</sup> refiere que para el profesor Sentí Melendo, esta categoría del objeto de estudio no es útil "verdaderamente para convencernos de que el proceso es una institución o, por lo menos, para convencernos de que el calificarlo como tal tiene alguna utilidad jurídica."

Por otra parte, se mencionó que para el autor Allorio: "...sólo cuando sea el juzgador mismo quien establezca las propias reglas procesales, como sucede con algunas autoridades judiciales anglosajonas, podrá reconocerse en el proceso una institución; pero no en los países en que las fuentes del derecho procesal son únicamente aquellas de que emana la formación de todo el derecho del Estado."

En la misma crítica, el profesor Rafael de Pina indicó: "Prácticamente, sostener que el proceso es una institución, sin perjuicio de que 'pueda ser, por ejemplo, una relación', no sólo no contribuye a esclarecer la naturaleza del proceso, sino que conduce a abrir de nuevo un debate que parecía definitivamente clausurado con una conclusión —la que admite que es una relación jurídica— que ha podido considerarse casi unánimemente compartida por los procesalistas contemporáneos."<sup>262</sup>

<sup>261</sup> Cfr. Alcalá-Zamora Castillo, Niceto, *Proceso, autocomposición y autodefensa... op. cit.*, pp. 435 y 436.

<sup>262</sup> De Pina, Rafael, *Derecho procesal (temas)*, México, 2a. ed., México, Ediciones Botas, 1951, p. 203.



El maestro José Ovalle Favela señaló sobre esta categoría que: “Briseño Sierra comparte la idea de que el proceso es una institución: ‘El proceso -afirma- es una manifestación institucional, porque las reglas públicas trascienden a las relaciones privadas y éstas revierten en aquéllas indefinidamente a lo largo de la serie... no ha hecho ninguna contribución al mejor entendimiento y desarrollo del proceso, como sí lo han hecho la teoría de la relación y la situación jurídicas.’”<sup>263</sup>

## 5. *Concepciones menores*

El maestro Niceto Alcalá-Zamora y Castillo desarrolló la idea de las concepciones menores acerca del proceso, considerándolas en tales términos porque no alcanzaron el arraigo o se desarrollaron en trabajos de envergadura y aparato científico incomparablemente menos amplio. Dichas concepciones son:

1. El proceso como estado de ligamen (Kisch);
2. La concepción francesa del proceso como servicio público;
3. La construcción histórico-sociológica de Benjamín Cardozo;
4. Las sucesivas posturas de Carnelutti en cuanto al fin y naturaleza del proceso; su tesis del enjuiciamiento criminal como jurisdicción voluntaria; el retorno al juicio;
5. El proceso como modificación jurídica y como "misterio" (Satta);
6. El reemplazo del proceso civil por la jurisdicción voluntaria (Baurnbach);
7. La instancia y la relación procesal (Machado Colmarles);
8. El “acuerdo” como noción clave del proceso (Sentís Melendo);
9. El proceso y la voluntad vinculatoria autárquica de la ley (Podetti);
10. El proceso como institución (Giménez Fernández, Guasp, Couture, etc.);
11. El proceso como reproducción jurídica de una interferencia real (Lois Estévez);
12. El proceso como entidad jurídica compleja (Foschini);
13. El proceso como juego (Calamandrei);

---

<sup>263</sup> Ovalle Favela, José, *Teoría general del proceso... op. cit.*, pp. 193.

14. Referencia a otras posiciones que atienden a la determinación de la finalidad del proceso,<sup>264</sup> las cuales recientemente pudieran ser mayoría.

En consecuencia, de las concepciones la naturaleza jurídica del proceso, se obtiene un mejor entendimiento con la categoría de la relación jurídica triangular existente entre las partes; así como con la categoría de la situación jurídica que postula los conceptos para el derecho procesal, como son las cargas procesales, deberes procesales, ejecución forzosa, de su distinción entre actos procesales y negocios jurídicos, de su clasificación de los actos procesales, etc; en los que se pudiera incluir el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con las disposiciones constitucionales, instado necesariamente por un demandante o recurrente,<sup>265</sup> que pretenda la realización del derecho constitucional que en su perspectiva fue violado, ignorado o incierto, esto con independencia de no encontrar la satisfacción de su interés privado.

### III. EL PROCESO CONSTITUCIONAL

A manera de informe sobre la idea del proceso constitucional, se tiene la perspectiva del maestro Osvaldo Alfredo Gozáni, quien indica: "...se denominan procesos constitucionales a los distintos procedimientos destinados a respaldar las garantías fundamentales y demás derechos del hombre, ofreciendo una vía adecuada y posiblemente efectiva para la tutela, protección y fomento de ellos... para algunos el presupuesto ineludible para hablar de procesos de defensa de la Constitución es la preexistencia de un estatus litigioso... nosotros hemos asignado al proceso judicial la función de 'garantía'."<sup>266</sup> En esta perspectiva, se observa para qué sirve el proceso, explicándose que su finalidad es la garantía y tutela de los derechos fundamentales y su naturaleza jurídica consiste en ser procedimientos.

---

<sup>264</sup> Cfr. Alcalá-Zamora Castillo, Niceto, *Proceso, autocomposición y autodefensa... op. cit.*, pp. 377-452.

<sup>265</sup> Cfr. Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad. Con referencia a los ordenamientos Alemán, Suizo y Austriaco*, trad. Héctor Fix Zamudio, México, UNAM, Instituto de Derecho Comparado, Imprenta Universitaria, 1961, p. 98.

<sup>266</sup> Gozáni, Osvaldo Alfredo, *Los problemas de legitimación en los procesos constitucionales*, México, Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2005, núm. 4, pp. 100 y 101.

Con referencia a la idea del profesor Sagües, el profesor Rubén Hernández Valle menciona: "... los procesos constitucionales pueden concebirse como aquel conjunto de actos relacionados entre sí, realizados por la magistratura constitucional, y que permite el desarrollo de la actividad jurisdiccional constitucional (Sagües)."<sup>267</sup> De esta idea se obtiene que el proceso constitucional es una relación de actos, así determina cómo se desarrolla, en el particular por la magistratura constitucional<sup>268</sup> que ejerce la jurisdicción constitucional. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la actividad jurisdiccional constitucional suponemos sería análoga al enjuiciamiento de los conflictos constitucionales.

Ahora bien, para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el control de constitucional es considerado un proceso constitucional, al emplearlo para mencionar que el amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y el juicio de revisión constitucional electoral son "medios de control constitucional".<sup>269</sup>

Por otra parte, el profesor José Julio Fernández Rodríguez refiere: "Por proceso constitucional entendemos aquel proceso que afecta a una cuestión básica del poder público, que, por ello, se encuentra tratada en la Constitución... un proceso constitucional 'atípico' es un proceso constitucional que no resulta básico desde el punto de vista de la naturaleza de la jurisdicción constitucional."<sup>270</sup>

Se observa que este concepto explica su finalidad dirigida a realizar el poder público previsto en la Constitución, así como se coincide con la idea relativa a que el proceso constitucional se prevea en el orden fundamental, pero no se cree que deba crear una categoría adicional para considerarlo atípico, toda vez que es materia del

---

<sup>267</sup> Hernández Valle, Rubén, *Introducción al derecho procesal constitucional*, México, Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2005, núm. 4, p. 11.

<sup>268</sup> La magistratura constitucional se concibe por el profesor Domingo García Belaunde como: "... la faceta que desarrolla un aspecto de la jurisdicción, o sea, quién o quiénes tienen a su cargo la resolución de conflictos de carácter constitucional." García Belaunde, Domingo, *De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional*, 4a. ed., Lima, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2003, p. 64.

<sup>269</sup> *Vid. Supra*. Control constitucional.

<sup>270</sup> Fernández Rodríguez, José Julio, "Procesos constitucionales atípicos", en Ferrer MacGregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. I, pp. 1051 y 1052.

objeto de estudio los conflictos que omiten o generan incertidumbre de las disposiciones fundamentales.<sup>271</sup>

Para el maestro Héctor Fix Zamudio debe considerarse el amparo como el proceso constitucional por antonomasia, en virtud de que constituye la garantía normal y permanente de la Constitución, en contradicción con los otros dos (procesos de responsabilidad política de los altos funcionarios y la controversia entre los órganos capitales de la Constitución) que son medios extraordinarios e intermitentes.<sup>272</sup>

A manera de concepción relacionada con la idea de las partes de la Constitución, para el maestro Domingo García Belaunde los: “Procesos constitucionales, o sea, las vías instrumentales de cómo se llega a la defensa de la Constitución, sea en su carácter dogmático o en su carácter orgánico...”<sup>273</sup> De esta idea se obtiene que el proceso constitucional con base en la finalidad, se dirige a proteger las partes dogmática y orgánica del orden fundamental, de manera que son identificados como procesos constitucionales de la libertad <sup>274</sup> y procesos constitucionales orgánicos.

Con base en esta perspectiva, el maestro Mauro Cappelletti, al analizar los procesos constitucionales de la libertad de Alemania, Suiza y Austria, indica con relación al proceso que denominó “jurisdicción constitucional de la libertad”: “... una de las peculiaridades del (dicho) proceso constitucional –debe recordarse especialmente la estructura “con una sola parte”, la gratuidad del mismo proceso, la prevalencia del principio de la investigación oficial de la verdad, además de otras modalidades esenciales relativas a poderes discrecionales, de urgencia y cautelares que se atribuyen al juez constitucional y en relación a los efectos, frecuentemente generales, del acogimiento del recurso- que se derivan de la relación deducida en

---

<sup>271</sup> *Vid. Infra.* Capítulo quinto.

<sup>272</sup> Cfr. Fix Zamudio, Héctor “La garantía jurisdiccional... *op. cit.*, p. 99.

<sup>273</sup> García Belaunde, Domingo, *De la jurisdicción constitucional... op. cit.*, p. 105.

<sup>274</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Procesos constitucionales de la libertad”, en Ferrer MacGregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. I, pp. 1053 y 1054.

juicio y contribuyen a conformar la naturaleza, o sea, la estructura y funciones típicas y unitarias de la que he denominado 'jurisdicción constitucional de la libertad'.<sup>275</sup>

De lo anterior se desprende cómo se desarrolla el proceso constitucional de la libertad, bajo la estructura, finalidad y unidad del mismo.

En consecuencia, de manera aproximada, con apoyo en la definición del proceso del fundador conceptual y sistemático del derecho procesal constitucional puede indicarse que:

El proceso constitucional sería el conjunto armónico y ordenado de actos jurídicos, en vista de la resolución del conflicto constitucional, que implica la relación entre las autoridades, o de estas y las personas individuales así como colectivas con la autoridad imparcial, y que se desenvuelve a través de una serie situaciones jurídicas que se van sucediendo según el recurrente, y eventualmente uno o más terceros interesados en contradecir las instancias del propio demandante o recurrente, quienes actúan en relación con las expectativas, posibilidades, cargas y liberación de cargas que les son atribuidas, para la búsqueda oficial de la verdad, como en el enjuiciamiento de la pretendida violación, desconocimiento o incertidumbre de la parte dogmática u orgánica de la Constitución.<sup>276</sup>

Ciertamente, se tendrá que adoptar los conceptos y principios de la teoría procesal para replantearlos<sup>277</sup> y adaptarlos al proceso constitucional, para proponer una concepto de las partes de la relación jurídica, de las categorías, de los actos procesales, de la jurisdicción, la cual no sería voluntaria, sino contenciosa por enjuiciar los conflictos constitucionales, todo con fundamento en un concepto de proceso constitucional que se sustente en la naturaleza de relación y situación procesal.

---

<sup>275</sup> Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad. Con referencia a los ordenamientos Alemán, Suizo y Austriaco*, trad. Héctor Fix Zamudio, México, UNAM, Instituto de Derecho Comparado, Imprenta Universitaria, 1961, p. 98.

<sup>276</sup> Cfr. Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad... op. cit.*, pp. 77-79 y 103. Cfr. Rivera Hernández, Juan, "La libertad en el goce... op. cit.", pp. 46 y 47.

<sup>277</sup> Cfr. González Pérez, Jesús, *Derecho procesal constitucional*, Madrid, Civitas, 1980, pp. 50-51.

**CAPÍTULO CUARTO**  
**LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES EN LA LEY**  
**FUNDAMENTAL DE 1917**



## CAPÍTULO CUARTO

### LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES EN LA LEY FUNDAMENTAL DE 1917

El objetivo del capítulo es especificar los procesos constitucionales vigentes en la ley fundamental de 1917 y en los precedentes que configuran la práctica del objeto de estudio.

Para tal efecto, se desarrolla la producción histórica del enjuiciamiento constitucional, se especifican los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos vigentes, para sistematizarlos mediante un primer ensayo de esquematización.

#### I. ENJUICIAMIENTO CONSTITUCIONAL

El enjuiciamiento de los conflictos relacionados con las normas fundamentales tiene una extensa producción histórica, que bajo la guía del procesalista italiano Guiseppe Chiovenda, se considera importante analizar, por el conocimiento que con ella se tiene de los procesos constitucionales en la ley fundamental de 1917.<sup>278</sup>

Desde esta perspectiva, en el texto original de los artículos 94,<sup>279</sup> 103,<sup>280</sup> 105,<sup>281</sup> 107<sup>282</sup>, 109 y 116<sup>283</sup> constitucionales, herederos del enjuiciamiento de la nación

---

<sup>278</sup> “... hasta finales del siglo XVIII abundan las obras procesales, si bien pobres de originalidad y de valor científico. En su mayor parte tienen un carácter práctico... Pero la importancia de esta producción es, sobre todo, histórica, por el conocimiento que con ella se tiene del proceso italiano en este periodo.” Chiovenda, José, *Principios de derecho procesal civil*, trad. José Casáis y Santaló, Madrid, Editorial Reus, 1922, t. I. pp. 7-8.

<sup>279</sup> Cfr. “El artículo 94 de la Constitución de 1917”, en *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, 2da. ed., México, Porrúa, 1978, t. VII, p. 706.

<sup>280</sup> Cfr. “El artículo 103 de la Constitución de 1917”, en *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones... op. cit.*, p. 903.

<sup>281</sup> Cfr. “El artículo 105 de la Constitución de 1917”, en *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones... op. cit.*, p. 985.

<sup>282</sup> Cfr. “El artículo 107 de la Constitución de 1917”, en *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, 2da. ed., México, Porrúa, 1978, t. VIII, pp. 65-67.

<sup>283</sup> Cfr. “El artículo 116 de la Constitución de 1917”, en *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, 2da. ed., México, Porrúa, 1978, t. VIII, p. 487. Disposición prevista en la Constitución vigente en el artículo 76, fracción X: “Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas”. Dicha fracción fue adicionada mediante



independiente,<sup>284</sup> se establece cómo funcionarían y la finalidad de los primeros procesos constitucionales de amparo, controversias constitucionales, juicio político y límites territoriales entre estados.

Las reformas de 1928, 1934 y 1967 tendieron a aumentar las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,<sup>285</sup> para el enfrentamiento de la “imposible tarea de la Corte”.<sup>286</sup>

La resolución del *Caso Oaxaca*, mediante el enjuiciamiento de la controversia constitucional 2/1932, por medio del cual la Corte no anuló expresamente pero dijo que había invadido la legislatura del Estado de Oaxaca, las competencias de la legislatura federal, por la expedición de una ley de monumentos arqueológicos que se dio en esa época, en el contexto del descubrimiento de las Tumbas de Monte Albán.<sup>287</sup>

La reforma constitucional de 1951 creó los Tribunales Colegiados de Circuito,<sup>288</sup> para hacer frente al problema de rezago,<sup>289</sup> porque:

...

La gravedad del problema del rezago a que nos hemos referido se desprende de los datos estadísticos que cita la exposición de motivos.

La Suprema Corte de Justicia tenía formulado con anterioridad -17 de julio de 1945- un estudio en el que propuso las medidas que, a su juicio, debían ponerse en práctica para hacer desaparecer el rezago, estudio que fue editado por la propia Suprema Corte y que el Ejecutivo remitió al Congreso junto con

---

decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, el 8 de diciembre de 2005. Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Los jueces constitucionales... *op. cit.*”, pp. 225-243.

<sup>284</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “El amparo local... *op. cit.*”, pp. 45-124.

<sup>285</sup> Cfr. Barajas Montes de Oca, Santiago, “Bases de la reforma a los artículos 94, 96 y 97 constitucionales en materia judicial”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 83, año 1995, mayo-agosto. El jurista Eduardo Ferrer Mac-Gregor menciona que el establecimiento de una magistratura especializada tiene una paulatina evolución identificada en general por dos etapas: La primera inicia con el establecimiento o promulgación de la Constitución de 5 de febrero de 1917 y culmina con las reformas constitucionales de 1988, y la segunda etapa comprende las reformas constitucionales de 1988, 1995, 1996 y 1999. Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de México”, en *Ensayos sobre Derecho procesal constitucional*, México, Porrúa-CNDH, 2004, pp. 48-56.

<sup>286</sup> Rabasa, Emilio, *El artículo 14 y el juicio constitucional*, México, Porrúa, 2000, pp. 101-110.

<sup>287</sup> Cfr. Fix Zamudio, Héctor, “Panorama de la justicia constitucional... *op. cit.* Cfr. Rivera Hernández, Juan “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*”, pp. 124 y 125.

<sup>288</sup> Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Los tribunales constitucionales... *op. cit.*”, pp. 48-56.

<sup>289</sup> Cfr. *Libro blanco de la reforma judicial. Una agenda para la justicia en México*, 1a. reimp., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, National Center for State Courts, 2001, p. 75.

su iniciativa, por haberle servido de base para formularla según la misma exposición de motivos se asienta.

En dicho estudio la Corte propuso la creación de una Sala Auxiliar, de duración transitoria; una nueva distribución de competencias para compartir con los magistrados de Circuito las que hasta ahora le han sido exclusivas, y el sobreseimiento del amparo o la confirmación de la sentencia recurra por inactividad del quejoso o del recurrente...<sup>290</sup>

Como se observa, el estudio del rezago lo realizó la autoridad competente del proceso constitucional de amparo, para proponer la creación de una Sala Auxiliar no definitiva y la distribución de las demandas de amparo con los Tribunales Colegiados de Circuito, para intentar de solventar el referido rezago.

En fecha aproximada a la mitad del siglo pasado, surge en 1955 la obra sobre el enjuiciamiento constitucional de los conflictos de los derechos fundamentales y del poder “La garantía jurisdiccional de la constitución mexicana (Ensayo de una estructuración procesal del amparo)”,<sup>291</sup> del fundador conceptual y sistemático del derecho procesal constitucional.<sup>292</sup>

En 1968 se introduce “... la facultad discrecional de la Segunda Sala de la Suprema Corte para conocer de aquellos asuntos de *importancia trascendente para los intereses de la nación*, cuya competencia originaria correspondía a los tribunales colegiados; y por otra, se otorgó competencia a las salas para resolver los asuntos de la inconstitucionalidad de leyes cuando existiera jurisprudencia del pleno, lo que aligeró considerablemente la carga de trabajo para ellas (Énfasis original).”<sup>293</sup>

Se establece el desarrollo doctrinal de la Constitución como norma jurídica,<sup>294</sup> desde la visión, en 1985, de un investigador del derecho administrativo.<sup>295</sup>

---

<sup>290</sup> Cfr. “El artículo 107 de la Constitución de 1917”, en *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, 2da. ed., México, Porrúa, 1978, t. VIII, p. 98.

<sup>291</sup> Fix Zamudio, Héctor, “La garantía jurisdiccional... op. cit. Cfr. Rivera Hernández, Juan, “El amparo local... op. cit, pp. 12-14.

<sup>292</sup> Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen... op. cit.*, pp. 120-138. Rivera Hernández, Juan, “Derecho procesal constitucional... op. cit, pp. 174 y 175.

<sup>293</sup> Rivera Hernández, Juan “Hacia nuevas competencias... op. cit, pp. 113-114.

<sup>294</sup> “Los argumentos de Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y de Joaquín GOMES CANOTILHO, por ejemplo, para mostrar las características de la constitución como norma jurídica o para denotar su función dirigente, implicaban la necesidad de instituciones procesales, eficaces que imprimieran validez a todo el conjunto de disposiciones que integran la norma suprema. Éste ha sido, sin duda, el objetivo de quienes concibieron las bases y desarrollaron las instituciones que hoy configuran el Derecho procesal constitucional.” Valadés, Diego, “Prólogo” en, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Panorámica del derecho procesal constitucional y convencional*, Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 33.

Se inicia la agenda judicial en 1987 y el proceso de configuración de un tribunal constitucional en México.<sup>296</sup>

Precisamente, la reforma de 1987, adicionó un párrafo final a la fracción V del artículo 107 constitucional, para otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de conocer de los amparos directos únicamente en el caso en que ejerciera su competencia por atracción dado que, generalmente, de los amparos directos sólo conocían los tribunales colegiados de circuito.<sup>297</sup>

De este modo, la tesis del inicio de la agenda judicial es expuesta en el “Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una Agenda para la justicia en México.” La cual indica en las páginas preliminares, que el Comité Organizador de la Consulta Nacional, integrado por los ministros Mariano Azuela Güitrón, José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo, encomendó a José Antonio Caballero Juárez, Sergio López Ayllón y Alfonso Oñate Laborde, la redacción del *Libro Blanco de la Reforma Judicial*.

Esta obra corresponde al análisis que realizaron los referidos profesores de los resultados de la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado mexicano, y de manera que en el libro se expone la tesis indicada en los siguientes términos:

...

La reforma judicial en México no es un momento sino un proceso en marcha. Este proceso se inicia en 1987 con las primeras reformas encaminadas al establecimiento de un tribunal constitucional en México y se prolonga desde entonces a diferentes ritmos y profundidades a lo largo del país.

... bajo el supuesto que en el caso mexicano la reforma judicial no es un acto fundacional sino un proceso continuo, es preciso señalar una fecha a partir de la cual se inicie el análisis de las distintas reformas y modificaciones que se han venido produciendo en el sistema de impartición de justicia en México, con el propósito de esclarecer los objetivos (no siempre explícitos) de los cambios y apreciar si éstos se han dado y de ser así, si éstos se encuentran articulados.

---

También en 1951 existe una obra similar de Barile, P., *La costituzione come norma giuridica*, Firenze, 1951. *Cit.*, por, Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad... op. cit.*, p. 120.

<sup>295</sup> García de Enterría, Eduardo, *La Constitución como norma y el tribunal constitucional*, Madrid, Civitas, 1985.

<sup>296</sup> *Cfr. Libro blanco de la reforma judicial. Una agenda para la justicia en México*, 1a. reimp., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, National Center for State Courts, 2001, p. 75.

<sup>297</sup> *Cfr. Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 86-88.

La fecha seleccionada para dar inicio a este recuento es la de 1987, de tal forma que se analizará el proceso de reforma judicial a lo largo de los últimos veinte años. La elección de la fecha obedece a que la reforma de agosto de 1987 señala dos directrices capitales para poder entender la dirección del proceso de reforma judicial en su conjunto.

A saber, se le otorgan facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder iniciar, así fuese en forma incipiente, la elaboración de una agenda judicial, circunscrita al Poder Judicial de la Federación, y por otra parte se inicia lo que podría denominarse el proceso de conformación de un Tribunal Constitucional.

Estas dos líneas estratégicas fijadas por la reforma de 1987 habrán de marcar en buena medida el derrotero que habría de seguir el proceso de reforma judicial mexicano en los años siguientes. Si bien en su momento aparecieron como vertientes paralelas y aparentemente complementarias, no tardarían en confluir, competir e incluso, hasta cierto punto, tornarse incompatibles. Lo que es más, podría aseverarse que la tensión entre ambas originó en buena medida la reforma constitucional de 1994...<sup>298</sup>

De lo anterior se obtiene que la reforma judicial tiene su inicio en 1987, fecha en la cual a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se facultó para emitir Acuerdos Generales,<sup>299</sup> por medio de los que podía dirigir su política judicial, en el sentido de definir qué asuntos conocería, esto es, con esa facultad podía distinguir aquellos que son referentes a temas del enjuiciamiento constitucional, y en consecuencia, conocer y resolver los conflictos constitucionales. Por ello, en virtud de la distinción de competencias, se indicó nacería el tribunal constitucional.<sup>300</sup>

El planteamiento indicado puede ser también observado en la exposición de motivos de la reforma constitucional materia de examen, se señalaba el 21 de abril de 1987:

---

<sup>298</sup> *Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una Agenda para la justicia en México... op. cit.*, p. 75.

<sup>299</sup> La reforma del artículo 94 contempló un párrafo sexto en los siguientes términos: "El propio Tribunal en Pleno estará facultado para emitir acuerdos generales a fin de lograr, mediante una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Suprema Corte de Justicia, la mayor prontitud en su despacho." Decreto por el que se adicionan la fracción XXIX-H al artículo 73, la fracción I-B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107; se reforma el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el artículo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107; y se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de agosto de 1987. Disponible en: [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987), consultado el 15 de febrero de 2017.

<sup>300</sup> *Vid. Supra.* Jurisdicción constitucional.

...

Si las proposiciones que esta iniciativa contiene merecen la aprobación del Poder Constituyente Permanente, el control de la constitucionalidad, que atañe al todo social, quedará sujeto básicamente al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, con sede en el Distrito Federal, y el control de la legalidad se atribuirá a los tribunales colegiados de circuito, que tienen su sede en los lugares que son cabecera de los propios circuitos, diseminados en todo el territorio nacional, con lo cual se culmina el proceso de descentralización de la justicia federal y se acerca la justicia al pueblo.<sup>301</sup>

...

De esta manera, el legislador constitucional propuso que el órgano vértice de impartición de justicia de la nación, conociera, de modo principal, de los conflictos relacionados con las disposiciones constitucionales, mediante su enjuiciamiento a través del proceso constitucional de amparo; pero, lo denominó control de constitucionalidad, un concepto que no sería del derecho procesal, sino del derecho constitucional, y en esa virtud, se dificultaría el entendimiento de la parte procesal de la Constitución; esto sin perjuicio de que el enjuiciamiento indicado, de la misma manera, atañe al todo social y le corresponda no solo a los jueces, sino también, de manera análoga, a las autoridades que conocen de los conflictos constitucionales a través del objeto de estudio.<sup>302</sup>

Además, en dicho documento se observó una imprecisión del proceso constitucional de amparo, conforme lo siguiente:

...

El control de la constitucionalidad es el juicio que permite afirmar la existencia de concordancia, formal y material, entre la norma inferior y la norma suprema que es la constitución; la concordancia material se analiza respecto del contenido de la norma creada y el contenido de la parte dogmática de la Constitución, y la concordancia formal se concluye por el respeto del órgano y procedimiento para la creación de la norma inferior, con las disposiciones contenidas en la parte orgánica de la Constitución.<sup>303</sup>

...

---

<sup>301</sup> Disponible en el Anexo: II. Documentos relacionados con la reforma constitucional de 1987.

<sup>302</sup> *Vid. Supra*. Capítulo primero. Protocolo de investigación.

<sup>303</sup> Disponible en el Anexo: II. Documentos relacionados con la reforma constitucional de 1987.

De lo anterior se desprende que se le atribuye el nombre de “juicio” o “control de constitucionalidad”, al proceso constitucional; sin embargo, y posiblemente por la preocupación del tratamiento político que se le dio en la legislación y doctrina de la época, el proceso recibió tales denominaciones.<sup>304</sup>

Justamente, el tema sería analizado desde una perspectiva política, dada la misma naturaleza de la Constitución, y tal visión nubló la idea de que con reformas constitucionales, como la examinada, se proponía el enjuiciamiento, a través de procesos constitucionales, de los conflictos relacionados con la parte dogmática de la Constitución; así, el diseño político cedería el paso a un diseño jurídico del orden fundamental; pero ello no sería parte de la agenda del legislador constitucional, de ahí puede surgir la ambigüedad expuesta y la problemática para el entendimiento del objeto de estudio.

No obstante, el proceso y el control de constitucionalidad no pueden ser considerados lo mismo, porque el primero es utilizado para realizar las normas constitucionales, y el control de constitucionalidad es la actividad mediante la cual se analiza si existe o no esa realización, esto es, el control de constitucionalidad sería el contenido del proceso constitucional,<sup>305</sup> al tiempo que se tiene que dejar atrás el vocablo “control de constitucionalidad” que es del derecho constitucional, porque desde la perspectiva del procesalismo se debe denominar enjuiciamiento.<sup>306</sup>

Por otra parte, también la exposición de motivos examinada mencionaba:

---

<sup>304</sup> También en la época, al proceso constitucional de amparo se le denominaba juicio o recurso: “...considerando dichos términos equivalentes, no obstante su diverso significado, ya que el recurso es un medio de impugnación y juicio es el equivalente tradicional hispánico de proceso, (aún cuando estrictamente ‘juicio’ signifique el razonamiento del juez en el fallo Héctor Fix Zamudio, “La garantía jurisdiccional... *op. cit.*, p. 108.

<sup>305</sup> Esta idea puede encontrarse en una jurisprudencia de 1991 de los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el juez de Distrito no viola los derechos fundamentales de quien le pide el otorgamiento de la protección de la justicia federal, puesto que, precisamente tiene como función el examen analítico del acto de autoridad reclamado o el examen de la realización de las disposiciones fundamentales que prevén dichos derechos o ejercer el enjuiciamiento constitucional, a fin de constatar si en ese acto hubo o no violaciones a los derechos de la persona o quejoso, pues en todo caso, su proceder de ser equívoco, sólo podría entrañar infracciones a las normas rectoras del proceso constitucional de amparo. Jurisprudencia, 8a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo VIII, Agosto de 1991, Tesis: V.1o. J/12, p. 123, registro: 222065. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

<sup>306</sup> *Vid. Supra.* Enjuiciamiento en el derecho procesal hispánico y control de constitucionalidad.

...

La presente iniciativa respeta y ratifica todos los principios que rigen a nuestro juicio de amparo, por haber probado su eficacia como medio de defensa para mantener incólume la supremacía de la Constitución y el respeto y exacto cumplimiento del orden jurídico nacional; el juicio de amparo constituye la más perfecta salvaguarda de los derechos y libertades del individuo frente a la eventual actuación ilícita o extralimitada de cualquier autoridad; el juicio de amparo ha merecido el reconocimiento nacional e internacional como el proceso singular, que mediante un mismo procedimiento y con la misma finalidad, substituye diversos medios parciales que otras legislaciones regulan.<sup>307</sup>

...

De lo anterior se desprende que en 1987 se indicaba que el amparo era un “proceso singular” que había probado su eficacia para defender los derechos de las personas, la supremacía constitucional, así como la tutela del “respeto y exacto cumplimiento del orden jurídico nacional”.

Sin embargo, tal inicio de consolidación del amparo como proceso “singular” o proceso constitucional, sería insuficiente para proteger jurídicamente el contenido de la Ley fundamental de 1917, por lo que debe ser acompañado de otros procesos constitucionales de la libertad y orgánicos que tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento del orden fundamental.

De ese modo, la reforma constitucional de 1994 amplió los supuestos de procedencia de la controversia constitucional y creó la acción de inconstitucionalidad, como procesos constitucionales orgánicos y que son competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.<sup>308</sup>

Enseguida, las reformas constitucionales de 1996, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 21 de agosto de 1996, que “... fortalecen jurisdiccionalmente al Tribunal Electoral, lo integran al Poder Judicial de la Federación y lo elevan al rango de Tribunal Constitucional, con lo que se contribuye

---

<sup>307</sup> Disponible en el Anexo: II. Documentos relacionados con la reforma constitucional de 1987.

<sup>308</sup> Cfr. “Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, *Diario Oficial de la Federación*, 31 de diciembre de 1994, Disponible en: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4782280&fecha=31/12/1994](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4782280&fecha=31/12/1994), consultado el 30 de diciembre de 2016.

a la evolución de nuestro derecho electoral así como a su desarrollo en beneficio de la democracia mexicana (énfasis original).<sup>309</sup>

Ahora bien, desde la perspectiva subsidiaria de la solución de los conflictos constitucionales, el 16 de diciembre de 1998, se prevé la declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, autoridad subsidiaria del enjuiciamiento de las normas fundamentales, cuyo instrumento de aceptación fue depositado ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.<sup>310</sup>

Se inicia el siglo del constitucionalismo estatal,<sup>311</sup> a partir de las reformas a la Constitución veracruzana de 2000,<sup>312</sup> descubriéndose, bautizándose y delimitándose científicamente una nueva dimensión o sector del derecho procesal constitucional, que nombró el jurista Eduardo Ferrer Mac-Gregor: Derecho procesal constitucional local.<sup>313</sup>

La redacción en 2001 del “Libro blanco de la reforma judicial. Una agenda para la justicia en México,”<sup>314</sup> que indica “El contenido de éste corresponde a la interpretación de (varios) autores de los resultados de la Consulta Nacional sobre

---

<sup>309</sup> Elías Musi, Edmundo, y Navarro Vega, Ignacio J., “Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antecedentes, estructura y competencia”, en Elías Musi, Edmundo, *Estudio Teórico Práctico del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral* 1997, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1997, p. 41.

<sup>310</sup> Conforme lo previsto mediante Decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, el 24 de febrero de 1999, disponible en: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4944372&fecha=24/02/1999](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4944372&fecha=24/02/1999), consultado el 30 de diciembre de 2016.

<sup>311</sup> Cfr. “Dictamen de la iniciativa de Decreto número 52”, *Gaceta del gobierno: Periódico oficial del Gobierno del Estado de México*, Toluca de Lerdo, México, Tomo CLXXVIII, No. 8, Sección Cuarta, 12 de julio del 2004, p. 4.

<sup>312</sup> Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “La regulación de los mecanismos de control constitucional en las entidades federativas (esbozo comparativo)”, en González Oropeza, Manuel y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coords.), *La justicia constitucional en las entidades federativas*, México, Porrúa, 2006, p. 1053.

<sup>313</sup> Rivera Hernández, Juan, “El amparo local... *op. cit.*, pp. 14-15. Cfr. Corzo, Edgar y Vega Gómez, Juan, “Relatorías. Mesa 4. Instrumentos de justicia constitucional”, en Márquez Romero, Raúl (coord.), *Conclusiones y relatorías del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2002, p. 78. La versión ampliada y revisada de esta ponencia, aparece en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Aportaciones de Héctor Fix Zamudio al derecho procesal constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional... op. cit.*, pp. 219-221. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Aportaciones de Héctor Fix Zamudio... *op. cit.*, pp. 16-18. Asimismo, Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Derecho procesal constitucional del Estado... *op. cit.*, p. 176. Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, pp. 92 y 93.

<sup>314</sup> Cfr. *Libro blanco de la reforma judicial. Una agenda para la justicia en México*, 1a. reimp., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, National Center for State Courts, 2001, p. 75.



una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado mexicano.”<sup>315</sup>

En 2003 se edita un “Código de procesos constitucionales”, esto es,

... una obra que reúne lógica, ordenada y sistemáticamente las disposiciones que contemplan tanto a las garantías (procesos) constitucionales y la magistratura especializada, obra que se denomina *Compendio de derecho procesal constitucional* con el subtítulo *Legislación, prontuario y bibliografía*, 4ta. ed., México, Porrúa, 2008 —la 1ra. ed. se realizó en 2003—. En dicha compilación —a grandes rasgos— se encuentra: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; Ley Reglamentaria del Artículo 76 Constitucional; Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Código Federal de Procedimientos Civiles; Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Estatuto y Reglamento de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Declaración para el reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<sup>316</sup>

Ahora bien, se observa la emisión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de, entre otros,<sup>317</sup> los siguientes casos

---

<sup>315</sup> Rivera Hernández, Juan, “El amparo local... *op. cit.*, p. 140.

<sup>316</sup> Rivera Hernández, Juan “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, pp. 112 y 113.

<sup>317</sup> Desde 1999 existe jurisprudencia mediante la cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enjuiciado al Estado Mexicano en asuntos relativos a 10 sentencias de casos contenciosos, 9 resoluciones de convocatoria de audiencia de casos contenciosos, 40 sentencias de medidas provisionales, 2 resoluciones de solicitudes de medidas provisionales, 2 sentencias de opiniones consultivas, 1, sentencia en otros asuntos relativo a la solicitud de ampliación de presuntas víctimas y negativa de remisión de prueba documental, 15 resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia, en términos de lo previsto por el “Buscador de Jurisprudencia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>, consultado el 30 de diciembre de 2016; con excepción del dato consistente en las 2 sentencias de opiniones consultivas, cuyo información no estuvo disponible en el referido buscados, sino ello se obtuvo de Roa, Jorge Ernesto, *La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, *Temas de Derecho Público no. 94*, Bogotá, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2015, pp. 196-201 y 206-212.

contenciosos desde 2004,<sup>318</sup> teniendo como base la clasificación contenida en el “Buscador de Jurisprudencia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

1) *Caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 03 de septiembre de 2004. Serie C No. 113, mediante la cual se acogió la primera excepción preliminar *ratione temporis* interpuesta por el Estado, en los términos de los párrafos 78 a 85 de la sentencia, “en tanto que las supuestas violaciones a la Convención Americana y la Convención Interamericana contra la tortura ocurrieron antes del 16 de diciembre de 1998, fecha en que México reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana”.<sup>319</sup> Un estudio de este caso lo efectuó Jorge Ulises Carmona Tinoco.<sup>320</sup>

2) *Caso Castañeda Gutman Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, a través de la cual se ordenó, entre otro, que el Estado debía, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de modo que para realizar el ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007; de manera que, mediante dicho proceso constitucional se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido, en los términos de los párrafos 227 a 231 de la sentencia. Dicho caso ha sido analizado por Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Fernando Silva García,<sup>321</sup> Jorge

---

<sup>318</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “El amparo local... *op. cit.*”, pp. 209-212.

<sup>319</sup> Fix Zamudio, Héctor y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Derecho de amparo*, México, Porrúa, UNAM, 2011, p. 318.

<sup>320</sup> Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “El caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. Estados Unidos Mexicanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. V, 2005, pp. 705-723.

<sup>321</sup> Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Silva García, Fernando, *El caso Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano*, México, Porrúa, UNAM, 2009, pp. 1-241. “La primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano”. En Carpizo, Jorge y Arriaga, Carol B. (coords.), *Homenaje al doctor Emilio O. Rabasa*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, 2010, pp. 109-156.

Ulises Carmona Tinoco;<sup>322</sup> y, Carlos María Pelayo Möller y Santiago J. Vázquez Camacho.<sup>323</sup>

3) *Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, mediante el cual determinó, entre otro, que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, en los términos de los párrafos 243 a 286 de la Sentencia. Dicho caso lo han examinado Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Fernando Silva García;<sup>324</sup> y, Santiago José Vázquez Camacho.<sup>325</sup>

4) *Caso Radilla Pacheco Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, a través del cual determinó que el estado violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio, entre otros, del señor Rosendo Radilla Pacheco, así como se incumplió con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Tal caso cuenta con un intenso desarrollo doctrinal que pertenecen a los libros de Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Silva García

---

<sup>322</sup> Carmona Tinoco, Jorge Ulises "El caso Jorge Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. IX, 2009, pp. 775-790.

<sup>323</sup> Pelayo Möller, Carlos María y Vázquez Camacho, Santiago J., "El caso Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. IX, 2009, pp. 791-812.

<sup>324</sup> Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Silva García, Fernando, *Los feminicidios de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Campo Algodonero). La segunda sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano*, México, Porrúa, UNAM, 2011, pp. I-XLVI1, 1-241. "Homicidios de mujeres por razones de género. El caso Campo Algodonero", en Bogdandy, Armin Von y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords.). *La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina?*, México, UNAM, 2010, t. II, pp. 259-333.

<sup>325</sup> Vázquez Camacho, Santiago José "El caso 'Campo Algodonero' ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. XI, 2011, pp. 515-561.

Fernando;<sup>326</sup> José Ramón Cossío Díaz, Raúl M. Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio, obra que consideran los autores ‘... No se trata de un libro, ni pretende pasar por tal. Es una compilación de documentos...’;<sup>327</sup> Alonso Gómez-Robledo Verduzco;<sup>328</sup> Karlos Castilla;<sup>329</sup> y, Carlos María Pelayo Moller.<sup>330</sup>

5) *Caso Fernández Ortega y otros Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, a través del cual determinó que el Estado debía conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramite el caso de la violación sexual de la señora Fernández Ortega, con el fin de determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar, en su caso, las sanciones y demás consecuencias que la ley prevea, de conformidad con lo establecido en los párrafos 228 a 230 de la Sentencia. Este asunto fue examinado por el Comité de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales, del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación.<sup>331</sup>

6) *Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, por medio del que, entre otro, se dispuso que el Estado debía conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso,

---

<sup>326</sup> Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y García Fernando, Silva, *Jurisdicción militar y derechos humanos. El caso Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, México, Porrúa, UNAM, 2011, pp. I-XXXIV, 1-634.

<sup>327</sup> Cossío Díaz, José Ramón, Mejía Garza, Raúl M. y Rojas Zamudio, Laura Patricia, *El caso Radilla. Estudio y documentos*, México, Porrúa, 2012, pp. I-XI, 1-1064.

<sup>328</sup> Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, “Corte interamericana de derechos humanos. Caso Radilla Pacheco vs. México. Sentencia del 23 de noviembre de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas)”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. XI, 2011, pp. 561-591. “Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco vs México. Desaparición Forzada de Personas”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. X aniversario, 2012, pp. 421-459.

<sup>329</sup> Castilla, Karlos, “El control de convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de la sentencia del Caso Radilla Pacheco”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. XI, 2011, pp. 593-624.

<sup>330</sup> Pelayo Moller, Carlos María, “El proceso de creación e incorporación de los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas en México y su revisión por parte de Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. XII, 2012, pp. 959-1021.

<sup>331</sup> Aportación para la sistematización de los criterios de interpretación derivados de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencias en donde se encuentra involucrado el Estado mexicano) Caso Fernández Ortega y otros vs. México, julio de 2011.

el proceso penal que tramite en relación con la violación sexual de la señora Rosendo Cantú, con el fin de determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar, si así fuese, las sanciones y demás consecuencias que la ley prevea, de conformidad con lo establecido en los párrafos 211 a 213 de la Sentencia. Este caso fue analizado por el Comité de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales, del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación.<sup>332</sup>

7) *Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, mediante la cual se dispuso que el Estado debía continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura, así como fortalecer las capacidades institucionales del Estado mediante la capacitación de funcionarios de las Fuerzas Armadas sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que deben estar sometidos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 245 de la Sentencia. Este asunto fue estudiado por Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.<sup>333</sup>

8) *Caso Fernández Ortega y otros Vs. México*. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 224, a través de la que se desestimó la solicitud de interpretación

---

<sup>332</sup> Aportación para la sistematización de los criterios de interpretación derivados de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencias en donde se encuentra involucrado el Estado mexicano) Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, agosto de 2011. Disponible en: <http://goo.gl/JnK9W>.

<sup>333</sup> Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Voto razonado del Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México*, Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 26 de noviembre de 2010, pp. 23 y 24. Disponible en: [http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc\\_ferrer\\_220\\_esp.doc](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_ferrer_220_esp.doc); “Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad. A la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XLIV, núm. 131, mayo-agosto de 2011, pp. 952-954; “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, (coords.), *La reforma constitucional de los derechos humanos: Un nuevo paradigma*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, pp. 339-429; “El control difuso de convencionalidad en el Estado Constitucional”, en Fix Zamudio, Héctor y Valadés, Diego (coords.), *Formación y perspectivas del Estado en México*, UNAM-El Colegio Nacional, 2010, pp. 151-189.

de la Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas dictada el 30 de agosto de 2010 en los términos de los párrafos 25 al 36 del fallo.

9) Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 225, mediante la cual se desestimó la solicitud de interpretación de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas dictada el 31 de agosto de 2010 en los términos de los párrafos 25 al 36 del fallo.

10) Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 273, por medio de la que, se erigió un acuerdo de solución amistosa.<sup>334</sup>

Al tener en cuenta esta revisión subsidiaria, a manera de tercera instancia, en 2009 comienza de modo formal el enjuiciamiento constitucional por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, porque la observancia al derecho internacional de los derechos, se había comenzado a reconocer, meses antes de la sentencia del Caso Radilla Pacheco. Justamente, en observancia del referido enjuiciamiento, se han emitido tesis de jurisprudencia sobre la materia.<sup>335</sup>

Así, se estable en 2010, el reconocimiento de los efectos del enjuiciamiento subsidiario, esto a partir de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010, mediante la cual se creó la definición del control de convencionalidad en México o el control de convencionalidad *ex officio* (sin que nadie se lo pida) en un modelo de control difuso de constitucionalidad, a través de las tesis emitidas sobre el particular,<sup>336</sup> y que en realidad es el enjuiciamiento constitucional.

La publicación en 2011, del decreto de reforma constitucional,<sup>337</sup> “que implica un cambio sustancial al juicio de amparo,”<sup>338</sup> así como del Decreto en materia de derechos humanos, publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, el viernes 10 de

---

<sup>334</sup> Caso *García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 273, párr. 103.6.

<sup>335</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “El amparo local...” *op. cit.*, p. 216.

<sup>336</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 223-224.

<sup>337</sup> Disponible en: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011), consultado el 30 de diciembre de 2016.

<sup>338</sup> Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, *El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma constitucional y la nueva ley de amparo*, México, Porrúa, UNAM, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2013, p. 22.

junio de 2011, que estableció en el artículo 1 constitucional, un nuevo paradigma para el enjuiciamiento constitucional por determinar que todas las autoridades y no solo los jueces, en el ámbito de su competencia, lo deben ejercer; al tiempo que la referida reforma ordenó que dicho ejercicio atendiera el derecho constitucional e internacional de derechos humanos, esto con la visión de desarrollar siempre la tutela más amplia, con base en el derecho material del que se disponga, para resolver los conflictos particulares de los que conozcan todas las autoridades.

En 2013 se publicó el Decreto que emitió la ley de amparo vigente,<sup>339</sup> que tiende a observar el proverbio que el artículo 1 constitucional representa para la eficacia de los derechos fundamentales y para el orden fundamental en su conjunto, posiblemente equiparado a los sueños del artículo 171 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, para mantener vigente los mandatos básicos establecidos por el pueblo, disposición histórica que disponía: “Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los poderes supremos de la Federación y de los Estados”.<sup>340</sup>

En 2014, se emitió la reforma en materia política-electoral,<sup>341</sup> mediante el cual se establecieron las bases de los procesos constitucionales que solventan los conflictos constitucionales atinentes a los principios de equidad en la contienda y la aplicación imparcial de los recursos públicos, para la custodia de la configuración, representación y ejercicio del poder.

Así como, la reforma constitucional de 2016,<sup>342</sup> por medio del que se integra el *habeas data* en el artículo 6 constitucional, apartado V, fracciones III y VIII, párrafos cuatro y cinco, como proceso constitucional de la libertad que encauza a la eficacia de la protección datos personales o a la rectificación de estos.

---

<sup>339</sup> *Ibidem.*, p. 1.

<sup>340</sup> Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion-federal/historicos/1824.pdf>, consultado el 25 de enero de 2017.

<sup>341</sup> Disponible en: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014), consultado el 31 de diciembre de 2016.

<sup>342</sup> Disponible en: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016), consultado el 31 de diciembre de 2016.

De lo anterior se desprende una extensa producción histórica que ha encaminado a la realización de las normas fundamentales obtenida mediante el enjuiciamiento constitucional a través de procesos constitucionales de la libertad y orgánicos, a la luz del derecho procesal constitucional.

## II. LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES VIGENTES

### 1. *Acción de inconstitucionalidad*

La acción de inconstitucionalidad es el proceso constitucional orgánico que se dirige a la defensa de la configuración, representación y el ejercicio del poder.

Este proceso constitucional orgánico lo reserva el artículo 105 del orden fundamental. De dicho precepto se obtiene su funcionamiento y finalidad.

La acción de inconstitucionalidad es instada por:

1. El equivalente a 165 de los integrantes (33%) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;
2. El equivalente a 43 de los integrantes (33%) del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
3. El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;
4. El equivalente al 33% por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;
5. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;
6. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados



internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;

7. El organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales;

e

8. El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones.<sup>343</sup>

Al proceso en examen lo conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma presuntamente inconstitucional, previéndose un plazo calificado para las leyes electorales federal y locales, las cuales deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa días (naturales) antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no puede haber modificaciones legales fundamentales.

El funcionamiento detallado del proceso constitucional en examen es previsto en la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución

---

<sup>343</sup> Cfr. Artículo 105, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 5 de febrero de 2017. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_050217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_050217.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma publicada fue el 27 de enero de 2015, de las 4 existentes (1995, 1996, 2013 y 2015).<sup>344</sup>

La finalidad de la acción de inconstitucionalidad es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución, y de manera contingente la parte dogmática, mediante el enjuiciamiento del conflicto que plantee la no conformidad de una norma de carácter general con la ley fundamental de 1917.

## 2. Amparo

El amparo es el proceso constitucional de la libertad que se dirige a la defensa de los derechos fundamentales de las personas en los Estados Unidos Mexicanos, salvo los políticos-electorales.

Este proceso constitucional de la libertad lo reservan los artículos 103 y 107 del orden fundamental. Tales disposiciones constitucionales establecen su funcionamiento y finalidad.

El amparo es instado por el quejoso, entendiéndose por tal quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales reservados en la ley fundamental de 1917, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.<sup>345</sup>

El proceso en examen es conocido por los Tribunales de la Federación, que no sean electorales, de modo son autoridades competentes en este proceso los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito y las Salas como también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El funcionamiento pormenorizado del proceso constitucional en estudio es previsto en el artículo 107 constitucional, así como en la ley de amparo,

---

<sup>344</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfiyii\\_art105.htm](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfiyii_art105.htm), consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>345</sup> Cfr. Artículo 5, fracción I, ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 17 de junio de 2016. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp\\_170616.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_170616.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma fue publicada el 17 de junio de 2016, de las 4 existentes (2013, 2014, 2015 y 2016).<sup>346</sup>

La finalidad del amparo es dirigirse a la realización de la parte dogmática de la Constitución mediante el enjuiciamiento los conflictos suscitados:

1. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
2. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y
3. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.<sup>347</sup>

### *3. Amparo político-electoral*

El amparo político-electoral es el proceso constitucional de la libertad que encauza a la salvaguarda y custodia de los derechos políticos-electorales.

Este proceso constitucional de la libertad lo reserva el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, del orden fundamental. La disposición constitucional establece su funcionamiento y finalidad.

El amparo político-electoral es instado por los ciudadanos en contra de actos y resoluciones que violen presuntamente sus derechos político electorales de votar, ser votado y de afiliación libre así como pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la Constitución y las leyes.

---

<sup>346</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>347</sup> Cfr. Artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 5 de febrero de 2017. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_050217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_050217.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

De manera especial se establece que para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, debe haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, en esa virtud, la ley debe establecer las reglas y plazos aplicables.

El proceso en estudio es conocido por la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El funcionamiento detallado del proceso constitucional en análisis es previsto en ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, cuya última reforma fue publicada el 23 de mayo de 2014, de las 4 existentes (1996, 2008 y dos en 2014).<sup>348</sup> Se le asigna el *nomen iuris* de juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano y es identificado en la práctica con el acrónimo JDC.

La finalidad del amparo político-electoral es dirigirse a la realización de la parte dogmática de la Constitución mediante el enjuiciamiento los conflictos de derechos políticos-electorales cuando el ciudadano:

1. Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiese obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto;
2. Habiendo obtenido oportunamente el documento anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;
3. Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;
4. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos electorales federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión

---

<sup>348</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm>, consultado el 8 de febrero de 2017.

o apelación, según corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a solicitud de la Sala que sea competente, remitirá el expediente para que sea resuelto por esta, junto con el juicio promovido por el ciudadano;

5. Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política;

6. Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior;

7. Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aún cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable; y,<sup>349</sup>

8. Cualquier conflicto de derechos políticos-electorales.

#### *4. Controversia constitucional*

La controversia constitucional es el proceso constitucional orgánico que encauza a la defensa de la configuración, representación y ejercicio del poder.

Este proceso constitucional orgánico lo reserva el artículo 105 del orden fundamental. De dicho precepto se obtiene su funcionamiento y finalidad.

La controversia constitucional es instada por la entidad, poder u órgano que promueva el proceso, así como por el procurador general de la república.<sup>350</sup>

Al proceso en estudio lo conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

---

<sup>349</sup> Cfr. Artículo 80, párrafo 1, incisos a) a g) de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>350</sup> Cfr. Art. 10, fracciones I y IV, de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada el 27 de enero de 2015. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/205\\_270115.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/205_270115.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

El funcionamiento detallado del proceso constitucional en examen es previsto en la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma fue publicada el 27 de enero de 2015, de las 4 existentes (1995, 1996, 2013 y 2015).<sup>351</sup>

La finalidad de la controversia constitucional es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto de configuración del poder, que se presenten entre:

1. La Federación y una entidad federativa;
2. La Federación y un municipio;
3. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;
4. Una entidad federativa y otra;
5. Dos municipios de diversos Estados;
6. Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
7. Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
8. Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y
9. Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.<sup>352</sup>

---

<sup>351</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfiyii\\_art105.htm](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfiyii_art105.htm), consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>352</sup> Cfr. Artículo 105, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 5 de febrero de 2017. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_050217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_050217.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

## 5. *Facultad de investigación de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos*

La facultad de investigación de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos es el proceso constitucional de la libertad que encauza a la defensa de dichos derechos.

Este proceso constitucional de la libertad lo reserva el artículo 102, apartado B, último párrafo, del orden fundamental. De dicho precepto se obtiene su funcionamiento y finalidad.

Esta facultad es instada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las legislaturas de los estados.

Al proceso en estudio lo conoce la referida Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El funcionamiento detallado del proceso constitucional en examen es previsto en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya última reforma fue publicada el 27 de enero de 2017, de las 14 existentes (1992, 1998, 2001, tres en 2006, 2011, 2012, cuatro en 2013, 2014 y 2017).<sup>353</sup>

La finalidad de esta facultad es dirigirse a la realización de la parte dogmática de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto de violaciones graves de derechos fundamentales, emitiéndose al efecto determinaciones con el nombre de recomendaciones.

Como parte del proceso es que si se presenta la negativa para aceptar o cumplir las referidas recomendaciones, entonces la Comisión Nacional puede denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en dicha recomendación como responsables.<sup>354</sup>

---

<sup>353</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcndh.htm>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>354</sup> Cfr. Artículo 46, párrafo tercero, inciso d), de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 27 de enero de 2017.

## 6. *Habeas data*

El *habeas data* es el proceso constitucional de la libertad que encamina a la protección de los datos personales en las vertientes de su acceso, rectificación y cancelación.

Este proceso constitucional de la libertad lo reserva el artículo 6, apartado A, fracciones III y VIII, párrafos cuatro y cinco, y 16 párrafo segundo de la Constitución. Tales disposiciones constitucionales establecen su funcionamiento y finalidad.

El *habeas data* es instado por toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, quien tiene acceso gratuito a la rectificación de sus datos personales.

El proceso en estudio es conocido por un organismo autónomo, en términos del artículo 6, apartado A, fracción VIII de la Constitución, quien es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

La finalidad del *habeas data* es dirigirse a la realización de la parte dogmática de la Constitución mediante el enjuiciamiento de los conflictos suscitados por el acceso, la rectificación y la cancelación de datos personales de las personas.

## 7. *Juicio de revisión constitucional electoral*

El juicio de revisión constitucional electoral es el proceso constitucional orgánico que encamina a la protección de la configuración, representación y ejercicio del poder.

Este proceso constitucional orgánico lo reserva el artículo 99, párrafo cuarto, fracciones III y IV, del orden fundamental. De dicho precepto se obtiene su funcionamiento y finalidad.



El juicio de revisión constitucional electoral es instado por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos.<sup>355</sup>

Al proceso en estudio lo conoce la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en única instancia, en los términos previstos en la ley, tratándose de actos o resoluciones relativos a las elecciones de Gobernador y de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; así como la Sala Regional del referido Tribunal Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya cometido la presunta violación reclamada, en única instancia, cuando se trate de actos o resoluciones relativos a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, así como a la Legislatura de la Ciudad de México y titulares de Alcaldías en las demarcaciones territoriales de esa ciudad.

El funcionamiento detallado del proceso constitucional en análisis es previsto en ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, cuya última reforma fue publicada el 23 de mayo de 2014, de las 4 existentes (1996, 2008 y dos en 2014).<sup>356</sup> Se identifica en la práctica con el acrónimo *JRC*.

La finalidad del juicio de revisión constitucional electoral es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con la impugnación de actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, incluso las resoluciones que derivan de las sentencias de procedimientos especiales sancionadores de las entidades federativas,<sup>357</sup> que protegen los principios de equidad en la contienda y la aplicación imparcial de los recursos públicos.

---

<sup>355</sup> Cfr. artículo 88, párrafo 1, de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>356</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>357</sup> Cfr. Jurisprudencia 35/2016, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Quinta Época, con el texto: "Juicio de revisión constitucional electoral. Es el medio de impugnación procedente para que los partidos políticos controviertan las resoluciones que se emitan por los tribunales electorales de las entidades federativas dentro de los procedimientos sancionadores locales. De conformidad con lo previsto en los artículos 41, base VI; 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 86, de la Ley General del Sistema de Medios de

## 8. Juicio político

El juicio político es el proceso constitucional orgánico que encauza a la tutela de la configuración, representación y ejercicio del poder.

Este proceso constitucional orgánico lo reserva los artículos 110 y 114 del orden fundamental. De dichos preceptos se obtiene su funcionamiento y finalidad.

El juicio político es instado por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados presentes en sesión.

Al proceso en examen lo conoce la Cámara de Senadores erigida en jurado de sentencia.

En consecuencia, la cámara de diputados dicta declaraciones y la Cámara de Senadores emite resoluciones.

La finalidad del juicio político es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto que se presente por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

## 9. Procedimientos ordinario y especial sancionador

Los procedimientos ordinario y especial sancionador son los procesos constitucionales orgánicos que encaminan a la protección de la configuración, representación y ejercicio del poder, en lo atinente a los principios de equidad en la

---

Impugnación en Materia Electoral, el juicio de revisión constitucional electoral es el medio de impugnación excepcional y extraordinario al que sólo pueden acudir los partidos políticos, cuando ya no existan a su alcance recursos ordinarios aptos para modificar, revocar o anular actos o resoluciones de las autoridades de las entidades federativas, competentes para organizar y calificar los comicios locales, o resolver las controversias que surjan durante los mismos, el ámbito de protección que ofrece a los justiciables no se circunscribe a la defensa de derechos fundamentales frente a los actos y resoluciones de naturaleza jurisdiccional y que se emitan por los tribunales de las entidades federativas, sino que se trata de un auténtico medio de control constitucional que también obliga a las Salas de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a verificar la constitucionalidad y legalidad de las determinaciones de naturaleza administrativa electoral, cuando se carezca de un medio de control ordinario. Así, cuando el acto controvertido es formalmente jurisdiccional local por haberse emitido por un tribunal de una entidad federativa con competencia en materia electoral, pero es materialmente administrativo, en razón del objeto del acto -ya sea la emisión de un acuerdo, la resolución a un procedimiento sancionatorio o cualquier otro-, el juicio de revisión constitucional electoral constituye el medio de impugnación que se traduce en la vía de control constitucional apta para conocer de la controversia, y eventualmente para resolverla.”

contienda y la aplicación imparcial de los recursos públicos, establecidos en el 134 constitucional.

El proceso especial sancionador es reservado en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción VII, del orden fundamental; y el procedimiento ordinario sancionador es previsto en el artículo 41, base V, apartado B, inciso b), numeral 7 de la ley fundamental de 1917.

Estos procesos constitucionales son instados mediante denuncias de las personas y de los órganos del Instituto Nacional Electoral<sup>358</sup> o por los tribunales electorales, salvo la presunta comisión de conductas relacionadas con la difusión de propaganda que se considere calumniosa en el procedimiento especial sancionador, el cual es instando por la parte afectada,<sup>359</sup> pero dicha limitación en la práctica no es frecuentemente observada en atención al principio de acceso a la justicia.

Los procesos en estudio los conoce el Instituto Nacional Electoral, salvo la resolución del conflicto instado en el procedimiento especial sancionador, el cual es competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El funcionamiento pormenorizado de los procesos constitucionales en examen es previsto en la ley general de instituciones y procedimientos electorales, con última reforma publicada fue el 27 de enero de 2015, de las 3 existentes (2 en 2014 y 2017);<sup>360</sup> así como en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, con última reforma publicada fue el 23 de mayo de 2014, de las 4 existentes (1996, 2008 y dos en 2014).<sup>361</sup>

La finalidad del procedimiento ordinario sancionador es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la ley fundamental de 1917 mediante el enjuiciamiento de los

---

<sup>358</sup> Cfr. Artículos 464 y 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE\\_270117.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>359</sup> Cfr. Artículo 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE\\_270117.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>360</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe.htm>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>361</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm>, consultado el 8 de febrero de 2017.

conflictos relacionados con los principios de equidad en la contienda y la aplicación imparcial de recursos públicos.<sup>362</sup>

El fin del procedimiento especial sancionador es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento de los conflictos que violen la aplicación imparcial de los recursos públicos, impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público, contravengan las normas sobre propaganda política o electoral y constituyan actos anticipados de precampaña o campaña, a la luz de la concurrencia de tres elementos creados en la aplicación práctica de dicho proceso constitucional, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que son:

1. Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, así como sus militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos;
2. Un elemento temporal: que acontezcan antes, durante o después del procedimiento interno de selección de candidatos y previamente al registro constitucional de candidatos;
3. Un elemento subjetivo: que tengan el propósito fundamental de presentar la plataforma de un partido político o coalición o promover a un candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral.<sup>363</sup>

Ciertamente, con relación a este elemento, al ejercer el enjuiciamiento en una resolución emitida en un procedimiento especial sancionador local, el Tribunal Constitucional determinó que los actos anticipados de campaña en su elemento subjetivo, no sólo se actualizan en la hipótesis de difusión expresa de la plataforma electoral de los partidos políticos que competirán en la contienda electoral de que se trate, sino también mediante otro tipo de conductas, siempre

---

<sup>362</sup> Cfr. Artículos 464 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE\\_270117.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>363</sup> Cfr. Las sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP-RAP-64/2007 y SUP-RAP-66/2007 acumulados, SUP-RAP-15/2009 y SUP-RAP-16/2009 y SUP-REP-218/2015.

que tengan la intención o el objeto promover candidaturas para obtener el voto a favor en una elección y, eventualmente, un cargo de elección popular.<sup>364</sup>

Consiguientemente, para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña se refiere a la finalidad de su realización, es decir, cuando la materialización de este tipo de acciones tiene como propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano o a un partido para obtener la postulación a una candidatura o cargo de elección popular.<sup>365</sup>

En consecuencia, el Tribunal Constitucional indicó que la acreditación del elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, en ocasiones se da a partir de probar un hecho externamente observable o hecho material,<sup>366</sup> consistente en que cierto sujeto realizó una conducta o una acción mediante la cual solicitó expresamente los votos a favor o en contra de cierta plataforma política, partido o candidato, o bien, en aquellas conductas donde el llamamiento al voto no es expreso, sino *velado*, y en esas acciones cuya intención es posicionar a alguien o a un partido político, probar el elemento subjetivo implica *probar una intención o un ánimo o hecho interno o un hecho psíquico*.<sup>367</sup>

---

<sup>364</sup> Cfr. Así lo sostuvo el Tribunal Constitucional en las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JRC-5/2015 y SUP-REP-124/2015, SUP-REP-291/2015.

<sup>365</sup> Cfr. La sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-618/2015.

<sup>366</sup> Cfr. Con relación a esta afirmación en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-618/2015, se citó la siguiente criterio doctrinal: “el hecho material[...] está constituido por un evento del mundo físico o por un comportamiento que se traduce en actos materiales.” Michele Taruffo, *La prueba de los hechos*, trad. Jordi Ferrer Beltrán, Trotta, Madrid, 2002, p.159.

<sup>367</sup> El Tribunal Constitucional con relación a esta idea citó al profesor Michele Taruffo: “Se trata, esencialmente, de hechos que pertenecen a la esfera psicológica, sentimental o volitiva de determinados sujetos y consisten en sentimientos, valoraciones, *actitudes*, preferencias, intuiciones o *voluntades*. Para referirse a estos hechos [como ejemplo en el derecho] basta pensar en la voluntad y en sus respectivos vicios en el contrato, en la condición de buena fe o mala fe, en los innumerables casos en los que importa la culpa leve o la culpa grave, en los casos en los que importa el ‘conocimiento’ de algo (como por ejemplo, del estado de insolvencia del deudor a los efectos de la revocatoria), para tener docenas de supuestos en los que el hecho relevante es un ‘hechos psíquico’ interno a la esfera mental, cognitiva o emocional de algún sujeto” *Idem* (énfasis original).” Cfr. SUP-JRC-618/2015.

## 10. Queja ante comisiones de derechos humanos

La queja es el proceso constitucional de la libertad que encauza a la protección de los derechos fundamentales que ampara el orden jurídico mexicano.

Este proceso constitucional de la libertad lo reserva el artículo 102, apartado B, del orden fundamental. De dicho precepto se obtiene su funcionamiento y finalidad.

El proceso constitucional es instado mediante quejas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales.

Al proceso en estudio lo conoce los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El funcionamiento detallado del proceso constitucional en estudio es previsto en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con última reforma publicada el 27 de enero de 2017, de las 14 existentes (1992, 1998, 2001, tres en 2006, 2011, 2012, cuatro en 2013, 2014 y 2017),<sup>368</sup> y en las leyes sobre la materia de las entidades federativas.

La finalidad de la queja es dirigirse a la realización de la parte dogmática de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto derivado de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos, emitiéndose al efecto recomendaciones.

Como parte del proceso es que si se presenta la negativa para aceptar o cumplir las referidas recomendaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en dicha recomendación como responsables.<sup>369</sup>

---

<sup>368</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcndh.htm>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>369</sup> Cfr. Artículo 46, párrafo tercero, inciso d), de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 27 de enero de 2017. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47\\_270117.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47_270117.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

11. *Recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y juicio electoral*

Recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y juicio electoral son procesos constitucionales orgánicos, previstos en el artículo 99 en relación con el artículo 3.2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se dirigen a la defensa de la configuración, representación y ejercicio del poder.

El funcionamiento pormenorizado de los procesos constitucionales en estudio es previsto en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, con última reforma publicada el 23 de mayo de 2014, de las 4 existentes (1996, 2008 y dos en 2014).<sup>370</sup>

La finalidad de estos procesos es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento de los siguientes conflictos:

1. El recurso de revisión se insta para impugnar:

A. Los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva, y que provengan del Secretario Ejecutivo y de los órganos colegiados del Instituto Nacional Electoral a nivel distrital y local, cuando no sean de vigilancia, durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales y dentro de un proceso electoral exclusivamente en la etapa de preparación de la elección.<sup>371</sup>

B. Los actos o resoluciones de los órganos del Instituto Nacional Electoral que causen un perjuicio real al interés jurídico del partido político recurrente, cuya naturaleza sea diversa a los que puedan recurrirse por las vías de

---

<sup>370</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>371</sup> Cfr. Artículo 35, párrafo 1, de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf>, consultado el 8 de febrero de 2017.

inconformidad y reconsideración, y que no guarden relación con el proceso electoral y los resultados del mismo, el cual es resuelto por la Junta Ejecutiva o el Consejo del Instituto Nacional Electoral jerárquicamente superior al órgano que haya dictado el acto o resolución impugnado, durante el proceso electoral, en la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones.<sup>372</sup>

2. El recurso de apelación se insta para impugnar:

A. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión y los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Instituto Nacional Electoral que no sean impugnables a través del recurso de revisión y que causen un perjuicio al partido político o agrupación política con registro, que teniendo interés jurídico lo promueva, durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales y durante la etapa de preparación del proceso electoral federal o de consulta popular.<sup>373</sup>

B. Las resoluciones de la Junta Ejecutiva o el Consejo del Instituto Nacional Electoral que recaigan a los recursos de revisión,<sup>374</sup> en la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones.

3. El juicio de inconformidad se insta para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, en los términos señalados por la ley, durante el proceso

---

<sup>372</sup> Cfr. Artículo 35, párrafo 2, de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>373</sup> Cfr. Artículo 40, párrafo 1, incisos a) y b) de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>374</sup> Cfr. Artículo 40, párrafo 2, incisos a) y b) de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf>, consultado el 8 de febrero de 2017.



electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez.<sup>375</sup>

4. El recurso de reconsideración se insta para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en el ordenamiento; y en los demás procesos constitucionales de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.<sup>376</sup>

5. El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador se insta contra las sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral en este proceso constitucional; las medidas cautelares que emita el Instituto Nacional Electoral relacionadas con las transmisiones en radio y televisión; y, el desechamiento de la denuncia que emita dicho Instituto.<sup>377</sup>

6. El juicio electoral es un proceso creado bajo la iluminación del principio de acceso a la justicia, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a manera de un proceso constitucional *viviente*,<sup>378</sup> y se insta

---

<sup>375</sup> Cfr. Artículo 49, párrafo 1, de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>376</sup> Cfr. Artículo 61, párrafo 1, incisos a) a c) de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>377</sup> Cfr. Artículo 109, párrafo 1, incisos a) y b) de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<sup>378</sup> Cfr. Concepto de “Constitución viviente” la cual elabora: “... respuestas jurídicas constitucionales conforme a las necesidades del presente y a las valoraciones y creencias de la

en cualquier tipo de conflictos relacionados con la representación, configuración y ejercicio del poder en la materia, por ejemplo para impugnar la afectación de intereses patrimoniales de las autoridades administrativas electorales,<sup>379</sup> siempre y cuando no correspondan al “derecho parlamentario”.<sup>380</sup>

## 12. *Desaparición del poder en las entidades federativas*

La desaparición del poder en las entidades federativas es el proceso constitucional orgánico que encauza a la tutela de la configuración, representación y ejercicio del poder.

Este proceso constitucional orgánico lo reserva artículo 76, fracción V, del orden fundamental. De dicho precepto se obtiene su funcionamiento y finalidad.

El proceso es instado por senadores, diputados federales o por ciudadanos de la entidad federativa en la que se señale la existencia del conflicto constitucional.<sup>381</sup>

Al proceso en examen lo conoce la Cámara de Senadores, quien si lo estima pertinente y una vez que se haya recibido la petición, la envía a la Comisión correspondiente para que formule el dictamen respectivo para sustentar la resolución que es su caso determine que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado y se realice la declaratoria de para nombrar un gobernador provisional.<sup>382</sup>

El funcionamiento pormenorizado del proceso constitucional en examen es previsto en la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución

---

sociedad actual.” Sagües, Néstor Pedro, *La constitución bajo tensión*, México, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2016, p. 27.

<sup>379</sup> Cfr. Sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en el expediente SM-JE-1/2017 y acumulados.

<sup>380</sup> Cfr. Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-176/2017 y acumulado.

<sup>381</sup> Cfr. Artículos 3 de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/202.pdf>, consultado el 9 de febrero de 2017.

<sup>382</sup> Cfr. Artículos 1 y 3 de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/202.pdf>, consultado el 9 de febrero de 2017.

General de la República, que fue publicada el 29 de diciembre de 1978, la cual no tiene reformas.<sup>383</sup>

La finalidad de la desaparición del poder en las entidades federativas es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto que se presente si se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales:

- I. Quebrantaren los principios del régimen federal;
- II. Abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; y,
- III. Estuviesen imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico;
- IV. Prorroguen su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.
- V. Promuevan o adopten una forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en la ley fundamental de 1917.<sup>384</sup>

### 13. Cuestión política

La cuestión política es el proceso constitucional orgánico que encauza a la tutela de la configuración, representación y ejercicio del poder.

Este proceso constitucional orgánico lo reserva artículo 76, fracción VI, del orden fundamental. De dicho precepto se obtiene su funcionamiento y finalidad.

---

<sup>383</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfv\\_art76.htm](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfv_art76.htm), consultado el 9 de febrero de 2017.

<sup>384</sup> Cfr. Artículo 2 de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/202.pdf>, consultado el 9 de febrero de 2017.

Dicho proceso es instado por los órganos de poder del estado y por la Cámara de Senadores con motivo de que los referidos órganos se valgan de la fuerza pública en contra de otro, tengan lugar hechos de violencia o haya riesgos de que ello suceda. En la instancia que corresponde a la Cámara de Senadores basta que un ciudadano lo haga del conocimiento de la propia Cámara y no es necesario cubrir alguna formalidad.<sup>385</sup>

Al proceso en análisis lo conoce la Cámara de Senadores, quien debe aplicar en el proceso las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado al que pertenezcan los poderes en conflicto, la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.<sup>386</sup>

El funcionamiento detallado del proceso constitucional en estudio es previsto en la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue publicada el 31 de agosto de 2007, la cual no tiene reformas.<sup>387</sup>

La finalidad de la cuestión política es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento, salvo lo previstos en ley,<sup>388</sup> de los conflictos relativos a:

---

<sup>385</sup> Cfr. Artículo 5 de la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRArt76\\_fracVI.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRArt76_fracVI.pdf), consultado el 9 de febrero de 2017.

<sup>386</sup> Cfr. Artículo 4 de la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRArt76\\_fracVI.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRArt76_fracVI.pdf), consultado el 9 de febrero de 2017.

<sup>387</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrart76\\_fracvi.htm](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrart76_fracvi.htm), consultado el 9 de febrero de 2017.

<sup>388</sup> Dentro del enjuiciamiento del proceso no se conocen los conflictos relativos al proceso de controversia constitucional; los casos en que la cuestión política se dé entre poderes de un Estado y otro, o entre los poderes de un Estado y las autoridades de la Ciudad de México; cuestiones Políticas que surjan entre a) Autoridades de la Ciudad de México; b) ayuntamientos y poderes de un Estado; c) Ayuntamientos de un Estado; d) Ayuntamientos de un Estado y poderes o ayuntamientos de otro, y e) Autoridades de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales; Los conflictos previstos en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, Las cuestiones que, por cualquier vía, se hayan planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que ella decline su conocimiento.

1. Las diferencias políticas que surjan entre los poderes de un Estado y que alteren, obstaculicen o impidan el legal y correcto ejercicio de las atribuciones de uno de ellos;
2. La falta de colaboración, coordinación o complementación a lo que obligan los principios legales que regulan la división de poderes y que estos se muestren incapaces de solucionar;
3. Las expresiones que en forma pública y reiterada formule un poder respecto de otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su autoridad;
4. El enfrentamiento físico entre los titulares o integrantes de los poderes, aunque este no interrumpa el orden constitucional;
5. Los hechos de violencia del tipo que sea, de un poder hacia otro, que pudieran alterar o interrumpir el orden constitucional local o el ejercicio de sus respectivas funciones, y
6. En general, todos los actos o hechos que un poder estatal realice o se abstenga de hacer, en perjuicio de otro u otros.<sup>389</sup>

Es importante mencionar que la cuestión política tiene el presupuesto procesal consistente en que solo puede iniciarse por la inexistencia de recurso, vía o instancia jurisdiccional que resuelva los conflictos mencionados anteriormente, por lo que la Cámara de Senadores se convierte en una autoridad “hegemónica” para la defensa de la representación, configuración y representación del poder contenido en la Constitución,<sup>390</sup> a la luz de la competencia de esta autoridad para conocer de las cuestiones que, por cualquier vía, se hayan planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que haya declinado su conocimiento, supuesto que también pudiese ser aplicado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes por contar con el carácter subyacente de ser Tribunales

---

<sup>389</sup> Cfr. Artículo 3, fracciones I a VI de la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRArt76\\_fracVI.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRArt76_fracVI.pdf), consultado el 9 de febrero de 2017.

<sup>390</sup> Cfr. Artículo 3, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/202.pdf>, consultado el 9 de febrero de 2017.

Constitucionales, la ley fundamental de 1917 ha determinado que sus decisiones son definitivas e inatacables.<sup>391</sup>

Ciertamente y desde nuestra perspectiva, la cuestión política si puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional para asegurar el cumplimiento de las ideas de la teoría general del proceso constitucional.

#### 14. *Límite territorial*

El límite territorial es el proceso constitucional orgánico que encauza a la tutela de la representación, configuración y ejercicio del poder.

Este proceso constitucional orgánico lo reserva artículo 76, fracción X, del orden fundamental. De dicho precepto se obtiene su funcionamiento y finalidad.

El proceso constitucional de límite territorial es instado por las entidades federativas. Al proceso en examen lo conoce la Cámara de Senadores.

La finalidad del límite territorial es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto que se presente por límites territoriales, sin perjuicio que su determinación consiste únicamente en autorizar un decreto por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión de la Cámara, de los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas.

Se considera pertinente que la ejecución de tal convenio o la resolución ante la inexistencia de la solución autocompositiva, sea un estadio del proceso constitucional de límite territorial, porque mediante la resolución de este conflicto constitucional "... se harían vigentes derechos tales como los de propiedad, de seguridad jurídica y a los servicios públicos, e inclusive los derechos político-electorales, que están en riesgo debido a la existencia de conflictos entre municipios, entidades federativas, provincias, comunidades autónomas o naciones."<sup>392</sup>

---

<sup>391</sup> Cfr. Artículos 94, 99, párrafo cuarto, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

<sup>392</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, "Los jueces constitucionales y la resolución de los límites territoriales", *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, México, Porrúa, núm. 16, julio-diciembre 2011, p. 240.

## 15. *Procedimiento de remoción de las personas a cargo de las consejerías electorales de los organismos públicos electorales*

El procedimiento de remoción de las personas a cargo de las consejerías electorales de los organismos públicos electorales es el proceso constitucional orgánico que encauza a la defensa de la configuración y ejercicio del poder.

Este proceso constitucional orgánico lo reserva artículo 41, base V, Apartado C, último párrafo, del orden fundamental. De dicho precepto se obtiene su finalidad.

El procedimiento de remoción es instado por partidos políticos, personas físicas o jurídico colectivas, así como por órganos o funcionarios del Instituto Nacional Electoral.<sup>393</sup>

Al proceso en estudio lo conoce la Secretaría Ejecutiva, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (instrucción) y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (resolución).

El funcionamiento detallado del proceso constitucional en estudio es previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con tres reformas (dos en 2014 y 2017);<sup>394</sup> así como el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 11 de marzo de 2015, mediante el Acuerdo INE/CG86/2015.<sup>395</sup>

Como parte de su funcionamiento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dispuso que el emplazamiento es la primera y más

---

<sup>393</sup> Cfr. Artículo 37, párrafo 1, fracciones I y II, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales. Disponible en: [http://norma.ine.mx/documents/27912/1351278/2015\\_Reglamento\\_designacion\\_remocion.pdf/318ed601-19a2-4723-97e6-80320542abd2](http://norma.ine.mx/documents/27912/1351278/2015_Reglamento_designacion_remocion.pdf/318ed601-19a2-4723-97e6-80320542abd2), consultado el 9 de febrero de 2017.

<sup>394</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe.htm>, consultado el 9 de febrero de 2017.

<sup>395</sup> Cfr. Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales. Disponible en: [http://norma.ine.mx/documents/27912/1351278/2015\\_Reglamento\\_designacion\\_remocion.pdf/318ed601-19a2-4723-97e6-80320542abd2](http://norma.ine.mx/documents/27912/1351278/2015_Reglamento_designacion_remocion.pdf/318ed601-19a2-4723-97e6-80320542abd2), consultado el 9 de febrero de 2017.

importante formalidad que debe cumplir la autoridad en los procesos que imponen sanción.<sup>396</sup>

La finalidad del procedimiento de remoción de consejeros electorales es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto que se presente ante la denuncia contra los referidos consejeros, por incurrir en alguna de las siguientes causas graves:

1. Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;
2. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;
3. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;
4. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes;
5. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no haberse excusado del mismo;
6. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo, y
7. Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso se considera violación grave aquella que dañe los principios rectores de la elección de que se trate.<sup>397</sup>

---

<sup>396</sup> Cfr. Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-502/2016, el 2 de noviembre de 2016.

<sup>397</sup> Cfr. Artículo 102, párrafo 2, incisos a) a g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE\\_270117.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf), consultado el 9 de febrero de 2017.



## 16. Constitución y registro de partidos políticos nacionales y locales

La constitución y registro de partidos políticos nacionales y locales es el proceso constitucional de la libertad que encauza a la protección de los derechos político-electorales de derecho de afiliación y asociación política de los artículos 9, párrafo primero y 35, fracción III, de la ley fundamental de 1917.

Este proceso constitucional orgánico lo reserva artículo 41, base I, primer párrafo del orden fundamental. De dicho precepto se obtiene su finalidad.

La constitución y registro de partidos políticos nacionales y locales es instado por organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos.<sup>398</sup>

Al proceso en estudio lo conoce el Instituto Nacional Electoral con relación a partidos políticos nacionales y los Organismos Públicos Locales con relación a los partidos políticos de las entidades federativas.

El funcionamiento del proceso constitucional en examen es previsto en la Ley General de Partidos Políticos, con dos reformas en 2014;<sup>399</sup> así como, en el “Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin” del Instituto Nacional Electoral;<sup>400</sup> y, a manera de ejemplo, en los “Lineamientos que deberán observarse para la constitución y registro de los partidos políticos locales en el Estado de Querétaro”, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el 20 de mayo de 2016.<sup>401</sup>

---

<sup>398</sup> Cfr. Artículo 37, párrafo 1, fracciones I y II, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales. Disponible en: [http://norma.ine.mx/documents/27912/1351278/2015\\_Reglamento\\_designacion\\_remocion.pdf/318ed601-19a2-4723-97e6-80320542abd2](http://norma.ine.mx/documents/27912/1351278/2015_Reglamento_designacion_remocion.pdf/318ed601-19a2-4723-97e6-80320542abd2), consultado el 9 de febrero de 2017.

<sup>399</sup> Cfr. Información de leyes federales vigentes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpp.htm>, consultado el 9 de febrero de 2017.

<sup>400</sup> Disponible en: <http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-PartidosPoliticosFormacion/PPEnFormacion-docs/Instructivo-RegPartidosPoliticos.pdf>, consultado el 9 de febrero de 2017.

<sup>401</sup> Disponible en: [http://www.ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos/a\\_20\\_May\\_2016\\_2.pdf](http://www.ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos/a_20_May_2016_2.pdf), consultado el 9 de febrero de 2017.

La Sala Superior del Tribunal Electoral ha determinado el funcionamiento<sup>402</sup> de este proceso constitucional de la libertad, mediante las siguientes tesis jurisprudenciales:

1. Jurisprudencia 3/2013. Registro de partidos o agrupaciones políticas. Garantía de audiencia;
2. Tesis LXXXI/2015. Partidos políticos nacionales. Requisitos que deben satisfacer para obtener el registro como partidos políticos estatales cuando han perdido aquel carácter (legislación del estado de México);
3. Tesis XXXI/2012. Comunidades indígenas. Debe maximizarse el derecho de asociación en el procedimiento de registro de partidos políticos.
4. Tesis LXXII/2002. Financiamiento público estatal. Forma en que se otorga a los partidos que hayan obtenido su registro con posterioridad a la última elección (legislación del estado de Nuevo León);
5. Tesis XXXVI/99. Partidos políticos. Su registro tiene carácter constitutivo;
6. Tesis I/97. Registro de partido político. Negativa implícita;
7. Jurisprudencia 41/2014. Interpretación de estatutos partidistas conforme con la constitución. Facultad de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ordenar la inserción en las publicaciones estatutarias del alcance o sentido de la norma;
8. Jurisprudencia 34/2010. Emblema de partidos políticos y coaliciones. Concepto;

---

<sup>402</sup> Un ejemplo del proceso de constitución y registro de partido político local se ubica en la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitida en el expediente SUP-JDC-153/2015, el 25 de enero de 2015. Disponible en: [http://www.te.gob.mx/Informacion\\_judiccial/sesion\\_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0153-2015.pdf](http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0153-2015.pdf). Consultado el 9 de febrero de 2017. Con relación al Análisis de los documentos básicos (declaración de principios, programa de acción y estatutos) para la constitución de un partido local, consúltense las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-995/2015, SUP-JDC-153/2015, SUP-JDC-2708/2014, SUP-JDC-2173/2014, SUP-JDC-425/2014, SUP-JDC-805/2013, SUP-JDC-84/2013, SUP-JDC-3218-2012 y SUP-JDC-3134/2012. Información contenida en el oficio TEPJF-P-CCD/027/2016, de 6 de abril de 2016, del Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disponible en: [http://www.ieceq.mx/contenido/micro/2016/pplqro/archivos/criterios\\_jurisprudencias\\_TEPJF.pdf](http://www.ieceq.mx/contenido/micro/2016/pplqro/archivos/criterios_jurisprudencias_TEPJF.pdf), consultado el 9 de febrero de 2017.

9. Jurisprudencia 6/2010. Reforma al estatuto de los partidos políticos. Su vigencia inicia después de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*;
10. Jurisprudencia 3/2005. Estatutos de los partidos políticos. Elementos mínimos para considerarlos democráticos;
11. Jurisprudencia 14/2003. Emblema de los partidos políticos. Sus colores y demás elementos separados, no generan derechos exclusivos para el que los registró;
12. Jurisprudencia 11/2001. Estatutos de los partidos políticos. Surten sus efectos mientras no sea declarada su nulidad
13. Tesis IX/2012. Documentos básicos de los partidos políticos. Sus modificaciones rigen su vida interna desde su aprobación por el órgano partidista correspondiente
14. Tesis IX/2005. Estatutos de los partidos políticos. Es admisible su interpretación conforme;
15. Tesis VIII/2005. Estatutos de los partidos políticos. El control de su constitucionalidad y legalidad debe armonizar el derecho de asociación de los ciudadanos y la libertad de autoorganización de los institutos políticos.
16. Tesis IX/2003. Estatutos de los partidos políticos. Su violación contraviene la ley;
17. Tesis LXII/2002. Emblema de un partido político. Su objeto jurídico;
18. Tesis XXXII/2001. Partidos políticos nacionales. Se rigen preponderantemente por la constitución y leyes federales;
19. Tesis XXIV/99. Estatutos de los partidos políticos. Corresponde a la autoridad electoral local adoptar las medidas necesarias a efecto de subsanar sus deficiencias (legislación del estado de Morelos).<sup>403</sup>

La finalidad de la constitución y registro de partidos políticos nacionales y locales es dirigirse a la realización de la parte dogmática del orden fundamental

---

<sup>403</sup> Información contenida en el oficio TEPJF-P-CCD/027/2016, de 6 de abril de 2016, del Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disponible en: [http://www.ieeq.mx/contenido/micro/2016/pplqro/archivos/criterios\\_jurisprudencias\\_TEPJF.pdf](http://www.ieeq.mx/contenido/micro/2016/pplqro/archivos/criterios_jurisprudencias_TEPJF.pdf), consultado el 9 de febrero de 2017.

mediante el enjuiciamiento del conflicto que nace de la solicitud de constitución de partidos políticos, con fundamento en los derechos político-electorales de asociación y afiliación de los ciudadanos, así como la subordinación de sus documentos básicos (declaración de principios, programa de acción y estatutos) a la supremacía del orden fundamental.

#### *17. Responsabilidad administrativa y hechos de corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción*

La responsabilidad administrativa y hechos de corrupción es el proceso constitucional orgánico que se dirige a la defensa de la configuración y el ejercicio del poder.

Este proceso constitucional orgánico lo reserva el artículo 113 del orden fundamental. De dicho precepto se obtiene su funcionamiento y finalidad.

La responsabilidad administrativa y hechos de corrupción es instada por denuncia que se dirija a prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción de las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

Al proceso en examen lo conoce, en el ámbito de sus competencias, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los sistemas locales anticorrupción en las entidades federativas.

La finalidad de la responsabilidad administrativa y hechos de corrupción es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto que plantee la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, emitiéndose al efecto recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.

## 18. *Proceso penal*

El proceso penal es el proceso constitucional de la libertad que se dirige a la tutela de derechos fundamentales por daños que le son causados a través de delitos.

Este proceso constitucional de la libertad lo reserva los artículos 16, 20 y 21 del orden fundamental. De dichos preceptos se obtiene su funcionamiento y finalidad.

El proceso penal es instado por el Ministerio Público y los particulares, en este último supuesto, la ley determina los casos en que se puede instar el proceso ante la autoridad.

Al proceso en examen lo conoce el Ministerio Público en cuanto a la investigación de los delitos y los jueces para resolver el conflicto penal.

La finalidad del proceso penal es dirigirse a la realización de la parte dogmática de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto que tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

## 19. *Procedimiento individual, colectivo o intersindical de los trabajadores de los Poderes de la Unión*

El procedimiento individual, colectivo o intersindical de los trabajadores de los Poderes de la Unión es el proceso constitucional de la libertad que se dirige a la defensa de los derechos fundamentales de estos trabajadores.

Este proceso constitucional de la libertad lo reserva el artículo 123 apartado B, fracciones XI (sic 05-12-1960) y XII del orden fundamental. De dichos preceptos se obtiene su funcionamiento y finalidad.

El proceso constitucional es instado por los trabajadores de los Poderes de la Unión de manera individual, colecta o intersindical.

Al proceso en examen lo conoce el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

La finalidad del procedimiento individual, colectivo o intersindical de los trabajadores de los Poderes de la Unión es dirigirse a la realización de la parte dogmática de la Constitución mediante el enjuiciamiento de los conflictos individuales,

colectivos o intersindicales de los trabajadores de los Poderes de la Unión, por haber sido ser suspendidos o cesados de su empleo por presunta causa injustificada, en los términos que fije la ley, y de comprobarse esta causa, tienen derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tienen derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley. También se enjuicia en este proceso los conflictos que refiere el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución, que establece cuales son de competencia exclusiva de la autoridad federal.

*20. Proceso de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo*

El proceso de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo es el proceso constitucional de la libertad que se dirige a la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores que no son de los Poderes de la Unión.

Este proceso constitucional de la libertad lo reserva el artículo 123 apartado A, fracciones XX, XXI y XXII del orden fundamental. De dichos preceptos se obtiene su funcionamiento y finalidad.

El proceso es instado por los trabajadores que no son de los Poderes de la Unión.

Al proceso en examen lo conoce la Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno.

La finalidad del proceso de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo es dirigirse a la realización de la parte dogmática de la Constitución mediante el enjuiciamiento de los conflictos de los trabajadores que no son de los Poderes de la Unión, estableciéndose las siguientes previsiones:

1. Si el patrono se niega a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se termina el contrato de trabajo y queda obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no es aplicable en los casos de las acciones mencionadas enseguida con el número 2. Si la negativa fuere de los trabajadores, se termina el contrato de trabajo.
2. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, está obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley debe determinar los casos en que el patrono puede ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tiene la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no puede eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él.

## *21. Proceso de fiscalización de recursos federales*

El proceso de fiscalización de recursos federales es el proceso constitucional orgánico que se dirige a la defensa del ejercicio del poder.

Este proceso constitucional orgánico lo reserva el artículo 79, párrafo quinto, fracciones III y IV, del orden fundamental. De dichos preceptos se obtiene su funcionamiento y finalidad.

El proceso es instado por la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Al proceso en examen lo conoce la Auditoría indicada quien investiga los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectúa

visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos.

De modo que, derivado de estas investigaciones la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados insta las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en términos del orden fundamental, a los servidores públicos de los estados, municipios, de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares.

La finalidad del proceso de fiscalización de recursos federales es dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales.

## *22. Proceso de justicia cívica e itinerante*

El proceso de justicia cívica e itinerante es previsto por el artículo 73, fracción XXIX-Z, del orden fundamental y el artículo séptimo transitorio del “Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles”, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 5 de febrero de 1917.

El transitorio de referencia dispone que la ley general en materia de justicia cívica e itinerante a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Z de la Constitución debe considerar, al menos lo siguiente: a) Los principios a los que deben sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos; b) las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades federativas, y c) Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e



itinerante y la obligación de las autoridades de cumplir con los principios previstos por la ley.

Asimismo, el referido artículo transitorio dispone que las legislaturas de las entidades federativas deben proveer de los recursos necesarios para cumplir con lo dispuesto en el proceso de justicia cívica e itinerante,

Al ser instado por los ciudadanos puede considerarse que el proceso de justicia cívica e itinerante es un proceso constitucional de la libertad.

### *23. Proceso laboral de servidores electorales en materia federal*

El proceso laboral de servidores electorales en materia federal es el proceso constitucional de la libertad que se dirige a la defensa de los derechos fundamentales de dichos servidores.

Este proceso constitucional de la libertad lo reserva el artículo 99, párrafo cuarto, fracciones VI y VII, del orden fundamental. De dichos preceptos se obtiene su funcionamiento y finalidad.

El proceso es instado por los servidores electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En tales términos, el artículo 94 de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, a dicho proceso lo denomina juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral, y en la aplicación práctica se identifica con el acrónimo JLI.

En esa virtud, el referido artículo menciona que son competentes para resolverlo: a) La Sala Superior del Tribunal Electoral, en los casos de conflictos o diferencias laborales entre los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral y sus servidores, y b) La Sala Regional del Tribunal Electoral, en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, en los casos de conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, distintos a los señalados en el inciso anterior.

#### *24. Justicia agraria*

La justicia agraria es el proceso constitucional de la libertad es previsto en el artículo constitucional 27, párrafo diez, fracción XIX, el cual tiene la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad.

#### *25. Proceso de registro de candidaturas para ser votadas en todos los cargos de elección popular*

El proceso de registro de candidatos para ser votado para todos los cargos de elección popular es el proceso constitucional de la libertad que se dirige a la defensa de los derechos fundamentales y es previsto en el artículo constitucional 35, fracción II. Solo puede instarlo los partidos políticos o las personas por medio de candidaturas independientes siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

#### *26. Conflicto o diferencia laboral entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su personal*

El conflicto o diferencia laboral entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus servidores es el proceso constitucional de la libertad que se dirige a la defensa de los derechos fundamentales de tales servidores, y tiene sustento en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso d), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 131 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la práctica se le identifica con el acrónimo *CLT*.<sup>404</sup>

---

<sup>404</sup> Cfr. Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-CLT-2/2015.

## 27. *Proceso ante la Corte Penal Internacional (subsidiario)*

El proceso ante la Corte Penal Internacional está previsto en el artículo constitucional 21 párrafo octavo en los siguientes términos: “El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.”<sup>405</sup> Esta disposición vulneraría la idea de la teoría general del proceso constitucional relativa a los tribunales previos y tiene un carácter subsidiario.

## 28. *Ideas para una teoría general del proceso constitucional*

A manera de establecer una primera aproximación sobre la teoría general del proceso constitucional, se indica que los principios y conceptos comunes al enjuiciamiento ejercido en los procesos constitucionales vigentes de la ley fundamental de 1917, están previstos en su parte dogmática,<sup>406</sup> e invariablemente dichos principios conforman los estadios de los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos analizados en el capítulo.

Las ideas para la teoría indicada puede tener finalidad semejante que la *teoría general del proceso* del maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo quien mencionó que su misión es “... la de suministrar *orientaciones metodológicas y didácticas* para la mejor enseñanza y estudio del Derecho Procesal: sistemática de los programas, método expositivo, fraccionamiento de la disciplina en ramas, tiempo que debe consagrarse a cada una, organización del aprendizaje práctico del proceso, formación y reclutamiento de los procesalistas, etc. (énfasis original).”<sup>407</sup>

Los principios y conceptos comunes al enjuiciamiento de la Constitución ejercido en los procesos constitucionales vigentes son:

---

<sup>405</sup> Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_240217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf), consultado el 13 de mayo de 2017.

<sup>406</sup> Cfr. “La teoría de la inconstitucionalidad de la ley procesal”, Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho procesal civil*, 3a. ed., Buenos Aires, Roque Depalma Editor, 1999, pp. 152-161.

<sup>407</sup> Cfr. Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1a. reimp. 1992, t. I, p. 519.

1. A ninguna ley se dé efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna (artículo 14 constitucional);
2. Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante proceso seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumpla el debido proceso y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho (artículo 14 constitucional);
3. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del proceso (artículo 16 constitucional);
4. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil (artículo 17 constitucional);
5. Ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho (artículo 17 constitucional);
6. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio debe ser gratuito, queda, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Sin perjuicio de que se prevean mecanismos alternativos de solución de controversias (artículo 17 constitucional).
7. Las leyes federales y locales deben establecer los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y las autoridades (1 constitucional) como también la plena ejecución de sus resoluciones (artículo 17 constitucional), porque para el procesalismo: “la máxima experiencia del proceso se concreta indudablemente en la independencia de los jueces (y autoridades).”<sup>408</sup>
8. En los procesos del orden penal y administrativo queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena o sanción alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito o infracción de que se trata (artículo 14 constitucional).

---

<sup>408</sup> Satta, *Il mistero del processo*, Padova, 1984, p. 286. Cfr. Alcalá- Zamora y Castillo, Niceto, *Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1a. reimp. 1992, t. I, p. 410.

9. En los procesos constitucionales, la sentencia definitiva debe ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se debe fundamentar en los principios generales del derecho (artículo 14 constitucional).

10. En todos los procesos constitucionales, los derechos fundamentales se deben interpretar de conformidad con la Constitución y con los instrumentos internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (artículo 1 constitucional).

11. Ningún proceso debe tener más de tres instancias (artículo 23 constitucional).

12. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito o infracción administrativa, ya sea que en el proceso se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia (artículo 23 constitucional).

De lo anterior se obtienen los principios y conceptos comunes al enjuiciamiento ejercido en los procesos constitucionales vigentes en la ley fundamental de 1917, e invariablemente dichos principios y conceptos integran los estadios de los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos.

### III. SISTEMATIZACIÓN

Con la advertencia de que ciertos procesos constitucionales vigentes se pudieran integrar a otros, a efecto de cumplir con el principio de la plena ejecución de las resoluciones que pone fin a los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos de la ley fundamental de 1917, y que tal integración tendría que ser realizado por procesalistas en su función de legisladores constitucionales, enseguida se realiza la sistematización del objeto de estudio.<sup>409</sup>

---

<sup>409</sup> Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, *Introducción al derecho procesal constitucional*, México, FUNDAP, 2002, p. 115.

1. *Los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos vigentes en la ley fundamental de 1917*

Los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos vigentes en el amanecer del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son:

IDEAS PARA LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO CONSTITUCIONAL	
Procesos constitucionales de la libertad	Procesos constitucionales orgánicos
1. Amparo	1. Acción de inconstitucionalidad
2. Amparo político-electoral	2. Controversia constitucional
3. Facultad de investigación de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos	3. Juicio de revisión constitucional electoral
4. Habeas data	4. Juicio político
5. Queja ante comisiones de derechos humanos	5. Procedimientos ordinario y especial sancionador
6. Constitución y registro de partidos políticos nacionales y locales	6. Recurso de revisión
7. Proceso penal	7. Recurso de apelación
8. Procedimiento individual, colectivo o intersindical de los trabajadores de los Poderes de la Unión	8. Juicio de inconformidad
9. Proceso de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo	9. Recurso de reconsideración
10. Proceso de justicia cívica e itinerante	10. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador
11. Proceso laboral de servidores electorales en materia federal	11. Juicio electoral
12. Justicia agraria	12. Desaparición del poder en las entidades federativas
13. Proceso de registro de candidaturas para ser votadas en todos los cargos de elección popular	13. Cuestión política
14. Conflicto o diferencia laboral entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su personal	14. Límite territorial
15. Proceso ante la Corte Penal Internacional (subsidiario)	15. Procedimiento de remoción de consejeros electorales de los organismos públicos electorales

- 16. Responsabilidad administrativa y hechos de corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción
- 17. Proceso de fiscalización de recursos federales

De lo anterior se obtiene que la ley fundamental de 1917 tiene 15 procesos constitucionales de la libertad y 17 procesos constitucionales orgánicos, conformando un total de 32 procesos constitucionales vigentes.

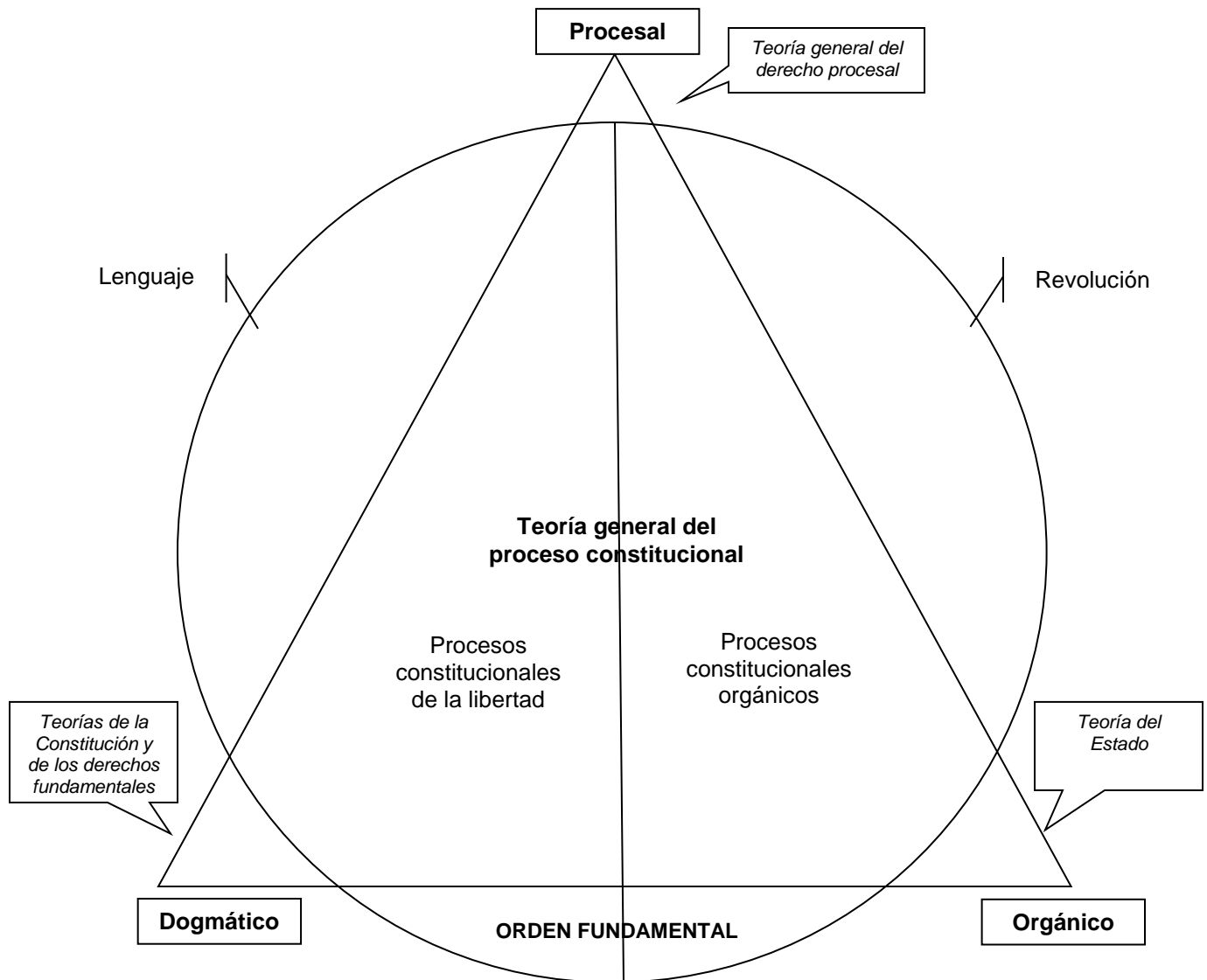
## *2. Esquema de los procesos constitucionales*

Con base en la tesis de las tres partes del orden fundamental,<sup>410</sup> el esquema de los procesos constitucionales vigentes enseguida se expone:

---

<sup>410</sup> *Vid. Infra.* La parte procesal del orden fundamental.

## TESIS DE LAS TRES PARTES DEL ORDEN FUNDAMENTAL



### *Procesos constitucionales de la libertad*

1. Amparo
2. Amparo político-electoral
3. Facultad de investigación de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos
4. Habeas data
5. Queja ante comisiones de derechos humanos
6. Constitución y registro de partidos políticos nacionales y locales
7. Proceso penal
8. Procedimiento individual, colectivo o intersindical de los trabajadores de los Poderes de la Unión
9. Proceso de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo
10. Proceso de justicia cívica e itinerante
11. Proceso laboral de servidores electorales en materia federal
12. Justicia agraria
13. Proceso de registro de candidaturas para ser votadas en todos los cargos de elección popular
14. Conflicto o diferencia laboral entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su personal
15. Proceso ante la Corte Penal Internacional (subsidiario)

### *Procesos constitucionales orgánicos*

1. Acción de inconstitucionalidad
2. Controversia constitucional
3. Juicio de revisión constitucional electoral
4. Juicio político
5. Procedimientos ordinario y especial sancionador
6. Recurso de revisión
7. Recurso de apelación
8. Juicio de inconformidad
9. Recurso de reconsideración
10. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador
11. Juicio electoral
12. Desaparición del poder en las entidades federativas
13. Cuestión política
14. Límite territorial
15. Procedimiento de remoción de consejeros electorales de los organismos públicos electorales
16. Responsabilidad administrativa y hechos de corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción
17. Proceso de fiscalización de recursos federales

**32 procesos constitucionales vigentes**



En este esquema se observa que la parte dogmática (que se sustenta, por ejemplo, con el derecho constitucional y sus teorías de la Constitución y de los derechos fundamentales), la parte orgánica (que se sustenta, por ejemplo, con el derecho constitucional y su teoría del Estado) y la parte procesal (sustentada por la teoría general del derecho procesal) iluminan desde sus ángulos un centro.

De la iluminación de las partes procesal, dogmática y orgánica, nace un triángulo, el cual contiene teoría general del proceso constitucional.

El triángulo se inserta en un círculo que representa al orden fundamental.

Las figuras geométricas se dividen a la mitad porque son las partes dogmática y orgánica de la Constitución, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

En cada mitad del triángulo se encuentran los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos, respectivamente.

Cada mitad del círculo que no alcanza a cubrir el triángulo, por ejemplo, son el lenguaje, como atributos de las personas y por lo mismo se integra a la parte dogmática, y la revolución, como imperativo orgánico que daría vida al orden fundamental ignorado, violado o incierto, por la falta de solución de los conflictos constitucionales mediante los procesos constitucionales.

De modo que sin tener que acudir a la revolución, se tiene la convicción que los procesos constitucionales aseguran el cumplimiento de los derechos fundamentales y la representación, configuración y ejercicio del poder, en los Estados Unidos Mexicanos.

Por esto, en el esquema se han sistematizado los procesos constitucionales vigentes en la ley fundamental de 1917, porque la investigación está preocupada por la paz y la justicia, que se tienen que salvaguardar en la vida actual, para beneficio de las generaciones.

Esta preocupación es el origen del siguiente capítulo, mediante el cual se proponen procesos constitucionales para solventar otros conflictos constitucionales.

## **CAPÍTULO QUINTO**

### **PROPUESTA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES**



## CAPÍTULO QUINTO

### PROPUESTA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES

El objetivo del capítulo final es discutir la ampliación de la defensa de la ley fundamental de 1917 y proponer otros procesos constitucionales.

En consecuencia, se expone la tesis de la parte procesal del orden fundamental, se especifican los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos que se proponen y se realiza su sistematización en prospectiva.

#### I. LA PARTE PROCESAL DEL ORDEN FUNDAMENTAL

Como primera aproximación, del análisis del proceso constitucional se desprende que el enjuiciamiento de las disposiciones fundamentales se ejerce a través de los procesos constitucionales de la libertad<sup>411</sup> y orgánicos.<sup>412</sup>

Esta distinción del objeto de estudio se obtiene a la luz de lo dispuesto por el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que establece qué es una Constitución para los pueblos en la tierra,<sup>413</sup> y por otra parte, el *nomen iuris* del objeto de estudio, se obtiene del derecho procesal constitucional.<sup>414</sup>

---

<sup>411</sup> “CAPPELLETI agrupa el estudio de los instrumentos procesales de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en la categoría que denomina «jurisdicción constitucional de la libertad», que con el paso del tiempo se ha aceptado, y luego desarrolla su teoría en el ámbito supranacional, pero no emplea la expresión...” Ferrer-Mac Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen Científico (1928-1956)*, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 83 y 84.

<sup>412</sup> “... es posible señalar que el contenido del derecho procesal constitucional... comprendería tres aspectos (de la libertad, orgánico y supranacional), que sólo pueden separarse para efectos de estudio, pero que en la práctica están estrechamente interrelacionados.” Fix Zamudio, Héctor, *Introducción al derecho procesal constitucional*, México, FUNDAP, 2002, p. 90.

<sup>413</sup> “Artículo 16o.- Toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución.” Disponible en: <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/22/pr/pr19.pdf>, consultado el 30 de enero de 2017.

<sup>414</sup> *Vid. Supra*. Derecho procesal constitucional.

Desde esta perspectiva, la Constitución<sup>415</sup> de cada nación tendría no solo las partes dogmática y orgánica, como lo ha establecido la referida Declaración; sino que el orden fundamental tendría tres: la *dogmática* que reserva derechos fundamentales, incluidos los derechos nacionales de fuente internacional; la *orgánica* que establece la configuración, representación y ejercicio del poder; y, la *procesal* que se dirige a la realización el derecho del orden fundamental.<sup>416</sup>

De la parte procesal mencionada dependería la vida misma de la Constitución que estableció el pueblo. Sin esta parte quedaría el imperativo orgánico que prevé la revolución que devolvería la vida al orden constitucional violado, ignorado o incierto.<sup>417</sup>

Así, ante la siguiente observación del procesalista Eduardo J. Couture: “Las Constituciones del siglo XX han considerado, con muy escasas excepciones que una

---

<sup>415</sup> Se ha indicado que la Constitución es el ordenamiento preponderantemente escrito que establece el pueblo para autodeterminarse, reservar derechos fundamentales, unificar su poder y precisar la manera en que este será representado, configurado y ejercido, lo que en su conjunto representa su contenido básico y abstracto. Cfr. Conclusión Primera. Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias de la Sala Constitucional del Estado de México,” *Tesis de licenciatura*, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 1o. de julio de 2009, p. 167. Además, se puede observar que en una jurisprudencia dictada el 8 de marzo de 2004, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que el objeto de estudio es parte o tiene que existir en el orden fundamental, al referir que el Congreso de la Unión carece de facultad para instituir procesos constitucionales (la Corte los denomina medios de control constitucional), a través de una ley secundaria, ya que tales procesos sólo puede estar contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque únicamente la voluntad soberana, representada por el Constituyente o el legislador constitucional (la jurisprudencia lo entiende como el órgano reformador de la Constitución), puede establecer la existencia del objeto de estudio, de manera que corresponde sólo al legislador ordinario, en su caso, desarrollar y pormenorizar las reglas que precisen su procedencia, sustanciación y resolución. Cfr. Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XIX, Marzo de 2004, P./J. 12/2004, p. 1164, registro: 181999. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales y precedentes. También, en diversa Jurisprudencia de 2011 se ha determinado que: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el control constitucional de normas generales o de actos de las autoridades del Estado no puede crearse en una ley, sino en la propia Constitución Federal...” Cfr. Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, *Apéndice de 2011*, Tomo I. Constitucional 1. Distribución de Funciones entre las Entidades Políticas del Estado Mexicano Primera Parte - SCJN Primera Sección - Esfera federal, Tesis 14, p. 24, registro: 1000986. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales y precedentes.

<sup>416</sup> Vid. *Supra*. Esquema de los procesos constitucionales.

<sup>417</sup> La parte orgánica del orden fundamental contiene el título noveno nombrado “De la inviolabilidad de la Constitución que dispone: “Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, *tan luego como el pueblo recobre su libertad*, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta (énfasis añadido).” Última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 15 de agosto de 2016. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_150816.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf), consultado el 30 de enero de 2017.

proclamación programática de principios de derecho procesal era necesaria, en el conjunto de los derechos de la persona humana y de las garantías a que ella se hace acreedora.”<sup>418</sup> Entonces, se pudiera solventar tal observación con la parte o dimensión procesal de la Constitución.

Ciertamente, la parte dogmática del orden fundamental reserva los derechos fundamentales que pueden ser realizados mediante el amparo, el cual “... no ha escapado a la observación de los procesalistas extranjeros que han estudiado la institución (Piero Calamandrei y Mauro Cappelletti) y que se han mostrado asombrados de su amplitud protectora.”<sup>419</sup>

No obstante, a pesar de la referida amplitud protectora, se debe mencionar que la parte orgánica de la Constitución también requiere del enjuiciamiento que se dirija a la realización de la representación, configuración y ejercicio del poder que el orden fundamental contiene, así como se necesitan procesos constitucionales que encaucen a la efectividad de la parte dogmática del orden constitucional que reserva derechos políticos-electorales, situación que el amparo no puede hacerlo, porque no se puede instar para ejercer el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con los referidos derechos,<sup>420</sup> ni para enjuiciar una ley recientemente emitida, a la cual se señale su presunción de inconstitucionalidad,<sup>421</sup> por indicar algunos ejemplos.

Desde esta perspectiva, el amparo tiene que ser acompañado de otros procesos constitucionales en la defensa de la ley fundamental de 1917, dado que por medio de su parte procesal se dispone la realización de la eficacia de los derechos de las personas y el cumplimiento de la representación, configuración y ejercicio del poder.

En consecuencia, si bien se han establecido los procesos constitucionales de la libertad y orgánico vigentes en la ley fundamental de 1917,<sup>422</sup> enseguida se

---

<sup>418</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho procesal civil*, 3a. ed., Buenos Aires, Roque Depalma Editor, 1999, pp. 151.

<sup>419</sup> Fix Zamudio, Héctor, “Estudios sobre la jurisdicción constitucional mexicana”, en Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad. Con referencia a los ordenamientos Alemán, Suizo y Austriaco*, trad. Héctor Fix Zamudio, México, UNAM, Instituto de Derecho Comparado, Imprenta Universitaria, 1961, p. 177.

<sup>420</sup> Cfr. Capítulo cuarto. Los procesos constitucionales vigentes en la ley fundamental de 1917.

<sup>421</sup> Vid. *Supra*. Acción de inconstitucionalidad.

<sup>422</sup> Vid. *Supra*. Capítulo cuarto. Los procesos constitucionales vigentes en la ley fundamental de 1917.

especifican los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos que se proponen para ampliar la defensa constitucional.<sup>423</sup>

## II. PROPUESTA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES

La propuesta de los procesos constitucionales corresponde al legislador constitucional. Esta afirmación se puede sustentar en lo expuesto por el procesalista Eduardo J. Couture.

El maestro uruguayo al desarrollar “la teoría de la inconstitucionalidad de la ley procesal” manifestaba que la misma no era, propiamente, una guía de orientación para el intérprete. Antes bien, era una construcción jurídica que determina el ámbito de validez de la obra legisladora.<sup>424</sup>

Más que al juez, al defensor, al profesor, esa teoría, el profesor indicó, se dirigía al legislador. Ella contiene las admoniciones del constituyente y traza los límites dentro de los cuales éste puede desenvolver su cometido. En último término, esa teoría constituía lo que se ha llamado la tutela jurídico-constitucional de las libertades<sup>425</sup> o los procesos constitucionales de la libertad.<sup>426</sup>

El procesalista Eduardo J. Couture mencionó que la tarea del juez, del defensor, del docente, se desenvuelve *a posteriori*, cuando se trata de juzgar si la obra del legislador se ha realizado dentro del ámbito fijado por la norma constitucional. En cambio, para el legislador, la norma constitucional es un *a priori* de su tarea.<sup>427</sup>

A la luz de estas consideraciones, se especifican los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos propuestos.

---

<sup>423</sup> Vid. *Supra*. Defensa constitucional.

<sup>424</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, pp. 152 y 153.

<sup>425</sup> *Ibidem*, p. 153.

<sup>426</sup> Cfr. Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad. Con referencia a los ordenamientos Alemán, Suizo y Austriaco*, trad. Héctor Fix Zamudio, México, UNAM, Instituto de Derecho Comparado, Imprenta Universitaria, 1961.

<sup>427</sup> Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho... op. cit.*, p. 153.

## 1. Cuestión de inconstitucionalidad

La cuestión de inconstitucionalidad es un proceso constitucional orgánico porque sería instada por los jueces y estaría implantada de modo implícito en el artículo 1 constitucional, porque dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Sin embargo, se estima necesaria su previsión explícita para que se precise su procedencia, sustanciación y resolución.

El maestro Hans Kelsen explica la cuestión de inconstitucionalidad en los siguientes términos: “Entre varias soluciones posibles pueden indicarse las siguientes: autorizar y obligar a todas las autoridades públicas que al aplicar una norma tengan duda sobre su regularidad, interrumpen el procedimiento en el caso concreto e interpongan ante el tribunal constitucional una demanda razonada para examen y anulación eventual de la norma.”<sup>428</sup>

De lo anterior se obtiene que la finalidad de la cuestión de inconstitucionalidad sería dirigirse a la realización de la parte dogmática y orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por los jueces con motivo de las disposiciones sustantivas y procesales que tienen que aplicar en los procesos que son de su competencia y de las cuales identificaron una presunción de inconstitucionalidad, estableciéndose, en su caso, la nulidad de tales disposiciones, lo cual pudiera fortalecer la seguridad jurídica,<sup>429</sup>

---

<sup>428</sup> Kelsen Hans, *La garantía jurisdiccional de la constitución (La justicia constitucional)*, trad. de Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, p. 88.

<sup>429</sup> El profesor Edgar Corzo Sosa la considera como el: “... proceso que permite al juzgador no aplicar una ley que considere inconstitucional remitiendo el asunto al Tribunal Constitucional.” Corzo Sosa, Edgar, *La cuestión de inconstitucionalidad*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 28. También *cfr.* Pérez Tremps, Pablo, “La cuestión de inconstitucionalidad en el derecho español”, *Estudios constitucionales*, Santiago de Chile, Centro de Estudios Constitucionales, Santiago de Chile, año/vol. 3 número 0001, p. 129. Aragón, Manuel, prólogo a la obra de Corzo Sosa, Edgar, *La cuestión de inconstitucionalidad*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 21.



frente a la problemática que puede representar la desaplicación de las normas por todos los jueces.<sup>430</sup>

Tal competencia de desaplicación de las normas fue delineada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la tesis jurisprudencial: “Pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos.”<sup>431</sup>

En el derecho comparado, la cuestión de inconstitucionalidad está prevista en el orden jurídico de España,<sup>432</sup> Italia,<sup>433</sup> Alemania<sup>434</sup> y en el que corresponde a las entidades federativas.<sup>435</sup>

---

<sup>430</sup> Con relación al control difuso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció: “Con motivo de la entrada en vigor de los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional modificados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, debe estimarse que han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales P./J. 73/99 y P./J. 74/99, de rubros: “Control judicial de la constitución. Es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación.” y “Control difuso de la constitucionalidad de normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la constitución.” Tesis Aislada, 10a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro III, diciembre de 2011, t. 1, p. 549, registro: 200 0008.

<sup>431</sup> “Pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.” Tesis Aislada, 10a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro III, diciembre de 2011, t. 1, Tesis: P. LXIX/2011(9a.), p. 552, registro: 160525.

<sup>432</sup> Cfr. Artículo treinta y cinco, del Capítulo III De la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales, Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709>, consultado el 10 de febrero de 2017.

<sup>433</sup> Cfr. Artículo 1o. de las “Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43), de 9 de febrero de 1948, núm. 1: “La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.”

Disponibile

en:

## 2. Omisión de inconstitucionalidad

La omisión de inconstitucionalidad sería el proceso constitucional orgánico que encaminaría a la defensa de la configuración y ejercicio del poder.

El profesor Carlos Báez indica que el concepto del proceso constitucional en examen:

... está relacionado con la omisión del legislador de legislar en concreto cuando ha recibido un encargo específico del constituyente de desarrollar una norma constitucional de eficacia limitada que precisa de la intervención del legislador, en un primer momento, para alcanzar plena eficacia... (así)... se puede afirmar que la inconstitucionalidad por omisión legislativa es aquella que se presenta cuando una norma constitucional impone al legislador el mandato o le hace el encargo específico de legislar en concreto en cierta materia para desarrollar una norma constitucional de eficacia limitada y el legislador no lo hace, no legisla, por lo que la norma constitucional de eficacia limitada que requiere de desarrollo legislativo no alcanza plena eficacia.<sup>436</sup>

De lo anterior se desprende que la omisión de inconstitucionalidad, denominada también “vacío normativo” y en el derecho español “inconstitucionalidad por omisión”,<sup>437</sup> tendría la finalidad de dirigirse a la realización de la parte orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto que surge con motivo de la ignorancia y omisión de las disposiciones fundamentales que ordenan la emisión de normas.

---

[http://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso\\_costituzionale/documentazione/legge\\_cost\\_19480209\\_1.pdf](http://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_costituzionale/documentazione/legge_cost_19480209_1.pdf), consultado el 10 de febrero de 2017.

<sup>434</sup> Cfr. Artículo 100, de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania: “Si un tribunal considera que es inconstitucional una ley de cuya validez depende el fallo, se suspenderá el proceso y se recabará, cuando se trate de la violación de la Constitución de un Land, la decisión del tribunal del Land competente en asuntos constitucionales, y la de la Corte Constitucional Federal cuando se trate de la violación de la presente Ley Fundamental. Ello rige también cuando se trate de la violación de la presente Ley Fundamental por la legislación de un Land o de la incompatibilidad de una ley de un Land con una ley federal... Si en la interpretación de la Ley Fundamental, la Corte Constitucional de un Land quiere apartarse de una decisión de la Corte Constitucional Federal o de la Corte Constitucional de otro Land, recabará la decisión de la Corte Constitucional Federal.” Disponible en: <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf>, consultado el 10 de febrero de 2017.

<sup>435</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, pp. 150-154.

<sup>436</sup> Cfr. Báez Silva, Carlos, “Una definición del concepto ‘inconstitucionalidad por omisión’”, González Oropeza, Manuel y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coords.) *La justicia constitucional en las entidades federativas*, México, Porrúa, 2006, pp. 39 y 47.

<sup>437</sup> Cfr. Requejo Pajés, Juan Luis, “Los problemas de la omisión legislativa en la jurisprudencia constitucional”, *XIV Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos*, Vilna, 2008, pp. 3 y 4.

En el derecho comparado, la omisión legislativa está prevista en el orden jurídico de Yugoslavia, Portugal, Hungría, Brasil y Venezuela,<sup>438</sup> así como en el marco normativo de las entidades federativas.<sup>439</sup>

### *3. Amparo, amparo político-electoral, omisión de inconstitucionalidad, procedimientos ordinarios y especiales sancionadores locales*

El amparo y el amparo político-electoral locales son procesos constitucionales de la libertad que fueron analizados en otro documento que estableció las razones de su propuesta de implementación,<sup>440</sup> y lo mismo se puede mencionar de la omisión de inconstitucionalidad local, que como un proceso constitucional orgánico fue analizado en diverso estudio.<sup>441</sup>

Además, es necesario la implementación de procedimientos ordinarios y especiales sancionadores locales como procesos constitucionales orgánicos que se dirigen a la protección de la configuración, representación y ejercicio del poder, en lo atinente a los principios de equidad en la contienda y la aplicación imparcial de los recursos públicos del 134 constitucional, en los procesos electorales de las entidades federativas.

### *4. Opinión consultiva de los tribunales constitucionales*

La opinión consultiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sería un proceso constitucional orgánico porque sería instado por las autoridades y estaría

---

<sup>438</sup> Cfr. Bazán, Víctor, "La inconstitucionalidad por omisión en el derecho comparado, con particular referencia al sistema venezolano", *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Montevideo, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2006, t. I, p. 480.

<sup>439</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, "Hacia nuevas competencias... *op. cit.*", pp. 154-158.

<sup>440</sup> Rivera Hernández, Juan, "El amparo local... *op. cit.*

<sup>441</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, "Hacia nuevas competencias... *op. cit.*", pp. 154-158. Se debe mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el particular estableció la siguiente jurisprudencia: "Constituciones locales. Dentro de sus medios de control constitucional pueden establecerse mecanismos para supervisar y ordenar que se subsanen omisiones legislativas o normativas. Jurisprudencia, 10a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Tesis: P./J. 24/2012 (10a.), p. 237, registro: 2012820. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

implantado de modo implícito en el artículo 1 en relación con el 99 y 105 de la ley fundamental de 1917.

No obstante, se considera necesaria su establecimiento explícito para que se precise su procedencia, sustanciación y resolución.

La finalidad de la opinión consultiva sería dirigirse a la realización de la parte dogmática y orgánica de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según corresponda, por todas las autoridades ante la presunción de inconstitucionalidad que observen de las disposiciones sustantivas y procesales que tienen que aplicar en los procesos de su competencia, una vez que por mandato constitucional tienen que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como dicho proceso se dirige a la defensa de la configuración, representación y ejercicio del poder.

Así, la opinión consultiva como proceso constitucional orgánico puede orientar de manera preventiva la violación, omisión o incertidumbre de las disposiciones fundamentales.<sup>442</sup>

Las bases para la implementación de este proceso pueden ser las previstas para la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 68, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: “Cuando la acción de inconstitucionalidad se interponga en contra de una ley electoral, el ministro instructor podrá solicitar opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.”<sup>443</sup>

En el derecho comparado, la opinión consultiva es regulada en el orden normativo de Francia, Portugal, España, Italia y Austria, denominándose “control previo”,<sup>444</sup> como también en Hungría,<sup>445</sup> Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,

---

<sup>442</sup> *Vid. Supra.* Defensa constitucional.

<sup>443</sup> Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/205\\_270115.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/205_270115.pdf), consultado el 15 de febrero de 2017.

<sup>444</sup> *Cfr. Moderne, Franck*, “El control previo de constitucionalidad en la Europa contemporánea”, *Revista chilena de derecho*, Chile, Facultad de Derecho, Vol. 20 Nos. 2 y 3, t. I, Mayo-Diciembre 1993,

Guatemala, Venezuela y Perú,<sup>446</sup> así como en el marco normativo de las entidades federativas.<sup>447</sup>

##### 5. Amparo interamericano (subsidiario)

El amparo interamericano estaría previsto de modo implícito en el artículo 1 constitucional en relación con el 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El amparo interamericano es el proceso constitucional de la libertad de carácter subsidiario, que encauza a la defensa de la referida Convención, sus protocolos adicionales y la jurisprudencia convencional.

El proceso constitucional de la libertad es instado por los Estados Parte de la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.<sup>448</sup>

Al amparo interamericano lo conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<sup>449</sup>

---

p. 409. Cfr. Alegre Martínez, Miguel Ángel, “El resurgimiento del debate sobre el control previo de constitucionalidad en España: experiencia y perspectivas”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, México, Porrúa-Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, julio diciembre 2007, p. 9.

<sup>445</sup> Cfr. Artículo 24, numeral (2), inciso a) de la ley fundamental de Hungría que dispone: “(2) The Constitutional Court a) shall examine adopted Acts not yet promulgated for conformity with the Fundamental Law”. Disponible en: [http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file\\_id=325825](http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=325825), consultado el 10 de febrero de 2017.

<sup>446</sup> Cfr. Bazán, Víctor, “La tarea de control de constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales por la jurisdicción constitucional. Un análisis en clave de Derecho Comparado”, *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Montevideo, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003, pp. 109-162.

<sup>447</sup> Cfr. Rivera Hernández, Juan, “Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, pp. 154-158. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la cuestión de mérito estableció la siguiente tesis aislada: “Control previo de la constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la legislatura local. su establecimiento no afecta el principio de división de poderes. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.” Tesis Aislada, 10a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XIII, octubre de 2012, t. 1, P. III/2012 (10a.), p. 714, registro: 2001874.

<sup>448</sup> Cfr. Artículo 61.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: [http://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm), consultado el 11 de febrero de 2017.

El funcionamiento pormenorizado del proceso constitucional subsidiario es previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,<sup>450</sup> en el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,<sup>451</sup> el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,<sup>452</sup> el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,<sup>453</sup> el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,<sup>454</sup> el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,<sup>455</sup> el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas<sup>456</sup> y el formulario para presentar peticiones sobre violaciones a los Derechos Humanos.<sup>457</sup>

La finalidad del amparo interamericano es dirigirse de manera subsidiaria a la realización de la parte dogmática de la Constitución mediante el enjuiciamiento de los conflictos de los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos adicionales y la jurisprudencia convencional, los cuales son parte de los derechos fundamentales, con base en el artículo 1 constitucional y en el instrumento de adhesión del Estado mexicano recibido en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos el 24 de marzo de 1981.<sup>458</sup>

---

<sup>449</sup> Cfr. Artículo 61.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: [http://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm), consultado el 11 de febrero de 2017.

<sup>450</sup> Cfr. Artículos 52 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: [http://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm), consultado el 11 de febrero de 2017.

<sup>451</sup> Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/estatuto-comisi%C3%B3n-interamericana-derechos-humanos.pdf>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<sup>452</sup> Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<sup>453</sup> Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/fondo.asp>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<sup>454</sup> Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/estatuto-corte-interamerica-derechos-humanos.pdf>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<sup>455</sup> Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/reglamento-corte-interamerica-derechos-humanos.pdf>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<sup>456</sup> Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/reglamento-corte-IDH-fondo-asistencia-legal.pdf>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<sup>457</sup> Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/formulario-presentar-peticion-cidh.pdf>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<sup>458</sup> Cfr. Información de adhesión. Disponible: [http://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_B-32\\_Convencion\\_Americana\\_sobre\\_Derechos\\_Humanos\\_firmas.htm#México](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm#México). Consultado el 11 de febrero de 2017.

## 6. Opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un proceso constitucional orgánico porque es instado por el Estado mexicano y estaría prevista de modo implícito en el artículo 1 constitucional en relación con el 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.<sup>459</sup>

Para el profesor Jorge Ernesto Roa: “Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana -como interpretación autorizada de la Convención Americana de Derechos Humanos- están llamadas a ser fuente de obligaciones internacionales y a que sus estándares sean implementados en el ámbito interno de los Estados. Cuando esto sea así, el sistema habrá avanzado en la protección de los derechos humanos en el continente americano... la lectura de la totalidad de las opiniones consultivas de la Corte emitidas hasta el momento me permitió concluir que estas han sido y son una veta para el desarrollo de la teoría de los derechos humanos.”<sup>460</sup>

La finalidad de la opinión consultiva es dirigirse a la realización de la parte dogmática de la Constitución mediante el enjuiciamiento del conflicto instado por el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de su solicitud de interpretación de la compatibilidad del derecho interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos los tratados que tengan por objeto la protección de los derechos humanos de los cuales sea parte al menos un Estado americano, las disposiciones de tratados internacionales que, a pesar de no tener como objeto general la protección de derechos humanos, tengan en su contenido referencias a dicha protección y de los cuales sea parte, al menos, un Estado americano.<sup>461</sup>

---

<sup>459</sup> Cfr. Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: [http://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm), consultado el 11 de febrero de 2017.

<sup>460</sup> Cfr. Roa, Jorge Ernesto, *La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, *Temas de Derecho Público* no. 94, Bogotá, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2015, pp. 23 y 150. Cfr. Rivera Hernández, Juan, “El amparo local... *op. cit.*”, pp. 291 y 292

<sup>461</sup> Cfr. Roa, Jorge Ernesto, *La función consultiva... op. cit.*, p. 33.

## 7. Ideas para la teoría general del proceso constitucional y su actualización

Como se indicó,<sup>462</sup> de los artículos 1, 14, 16, 17 y 23 de la ley fundamental de 1917, se obtienen los principios y conceptos comunes al enjuiciamiento ejercido en los procesos constitucionales vigentes, e invariablemente dichos principios y conceptos integran los estadios de los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos.

Desde esta perspectiva, con base en una posible reforma constitucional, contenida en el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de resolución de fondo,<sup>463</sup> se observa la posible implementación de los siguientes principios y conceptos que se adicionarían a la teoría general del proceso constitucional:

1. En los procesos en los que se establezca como regla la oralidad basta con quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y de la fundamentación así como de la motivación de los actos de autoridad (Propuesta de reforma al artículo 16 constitucional).
2. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en el proceso, las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. (Propuesta de reforma al artículo 17 constitucional).
3. Se expedirá una legislación única en materia procesal civil y familiar (Propuesta de reforma al artículo 73, fracción XXIX-X constitucional).<sup>464</sup>

---

<sup>462</sup> Vid. *Supra*. Ideas para la teoría general del proceso constitucional.

<sup>463</sup> Disponible en: [http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos\\_constitucionales/docs/Temas/JC\\_Iniciativa1\\_061216.pdf](http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/Temas/JC_Iniciativa1_061216.pdf), consultado el 11 de febrero de 2017.

<sup>464</sup> Cfr. La iniciativa se incluye en el anexo. Disponible en: [http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos\\_constitucionales/docs/Temas/JC\\_Iniciativa1\\_061216.pdf](http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/Temas/JC_Iniciativa1_061216.pdf), consultado el 11 de febrero de 2017.



## II. SISTEMATIZACIÓN EN PROSPECTIVA

La parte procesal del orden fundamental puede existir en el propio texto constitucional;<sup>465</sup> o bien, puede crearse un título en la ley fundamental de 1917; o, puede ordenarse la emisión del “Código de procesos constitucionales”, tal como ahora de manera implícita lo dispone el artículo 1, con relación a los procesos constitucionales de la libertad, conforme lo indicado en el apartado que dispone: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea, parte, así como de las *garantías para su protección...*”

Consiguientemente, con independencia de cómo se establezca la tesis de la parte procesal, se han especificado los procesos constitucionales vigentes y los que se proponen.

En consecuencia, el siguiente cuadro presenta la sistematización en prospectiva del objeto de estudio:

IDEAS PARA LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO CONSTITUCIONAL	
<i>Procesos constitucionales de la libertad</i>	<i>Procesos constitucionales orgánicos</i>
1. Amparo	1. Acción de inconstitucionalidad
2. Amparo político-electoral	2. Controversia constitucional
3. Facultad de investigación de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos	3. Juicio de revisión constitucional electoral
4. Habeas data	4. Juicio político
5. Queja ante comisiones de derechos humanos	5. Procedimientos ordinario y especial sancionador
6. Constitución y registro de partidos políticos nacionales y locales	6. Recurso de revisión
7. Proceso penal	7. Recurso de apelación
8. Procedimiento individual, colectivo o intersindical de los trabajadores de los Poderes de la Unión	8. Juicio de inconformidad
9. Proceso de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo	9. Recurso de reconsideración
10. Proceso de justicia cívica e itinerante	10. Recurso de revisión del

<sup>465</sup> Vid. *Supra*. Capítulo cuarto. Los procesos constitucionales en la ley fundamental de 1917.

11. Proceso laboral de servidores electorales en materia federal	procedimiento especial sancionador
12. Justicia agraria	11. Juicio electoral
13. Proceso de registro de candidaturas para ser votadas en todos los cargos de elección popular	12. Desaparición del poder en las entidades federativas
14. Conflicto o diferencia laboral entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su personal	13. Cuestión política
15. Proceso ante la Corte Penal Internacional (subsidiario)	14. Límite territorial
16. Amparo local	15. Procedimiento de remoción de consejeros electorales de los organismos públicos electorales
17. Amparo político-electoral	16. Responsabilidad administrativa y hechos de corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción
18. Amparo interamericano (subsidiario)	17. Proceso de fiscalización de recursos federales
	18. Cuestión de inconstitucionalidad
	19. Omisión de inconstitucionalidad
	20. Omisión de inconstitucionalidad local
	21. Procedimientos ordinarios y especiales sancionadores locales
	22. Opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (subsidiario)

De la sistematización en prospectiva se obtienen 18 procesos constitucionales de la libertad y 22 procesos constitucionales orgánicos.

Sin embargo, pueden integrarse procesos constitucionales vigentes para cumplir con el principio de la plena ejecución de las resoluciones que ponga fin a los referidos procesos de la ley fundamental de 1917.

La propuesta de la parte procesal del orden fundamental tiene que sustentarse en la teoría general del derecho procesal, un proyecto que posiblemente algún día pudiera realizarse, y como lo indicamos, se tendrá que adoptar los conceptos y principios de la teoría procesal para replantearlos<sup>466</sup> y adaptarlos al proceso constitucional, y proponer una concepto de las partes de la relación jurídica, de las categorías, de los actos procesales, de la jurisdicción, la cual no sería voluntaria, sino

---

<sup>466</sup> Cfr. González Pérez, Jesús, *Derecho procesal constitucional*, Madrid, Civitas, 1980, pp. 50-51.

contenciosa por enjuiciar los conflictos constitucionales, todo con fundamento en un concepto de proceso constitucional que se sustente en la naturaleza de relación y situación procesal.

## **CONCLUSIONES**



## CONCLUSIONES

*Primera.* El enjuiciamiento en los estudios procesales es ejercido por las autoridades que conocen de los procesos constitucionales, en contraste, para los estudios constitucionales, el control de constitucionalidad es ejercido por los jueces.

*Segunda.* El proceso y el control de constitucionalidad no pueden ser considerados lo mismo, porque el proceso se dirige a la realización de las normas constitucionales y el control de constitucionalidad es la actividad mediante la cual se analiza si existe o no esa realización, esto es, el control de constitucionalidad es el contenido del proceso constitucional, al tiempo que desde la perspectiva del procesalismo se debe denominar enjuiciamiento

*Tercera.* El enjuiciamiento de los conflictos relacionados con las disposiciones constitucionales tiene su origen en el derecho procesal, mediante, por ejemplo, el apartado “Constitución y enjuiciamiento” de los ensayos del procesalista Niceto Alcalá-Zamora y Castillo.

*Cuarta.* Enjuiciar los conflictos relacionados con las normas fundamentales es someter la conducta que viola u omite la Constitución o genera incertidumbre acerca de sus significados, a examen en un proceso constitucional, sin que necesariamente se dicte una sentencia o una determinación por los jueces en su acepción formal, dado que se tiene la idea que dicha determinación es competencia de la autoridad imparcial que conoce de los procesos constitucionales.

*Quinta.* El enjuiciamiento ha recibido, como lo indicó el maestro Fix-Zamudio, las denominaciones de defensa, control, justicia, jurisdicción y derecho procesal, todo ello con el calificativo de constitucional, por ello fue necesario circunscribir el sentido y alcance de las denominaciones indicadas, con la finalidad de evidenciar la ambigüedad del entendimiento que ofrecen sobre el propio enjuiciamiento de los conflictos constitucionales y del proceso constitucional.

*Sexta.* En el derecho procesal constitucional contenido en el concepto de defensa constitucional creado por el procesalismo científico, se puede incluir los procesos constitucionales de opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la cuestión de inconstitucionalidad implantada de modo implícito en el artículo 1 de la ley fundamental de 1917.

*Séptima.* El derecho procesal constitucional examina el enjuiciamiento de los conflictos constitucionales y se dirige a la realización del derecho constitucional

*Octava.* El inicio del proceso se debe a la aceptación de la autonomía de la acción frente al derecho sustantivo y su análisis científico tiene su origen en 1868 cuando se entiende al proceso como una relación jurídica.

*Novena.* De las concepciones de la naturaleza jurídica del proceso, se obtiene un mejor entendimiento con la categoría de la relación jurídica triangular existente entre las partes; así como con la categoría de la situación jurídica que postula los conceptos para el derecho procesal, se puede incluir el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con las disposiciones constitucionales, instado necesariamente por un demandante o recurrente, que pretenda la realización del derecho constitucional que en su perspectiva fue violado, ignorado o incierto, esto con independencia de no encontrar la satisfacción de su interés propio.

*Décima.* El proceso constitucional es el conjunto armónico y ordenado de actos jurídicos, en vista de la resolución del conflicto constitucional, que implica la relación entre las autoridades, o de estas y las personas individuales así como colectivas con la autoridad imparcial, y que se desenvuelve a través de una serie situaciones jurídicas que se van sucediendo según el recurrente, y eventualmente uno o más terceros interesados en contradecir las instancias del propio demandante o recurrente, quienes actúan en relación con las expectativas, posibilidades, cargas y liberación de cargas que les son atribuidas, para la búsqueda oficial de la verdad, como en el enjuiciamiento de la pretendida violación, desconocimiento o incertidumbre de la parte dogmática u orgánica de la Constitución.

*Décima primera.* El enjuiciamiento de los conflictos relacionados con las normas fundamentales tiene una extensa producción histórica, que bajo la guía del procesalista italiano Guiseppe Chiovenda, se considera importante analizar, por el conocimiento que con ella se tiene de los procesos constitucionales en la ley fundamental de 1917. Dicho producción histórica se precisó en la investigación.

*Décima segunda.* Las ideas para la teoría general del proceso constitucional está contenida en los artículos 1, 14, 16, 17 y 23 de la ley fundamental de 1917, y las eventuales reformas a los artículos 16, 17 y 73, fracción XXIX-X del mismo orden fundamental, los cuales contienen los principios y conceptos comunes al enjuiciamiento ejercido en los procesos constitucionales vigentes, e invariablemente dichos principios y conceptos integran los estadios de los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos.

*Décima tercera.* En el amanecer del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son 15 procesos constitucionales de la libertad y 17 procesos constitucionales orgánicos, los cuales representan un total de 32 procesos constitucionales vigentes, conforme se indica en la siguiente tabla:

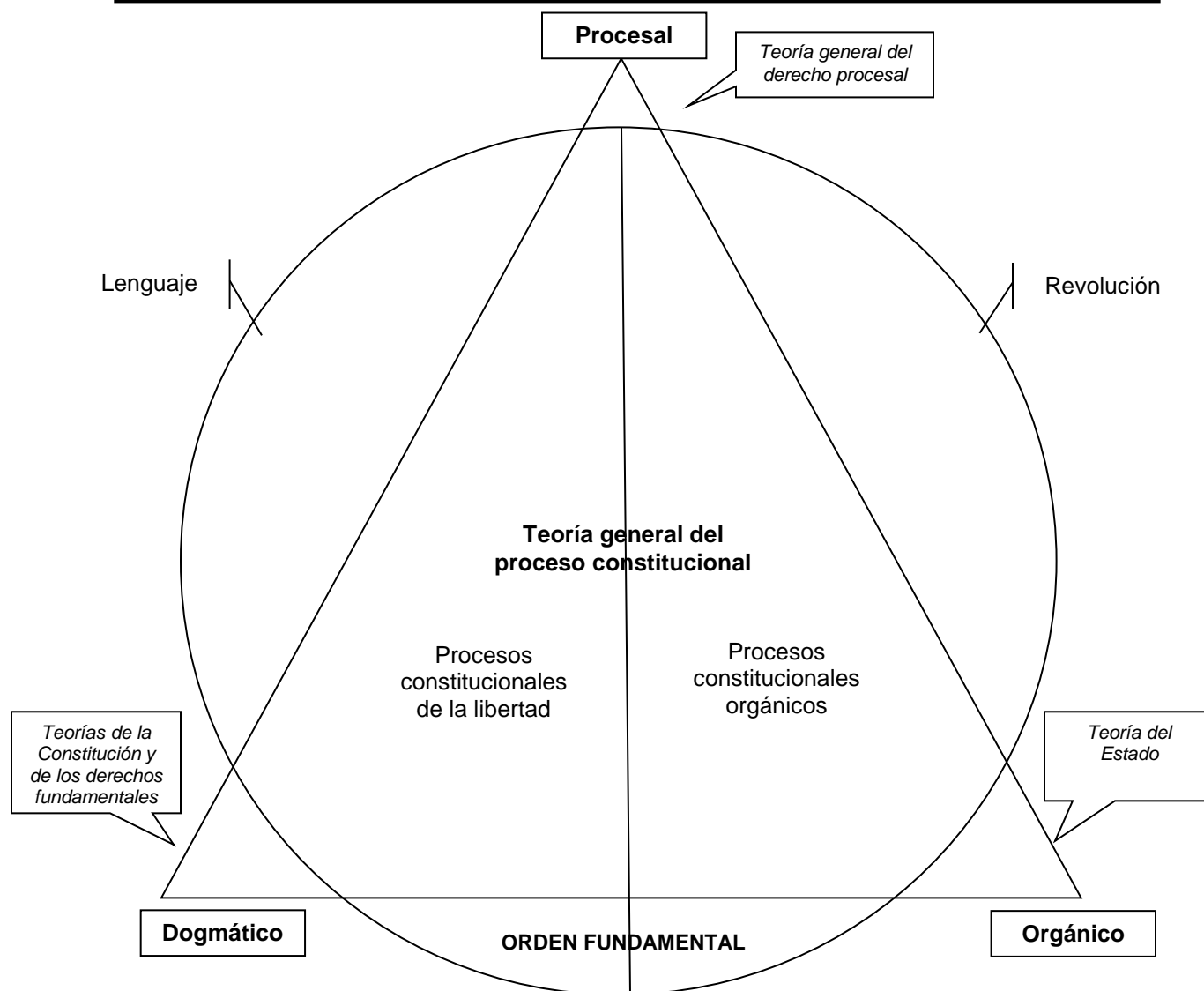
IDEAS PARA LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO CONSTITUCIONAL	
<i>Procesos constitucionales de la libertad</i>	<i>Procesos constitucionales orgánicos</i>
1. Amparo	1. Acción de inconstitucionalidad
2. Amparo político-electoral	2. Controversia constitucional
3. Facultad de investigación de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos	3. Juicio de revisión constitucional electoral
4. Habeas data	4. Juicio político
5. Queja ante comisiones de derechos humanos	5. Procedimientos ordinario y especial sancionador
6. Constitución y registro de partidos políticos nacionales y locales	6. Recurso de revisión
7. Proceso penal	7. Recurso de apelación
8. Procedimiento individual, colectivo o intersindical de los trabajadores de los Poderes de la Unión	8. Juicio de inconformidad
9. Proceso de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo	9. Recurso de reconsideración
10. Proceso de justicia cívica e itinerante	10. Recurso de revisión del



11. Proceso laboral de servidores electorales en materia federal	procedimiento especial sancionador
12. Justicia agraria	11. Juicio electoral
13. Proceso de registro de candidaturas para ser votadas en todos los cargos de elección popular	12. Desaparición del poder en las entidades federativas
14. Conflicto o diferencia laboral entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su personal	13. Cuestión política
15. Proceso ante la Corte Penal Internacional (subsidiario)	14. Límite territorial
	15. Procedimiento de remoción de consejeros electorales de los organismos públicos electorales
	16. Responsabilidad administrativa y hechos de corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción
	17. Proceso de fiscalización de recursos federales

*Décima cuarta:* La Constitución de cada nación tiene no solo las partes dogmática y orgánica, como lo ha establecido el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; sino que el orden fundamental tiene tres: la *dogmática* que reserva derechos fundamentales, incluidos los derechos nacionales de fuente internacional; la *orgánica* que establece la configuración, representación y ejercicio del poder; y, la *procesal* que se dirige a la realización el derecho del orden fundamental, que ha sido esquematizado y explicado en la investigación conforme lo siguiente:

## TESIS DE LAS TRES PARTES DEL ORDEN FUNDAMENTAL



En este esquema se observa que la parte dogmática (que se sustenta, por ejemplo, con el derecho constitucional y sus teorías de la Constitución y de los derechos fundamentales), la parte orgánica (que se sustenta, por ejemplo, con el derecho constitucional y su teoría del Estado) y la parte procesal (sustentada por la teoría general del derecho procesal), iluminan desde sus ángulos un centro.

De la iluminación de las partes procesal, dogmática y orgánica, nace un triángulo, el cual contiene teoría general del proceso constitucional.

El triángulo se inserta en un círculo que representa al orden fundamental.

El triángulo y el círculo se dividen a la mitad porque son las partes dogmática y orgánica de la Constitución, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

En cada mitad del triángulo se encuentran los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos, respectivamente.

Cada mitad del círculo que no alcanza a cubrir el triángulo, por ejemplo, son el lenguaje, como atributos de las personas y por lo mismo se integra a la parte dogmática, y, la revolución, como imperativo orgánico que daría vida al orden fundamental ignorado, violado o incierto, por la falta de solución de los conflictos constitucionales mediante el objeto de estudio.

*Décima quinta:* Sin tener que acudir a la revolución, se tiene la convicción que los procesos constitucionales aseguran el cumplimiento de los derechos fundamentales y la representación, configuración y ejercicio del poder, en los Estados Unidos Mexicanos.

*Décima sexta.* Se sistematizaron los procesos constitucionales vigentes en la ley fundamental de 1917, porque la investigación está preocupada por la paz y la justicia, que se tienen que salvaguardar en la vida actual, para beneficio de las generaciones, esto con independencia de cómo se establezca la tesis de la parte procesal del orden fundamental, la cual puede existir en el propio texto constitucional; o bien, puede crearse un título en la ley fundamental de 1917; o, puede ordenarse la emisión del “Código de procesos constitucionales” o “Ley de enjuiciamiento constitucional”, tal como ahora de manera implícita lo dispone el artículo 1, con relación a los procesos constitucionales de la libertad.

*Décima séptima.* Las preocupaciones de la investigación dan origen a un proyecto de propuesta de procesos constitucionales para solventar otros conflictos constitucionales; así, de la sistematización en prospectiva del objeto de estudio se obtienen 18 procesos constitucionales de la libertad y 22 procesos constitucionales orgánicos, conforme lo establece el siguiente cuadro:

IDEAS PARA LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO CONSTITUCIONAL	
Procesos constitucionales de la libertad	Procesos constitucionales orgánicos
1. Amparo	1. Acción de inconstitucionalidad

- |  |  |
|--|--|
| 2. Amparo político-electoral   | 2. Controversia constitucional   |
| 3. Facultad de investigación de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos                            | 3. Juicio de revisión constitucional electoral   |
| 4. Habeas data   | 4. Juicio político   |
| 5. Queja ante comisiones de derechos humanos   | 5. Procedimientos ordinario y especial sancionador   |
| 6. Constitución y registro de partidos políticos nacionales y locales  | 6. Recurso de revisión   |
| 7. Proceso penal   | 7. Recurso de apelación  |
| 8. Procedimiento individual, colectivo o intersindical de los trabajadores de los Poderes de la Unión                    | 8. Juicio de inconformidad   |
| 9. Proceso de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo | 9. Recurso de reconsideración  |
| 10. Proceso de justicia cívica e itinerante  | 10. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador                                 |
| 11. Proceso laboral de servidores electorales en materia federal   | 11. Juicio electoral   |
| 12. Justicia agraria   | 12. Desaparición del poder en las entidades federativas  |
| 13. Proceso de registro de candidaturas para ser votadas en todos los cargos de elección popular                         | 13. Cuestión política  |
| 14. Conflicto o diferencia laboral entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su personal         | 14. Límite territorial   |
| 15. Proceso ante la Corte Penal Internacional (subsidiario)  | 15. Procedimiento de remoción de consejeros electorales de los organismos públicos electorales |
| 16. Amparo local   | 16. Responsabilidad administrativa y hechos de corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción  |
| 17. Amparo político-electoral  | 17. Proceso de fiscalización de recursos federales   |
| 18. Amparo interamericano (subsidiario)  | 18. Cuestión de inconstitucionalidad   |
|  | 19. Omisión de inconstitucionalidad  |
|  | 20. Omisión de inconstitucionalidad local  |
|  | 21. Procedimientos ordinarios y especiales sancionadores locales                               |
|  | 22. Opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (subsidiario)            |

*Décima octava.* Ciertos procesos constitucionales vigentes se pudieran integrar a otros, a efecto de cumplir con el principio de la plena ejecución de las resoluciones que ponen fin a los procesos constitucionales de la libertad y orgánicos en la ley fundamental de 1917. Esta integración tiene que ser realizada por procesalistas en su función de legisladores constitucionales.

*Décima novena.* La propuesta de la parte procesal del orden fundamental tiene que observar la teoría general del derecho procesal.

*Vigésima.* Se tendrá que adoptar los conceptos y principios de la teoría procesal para replantearlos y adaptarlos al proceso constitucional, con la finalidad de proponer una concepto de las partes de la relación jurídica, de las categorías, de los actos procesales, de la jurisdicción, la cual no sería voluntaria, sino contenciosa por enjuiciar los conflictos constitucionales, todo con fundamento en un concepto de proceso constitucional que se sustente en la naturaleza de la relación y la situación procesal.

## **FUENTES DE INFORMACIÓN**



## FUENTES DE INFORMACIÓN

### I. BIBLIOHEMEROGRAFÍA

- “El artículo 103 de la Constitución de 1917”, en *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, 2da. ed., México, Porrúa, 1978, t. VII.
- “El artículo 107 de la Constitución de 1917”, en *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, 2da. ed., México, Porrúa, 1978, t. VIII.
- “El artículo 116 de la Constitución de 1917”, en *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, 2da. ed., México, Porrúa, 1978, t. VIII, p. 487.
- “El artículo 94 de la Constitución de 1917”, en *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, 2da. ed., México, Porrúa, 1978, t. VII.
- Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, “Acertos terminológicos e institucionales del derecho procesal hispánico”, *Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia*, abril-junio de 1948, núm. 38, t. X.
- , “La teoría general del proceso y la enseñanza del derecho procesal”, *Revista Iberoamericana de derecho procesal* Madrid, España, 1968.
- , *Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional*, Buenos Aires, Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina, 1944.
- , *Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1a. reimp. 1992, t. I.
- , *Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1974, t. II.
- , *Proceso, autocomposición y autodefensa (Contribuciones a los fines del proceso)*, 1ra. reimp. de la 3ra. ed., México, UNAM-IIIJ, 2000.
- Alegre Martínez, Miguel Ángel, “El resurgimiento del debate sobre el control previo de constitucionalidad en España: experiencia y perspectivas”, en Ferrer MacGregor, Eduardo, *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, México, Porrúa-Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, julio diciembre 2007.
- Aragón, Manuel, “El control de constitucionalidad en la constitución española de 1978”, *Revista de estudios políticos*, Madrid, nueva época, núm. 7, enero-febrero de 1979.
- , “La justicia constitucional en el siglo XX. Balance y perspectivas en el umbral del siglo XXI”, *La ciencia del derecho durante el siglo XX*, México, UNAM, 1998.
- , *Constitución, democracia y control*, México, UNAM, 2002.
- , “Prólogo” en Corzo Sosa, Edgar, *La cuestión de inconstitucionalidad*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.
- Arellano García, Carlos, *Teoría general del proceso*, 18a. ed., 3a. reimp., México, Porrúa, 2015.



- Báez Silva, Carlos, "Una definición del concepto 'inconstitucionalidad por omisión'", González Oropeza, Manuel y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coords.) *La justicia constitucional en las entidades federativas*, México, Porrúa, 2006.
- Barajas Montes de Oca, Santiago, "Bases de la reforma a los artículos 94, 96 y 97 constitucionales en materia judicial", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 83, año 1995, mayo-agosto.
- Bazán, Víctor, "La inconstitucionalidad por omisión en el derecho comparado, con particular referencia al sistema venezolano", *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Montevideo, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2006, t. I.
- , "La tarea de control de constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales por la jurisdicción constitucional. Un análisis en clave de Derecho Comparado", *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Montevideo, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003.
- Bidart Campos, Germán J., *La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional*, Buenos Aires, Ediar, 1987.
- Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad. Con referencia a los ordenamientos Alemán, Suizo y Austriaco*, trad. Héctor Fix Zamudio, México, UNAM, Instituto de Derecho Comparado, Imprenta Universitaria, 1961.
- Carmona Tinoco, Jorge Ulises "El caso Jorge Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. IX, 2009.
- , "El caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. Estados Unidos Mexicanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. V, 2005.
- Carpizo, Jorge, *Nuevos estudios constitucionales*, México, UNAM, 2000.
- Castilla, Karlos, "El control de convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de la sentencia del Caso Radilla Pacheco", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. XI, 2011.
- Chiovenda, José, *Principios de derecho procesal civil*, trad. José Casáis y Santaló, Madrid, Editorial Reus, 1922, t. I.
- Corzo Sosa, Edgar, *La cuestión de inconstitucionalidad*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.
- , y Vega Gómez, Juan, "Relatorías. Mesa 4. Instrumentos de justicia constitucional", en Márquez Romero, Raúl (coord.), *Conclusiones y relatorías del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2002.
- Cossío Díaz, José Ramón, Mejía Garza, Raúl M. y Rojas Zamudio, Laura Patricia, *El caso Radilla. Estudio y documentos*, México, Porrúa, 2012.
- , *Sistemas y modelos de control constitucional en México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011.
- Couture, Eduardo J., *Fundamentos del derecho procesal civil*, 3a. ed., Buenos Aires, Roque Depalma Editor, 1999.
- De Pina, Rafael, *Derecho procesal (temas)*, México, 2a. ed., México, Ediciones Botas, 1951.

- De Vega García, Pedro, "Jurisdicción constitucional y crisis de la constitución", *Revista de estudios políticos*, Madrid, nueva época, núm. 7, enero-febrero de 1979.
- Del Rosario Rodríguez, Marcos Francisco, "Control de constitucionalidad", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. I.
- Dorantes Tamayo, Luis Alfonso, *Teoría del proceso*, 13a. ed., México, Porrúa, 2013.
- Duverger, Maurice, *Instituciones políticas y Derecho constitucional*, España, Ariel, 1970.
- Elías Musi, Edmundo, y Navarro Vega, Ignacio J., "Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antecedentes, estructura y competencia", en Elías Musi, Edmundo, *Estudio Teórico Práctico del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 1997*, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1997.
- Esriche, Joaquín, "Enjuiciamiento" y "Enjuiciar", *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, París, Librería Rosa, Bouret y C., 1851.
- Favoreu, Louis, *Los tribunales constitucionales*, trad. De Vicente Villacampa, Barcelona, Ariel, 1994.
- Fernández Rodríguez, José Julio, "Procesos constitucionales atípicos", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. I.
- Fernández Ruiz, Jorge, "Control constitucional por órganos administrativos", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. I.
- Fernández Segado, Francisco, *La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano*, México, UNAM-IIJ, 2004.
- Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y García Fernando, Silva, *Jurisdicción militar y derechos humanos. El caso Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, México, Porrúa, UNAM, 2011.
- , y Sánchez Gil, Rubén, *El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma constitucional y la nueva ley de amparo*, México, Porrúa, UNAM, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2013.
- , y Silva García, Fernando, *El caso Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano*, México, Porrúa, UNAM, 2009, pp. 1-241. "La primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano". En Carpizo, Jorge y Arriaga, Carol B. (coords.), *Homenaje al doctor Emilio O. Rabasa*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, 2010.
- , y Silva García, Fernando, *Los feminicidios de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Campo Algodonero). La*

- segunda sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano*, México, Porrúa, UNAM, 2011.
- , "Homicidios de mujeres por razones de género. El caso Campo Algodonero", en Bogdandy, Armin Von y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords.). *La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un lus Constitutionale Commune en América Latina?*, México, UNAM, 2010, t. II.
- , "Aportaciones de Héctor Fix Zamudio al derecho procesal constitucional", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, 5a. ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2006, t. I.
- , "Derecho procesal constitucional", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. I.
- , "El control difuso de convencionalidad en el Estado Constitucional", en Fix Zamudio, Héctor y Valadés, Diego (coords.), *Formación y perspectivas del Estado en México*, UNAM-El Colegio Nacional, 2010.
- , "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, (coords.), *La reforma constitucional de los derechos humanos: Un nuevo paradigma*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011.
- , "La regulación de los mecanismos de control constitucional en las entidades federativas (esbozo comparativo)", en González Oropeza, Manuel y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coords.), *La justicia constitucional en las entidades federativas*, México, Porrúa, 2006.
- , "Los tribunales constitucionales y la suprema corte de justicia de México", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, 5a. ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2006, t. I.
- , "Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de México", en *Ensayos sobre Derecho procesal constitucional*, México, Porrúa-CNDH, 2004.
- , "Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad. A la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XLIV, núm. 131, mayo-agosto de 2011.
- , *Compendio de derecho procesal constitucional* con el subtítulo *Legislación, prontuario y bibliografía*, 4ta. ed., México, Porrúa, 2008 (la 1ra. ed. se realizó en 2003).
- , *Derecho procesal constitucional. Origen Científico (1928-1956)*, Madrid, Marcial Pons, 2008.
- , *Ensayos sobre derecho procesal constitucional*, México, Porrúa-Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2004.
- , *Voto razonado del Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México*, Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 26 de noviembre de 2010.

- Fix Zamudio, Héctor y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Derecho de amparo*, México, Porrúa, UNAM, 2011.
- , "Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, 5a. ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2006, t. I,
- , "Breves reflexiones sobre la naturaleza, estructura y funciones de los organismos jurisdiccionales especializados en la resolución de los procesos constitucionales", en Vega Gómez, Juan y Corzo Sosa, Edgar (coords.), *Tribunales y justicia constitucional. Memoria del VII Congreso del Derecho Constitucional*, México, UNAM, 2002.
- , "La garantía jurisdiccional de la constitución mexicana (ensayo de una estructuración procesal del amparo)," *Tesis de licenciatura*, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1955.
- , "Panorama de la justicia constitucional en México. Conferencia magistral", en Córdova Vianello, Lorenzo y César Iván Astudillo Reyes (coords.), *Seminario reforma y control de la Constitución: Implicaciones y límites*, México, IIJ, versión dvd, disco 1, 3º de febrero de 2009.
- , *Introducción al derecho procesal constitucional*, México, FUNDAP, 2002.
- , *Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional (1940-1965)*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1968.
- , "Prólogo", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *La acción constitucional de amparo en México y España (Estudio de derecho comparado)*, 4a. ed., México, Porrúa, 2007.
- Gambetta, Diego, "¡Claro!: Ensayo sobre el machismo discursivo", en Elster, Jon (comp.), *La democracia deliberativa*, España, Gedisa, 2000.
- García Becerra, José Antonio, *Los medios de control constitucional en México*, México, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Cuadernos Jurídicos 12, 2001.
- García Belaunde, Domingo, "Jurisdicción constitucional", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. II.
- , "Sobre la jurisdicción constitucional", en Quiroga León, Aníbal (comp.), *Sobre la jurisdicción constitucional*, Lima, Pontificia Universidad Católica de Perú, Fondo Ed., 1990.
- , *De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional*, 4 ed., Lima, Editora Jurídica Grijley, 2003.
- , *De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional*, 4a. ed., Lima, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2003.
- , *Derecho procesal constitucional*, Colombia, Temis, 2001.
- García de Enterría, Eduardo, *La Constitución como norma y el tribunal constitucional*, Madrid, Civitas, 1985.
- Gómez Lara, Cipriano, "La teoría general del proceso y el derecho procesal constitucional", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, 5ª ed., prólogo de Héctor Fix Zamudio, México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación A.C., 2006, T.I.

- , *Teoría general del proceso*, 10a. ed., 18a. reimp., México, Oxford, 2015.
- Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, "Corte interamericana de derechos humanos. Caso Radilla Pacheco vs. México. Sentencia del 23 de noviembre de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas)", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. XI, 2011.
- , "Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco vs México. Desaparición Forzada de Personas", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. X aniversario, 2012.
- González Pérez, Jesús, "Prólogo", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen Científico (1928-1956)*, Madrid, Marcial Pons, 2008.
- , *Derecho procesal constitucional*, Madrid, Civitas, 1980.
- Gozáini, Osvaldo Alfredo, *El derecho procesal constitucional y los derechos humanos (vínculos y autonomías)*, México, UNAM, 1995.
- , *Los problemas de legitimación en los procesos constitucionales*, México, Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2005, núm. 4.
- Gudiño Pelayo, José de Jesús, "Lo confuso del control difuso de la Constitución", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), *Memoria del I Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional*, México, Porrúa, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007.
- Hernández Valle, Rubén, *Introducción al derecho procesal constitucional*, México, Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2005, núm. 4.
- Huerta Ochoa, Carla, "Argumento a rúbrica", "Constitución en sentido formal" y "Constitución en sentido material, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. I.
- Joachim Faller, Hans, "Defensa constitucional por medio de la jurisdicción constitucional en la república federal de Alemania", trad. Haller, Carlos E., *Revista de estudios políticos*, Madrid, nueva época, núm. 7, enero-febrero de 1979.
- Kelley, Santiago A., *Teoría del derecho procesal*, 10a. ed., México, Porrúa, 2015.
- Kelsen, Hans, "Judicial Review of Legislation. Comparative Study of the Austrian and the American Constitution", *The Journal of Politics*, vol. 4, núm. 2, mayo de 1942.
- Kelsen, Hans, *La garantía jurisdiccional de la constitución (La justicia constitucional)*, Rolando Tamayo y Salmorán (trad.), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Defensoría de los Derechos Humanos, 1a. reimp., 2016.
- Libro blanco de la reforma judicial. Una agenda para la justicia en México*, 1a. reimp., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, National Center for State Courts, 2001.
- Medina Lima, Ignacio, *Breve antología procesal*, México, UNAM, 1973, p. 153.
- Moderne, Franck, "El control previo de constitucionalidad en la Europa contemporánea", *Revista chilena de derecho*, Chile, Facultad de Derecho, Vol. 20 Nos. 2 y 3, t. I, Mayo-Diciembre 1993.
- Nino, Carlos Santiago, *Introducción al análisis del derecho*, 9a. ed., Barcelona, Ariel, 1999.

- Ovalle Favela, José, *Teoría general del proceso*, 6a. ed., 15a. reimp., México, Oxford, 2015.
- Pegoraro, Lucio, "Justicia constitucional (tipología)" y "Justicia constitucional (modelos)", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. II.
- Pelayo Möller, Carlos María y Vázquez Camacho, Santiago J., "El caso Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. IX, 2009.
- , "El proceso de creación e incorporación de los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas en México y su revisión por parte de Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. XII, 2012.
- Pérez Tremps, Pablo, "La cuestión de inconstitucionalidad en el derecho español", *Estudios constitucionales*, Santiago de Chile, Centro de Estudios Constitucionales, Santiago de Chile, año/vol. 3 número 0001.
- Podetti, Ramiro J., "Trilogía estructural del proceso", *Revista de derecho procesal*, Buenos Aires, 1944, núm. 1.
- Prieto Castro, L., "Derecho procesal civil", *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1964, t. I.
- Rabasa, Emilio, *El artículo 14 y el juicio constitucional*, México, Porrúa, 2000.
- Ramón Cossío, José, *Sistemas y modelos del control constitucional en México*, 2ad. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013.
- Rawls, John, *Teoría de la justicia*, trad. de María Dolores González, 2da. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
- Requejo Pajés, Juan Luis, "Los problemas de la omisión legislativa en la jurisprudencia constitucional", *XIV Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos*, Vilna, 2008.
- Rivera Hernández, Juan, "Consideraciones generales de la Constitución frente a su defensa", *Revista Conciencia-Política*, México, El Colegio de Veracruz, núm. 19, nueva época.
- , "Derecho procesal constitucional del Estado de México", *Revista El Jurista, Barra de Abogados del Estado de México*, México, Primera Época, núm. 2, enero-junio 2009.
- , "El amparo local en México. Análisis procesal constitucional". *Tesis de Maestría*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, 2 de agosto de 2013.
- , "Hacia nuevas competencias de la Sala Constitucional del Estado de México," *Tesis de licenciatura*, México, Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAEM Amecameca, 1o. de julio de 2009.
- , "La libertad en el goce de los derechos fundamentales basada en precedentes" *Revista expresiones. Letras ciudadanas a favor de la democracia*, México, Instituto Electoral de Querétaro, núm. 20, año 7, mayo-agosto 2016.
- , "Los jueces constitucionales y la resolución de los límites territoriales", *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, México, Porrúa, núm. 16, julio-diciembre 2011.

- , "Procesos constitucionales de la libertad", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. I, pp. 1053 y 1054.
- Roa, Jorge Ernesto, *La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, *Temas de Derecho Público no. 94*, Bogotá, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2015.
- Rodríguez Domínguez, Elvito A., *Derecho procesal constitucional*, Lima, Grijley, 1997.
- Sagües, Néstor Pedro, "Constitución convencionalizada", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni (coords.), *Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional*, México, Poder Judicial de la Federación, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. I.
- , *Derecho procesal constitucional de la provincia de Santa Fe*, Argentina, Rubinzal-Culzoni, 1994.
- , *La constitución bajo tensión*, México, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2016.
- Saíd, Alberto y González Gutiérrez, Isidro M., *Teoría general del proceso*, 4a. reimp., México, Editorial Iure Editores, 2006.
- Valadés, Diego, "Estudio introductorio", en Häberle, Peter, *El Estado constitucional*, 2a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016.
- , "Prólogo" en, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Panorámica del derecho procesal constitucional y convencional*, Madrid, Marcial Pons, 2013.
- Vázquez Camacho, Santiago José "El caso 'Campo Algodonero' ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. XI, 2011.
- Vizcarra Dávalos, José, *Teoría general del proceso*, 14 ed., 1a. reimp., México, Porrúa, 2015.

## II. ORDEN JURÍDICO

- Artículo 100, de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. Disponible en: <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf>, consultado el 10 de febrero de 2017.
- Artículo 1o. de las "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43), de 9 de febrero de 1948, núm. 1: "
- Artículo 24, numeral (2), inciso a) de la ley fundamental de Hungría. Disponible en: [http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file\\_id=325825](http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=325825), consultado el 10 de febrero de 2017.
- Artículo treinta y cinco, del Capítulo III De la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales, Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 5 de febrero de 2017.

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: [http://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm), consultado el 11 de febrero de 2017.

Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, *Diario Oficial de la Federación*, 31 de diciembre de 1994.

Decreto por el que ese adicionan la fracción XXIX-H al artículo 73, la fracción I-B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107; se reforma el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el artículo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107; y se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de agosto de 1987.

Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, el 10 de junio de 2011.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, el 6 de junio de 2011.

Dictamen de la iniciativa de Decreto número 52, *Gaceta del gobierno: Periódico oficial del Gobierno del Estado de México*, Toluca de Lerdo, México, Tomo CLXXVIII, No. 8, Sección Cuarta, 12 de julio del 2004.

La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 23 de mayo de 2014.

Ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 17 de junio de 2016.

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, el 27 de enero de 2017.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de mayo de 2015.

Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República.

Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada el 27 de enero de 2015.



Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales.

### III. ENLACES DE INTERNET

<http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/ResultadosV2.aspx?Epoca=1e3e1fd8f8fcfd&Apndice=1ffdf8fcfcff&Expresion=%22control%20constitucional%22&Dominio=Rubro,Texto&TATJ=2&Orden=1&Clase=TesisBL&bc=Jurisprudencia.Resultados&TesisPrincipal=TesisPrincipal&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&Hits=20>, consultado el 2 de febrero de 2017.

<http://dle.rae.es/?id=ARVzOfc>, consultado el 3 de febrero de 2017.

<http://dle.rae.es/?id=FTC8Q9m>

[http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987), consultado el 15 de febrero de 2017.

[http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011)

[http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011)

<http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/22/pr/pr19.pdf>

<http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/22/pr/pr19.pdf>, consultado el 30 de enero de 2017.

[http://norma.ine.mx/documents/27912/1351278/2015\\_Reglamento\\_designacion\\_remocion.pdf/318ed601-19a2-4723-97e6-80320542abd2](http://norma.ine.mx/documents/27912/1351278/2015_Reglamento_designacion_remocion.pdf/318ed601-19a2-4723-97e6-80320542abd2), consultado el 9 de febrero de 2017.

[http://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso\\_costituzionale/documentazione/legge\\_cost\\_19480209\\_1.pdf](http://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_costituzionale/documentazione/legge_cost_19480209_1.pdf), consultado el 10 de febrero de 2017.

<http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>

<http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>, consultado el 30 de diciembre de 2016.

[http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc\\_ferrer\\_220\\_esp.doc](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_ferrer_220_esp.doc), consultado el 15 de febrero de 2017.

<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30355.pdf>, consultado el 2 de febrero de 2017.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_050217.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_050217.pdf)

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/202.pdf>, consultado el 9 de febrero de 2017.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/205\\_270115.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/205_270115.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47\\_270117.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47_270117.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp\\_170616.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_170616.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE\\_270117.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf), consultado el 8 de febrero de 2017.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRArt76\\_fracVI.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRArt76_fracVI.pdf), consultado el 9 de febrero de 2017.

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcndh.htm>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe.htm>, consultado el 8 de febrero de 2017.

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpp.htm>, consultado el 9 de febrero de 2017.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrart76\\_fracvi.htm](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrart76_fracvi.htm), consultado el 9 de febrero de 2017.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfiyii\\_art105.htm](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfiyii_art105.htm), consultado el 8 de febrero de 2017.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfv\\_art76.htm](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfv_art76.htm), consultado el 9 de febrero de 2017.

[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987)

[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4782280&fecha=31/12/1994](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4782280&fecha=31/12/1994), consultado el 30 de diciembre de 2016.

[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011), consultado el 30 de diciembre de 2016.

[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014), consultado el 31 de diciembre de 2016.

[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016), consultado el 31 de diciembre de 2016.

[http://www.ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos/a\\_20\\_May\\_2016\\_2.pdf](http://www.ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos/a_20_May_2016_2.pdf), consultado el 9 de febrero de 2017.

[http://www.ieeq.mx/contenido/micro/2016/pplqro/archivos/criterios\\_jurisprudencias\\_TEPJF.pdf](http://www.ieeq.mx/contenido/micro/2016/pplqro/archivos/criterios_jurisprudencias_TEPJF.pdf), consultado el 9 de febrero de 2017.

[http://www.ieeq.mx/contenido/revista/file/2016/expresiones\\_20.pdf](http://www.ieeq.mx/contenido/revista/file/2016/expresiones_20.pdf)

<http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-PartidosPoliticosFormacion/PPEnFormacion-docs/Instructivo-RegPartidosPoliticos.pdf>, consultado el 9 de febrero de 2017.

[http://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_B-32\\_Convencion\\_Americana\\_sobre\\_Derechos\\_Humanos\\_firmas.htm#México:](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm#México:). Consultado el 11 de febrero de 2017.

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/fondo.asp>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/estatuto-comisi%C3%B3n-interamericana-derechos-humanos.pdf>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/estatuto-corte-interamericana-derechos-humanos.pdf>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/formulario-presentar-peticion-cidh.pdf>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/reglamento-corte-interamerica-derechos-humanos.pdf>, consultado el 11 de febrero de 2017.

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/reglamento-corte-IDH-fondo-asistencia-legal.pdf>, consultado el 11 de febrero de 2017.

[http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos\\_constitucionales/docs/Temas/JC\\_Iniciativa1\\_061216.pdf](http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/Temas/JC_Iniciativa1_061216.pdf), consultado el 11 de febrero de 2017.

[http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos\\_constitucionales/docs/Temas/JC\\_Iniciativa1\\_061216.pdf](http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/Temas/JC_Iniciativa1_061216.pdf), consultado el 11 de febrero de 2017.

[http://www.te.gob.mx/Informacion\\_juridiccional/sesion\\_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0153-2015.pdf](http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0153-2015.pdf). Consultado el 9 de febrero de 2017.

<http://www.te.gob.mx/IUSE/>, consultado el 2 de febrero de 2017.

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/675/3.pdf>, consultado el 14 de febrero de 2017.

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion-federal/historicos/1824.pdf>  
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion-federal/historicos/1824.pdf>,  
consultado el 25 de enero de 2017.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709>, consultado el 10 de febrero de 2017.

#### IV. TESIS JURISPRUDENCIALES Y PRECEDENTES

Jurisprudencia 15/2000: “Partidos políticos nacionales. Pueden deducir acciones tuitivas de intereses difusos contra los actos de preparación de las elecciones”.

Jurisprudencia 22/2002, Tercera Época, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Jurisprudencia 35/2016, Quinta Época, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Jurisprudencia 35/2016, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Quinta Época.

SUP-JDC-153/2015.

SUP-JDC-995/2015, SUP-JDC-153/2015, SUP-JDC-2708/2014, SUP-JDC-2173/2014, SUP-JDC-425/2014, SUP-JDC-805/2013, SUP-JDC-84/2013, SUP-JDC-3218-2012 y SUP-JDC-3134/2012. Información contenida en el oficio TEPJF-P-CCD/027/2016, de 6 de abril de 2016, del Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SUP-JRC-618/2015.

SUP-RAP-502/2016.

SUP-RAP-64/2007 y SUP-RAP-66/2007 acumulados, SUP-RAP-15/2009 y SUP-RAP-16/2009 y SUP-REP-218/2015.

Tesis LXIX/2015: “Desistimiento. Es improcedente cuando el ciudadano que promueve un medio de impugnación, ejerce una acción tuitiva del interés público”.

Tesis XXVIII/2005: “Desistimiento de la impugnación en contra de la integración de un tribunal local. Es legalmente inadmisibles”.

Jurisprudencia 10/2003: “Procedimiento administrativo sancionador electoral. Los ciudadanos denunciantes están legitimados para apelar la determinación emitida”.

Jurisprudencia 10/2005: “Acciones tuitivas de intereses difusos. Elementos necesarios para que los partidos políticos las puedan deducir”.

Jurisprudencia 3/2007: "Procedimiento administrativo sancionador electoral. Los partidos políticos tienen interés jurídico para impugnar la resolución emitida".

Jurisprudencia 8/2009: "Desistimiento. Es improcedente cuando el medio de impugnación es promovido por un partido político, en ejercicio de una acción tuitiva del interés público".

SUP-JRC-5/2015 y SUP-REP-124/2015, SUP-REP-291/2015.

Jurisprudencia 10/2015: "Acción tuitiva de interés difuso. la militancia puede ejercerla para impugnar actos o resoluciones emitidos por los órganos intrapartidistas (normativa del partido de la revolución democrática)".

SM-JE-1/2017 y acumulados.

Tesis, 7a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, Volumen 217-228, Sexta Parte, registro: 246920.

Jurisprudencia, 8a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo VIII, Agosto de 1991, Tesis: V.1o. J/12, p. 123, registro: 222065. Disponible en el anexo

Jurisprudencia, 8a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo VIII, Agosto de 1991, Tesis: V.1o. J/12, p. 123, registro: 222065.

Jurisprudencia, 8a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo VIII, Agosto de 1991, Tesis: V.1o. J/12, p. 123, registro: 222065. Disponible en el anexo I. Tesis jurisprudenciales del control constitucional.

Tesis Aislada, 8a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Tesis: I. 6o. T. 90 K, p. 512, registro: 210063.

Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, P./J. 83/2007, p. 984, registro: 170783.

Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XIX, Marzo de 2004, Tesis: P./J. 12/2004, p. 1164, registro: 181999.

Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XII, Agosto de 2000, Tesis: P./J. 71/2000, p. 965, registro: 191381.

Jurisprudencia, 9a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo VI, Diciembre de 1997, Tesis: I.6o.C. J/8, p. 622, registro: 197281.

Tesis Aislada, 9a. Época, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIX, Enero de 2009, Tesis: 2a. CLXII/2008, p. 781, registro: 168177.

Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XIX, Marzo de 2004, P./J. 12/2004, p. 1164, registro: 181999.

Jurisprudencia, 9a. Época, Pleno, *Apéndice de 2011*, Tomo I. Constitucional 1. Distribución de Funciones entre las Entidades Políticas del Estado Mexicano Primera Parte - SCJN Primera Sección - Esfera federal, Tesis 14, p. 24, registro: 1000986.

Jurisprudencia, 10a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Tesis: P./J. 24/2012 (10a.), p. 237, registro: 2012820.

- Jurisprudencia, 10a. Época, Plenos de Circuito, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, Tesis: PC.I.C. J/37 K (10a.), p. 1919, registro: 2012820.
- Jurisprudencia, 10a. Época, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación*, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.), p. 984, registro: 2006186.
- Jurisprudencia, 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/8 (10a.), p. 953, registro: 2005057.
- Tesis Aislada, 10a. Época, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación*, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Tesis: 2a. CIV/2014 (10a.), p. 1097, registro: 2007573.
- Tesis Aislada, 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Tesis: I.5o.P.11 K (10a.), p. 2223, registro: 2012035.
- Tesis Aislada, 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Tesis: I.5o.C.7 K (10a.), p. 2596, registro: 2012035.
- Tesis Aislada, 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Tesis: I.3o.C.24 K (10a.), p. 2001, registro: 2003039.
- Tesis Aislada, 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Tesis: III.4o.(III Región) 2 K (10a.), p. 4319, registro: 2000071.
- Tesis Aislada, 10a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro III, diciembre de 2011, t. 1, p. 549, registro: 200 0008.
- Tesis Aislada, 10a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro III, diciembre de 2011, t. 1, Tesis: P. LXIX/2011(9a.), p. 552, registro: 160525.
- Jurisprudencia, 10a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Tesis: P./J. 24/2012 (10a.), p. 237, registro: 2012820.
- Tesis Aislada, 10a. Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XIII, octubre de 2012, t. 1, P. III/2012 (10a.), p. 714, registro: 2001874.

## **ANEXOS**

## ANEXOS

### I. TESIS JURISPRUDENCIALES Y PRECEDENTES

1. *Tribunales Colegiados de Circuito, Plenos de Circuito del Poder Judicial de la Federación, así como, Salas y Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*

Época: Décima Época.

Registro: 2012726

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I

Materia(s): Común

Tesis: 2a. CII/2016 (10a.)

Página: 928

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SUJETARSE A CONTROL CONSTITUCIONAL.

Si bien la institución de la jurisprudencia prevista en el décimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal supone que su aplicación y vigencia es inmutable hasta en tanto no se sustituya el supuesto normativo al que se refiere por uno nuevo, lo cierto es que ello no conlleva desconocer la jerarquía existente entre los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, que están legitimados para emitir jurisprudencia, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en la cúspide. Bajo este orden, concebida la jurisprudencia como el resultado de la función y desempeño de la labor interpretativa y jurisdiccional del Alto Tribunal, sus decisiones y sentencias no pueden sujetarse a control constitucional, ya que estimar lo contrario implicaría contrariar la naturaleza de sus resoluciones como "definitivas e inatacables", lo que resultaría adverso al artículo 61, fracción II, de la Ley de Amparo. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de control de la regularidad constitucional y convencional de los actos emitidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y como garante primordial del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es susceptible de sujetarse a control constitucional; desconocer lo anterior significaría ejercitar un medio de control de regularidad sobre otro más, esto es, si a través de un juicio de amparo o de un recurso de revisión se plantea la inconstitucionalidad de una jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, ello implicaría un contrasentido, ya que con el pretexto de analizar su supuesta inconstitucionalidad lo que en realidad se pretende es modificar una decisión ejecutoriada, la cual goza además de las características de ser definitiva e inatacable. Aunado a lo anterior, permitir que los quejosos impugnen la constitucionalidad de un criterio jurisprudencial del Máximo Tribunal, implicaría también una violación a los principios de certeza y seguridad jurídica, ya que lejos de dar congruencia y claridad al contenido de la Ley de Amparo, se contravendría su mandato, generando una sensación de inestabilidad e incertidumbre para los justiciables, pues los órganos jurisdiccionales obligados a aplicarla podrían, incluso, desconocer su contenido ante la inexistencia de una resolución definitiva e inatacable, circunstancia que además fue definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.) (\*), en el sentido de que la jurisprudencia que emita no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio, por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá potencializar la aplicación de la interpretación más favorable a las personas, sin que ello signifique el desconocimiento de sus atribuciones como máximo intérprete del texto constitucional, ni de las reglas de admisibilidad o de procedencia del juicio de amparo y de los recursos respectivos.

Amparo directo en revisión 7/2015. Alianza Regiomontana de Vivienda, S.C. de R.L. de C.V. 12 de agosto de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado.

Nota: (\*) La tesis de jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de diciembre de 2014 a las 9:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 8, con el título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA."

Esta tesis se publicó el viernes 7 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época  
Registro: 2012820  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III  
Materia(s): Común  
Tesis: PC.I.C. J/37 K (10a.)  
Página: 1919

IMPEDIMENTO. LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA POR EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO JUEZ DE INSTANCIA, DICTE EN UN JUICIO DIVERSO AL NATURAL, UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON EL ACTO RECLAMADO.

El hecho de que existan dos juicios con identidad de partes, con el mismo carácter y en los que se reclamaron las mismas prestaciones, y en el primero se haya condenado a la parte actora al pago de costas, ante lo cual promovió el segundo, en cuyo auto de exequendo se embargaron los derechos litigiosos derivados del primer juicio de una de las codemandadas, determinación que el Juez del segundo juicio informó al del primero, no obstante, embargó cuentas bancarias propiedad de la parte actora, acto contra el que esencialmente ésta promovió sendos juicios de amparo indirecto, es decir, aparentemente, la autoridad responsable al embargar esas cuentas bancarias ignoró los efectos del embargo previo de derechos litigiosos, resulta insuficiente para concluir que el Juez que dictó la determinación que está relacionada a la reclamada pudiera estar colocado en una situación de riesgo de perder su imparcialidad al conocer de los juicios de amparo, en términos de la fracción VIII del artículo 51 de la ley de la materia, porque ello: a) no implica que el juzgador hubiere asumido una posición personal en la controversia que le resulte inhabilitante; b) per se, no pone de manifiesto que exista un ánimo de su parte para favorecer a la parte actora; y, c) no permite establecer que estaba involucrado en la controversia.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 5/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Octavo y Décimo Segundo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de agosto de 2016. Mayoría de diez votos de los Magistrados María del Carmen Aurora Arroyo Moreno, Jaime Aurelio Serret Álvarez, Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, Eliseo Puga Cervantes, Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, Elisa Macrina Álvarez Castro, Abraham Sergio Marcos Valdés, Marco Polo Rosas Baqueiro, Alejandro Sánchez López y Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Disidentes: Fernando Rangel Ramírez, quien



formuló voto particular, Adalberto Eduardo Herrera González y Arturo Ramírez Sánchez. Ausente: Martha Gabriela Sánchez Alonso. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Encargado del engrose: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Rigoberto Calleja Cervantes.

Criterios contendientes:

El emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el impedimento 4/2015 y el diverso sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el impedimento 7/2015.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época  
Registro: 2012035  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 32, Julio de 2016, Tomo III  
Materia(s): Común  
Tesis: I.5o.P.11 K (10a.)  
Página: 2223

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO, ES INDISPENSABLE QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL REALICE EL PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDIENTE EN EL QUE CALIFIQUE SI ESTÁ O NO CUMPLIDA SU EJECUTORIA DE AMPARO, DE LO CONTRARIO, LA DENUNCIA RESPECTIVA ES IMPROCEDENTE.

Del análisis sistemático de los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo se advierte que, para promover el incidente de repetición del acto reclamado, es indispensable que previamente el órgano de control constitucional realice el pronunciamiento correspondiente en el que califique si está o no cumplida su ejecutoria de amparo; de manera que, hasta entonces, el quejoso estará en aptitud de promoverlo, en caso de estar en desacuerdo con ese pronunciamiento, por estimar que la autoridad responsable, si bien formalmente cumplimentó la sentencia que otorgó la protección constitucional, al emitir la nueva resolución, ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado; de no hacerlo hasta ese momento, la denuncia respectiva es improcedente.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Incidente de inejecución derivado de denuncia de repetición del acto reclamado 2/2016. 3 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretaria: Elvia Vanessa Flores Díaz.

Incidente de inejecución derivado de denuncia de repetición del acto reclamado 1/2016. 10 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretaria: Elvia Vanessa Flores Díaz.

Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de inconformidad 11/2014, que fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 7/2014, declarada inexistente por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito el 26 de agosto de 2015.

Esta tesis se publicó el viernes 1 de julio de 2016 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época  
Registro: 2007400  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III  
Materia(s): Común  
Tesis: I.5o.C.7 K (10a.)  
Página: 2596

SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA.

El propio órgano de control de los actos de autoridad es quien debe, a su vez, asumir la responsabilidad que le corresponde, de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 444/2013. Víctor Takeshi Watanabe Suárez. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Amparo directo 88/2014. Norma Baeza Anaya y otro. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla.

Amparo directo 203/2014. Alfredo Chávez Baca. 15 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: José Alberto Jiménez González.

Esta tesis se publicó el viernes 5 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época  
Registro: 2003039  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.3o.C.24 K (10a.)  
Página: 2001

ERROR JUDICIAL. ELEMENTOS DE SU CONFIGURACIÓN Y SU CORRECCIÓN POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

El "error" como vocablo es entendido como una equivocación. En el ámbito judicial presenta ciertas notas distintivas: i) surge de una decisión jurisdiccional, no exclusivamente de las sentencias; ii) los sujetos activos son Jueces y Magistrados o las personas que ejerzan sus funciones; y, iii) los errores han de ser crasos, patentes y manifiestos. Aunque los elementos pueden variar, lo cierto es que el último extremo señalado resulta de interés. Esto, porque a juicio de este tribunal, los errores deben ser patentes, al grado de que puedan asociarse con la idea de arbitrariedad, al hacer que la decisión judicial sea insostenible por ir en contra de los presupuestos o hechos del caso. En otras palabras, el

error judicial adquiere relevancia constitucional cuando es producto de un razonamiento equivocado que no corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un error manifiesto en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, de tal manera que el error sea inmediatamente verificable, en forma incontrovertible, a partir de las actuaciones judiciales y sea determinante en la decisión adoptada por el Juez por constituir su soporte único o básico. Aunado a lo anterior, el error judicial adquiere relevancia constitucional cuando atenta contra los principios esenciales del Estado de derecho, como la cosa juzgada -como cuando se obliga al demandado a dar cumplimiento a una sentencia, cuando lo cierto es que el Juez, en las consideraciones del fallo, lo absolvió en forma absoluta-. Ahora, los órganos de control constitucional, al conocer de los juicios de amparo sometidos a su potestad, se encuentran facultados para corregir el error judicial cuando éste presente las características apuntadas en líneas anteriores. Lo anterior, porque toda resolución fundada en el "error judicial" puede calificarse como arbitraria y, por esa sola razón, violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva. Bajo esa óptica, no podría estimarse que el error judicial constituya "cosa juzgada" o que el derecho de los justiciables para combatirlo precluya porque ello se traduciría en que la decisión arbitraria sería incontrovertible por el simple transcurso del tiempo, cuando lo cierto es que la misma nunca debió existir.

### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 269/2012. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 25 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro.

Época: Décima Época  
Registro: 2007573  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a. CIV/2014 (10a.)  
Página: 1097

### CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben cumplir con una serie de obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, en términos de la tesis P. LXIX/2011 (9a.) (\*), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa, y que deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En todo caso, han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales. Aceptar lo contrario, generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a otros derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Amparo directo en revisión 1640/2014. Ramón Enrique Luque Félix. 13 de agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Maura Angélica Sanabria Martínez y Everardo Maya Arias.

Nota: (\*) La tesis aislada P. LXIX/2011 (9a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 552, con el rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."

Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época  
Registro: 2004185  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a. CCXLIII/2013 (10a.)  
Página: 742

#### CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO. SU RESULTADO DEBE SER COMPATIBLE CON LAS COMPETENCIAS QUE ESTRUCTURAN AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el control constitucional es un elemento transversal a la función jurisdiccional, por lo que se han transformado las competencias de los órganos judiciales. Un ejemplo de dicha transformación es la modificación de los supuestos de procedencia del recurso de revisión en el amparo directo, pues no necesariamente es improcedente cuando se recurre una sentencia que sobresee en el juicio constitucional, ya que puede impugnarse el precepto de la Ley de Amparo que sirvió de fundamento, pues si bien dicha ley es reglamentaria de la Constitución, lo relevante es que no es equivalente a ésta, por lo cual, al tratarse de una norma subordinada a los criterios de validez de la Norma Fundamental, no escapa a un posible escrutinio. Ahora bien, en el caso de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el escrutinio constitucional de dicha ley, el resultado de esa evaluación, en caso de resultar en la inaplicación de la norma respectiva, debe ser compatible con las competencias que estructuran al Poder Judicial de la Federación, pues el control constitucional, transversal a toda función jurisdiccional, debe ejercerse con base en el parámetro establecido en el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional. Por ende, si al resolverse el recurso de revisión en amparo directo se revoca la sentencia recurrida, por ejemplo, por basarse en una interpretación de una causal de improcedencia incompatible con la Constitución, debe revocarse la sentencia recurrida y remitirse el asunto al tribunal colegiado de circuito del conocimiento para que resuelva el asunto, al corresponder a éste resolver los amparos directos, de conformidad con el esquema legal. Así, si bien es cierto que en el juicio de amparo no existe la remisión, pues al resolverse un recurso de revisión, el órgano revisor debe reasumir competencia para resolver la materia del asunto, también lo es que esta regla no opera cuando en la revisión se estudia la constitucionalidad de la Ley de Amparo.

Amparo directo en revisión 301/2013. 3 de abril de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

Época: Décima Época  
Registro: 2003522  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Común  
Tesis: VII.2o.C. J/3 (10a.)

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES DE ALZADA ESTÁN OBLIGADOS A RESPONDER DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LOS AGRAVIOS RELATIVOS A LA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.

El sistema jurídico mexicano sufrió modificación a raíz de la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313. El modelo de control constitucional actual adoptó, junto con la forma concentrada -propia de los tribunales de la Federación- la modalidad difusa. Ahora, cualquier órgano jurisdiccional del país puede, en ejercicio de su potestad y de manera oficiosa, inaplicar leyes que considere contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. Por tanto, aun cuando no puede hacer declaratorias de inconstitucionalidad y expulsar del ordenamiento normas generales, sí puede considerar en los casos concretos los argumentos donde se aduce que algún acto o norma vulnera esos derechos fundamentales. Esta consideración se adecua a los parámetros establecidos en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), consultable en la página 535 del Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.". Por tanto, actualmente ya no encuentra respaldo legal la respuesta que los tribunales de alzada dan a los agravios de apelación cuando sostienen que no pueden atender planteamientos relativos a la violación de preceptos constitucionales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 166/2012. Martha Polett Cabrera Sánchez. 23 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Lucio Huesca Ballesteros.

Amparo directo 180/2012. Flor Esther Lázaro Romero. 7 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Mario de la Medina Soto.

Amparo directo 216/2012. Representaciones H.G.P., S.A. de C.V. y otro. 7 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: Katya Godínez Limón.

Amparo directo 251/2012. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Lucio Huesca Ballesteros.

Amparo directo 890/2012. 8 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: María Concepción Morán Herrera.

Época: Décima Época  
Registro: 2001864  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 24/2012 (10a.)  
Página: 287

CONSTITUCIONES LOCALES. DENTRO DE SUS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL PUEDEN ESTABLECERSE MECANISMOS PARA SUPERVISAR Y ORDENAR QUE SE SUBSANEN OMISIONES LEGISLATIVAS O NORMATIVAS.

No existe disposición constitucional alguna que impida que las Constituciones estatales establezcan, dentro de sus medios de control constitucional, un mecanismo para supervisar y ordenar que se

subsanan omisiones legislativas o normativas, y hacer efectivos y judicialmente exigibles los plazos y requisitos señalados en las leyes y decretos del Poder Legislativo, cuando se prevé en ellos la emisión o reforma de otros cuerpos normativos con el objeto de dar eficacia plena a la Constitución o a las leyes de cada entidad federativa.

Acción de inconstitucionalidad 8/2010. Procurador General de la República. 22 de marzo de 2012. Mayoría de diez votos; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Alfredo Orellana Moyao y Marco Antonio Cepeda Anaya.

El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número 24/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce.

Época: Décima Época  
Registro: 2001870  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 23/2012 (10a.)  
Página: 288

CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL. ES VÁLIDO ESTABLECER UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y UN SISTEMA DE MEDIOS PARA EXIGIR LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES Y LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO ESTATAL.

La superioridad de la Constitución de cada Estado de la Federación sobre el resto de sus normas internas, tiene fundamento en los artículos 40, 41, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que resulta válido establecer un tribunal y un sistema de medios para el control constitucional local, que tenga por finalidad controlar y exigir judicialmente la forma de organización de los Poderes estatales, en cuanto a su régimen interior y la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, en el ámbito del orden estatal, en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal.

Acción de inconstitucionalidad 8/2010. Procurador General de la República. 22 de marzo de 2012. Mayoría de diez votos en relación con el sentido; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Unanimidad de once votos a favor de las consideraciones contenidas en la presente tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Alfredo Orellana Moyao y Marco Antonio Cepeda Anaya.

El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número 23/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce.

Época: Décima Época  
Registro: 2001871  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 22/2012 (10a.)  
Página: 288

## CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS DEBE OBSERVAR EL MARCO PREVISTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La Constitución de cada Estado de la República constituye un orden jurídico específico y superior al resto de las leyes y normas de cada entidad; de ahí que los Congresos respectivos tienen libertad de configuración para establecer tanto el diseño de su órgano de control constitucional local, como los respectivos medios de control e impugnación que garanticen la superioridad constitucional en el Estado, sin que ello implique, por sí mismo, una afectación a la esfera de los Poderes Legislativo o Ejecutivo estatales, siempre que se observe, desde luego, el marco federal establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acción de inconstitucionalidad 8/2010. Procurador General de la República. 22 de marzo de 2012. Mayoría de diez votos en relación con el sentido; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Unanimitad de once votos a favor de las consideraciones contenidas en la presente tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Alfredo Orellana Moyao y Marco Antonio Cepeda Anaya.

El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número 22/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce.

Época: Décima Época  
Registro: 2000071  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: III.4o.(III Región) 2 K (10a.)  
Página: 4319

## CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.

La defensa de los derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma a su artículo 1o., publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y aquellos descritos en los convenios internacionales, se concreta mediante los instrumentos legales al tenor de los cuales se limite el poder de las autoridades; así, el control constitucional hace específica la necesidad de privilegiar y hacer eficaz el respeto a las prerrogativas señaladas por el Constituyente, y los medios para lograr su prevalencia en el Estado Mexicano son el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos político electorales, pues a través de éstos se estudia y determina si la normativa en conflicto se contrapone o no con un precepto constitucional, de lo cual deriva la conclusión de resolver sobre su constitucionalidad; por su parte, el control de convencionalidad, en su modalidad de difuso, si bien es cierto que se ejerce por todas las autoridades públicas, tratándose de violación a los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, también lo es que se circunscribe al deber de analizar la compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que deben aplicarse a un caso concreto y los derechos humanos que establece la Carta Magna y los tratados internacionales, así como orientados por la jurisprudencia que sobre el tema sustenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la fuerza vinculatoria de la normativa convencional, lo cual genera la consecuencia de permitir o no la aplicabilidad de alguna disposición a un caso en concreto. Por tanto, en el primer supuesto se determina sobre la constitucionalidad de la norma reclamada, mientras que en el segundo, sólo se atiende a su aplicación.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

Amparo directo 633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas aisladas P. LXVII/2011 (9a.), P. LXIX/2011 (9a.) y P. LXX/2011 (9a.), de rubros: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, páginas 535, 552 y 557, respectivamente.

Época: Novena Época

Registro: 165713

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Diciembre de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LXXV/2009

Página: 14

PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO REFORMATARIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

No puede identificarse al Poder Reformador de la Constitución con el Poder Constituyente, debido a que la propia Norma Fundamental establece ciertos límites al primero, los cuales deben cumplirse para respetar el principio jurídico de supremacía constitucional, pues de lo contrario se daría prevalencia únicamente al principio político de soberanía popular -los mencionados principios deben coexistir siempre que se asocien adecuadamente con los momentos históricos y con el tipo de ejercicio que se trate-. El Poder Constituyente, soberano, ilimitado, no puede quedar encerrado dentro del ordenamiento constitucional. La historia ha demostrado que todos los intentos de organización jurídica del Poder Constituyente, en el mejor de los casos, han servido sólo para privar al pueblo de sus facultades soberanas, a favor de otras instancias u otros órganos estatales. Se considera que ese poder ilimitado se ejerce, de acuerdo con su propia naturaleza, como fuerza externa al sistema, por lo que siempre y en todo momento podrá reformar a la Constitución existente o establecer una nueva, pero su actuación no podrá explicarse en términos jurídicos, sino por las vías de hecho, esto es, mediante un proceso revolucionario. En cambio, ningún poder constituido puede extraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias; por ello es que resulta inaceptable la pretensión de convertir al Poder Constituyente en el Poder Reformador -ordenado y regulado en la Constitución- como la aspiración contraria de hacer del Poder de Revisión un auténtico y soberano Poder Constituyente. El Poder Reformador es un órgano regulado y ordenado en el texto constitucional, pues es en él donde se basa su competencia. Aun cuando se acepte que la competencia para reformar la Constitución no es una competencia normal, sino una facultad extraordinaria o, si se quiere, una "competencia de competencias", ello no implica que se identifique, sin más, la facultad extraordinaria con el Poder Soberano. Claramente se trata de conceptos que no son idénticos, pues el Poder de Revisión nunca podrá tener otro fundamento que no sea la propia Constitución; de manera contraria, el Poder Constituyente, como poder soberano, es previo e independiente del ordenamiento. En consecuencia, es claro que solamente considerando al Poder Reformador como un poder constituido y limitado, la estructura de la organización constitucional democrática mantiene su coherencia y cobra sentido el principio jurídico de supremacía constitucional, ya que así ningún poder organizado y regulado por la Constitución puede ubicarse encima de ella. Sólo de este modo puede hablarse propiamente de una capacidad de la norma fundamental para



controlar sus propios procesos de transformación. Con ello, la Constitución se presenta como auténtica *lex superior* y la reforma constitucional puede interpretarse como una verdadera operación jurídica. De todo lo anterior se concluye que si el Poder Reformador es un órgano complejo limitado y sujeto necesariamente a las normas de competencia establecidas en el texto constitucional, entonces es jurídica y constitucionalmente posible admitir que un Estado Constitucional debe prever medios de control sobre aquellos actos reformativos que se aparten de las reglas constitucionales. Es decir, derivado de una interpretación del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe la posibilidad de ejercer medios de control constitucional contra la eventual actuación violatoria de las normas del procedimiento reformativo.

Amparo en revisión 186/2008. Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato Patronal. 29 de septiembre de 2008. Mayoría de seis votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.

El Tribunal Pleno, el tres de noviembre en curso, aprobó, con el número LXXV/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a tres de noviembre de dos mil nueve.

Época: Novena Época  
Registro: 168177  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Enero de 2009  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a. CLXII/2008  
Página: 781

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SU APLICACIÓN DIRECTA CORRESPONDE INDISTINTAMENTE A TODAS LAS AUTORIDADES ORDINARIAS O DE CONTROL CONSTITUCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO NO DESAPLIQUEN, PARA ESE EFECTO, UNA LEY SECUNDARIA.

Los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella. Por tanto, en términos generales, todas las autoridades ordinarias o de control constitucional, están obligadas a aplicarla directamente, particularmente cuando se está en presencia de derechos fundamentales, aplicación que ya ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes. No obstante, las autoridades distintas a los Jueces Constitucionales del Poder Judicial de la Federación deben aplicar directamente la Constitución hasta el límite de lo dispuesto en una ley formal y material; es decir, sólo deben aplicar e interpretar los contenidos constitucionales.

Contradicción de tesis 146/2008-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del propio circuito). 26 de noviembre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco García Sandoval.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

Época: Novena Época  
Registro: 170783  
Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Diciembre de 2007  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 83/2007  
Página: 984

**DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER VOTADO. SON DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DE ACUERDO AL SISTEMA COMPETENCIAL QUE LA MISMA PREVE.**

Los derechos de participación política establecidos en las fracciones I y II del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías individuales o derechos fundamentales, en primer término, porque participan de la posición de supremacía que tiene dicho precepto constitucional, de lo cual deriva que no sean disponibles en su núcleo esencial para los poderes constituidos; en segundo término, porque suponen una relación de interdependencia con las demás normas sobre derechos y libertades reconocidas en la norma suprema (sin libertad de expresión sería imposible el ejercicio efectivo del derecho de voto; al mismo tiempo, sin un gobierno sujeto a la legitimidad del voto público y a elecciones periódicas, sería difícilmente garantizable el goce efectivo de las demás garantías constitucionales); en tercer lugar, porque las pretensiones y expectativas que forman su objeto son claves para la organización y el funcionamiento del sistema democrático constitucional que la norma suprema trata de establecer. En ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de su atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a sus respectivas esferas de competencia jurisdiccional.

Acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 51/2006. Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y Revolucionario Institucional. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 83/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

Nota: Por ejecutoria del 21 de febrero de 2012, el Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 432/2011 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Época: Novena Época  
Registro: 179988  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XX, Diciembre de 2004  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: P. LXIII/2004  
Página: 1113

**AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL.**

La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe

de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control.

Recurso de reclamación 208/2004-PL, derivado de la controversia constitucional 70/2004. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 7 de septiembre de 2004. Mayoría de siete votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintidós de noviembre en curso, aprobó, con el número LXIII/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintidós de noviembre de dos mil cuatro.

Época: Novena Época  
Registro: 181999  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIX, Marzo de 2004  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 12/2004  
Página: 1164

CONTROL CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO FACULTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA INSTITUIR UN MEDIO DE ESA NATURALEZA A TRAVÉS DE UNA LEY ORDINARIA, COMO LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

El hecho de que el citado precepto constitucional impida que los Estados prohíban o graven, directa o indirectamente, la entrada a su territorio o la salida de él, de cualquier mercancía nacional o extranjera, no puede entenderse en el sentido de que faculte al Congreso de la Unión para instituir un medio de control constitucional a través de una ley secundaria, como es el caso de la Ley Federal de Competencia Económica, ya que tal medio sólo puede estar contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues únicamente la voluntad soberana, representada por el Constituyente o por el órgano reformador de la Constitución, puede establecer su existencia, de manera que corresponde sólo al legislador ordinario, en su caso, desarrollar y pormenorizar las reglas que precisen su procedencia, sustanciación y resolución.

Controversia constitucional 1/2001. Gobernador Constitucional del Estado de Durango. 6 de enero de 2004. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy ocho de marzo en curso, aprobó, con el número 12/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de marzo de dos mil cuatro.

Época: Novena Época  
Registro: 187498  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Marzo de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: VII.1o.A.T.14 K

JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. PROTEGE LA POSESIÓN, NO LA SIMPLE DETENTACIÓN U OCUPACIÓN MATERIAL DE UN BIEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Entre los bienes jurídicos tutelados por la garantía de audiencia a la que se contrae el artículo 14 constitucional, se cuenta la posesión, motivo por el que se requiere delimitar con exactitud cuáles son los elementos que integran ese bien a fin de poderlo distinguir de la simple tenencia material, que jurídica ni constitucionalmente está protegida, para lo cual es menester recurrir a la especialidad del derecho que trata esa cuestión, como lo es el derecho civil. Para la llamada teoría de Ihering o teoría objetiva, que parte de la noción misma del derecho subjetivo, que no es más que un interés jurídicamente protegido y que es la que acoge el Código Civil del Estado de Veracruz en sus artículos 826, 827 y 829, la posesión se traduce en un poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa y, además, en que esa persona pueda ejercer legalmente, ya en forma total, ya parcial, los derechos normalmente atribuidos a la propiedad, como son el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi. De ello se sigue que para que el poder de hecho de mérito constituya lo que jurídicamente se conoce como posesión, debe, por necesidad, tener una causa, un origen, o sea, lo que se reconoce con el nombre de causa possessionis, la cual, por su naturaleza jurídica, debe ser capaz de generar para quien tiene ese poder de hecho la facultad de ejercer cualesquiera de los aludidos derechos, dando así nacimiento a la posesión originaria, o cualesquiera de ellos, excepto el de disponer de la cosa, surgiendo así la posesión derivada, como ocurre, por ejemplo, en el arrendamiento, en el comodato, en la prenda, en el caso del acreedor pignoraticio, del usufructuario, del depositario, etcétera, posesiones ambas que se encuentran tuteladas por el precepto de la Carta Magna antes aludido, en contra de lo que sucede con la simple tenencia material u ocupación no legitimada por alguna causa jurídicamente apta para otorgar al tenedor u ocupante alguno o todos los derechos que se precisan líneas arriba, la cual no está salvaguardada por el propio dispositivo de ley y, obviamente, por el amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 203/2001. Fernando Hernández Hernández. 13 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretaria: Nilvia Josefina Flota Ocampo.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, tesis P./J. 1/2002, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS".

Época: Novena Época  
Registro: 190694  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XII, Diciembre de 2000  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 138/2000  
Página: 1117

QUEJA RELATIVA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRAMITACIÓN EL REFERIDO MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL ES RESUELTO.

Si el recurso de queja fue motivado por una supuesta violación a la suspensión concedida en el expediente relativo a una controversia constitucional y es el caso de que ésta fue resuelta, es inconcuso que debe declararse que el citado medio de impugnación ha quedado sin materia. Ello es así, porque la suspensión de los actos cuya invalidez se demandó en la controversia constitucional y que motivó el recurso de queja por una supuesta violación de dicha medida cautelar, exclusivamente rige hasta el momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada, por lo que al haberse resuelto el asunto principal del cual deriva, tal recurso carece de materia, en virtud de su naturaleza accesoria.

Recurso de queja relativo al incidente de suspensión en la controversia constitucional 20/98. Ayuntamiento del Municipio de Tultepec, Estado de México. 2 de octubre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 138/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil.

Nota: La presente tesis fue abandonada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 71/2005, del que derivó la tesis P./J. 29/2008 de rubro: "QUEJA RELATIVA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRAMITACIÓN EL REFERIDO MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL ES RESUELTO".

Época: Novena Época  
Registro: 191381  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XII, Agosto de 2000  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 71/2000  
Página: 965

#### CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

Si bien es cierto que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos medios de control de la constitucionalidad, también lo es que cada una tiene características particulares que las diferencian entre sí; a saber: a) en la controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental; b) la controversia constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal a diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma; c) tratándose de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma; d) respecto de la controversia constitucional, se realiza todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento; e) en cuanto a las normas generales, en la controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas; f) por lo que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos, mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede

por lo que respecta a normas generales; y, g) los efectos de la sentencia dictada en la controversia constitucional tratándose de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros. En consecuencia, tales diferencias determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios sea distinta.

Controversia constitucional 15/98. Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 11 de mayo de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número 71/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 875, tesis P./J. 83/2001 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA."

Época: Novena Época  
Registro: 192495  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XI, Enero de 2000  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 2/2000  
Página: 40

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA JURISPRUDENCIA PLENARIA 9/96 OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA CONCESORIA, ASÍ COMO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

La tesis jurisprudencial 9/96, publicada en la página 78 del Tomo III, febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, establece que cuando las sentencias de amparo ordenen reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados del quejoso, siempre que entre éstos exista litisconsorcio pasivo necesario; por tanto, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo, al otorgar la protección al quejoso, está obligado a establecer que los alcances del amparo benefician a los codemandados del quejoso aun cuando no hayan intentado la acción constitucional siempre que haya litisconsorcio pasivo necesario, pero si no lo hace, el tribunal responsable, al cumplir la ejecutoria, debe acatar la jurisprudencia.

Contradicción de tesis 14/99. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 27 de agosto de 1999. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 2/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de enero del año dos mil.

Nota: La tesis P./J. 9/96 a que se hace mención, aparece publicada con el rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO."

Época: Novena Época  
Registro: 195433  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VIII, Octubre de 1998  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XXII.2o.5 A  
Página: 1123

CONSEJEROS ELECTORALES. LA FACULTAD DE LA LEGISLATURA LOCAL PARA REMOVERLOS, CONFORME AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, NO ESTÁ AL MARGEN DEL CONTROL CONSTITUCIONAL.

De conformidad con los artículos 41 fracción XXXII de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 66 de la Ley Electoral estatal, la Legislatura del Estado está facultada para remover a los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro cuando a su juicio medie causa grave, pero el ejercicio de ese atributo no está al margen del control constitucional, conforme a la causa de improcedencia establecida por el numeral 73, fracción VIII de la Ley de Amparo, dado que los consejeros electorales ni son funcionarios del Poder Legislativo ni, aun en el caso de que lo fueran, se faculta expresa o implícitamente a dicho poder por la Constitución Local para separarlos de manera soberana o discrecional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 174/98. María Elena Ortega Alcocer. 21 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Germán Tena Campero. Secretario: Juan José Olvera López.

Amparo en revisión 96/98. Juan Ricardo Ramírez Luna y coags. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Germán Tena Campero. Secretario: Juan José Olvera López.

Época: Novena Época  
Registro: 196427  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Abril de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 24/98  
Página: 210

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO EXISTA AUTORIDAD SUSTITUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE, EN RELACIÓN CON ELLA, REQUERIRLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO, DE LO CONTRARIO, PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.

La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo, por parte de las autoridades responsables, cuando las mismas han sido requeridas en los términos señalados por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, a fin de aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional; ello sin perjuicio de que se haga cumplir la ejecutoria conforme a lo dispuesto por los artículos 111 y 112 de la propia ley. Por otra parte, según lo dispone el artículo 113 de la mencionada ley, no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia concesoria del amparo, salvo que ya no exista materia para su ejecución. Por lo anterior, cuando el órgano de control

constitucional que otorgó el amparo incumplió con la obligación consistente en que, previamente a la remisión del incidente de inejecución de sentencia a la Suprema Corte, a fin de aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, debió realizar el procedimiento respectivo para los efectos previstos por los artículos 104, 105 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con la autoridad sustituta por ministerio o por disposición de la norma legal, este Alto Tribunal debe ordenar la reposición del procedimiento para tal fin, básicamente porque no se está en posibilidad de determinar en el incidente relativo sobre el incumplimiento de la ejecutoria y la procedencia de la sanción señalada en el precepto constitucional antes citado, dado que la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo ya no tiene responsabilidad alguna, y la autoridad que no intervino con tal carácter de responsable y a quien compete dar cumplimiento a la ejecutoria, al no haber sido parte en el juicio, tampoco puede considerársele responsable del incumplimiento.

Incidente de inejecución 55/95. Graciela Lemas Moreno. 10 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.

Incidente de inejecución 85/90. Socorro Motta viuda de Osuna. 4 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adriana Escorza Carranza.

Inconformidad 256/96. Fernando Rangel Martínez. 31 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Incidente de inejecución 141/92. Rafael Ávila Nuñez y otra. 19 de noviembre de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.

Incidente de inejecución 2/93. José Luis Navarrete García. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.

Tesis de jurisprudencia 24/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de abril de mil novecientos noventa y ocho.

Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 69, septiembre de 1993, tesis 3a./J. 10/93, página 13, de rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA CUANDO EXISTA AUTORIDAD SUSTITUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA. DEBE OTORGARSE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO."

Época: Novena Época

Registro: 197281

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo VI, Diciembre de 1997

Materia(s): Común

Tesis: I.6o.C. J/8

Página: 622

QUEJA, AGRAVIOS EN LA. RESULTAN INFUNDADOS LOS QUE SE HACEN VALER CONTRA UN JUEZ DE DISTRITO CUANDO ÉSTE ACTÚA COMO ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

El Juez de Distrito, en su doble función de conocer de juicios ordinarios federales y del juicio de amparo, técnica y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales cuando actúa como órgano de control constitucional, puesto que su proceder se rige por las disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; por lo que si tales Jueces incurrir en violaciones durante la tramitación del juicio de amparo, dichas infracciones deben analizarse a la luz de las disposiciones de la ley invocada.



## SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 536/96. Plaza del Zapato, S.A. de C.V. y otro. 13 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Raúl González González.

Queja 66/97. Rosalinda Hernández Tapia. 20 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos.

Queja 96/97. Rosalinda Hernández Tapia. 20 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos.

Queja 600/97. Seguros Monterrey Aetna, S.A. 21 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: José Guadalupe Sánchez González.

Queja 536/97. Reyna Moljo Pérez de Cherem. 23 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Víctor Hugo Guel de la Cruz.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V-Enero, tesis P./J. 2/97, página 5, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES, LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO." y Tomo III-Abril, tesis XIX, 2o. J./3, página 250, de rubro: "JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS DE LOS."

Época: Novena Época

Registro: 201075

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo IV, Octubre de 1996

Materia(s): Común

Tesis: III.1o.C.9 K

Página: 488

AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LA FUNCION DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

Del contenido de los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se infiere que a los Jueces de Distrito en Materia Civil se les han atribuido dos funciones; una de control constitucional y otra contenciosa jurisdiccional. La primera coloca al juzgador en una relación política con los demás poderes federales o locales, en la que se erige como protector y conservador del régimen constitucional frente a los actos de éstos, que sean transgresores de las garantías individuales de los gobernados; en cambio, la segunda, o sea, la función jurisdiccional propiamente dicha, se despliega mediante el conocimiento y resolución de los asuntos contenciosos que se le planteen dentro del ámbito de su competencia, sin que tenga como objeto primordial la salvaguarda del orden constitucional. Ahora bien, por disposición expresa del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos que deriven del ejercicio de la función de control constitucional que ejerza el Juez de Distrito; evento en el cual, sólo podrán ser impugnados a través de los medios de defensa que prevé la ley de la materia. De tal suerte que la competencia que el artículo 42 de este último ordenamiento atribuye a un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, en que se reclamen actos de otro de similar categoría, obviamente presupone que éstos se suscitaron a virtud del ejercicio de la función meramente judicial, o sea, dentro de un procedimiento o controversia de carácter federal, no en el juicio de garantías; de ahí que sólo en esa clase de asuntos es factible que el Juez de Distrito pudiese incurrir en alguna transgresión de las garantías individuales y, por ende, únicamente en relación a ellos será procedente el amparo.

#### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Improcedencia 57/96. Miguel Angel Yerena Ruiz y coagraviados. 1o. de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: José Luis Fernández Jaramillo.

Época: Octava Época

Registro: 210063

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo XIV, Noviembre de 1994

Materia(s): Común

Tesis: I. 6o. T. 90 K

Página: 512

#### PRUEBAS. EL ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL NO PUEDE SUSTITUIRSE AL CRITERIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y APRECIARLAS DIRECTAMENTE

A los órganos de control constitucional no les está permitido substituirse en el criterio de la autoridad responsable y apreciar directamente las pruebas aportadas por las partes, por no ser el juicio de amparo una segunda instancia, sino un medio extraordinario de defensa cuya función esencial es, como su nombre lo indica, la del control de la constitucionalidad y, en esa medida, únicamente deben examinar si la autoridad violó o no las leyes reguladoras de la prueba o bien si existió o no alteración de los hechos, pero en modo alguno sustituirla en la valoración de las pruebas.

#### SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 666/94. Ubaldo Zepeda Romero y otros. 26 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: Carlos Enrique Vázquez Vázquez.

Época: Octava Época

Registro: 210960

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Núm. 79, Julio de 1994

Materia(s): Penal

Tesis: IX.1o. J/16

Página: 63

#### RETROACTIVIDAD. CUANDO CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE.

El juicio de amparo es, en esencia, un medio de defensa cuyo objeto es examinar la legalidad del acto reclamado, pues el órgano de control constitucional decide si el acto reclamado viola o no garantías individuales, y en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, no pudiéndose admitir ni tomar en consideración, las pruebas no rendidas ante dicha autoridad; así pues, sería ajeno al objeto, esencia misma del juicio de amparo, disponer que se apliquen en beneficio del quejoso, las reformas de que hubiera sido objeto la Ley Penal, (previendo una pena más favorable al sentenciado) cuando tales reformas no estaban vigentes al emitirse la sentencia reclamada, pues la litis en el juicio de amparo consiste en decidir si la sentencia reclamada se dictó conforme a la Ley Penal aplicable, es decir, la ley vigente cuando sucedieron los hechos o cuando la sentencia fue emitida, siendo de advertir que conforme al artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, si entre la comisión de un delito y la extinción de la pena, surge una nueva ley, ésta deberá aplicarse retroactivamente cuando beneficie al

inculpado o indiciado y corresponde hacer dicha aplicación a la autoridad que conozca del asunto; es decir, si no ha concluido el proceso, será el juez o tribunal de apelación que conozca de él, quien aplique la nueva disposición legal, mientras que si se trata de sentenciados, la aplicación de la misma corresponderá al Poder Ejecutivo, encargado de la ejecución de las sanciones aplicar la ley mas favorable.

#### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Amparo directo 285/93. Roque Robledo Luna. 30 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Chowell Zepeda. Secretario: Juan Castillo Duque.

Amparo directo 365/93. Juan Espíndola Hernández. 25 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala.

Amparo directo 399/93. Emiliano Hernández Rivera. 13 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala.

Amparo directo 419/93. Celestino Espinoza González. 13 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala.

Amparo directo 116/94. Javier Antonio de la Cruz Maldonado. 28 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Francisco Miguel Hernández Galindo.

#### Notas:

Esta tesis contendió en la contradicción 13/94 resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 7/95, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, página 124, con el rubro: "RETROACTIVIDAD. APLICACION DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. DEBE HACERSE EN EL PROCESO PENAL POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ORDINARIA COMPETENTE Y NO EN EL JUICIO DE GARANTIAS."

El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 39/2003-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión celebrada el siete de enero de dos mil cuatro, en la cual se determinó que no existe la contradicción de criterios sustentados, por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver los amparos directos números 285/93, 365/93, 399/93, 419/93 y 116/94, y por la otra, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el amparo directo número 163/2000, por el contrario que sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en el amparo directo 658/2002, y por la otra, por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el amparo directo número 163/2000. De esta contradicción de tesis derivó la tesis 1a./J. 1/2004, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 151, con el rubro: "LEY PENAL INTERMEDIA. NO PUEDE APLICARSE AL MOMENTO DE EMITIR LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO HAYA SIDO BENÉFICA."

Época: Octava Época  
Registro: 211338  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo XIV, Julio de 1994  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 538

## DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, PRESENTACION DE LA, A TRAVES DE LOS ORGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

No existe prohibición alguna para presentar la demanda de garantías directamente ante el máximo Tribunal de la República o de un Tribunal Colegiado de Circuito; empero como los artículos 163 y 165 de la Ley de Amparo establecen que su presentación debe hacerse por conducto de la autoridad responsable y que ésta tendrá la obligación de certificar al pie del escrito la fecha de notificación de la resolución reclamada, así como aquella en la que sea presentada, y que el hacerlo directamente ante los órganos de control constitucional, en forma alguna interrumpirá el término a que se refieren los artículos 21 y 22 de la propia ley, es inconcuso que cuando el quejoso opta por presentar su demanda en forma directa, ya sea ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado, corre el riesgo de que cuando ésta llegue ante la responsable para que proceda a poner al pie de la misma la fecha en que es presentada ante ella, haya transcurrido el plazo de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo.

### SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Reclamación 2/88. Teófila Mora Flores. 1o. de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez.

Época: Octava Época  
Registro: 222065  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VIII, Agosto de 1991  
Materia(s): Común  
Tesis: V.1o. J/12  
Página: 123

## GARANTIAS INDIVIDUALES. EL JUEZ DE DISTRITO, COMO ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, NO INCURRE EN VIOLACION, A LAS.

EL juez de Distrito como órgano de control constitucional no viola las garantías individuales de quien le pide el otorgamiento de la protección de la justicia federal, puesto que, precisamente tiene como función el examen analítico del acto de autoridad reclamado, a fin de constatar si en ese acto hubo o no violaciones a las garantías individuales del gobernado, pues en todo caso, su proceder de ser equívoco, sólo podría entrañar infracciones a las normas rectoras del juicio de amparo.

### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Incidente en revisión 147/90. Alberto Matty Ramos. 18 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: Humberto Bernal Escalante.

Incidente en revisión 177/90. Elvia Elena Lúquez de Aguirre. 14 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Arredondo Elías. Secretario: Francisco Martínez Hernández.

Incidente en revisión 172/90. Manuel Ramos Félix. 14 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Arredondo Elías. Secretario: Francisco Martínez Hernández.

Incidente en revisión 43/91. Eusebio Zamorano Acosta. 11 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretaria: Elisa Navarrete Hinojosa.

Improcedencia 99/91. Magdaleno Coronel Villarreal. 27 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Arredondo Elías. Secretario: Javier Cardoso Chávez.

Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 44, de agosto 1991, página 41.

Época: Octava Época  
Registro: 222356  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VII, Junio de 1991  
Materia(s): Común  
Tesis: I.6o.C. J/1  
Página: 139

AGRAVIOS EN LA REVISION. RESULTAN INFUNDADOS LOS QUE SE HACEN VALER CONTRA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ESTE ACTUA COMO ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

En los casos en que se impugna la resolución de un Juez de Distrito cuando éste actúa como órgano de control constitucional, no son las violaciones a la Constitución las que deben invocarse en los agravios relativos que la impugnan, sino lo que debe ser materia de ellos son las infracciones a la Ley de Amparo, dado que su actuación se rige por dicho ordenamiento legal, de ahí que si se aducen argumentos relacionados con transgresiones a nuestra Ley Fundamental atribuidas a dichos Jueces de Distrito, resulten infundados, puesto que es a ese órgano jurisdiccional a quien corresponde vigilar que no se conculquen las garantías constitucionales cuando se resuelve un juicio de amparo.

#### SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 1078/90. María de los Remedios viuda de Herrero. 11 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez.

Amparo en revisión 324/91. Victoria Chávez de Lonagi. 30 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez.

Amparo en revisión 384/91. Pedro Villa González. 30 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez.

Amparo en revisión 210/91. Ignacio Fernández Romero. 27 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R. García Vasco. Secretario: Daniel Patiño Pereznegrón.

Amparo en revisión 1141/90. Angel Carmona Soriano y otros. 6 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez.

Época: Séptima Época  
Registro: 246920  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 217-228, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 317

GARANTIAS INDIVIDUALES, EL ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL NO PUEDE VIOLAR LAS.

Los Jueces de Distrito, en relación con los juicios de amparo ante ellos promovidos, actúan como órganos de control constitucional, con la específica finalidad legal de tutelar las garantías individuales contra las transgresiones en que pudieran incurrir las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas, por lo cual aquéllos no pueden violar garantías, que es precisamente lo que están dilucidando a través de su actividad jurisdiccional, para en el caso de existir, proveer a la restitución en el goce de las mismas al afectado. Por ello, en todo caso, lo único que dichas autoridades judiciales federales podrían infringir, serían las disposiciones de la Ley de Amparo que reglamentan la apuntada función tutelar.

#### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 447/87. Arturo Mendieta Velázquez. 2 de julio de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa.

#### Precedentes:

Amparo en revisión 551/87. Esteban Clemente Flores. 21 de agosto de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa.

Amparo en revisión 654/87. Dolores Acosta de Márquez. 30 de septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Antolín Hiram González Cruz.

Amparo en revisión 797/87. Fidel García Ruiz y Concepción Hernández de García. 16 de octubre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa.

Amparo en revisión 897/87. Antonio Anzurez Gómez y Guillermina Escobedo de Anzurez. 19 de noviembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta Anguas Carrasco.

Nota: Esta tesis ha integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 805, página 546.

Época: Séptima Época

Registro: 252127

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Volumen 115-120, Sexta Parte

Materia(s): Administrativa

Tesis:

Página: 23

AGRARIO. PRUEBAS DE OFICIO. LA FACULTAD DE RECABARLAS NO SOLO COMPETE AL ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE GARANTIAS, SINO TAMBIEN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, EN EL CONFLICTO QUE SE LES PLANTEE.

En términos de los artículos 225 y 227 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez de Distrito la obligación de recabar de oficio las pruebas necesarias para resolver adecuadamente la controversia en materia agraria; pero interpretando correctamente el artículo 439 de la Ley Federal de Reforma Agraria, puede concluirse que a ello están igualmente obligadas las autoridades del ramo durante el trámite del conflicto respectivo que se les plantee.

#### TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 306/78. Carmen Maldonado González. 19 de julio de 1978. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Armando García Romero.

Nota: En el Informe de 1978, la tesis aparece bajo el rubro "MATERIA AGRARIA. LA FACULTAD DE RECABAR PRUEBAS NO SOLO COMPETE AL ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE GARANTIAS, SINO TAMBIEN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, EN EL CONFLICTO QUE SE LE PLANTEE.".

Época: Novena Época

Registro: 1000986

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Apéndice de 2011

Tomo I. Constitucional 1. Distribución de Funciones entre las Entidades Políticas del Estado Mexicano

Primera Parte - SCJN Primera Sección - Esfera federal

Materia(s): Constitucional

Tesis: 14

Página: 24

COMPETENCIA ECONÓMICA. LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA SON INCONSTITUCIONALES, EN CUANTO PREVEN UN MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y FACULTAN A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA PARA ANALIZAR Y DECIDIR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ACTOS DE AUTORIDADES ESTATALES.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el control constitucional de normas generales o de actos de las autoridades del Estado no puede crearse en una ley, sino en la propia Constitución Federal. En esa virtud, los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Competencia Económica son inconstitucionales porque establecen un medio de control constitucional a través del cual se analizan los actos de las autoridades estatales por su posible contradicción con la fracción V del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y facultan a un organismo público desconcentrado de la administración pública federal, como es la Comisión Federal de Competencia, para llevar a cabo el análisis y decisión sobre la constitucionalidad de los referidos actos, con lo que se quebranta el respeto de los diferentes niveles de gobierno y su ámbito competencial, en contravención a los artículos 40 y 41 de la Carta Magna, ya que, para tal efecto, el Órgano Reformador de la Constitución instituyó en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la controversia constitucional, que constituye el medio idóneo para regular el ejercicio de atribuciones de las autoridades, ya sea en la esfera federal o local, de manera que cualquier otra vía instituida en una ley para tal fin, es inconstitucional.

Controversia constitucional 1/2001.—Gobernador Constitucional del Estado de Durango.—6 de enero de 2004.—Mayoría de ocho votos.—Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo.—Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.—Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy ocho de marzo en curso, aprobó, con el número 11/2004, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a ocho de marzo de dos mil cuatro.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 1162, Pleno, tesis P./J. 11/2004; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 1057; y véase voto en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 1160.

Época: Novena Época  
Registro: 1000990  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo I. Constitucional 1. Distribución de Funciones entre las Entidades Políticas del Estado Mexicano  
Primera Parte - SCJN Primera Sección - Esfera federal  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 17  
Página: 27

CONTROL CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO FACULTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA INSTITUIR UN MEDIO DE ESA NATURALEZA A TRAVÉS DE UNA LEY ORDINARIA, COMO LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

El hecho de que el citado precepto constitucional impida que los Estados prohíban o graven, directa o indirectamente, la entrada a su territorio o la salida de él, de cualquier mercancía nacional o extranjera, no puede entenderse en el sentido de que faculte al Congreso de la Unión para instituir un medio de control constitucional a través de una ley secundaria, como es el caso de la Ley Federal de Competencia Económica, ya que tal medio sólo puede estar contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues únicamente la voluntad soberana, representada por el Constituyente o por el órgano reformador de la Constitución, puede establecer su existencia, de manera que corresponde sólo al legislador ordinario, en su caso, desarrollar y pormenorizar las reglas que precisen su procedencia, sustanciación y resolución.

Controversia constitucional 1/2001.—Gobernador Constitucional del Estado de Durango.—6 de enero de 2004.—Mayoría de ocho votos.—Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo.—Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.—Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy ocho de marzo en curso, aprobó, con el número 12/2004, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a ocho de marzo de dos mil cuatro.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 1164, Pleno, tesis P./J. 12/2004; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 1057; y véase voto en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 1160.

Época: Novena Época  
Registro: 1003205  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1326  
Página: 1490

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS,



## EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL.

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) establece que el auto de formal prisión debe contener: el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva del juez de la causa que no pueden ejercitar los jueces de distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas; sin embargo, si bien es cierto que el juez de distrito no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, también lo es que ello no implica que no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que el juicio de garantías se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Por tanto, se concluye que cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión -cuerpo del delito y presunta responsabilidad-, el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto. Sin que lo anterior signifique que el tribunal constitucional sustituye al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que en el caso aludido, aquél únicamente analiza la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal.

Contradicción de tesis 156/2008-PS.—Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito; Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito).—10 de junio de 2009.—Mayoría de cuatro votos.—Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Ponente: Sergio A. Valls Hernández.—Secretario: Gustavo Ruiz Padilla.

Tesis de jurisprudencia 74/2009.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de julio de dos mil nueve.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 51, Primera Sala, tesis 1a./J. 74/2009; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 52; y véase voto en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 82.

Época: Novena Época

Registro: 1000540

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Apéndice de 2011

Tomo II. Procesal Constitucional 3. Acciones de inconstitucionalidad Primera Parte - SCJN

Materia(s): Constitucional

Tesis: 12

Página: 4438

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

Si bien es cierto que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 27/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 1155, con el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.", sostuvo que el nuevo texto de la norma general, al ser un acto legislativo distinto al anterior, formal y materialmente, puede impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad, sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente la disposición anterior, también lo es que este criterio no resulta aplicable cuando en los casos en que la reforma o adición no va dirigida al contenido normativo del precepto impugnado, sino sólo a su identificación numérica como mero efecto de la incorporación de otras disposiciones al texto legal al que pertenece, ya que se trata únicamente de un cambio en el elemento numérico asignado a su texto, esto es, al no existir en el legislador la voluntad de reformar, adicionar, modificar o, incluso, repetir el texto de una norma general, ésta no puede considerarse un acto legislativo nuevo que autorice su impugnación a través del referido medio de control constitucional.

Acción de inconstitucionalidad 22/2004.—Diputados integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.—10 de julio de 2007.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: José Ramón Cossío Díaz y Genaro David Góngora Pimentel.—Ponente: Mariano Azuela Güitrón.—Secretario: Francisco García Sandoval.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 96/2007, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 742, Pleno, tesis P./J. 96/2007; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 2432.

Época: Novena Época

Registro: 1000570

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Apéndice de 2011

Tomo II. Procesal Constitucional 3. Acciones de inconstitucionalidad Primera Parte - SCJN

Materia(s): Constitucional

Tesis: 42

Página: 4465

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.

El artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la acción de inconstitucionalidad es el medio de control a través del cual podrá plantearse la no conformidad de una ley o tratado internacional con la Constitución Federal. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que en términos del principio de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e idénticas formalidades a las que le dieron nacimiento a aquélla. En consecuencia, el nuevo texto de la norma general, al ser un acto

legislativo distinto al anterior, formal y materialmente, puede ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad, sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente lo dispuesto con anterioridad.

Acción de inconstitucionalidad 5/2004 y su acumulada 7/2004.—Partidos Políticos Convergencia y del Trabajo.—16 de marzo de 2004.—Unanimidad de diez votos.—Ausente: Humberto Román Palacios.—Ponente: José Ramón Cossío Díaz.—Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de abril en curso, aprobó, con el número 27/2004, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a veintinueve de abril de dos mil cuatro.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 1155, Pleno, tesis P./J. 27/2004; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 963.

Época: Novena Época

Registro: 1000592

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Apéndice de 2011

Tomo II. Procesal Constitucional 3. Acciones de inconstitucionalidad Primera Parte - SCJN

Materia(s): Constitucional

Tesis: 64

Página: 4485

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA EN ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.**

De lo dispuesto en el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal, se advierte que las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad tienen ejecución y que ante su incumplimiento la propia Ley Fundamental regula procedimientos para imponer el respeto a la sentencia invalidante; por tanto, todas las disposiciones relativas al cumplimiento de las sentencias que prevé la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son aplicables a dichas acciones, tanto por aplicación directa del citado precepto constitucional como por interpretación del artículo 59 de la indicada ley reglamentaria, que prevé la aplicabilidad de las disposiciones del título II cuando sea conducente. En consecuencia, procede el recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de una sentencia, consignado en el artículo 55, fracción II, de la mencionada ley, ya que es un punto estructural para el cumplimiento efectivo de la resolución invalidante con efectos generales dictada en tales acciones y para conseguir el respeto pleno a la Constitución Federal. Además, esperar que el control de constitucionalidad se realice a través de nuevas acciones de inconstitucionalidad, juicios electorales, o bien juicios de amparo, significaría reducir tal sentencia a una mera declaración sin eficacia y hacer nugatorio su efecto general, pues su cumplimiento quedaría a merced de las autoridades demandadas, con lo que se burlaría la finalidad del artículo 105 constitucional y la autoridad de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recurso de queja deducido de la acción de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001.—Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes.—20 de enero de 2004.—Mayoría de ocho votos.—Ausente: Humberto

Román Palacios.—Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.—Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Agustín Tello Espíndola.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy ocho de marzo en curso, aprobó, con el número 15/2004, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a ocho de marzo de dos mil cuatro.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 956, Pleno, tesis P./J. 15/2004; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 913; y véase voto en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 943.

Época: Novena Época

Registro: 1000395

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Apéndice de 2011

Tomo II. Procesal Constitucional 4. Controversias constitucionales Primera Parte - SCJN

Materia(s): Constitucional

Tesis: 81

Página: 4615

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA ACUDIR A ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CUANDO SE AFECTE SU INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL CON MOTIVO DE UN JUICIO POLÍTICO SEGUIDO A SUS INTEGRANTES.

De la teleología del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que su órgano reformador estableció como prerrogativa de los Poderes Judiciales Locales la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en que los órganos jurisdiccionales resuelvan los conflictos que se sometan a su conocimiento con total libertad de criterio, teniendo como norma rectora a la propia ley y sin relación de subordinación respecto de los demás órganos del Estado. De ahí que el respeto a la independencia de los Poderes Judiciales Locales tiene como fin preservar a dichas instituciones libres de injerencias o intervenciones ajenas a su función jurisdiccional, que tienen encomendada constitucionalmente, la que deben ejercer con plena libertad decisoria, sin más restricciones que las previstas en la Constitución y en las leyes; por tanto, si por mandato constitucional la independencia en la función jurisdiccional de los Poderes Judiciales Locales constituye una prerrogativa para su buen funcionamiento, es claro que el procedimiento y la resolución de un juicio político seguido a alguno o algunos de sus integrantes, con base en el análisis de una resolución emitida en el ejercicio de su facultad jurisdiccional, afectan la esfera jurídica del citado poder, con lo que se acredita plenamente que éste cuenta con interés legítimo para acudir a la controversia constitucional.

Controversia constitucional 328/2001.—Poder Judicial del Estado de Guerrero.—18 de noviembre de 2003.—Mayoría de nueve votos.—Ausente: Humberto Román Palacios.—Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Alejandro Cruz Ramírez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintitrés de agosto en curso, aprobó, con el número 54/2004, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a veintitrés de agosto de dos mil cuatro.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 1154, Pleno, tesis P./J. 54/2004; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, enero de 2004, página 1094.

Nota: El Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo reiteró las consideraciones de los votos particulares que formuló en las controversias constitucionales 26/97, 9/2000 y 33/2001, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos IX, junio de 1999; XIV, agosto de 2001 y XVII, abril de 2003, páginas 763, 755 y 716, respectivamente.

## *2. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*

Sala Superior

vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México

Jurisprudencia 35/2016

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PROCEDENTE PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONTROVIERTAN LAS RESOLUCIONES QUE SE EMITAN POR LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES LOCALES.- De conformidad con lo previsto en los artículos 41, base VI; 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 86, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio de revisión constitucional electoral es el medio de impugnación excepcional y extraordinario al que sólo pueden acudir los partidos políticos, cuando ya no existan a su alcance recursos ordinarios aptos para modificar, revocar o anular actos o resoluciones de las autoridades de las entidades federativas, competentes para organizar y calificar los comicios locales, o resolver las controversias que surjan durante los mismos, el ámbito de protección que ofrece a los justiciables no se circunscribe a la defensa de derechos fundamentales frente a los actos y resoluciones de naturaleza jurisdiccional y que se emitan por los tribunales de las entidades federativas, sino que se trata de un auténtico medio de control constitucional que también obliga a las Salas de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a verificar la constitucionalidad y legalidad de las determinaciones de naturaleza administrativa electoral, cuando se carezca de un medio de control ordinario. Así, cuando el acto controvertido es formalmente jurisdiccional local por haberse emitido por un tribunal de una entidad federativa con competencia en materia electoral, pero es materialmente administrativo, en razón del objeto del acto –ya sea la emisión de un acuerdo, la resolución a un procedimiento sancionatorio o cualquier otro-, el juicio de revisión constitucional electoral constituye el medio de impugnación que se traduce en la vía de control constitucional apta para conocer de la controversia, y eventualmente para resolverla.

Quinta Época:

Contradicción de criterios. SUP-CDC-4/2016.—Entre los sustentados por la Sala Superior y la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—14 de septiembre de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.—Ausente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretario: Raúl Zeuz Ávila Sánchez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.

Ulises Fernández Saldaña y otros  
vs.  
VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática

Jurisprudencia 35/2014

**NORMAS REGLAMENTARIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. PUEDEN CONTENER VICIOS DE CONSTITUCIONALIDAD, NO OBSTANTE LA VALIDEZ FORMAL DEL ESTATUTO DEL QUE DERIVEN.**- Conforme al artículo 41, bases I y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el hecho de que diferentes prescripciones de los estatutos de un partido político hayan sido calificadas de constitucionales y legales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se sigue necesariamente que las normas reglamentarias que deriven de dichos estatutos sean, por sí mismas, congruentes con la Constitución y con la ley, porque existe la posibilidad jurídica de que las normas secundarias a los estatutos presenten vicios propios por apartarse de las prescripciones de las que emanan, porque restrinjan o hagan nugatorio los derechos u obligaciones reconocidos en dichas normas superiores, de tal manera que es procedente su impugnación a través de los medios de control constitucional ante el máximo órgano jurisdiccional electoral, para examinar su regularidad constitucional y legal.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2459/2007.—Actores: Ulises Fernández Saldaña y otros.—Responsable: VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.—16 de enero de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Valeriano Pérez Maldonado.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-10/2012.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Consejo Estatal Electoral de Sonora.—29 de febrero de 2012.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-15/2012.—Recurrente: Javier Castelo Parada.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—30 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Dávila Calderón y Víctor Manuel Rosas Leal.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 50 y 51.

Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima"  
vs.  
Tribunal Electoral del Estado de Colima

Jurisprudencia 35/2013

**INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES. SE PUEDE PLANTEAR POR CADA ACTO DE APLICACIÓN.**- De conformidad con lo previsto en el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para resolver sobre la no aplicación de leyes electorales contrarias a la

Constitución, en cuyas sentencias los efectos se limitarán al caso concreto sometido al conocimiento y resolución de los citados órganos jurisdiccionales, lo que no permite los efectos generales de la declaración de inconstitucionalidad. Ahora bien, conforme al sistema integral de medios de impugnación en la materia, todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se deben sujetar a los principios de constitucionalidad y de legalidad; en este orden de ideas, es conforme a Derecho considerar que las leyes electorales son susceptibles de control constitucional por las Salas del Tribunal Electoral, tantas veces como sean aplicadas; por tanto, la aludida facultad de las Salas se puede ejercer con motivo de cualquier acto de aplicación de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, pues no existe disposición alguna que establezca que solamente procederá con motivo del primer acto de aplicación.

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-27/2009.—Actor: Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima”.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Colima.—20 de mayo de 2009.—Mayoría de seis votos.—Engrose: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Sergio Dávila Calderón y Jorge Orantes López.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-10/2012.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Consejo Estatal Electoral de Sonora.—29 de febrero de 2012.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-154/2012.—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—5 de septiembre de 2012.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de septiembre de dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 46 y 47.

Partido Acción Nacional  
vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco

Jurisprudencia 26/2012

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE SALAS REGIONALES EN LAS QUE SE INTERPRETEN DIRECTAMENTE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe considerarse que, a fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, el recurso de reconsideración procede no sólo cuando una Sala Regional resuelve la inaplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución Federal, sino también cuando interpreta de manera directa algún precepto de la norma fundamental, pues ello hace patente la dimensión constitucional inmersa en la resolución impugnada y, por tanto, posibilita que la Sala Superior analice si es o no correcta dicha interpretación en ejercicio de su facultad de control constitucional.

Quinta Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-171/2012.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—14 de septiembre de 2012.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Laura Esther Cruz Cruz, Claudia Myriam Miranda Sánchez y Roberto Zozaya Rojas.

Recursos de reconsideración. SUP-REC-180/2012 y acumulados.—Actores: Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.—14 de septiembre de 2012.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Clicerio Coello Garcés, Ramiro López Muñoz, Víctor Manuel Rosas Leal y Salvador Andrés González Bárcena.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-168/2012.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—26 de septiembre de 2012.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Dávila Calderón y Jorge Alberto Orantes López.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de octubre de dos mil doce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 24 y 25.

Partido Democracia Social

vs.

Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes

Jurisprudencia 22/2002

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA TIENE PARA CONOCER DE POSIBLES VIOLACIONES A NORMAS CONSTITUCIONALES NO ELECTORALES.- En términos de los artículos 41, fracción IV y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso d), y 86, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende la posibilidad de que la Sala Superior conozca de violaciones a preceptos constitucionales que no guarden relación con la materia electoral, es decir, cualquier acto de autoridad, positivo o que implique una abstención, podrá combatirse a través del medio de impugnación que corresponda, con independencia del precepto constitucional que se estime violado, siempre y cuando se cumpla con los requisitos genéricos de procedencia y especiales establecidos en el propio ordenamiento legal. Lo anterior en razón de que para proteger y mantener el orden constitucional, se dispone de un sistema de control que permite garantizar su observancia ante la posibilidad de ser infringida o vulnerada por las autoridades, es decir, mientras la supremacía constitucional consiste en que ninguna autoridad, ley federal o local pueden contravenir la Ley Fundamental, el control constitucional hace efectivo dicho principio al otorgar los mecanismos necesarios para garantizar que la Constitución sea respetada. En efecto, para el pleno ejercicio de ese control, se requiere que los medios de defensa y las autoridades competentes para conocerlos, estén expresamente regulados en la Ley Fundamental. Así pues, en la materia electoral, esta exigencia se satisface plenamente, toda vez que los artículos 41, fracción IV y 99, párrafo IV, de la Constitución federal, prevén que el establecimiento del sistema de medios de impugnación en la materia, garantizará los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene



competencia para conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, entre otras, de las impugnaciones de actos y resoluciones de las autoridades electorales federales y de los Estados, que violen normas constitucionales o legales. Los preceptos constitucionales antes citados se reglamentan en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la que en su conjunto acota los mecanismos para garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten, invariablemente, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y se establece que el juicio de revisión constitucional electoral se constituye como un medio de control constitucional en la materia, que procede contra los actos o resoluciones de las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales locales, que violen cualquier precepto de la Ley Suprema; que el sistema de medios de impugnación en materia electoral, tiene por objeto garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, mientras se sientan las bases para que el Tribunal Electoral desempeñe el carácter de órgano de control constitucional. Así las cosas, es incuestionable que, a través del juicio de revisión constitucional electoral se puedan conocer posibles violaciones al derecho de petición previsto en los artículos 8o. y 35, fracción V de la Constitución federal, siempre y cuando: a) quien alegue la violación constitucional lo sea un partido político, a través de su representante legítimo y b) que el acto de omisión provenga necesariamente de una autoridad local, administrativa o jurisdiccional, de carácter electoral.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-026/2000. Partido Democracia Social. 5 de abril de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/2000. Partido de Centro Democrático. 5 de abril de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-034/2000. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 5 de abril de 2000. Unanimidad de votos.

Notas: El contenido del artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el artículo 41, fracción VI del ordenamiento vigente.

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 15 y 16.

Encuentro Social

vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en Monterrey, Nuevo León

Tesis XXI/2016

CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO.- Conforme a lo previsto en el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema jurídico impone a los órganos encargados de realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad, el deber de analizar las normas cuestionadas, sin diferenciar la naturaleza sustantiva o instrumental del precepto, a través de un método que, a partir de su presunción de validez, en primer lugar, examine si admite una interpretación conforme en sentido amplio mediante la lectura más favorable a la persona, y después las analice en una interpretación

conforme en sentido estricto, para elegir, entre las lecturas jurídicamente válidas, aquella que sea más acorde al bloque constitucional de derechos humanos, por lo cual: a) cuando el significado de la norma sea conforme al bloque de constitucionalidad deberá ser considerada válida, b) cuando la norma no sea abiertamente contraria a la Constitución, pero instrumente, regule o delimite, en alguna medida el ejercicio de un derecho humano, para determinar su regularidad constitucional, necesariamente, debe sujetarse a un test de proporcionalidad, en el cual se verifique si atiende a un fin jurídicamente legítimo, así como a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo, y c) cuando no existe posibilidad de que las alternativas sean directamente acordes al sistema, se deberá decretar la inaplicación.

Quinta Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-538/2015.—Recurrente: Encuentro Social.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en Monterrey, Nuevo León.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y Mario León Zaldivar Arrieta.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, aprobó por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera y con la ausencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 74 y 75.

Partido MORENA

vs.

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Tesis XXXII/2015

ACTOS DISCRECIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. SON OBJETO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CUANDO DE SU EJECUCIÓN DEPENDE LA OBSERVANCIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES.- El artículo 191, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, entre otras atribuciones del Instituto Nacional Electoral, las de desarrollar, implementar y administrar el Sistema de Contabilidad en Línea de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos, en función de su capacidad técnica y financiera, a partir de la discrecionalidad administrativa que le permite decidir si debe utilizarla y de qué manera en acatamiento a los principios de legalidad, objetividad, razonabilidad, eficacia y eficiencia. Los fines de la adopción de ese sistema consisten en alcanzar la consolidación de un modelo de contabilidad acorde con los principios de máxima publicidad y transparencia sobre cada operación de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos, relativa a sus ingresos y gastos de precampaña para su fiscalización. En consecuencia, aun y cuando el desarrollo, la implementación y administración del sistema referido implica el ejercicio de facultades administrativas discrecionales de la autoridad, la omisión o retardo en su funcionamiento son susceptibles de ser revisados por la autoridad jurisdiccional a través del control constitucional, porque la finalidad y alcances de ese sistema incide en el derecho a la información en su dimensión colectiva, y conforme al artículo 1º de la Ley Fundamental, el deber de los jueces de proteger los derechos humanos está orientado a garantizar que una asignatura que pueda tener trascendencia en la vulneración del derecho a la información no quede desprovista de tutela jurisdiccional.

Quinta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-21/2015.—Recurrente: Partido MORENA.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—25 de febrero de 2015.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza, Armando Pamplona Hernández y Hugo Balderas Alfonseca.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el ocho de julio de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 55 y 56.

Héctor Montoya Fernández

vs.

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y otro

Tesis XIX/2015

ACTO DE APLICACIÓN. CARECE DE ESTE CARÁCTER LA RESPUESTA A LA CONSULTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN INTRAPARTIDISTA, CUANDO LA PERSONA NO SE UBICA EN LA HIPÓTESIS NORMATIVA.- De la interpretación sistemática del artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, párrafo 1, inciso b), 79, párrafo 1 y 80, párrafo 1, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se deriva que los militantes de los partidos políticos están en aptitud de promover juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano para garantizar la regularidad constitucional de disposiciones estatutarias o reglamentarias del instituto político al que pertenecen; supuesto que impone como requisito indispensable que las normas de carácter general impliquen una vulneración a su esfera jurídica. En ese sentido, la respuesta que da el partido político a una solicitud efectuada en relación con el sentido y alcance de alguna disposición estatutaria o reglamentaria, carece de carácter concreto e individualizado cuando el peticionario omite expresar y demostrar que se ubica en el ámbito comprendido por la hipótesis normativa y, por tanto, no tiene los efectos vinculatorios característicos del acto de aplicación por virtud del cual pueda ser controvertido a través del sistema de medios de impugnación en materia electoral; de lo contrario, el control constitucional asumiría un carácter abstracto y genérico, que no es propio del que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-646/2009.—Actor: Héctor Montoya Fernández.—Órganos responsables: Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—5 de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Claudia Valle Aguilasoch y Armando Ambríz Hernández.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2392/2014.—Actora: Laura García Gutiérrez.—Órgano responsable: Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—29 de octubre de 2014.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Armando Ambríz Hernández.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 35 y 36.

Partido Acción Nacional y otro

vs.

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza y otra

Tesis IV/2014

ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES.- De la interpretación sistemática de los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros: SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO y PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, se advierte que todas las autoridades jurisdiccionales del país, pueden realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas jurídicas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. En consecuencia, los tribunales electorales locales tienen facultades para analizar las normas jurídicas estatales, contrastarlas con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y después de realizar un ejercicio de interpretación conforme, en su caso, inaplicarlas en un asunto en concreto cuando sean contrarias a la norma fundamental, toda vez que cuenta con atribuciones para restituir el orden jurídico vulnerado mediante el dictado de una sentencia.

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-147/2013 y acumulados.— Actores: Partido Acción Nacional y otro.—Autoridades responsables: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza y otra.—24 de diciembre de 2013.—Unanimitad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Gustavo César Pale Beristain, Fernando Ramírez Barrios, Enrique Martell Chávez y Juan Carlos López Penagos.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 y 54.

Partido Barzonista Sinaloense

vs.

Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa

Tesis L/2002

DETERMINANCIA. LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO NECESARIO PARA CONSERVAR SU REGISTRO, DEBE SER OBJETO DE ESTUDIO AL MOMENTO DE ANALIZAR ESTE REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.- El hecho de que la recomposición del resultado final de la votación, pueda afectar sustancialmente el porcentaje de votación necesario para que un partido político conserve o pierda el registro o reconocimiento en la entidad, debe ser objeto de análisis al momento de verificar si el juicio de revisión constitucional electoral cumple con el requisito de determinancia contenido en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral. En efecto, debe considerarse que resulta determinante para el resultado final de una elección, el que los vicios de una elección trajeran como consecuencia la disminución ilegal del porcentaje de votación de un partido político, de tal modo que no alcanzara el mínimo legal previsto para conservar su registro, pues su consecuencia sería privar de su existencia al partido político, lo que implicaría una modificación sustancial al siguiente proceso electoral, al excluir a uno de los posibles contendientes naturales. Por otra parte, si los partidos políticos se consolidaron constitucionalmente como entidades de interés público, para intervenir en los procesos electorales, no cabría admitir que esas disposiciones de la Carta Magna carecieran de un medio de control constitucional para prevenir su vulneración o restablecer su vigencia, si se toma en cuenta, además, que esta Sala Superior ya ha definido que la declaratoria de pérdida de registro o de reconocimiento como partido político en la entidad, sólo representa la consecuencia o aplicación directa de la ley, a los resultados de la votación que han quedado firmes, una vez concluido el proceso comicial, y que por tanto, no puede ser objeto de impugnación para revisar la validez o invalidez de los resultados que arrojaron las casillas y, en consecuencia, la elección de que se trate, por lo que de no tomarse en cuenta el referido elemento al establecer la determinancia del juicio, y por tanto su procedencia, la privación de la existencia a los partidos políticos, quedarían sin posibilidad de ser protegidos por un medio de defensa constitucional.

### Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-307/2001. Partido Barzonista Sinaloense. 30 de noviembre de 2001. Mayoría de cinco votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y Eloy Fuentes Cerda. Secretario: José Manuel Quistián Espericueta.

La Sala Superior en sesión celebrada el veintiocho de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 123 y 124.

Gisela Molina Macías

vs.

Instituto Federal Electoral

### Tesis CXXVIII/2001

JUICIOS LABORALES EN MATERIA ELECTORAL RESPECTO DE SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ÚNICAMENTE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDE TRAMITARLOS Y RESOLVERLOS, SIN QUE LO ACTUADO Y DECIDIDO EN UN JUICIO DE GARANTÍAS LA PUEDA VINCULAR.- El artículo 99, fracción VII, de la Constitución Política, instituye de manera exclusiva al Tribunal Electoral, como órgano encargado de resolver en forma definitiva e inatacable los conflictos o diferencias laborales suscitados entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores; además, en términos de lo previsto en el artículo 94 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, compete únicamente a la Sala Superior del citado Tribunal resolver ese tipo de controversias; en esa tesitura debe estimarse que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no está sujeto a la jurisdicción de ningún tipo de órgano, como se advierte de la lectura del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su párrafo primero, lo define como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, además de atribuirle la calidad de máxima autoridad jurisdiccional en la materia con excepción de lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, de la propia Constitución. La mencionada naturaleza jurídica del Tribunal Electoral, excluye, sin excepción y como principio constitucional, cualquier pretensión de sujetarlo al control de otra autoridad, independientemente de la naturaleza de ésta. La no sujeción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a otro órgano de autoridad, así como la improcedencia de cualquier tipo de control constitucional o de legalidad, incluido indudablemente el juicio de amparo, sobre las resoluciones que

emita, se corrobora por el hecho de que en el párrafo cuarto del propio artículo 99 de la Ley Fundamental, se establece que al Tribunal Electoral le corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, los asuntos de su competencia, en los diversos supuestos ahí previstos, entre los cuales están los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, lo cual deja en claro el propósito de que ningún otro órgano judicial o de cualquiera otra naturaleza, que no sea la expresamente señalada en el propio precepto constitucional, intervenga en el examen y resolución de los mencionados conflictos o diferencias. En consecuencia, si por mandato de la Carta Magna el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no está sujeto a la jurisdicción de ningún tipo de órgano administrativo o jurisdiccional y las resoluciones que emite, conforme a sus atribuciones, no son objeto de control constitucional o legal, es obvio que en ningún caso su actuación puede estar condicionada a la sola voluntad de un particular que promueve un juicio de amparo, pues su tramitación y decisión no pueden vincularlo jurídicamente.

### Tercera Época:

Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-023/2001. Gisela Molina Macías. 4 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores.

Notas: El contenido del artículo 94 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, interpretado en la presente tesis, fue reformado para reconocer la competencia de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para resolver los conflictos laborales a que se hace referencia en el criterio: Lo anterior, conforme al decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1.º de julio de 2008.

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 92 y 93.

## II. DOCUMENTOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1987

### 1. Exposición de motivos<sup>467</sup>

Fecha de publicación: 10/08/1987

Categoría: DECRETO

PROCESOS LEGISLATIVOS  
EXPOSICION DE MOTIVOS  
CAMARA DE ORIGEN: SENADORES  
EXPOSICION DE MOTIVOS  
México, D.F., a 21 de Abril de 1987.  
INICIATIVA DEL EJECUTIVO

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES  
DEL H. CONGRESO DE LA UNION

---

<sup>467</sup> Disponible en:

<http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaN OimNPZPsNLFqe0s7fey1FqridUV4Wld5LbhHirNk5TDgwOhijBm6LCIjHuLquJNtXJw==>, consultado el 12 de mayo de 2017.

## PRESENTES

La reforma judicial promovida por el Ejecutivo a mi cargo constituye uno de los mejores logros de la participación ciudadana en la solución de los problemas que confronta nuestra sociedad y de la colaboración respetuosa y comprometida entre los Poderes de la unión para concretar un avance de trascendencia histórica, para asegurar al pueblo de México la mejor impartición de justicia, que fortalezca la seguridad y confianza en sus instituciones.

El Derecho contiene una síntesis de los valores morales en que cree la sociedad, cuya estima exige que se le dote de obligatoriedad y cuyo respeto requiere de la acción del Estado, por ello hemos trabajado en el permanente perfeccionamiento de nuestro estado de derecho.

La vigencia efectiva del estado de derecho es requisito para una vida social ordenada y justa, y esta vigencia efectiva es y debe ser resultado de la acción de la administración de justicia, a quien corresponde la aplicación final de las normas que integran el orden jurídico nacional. Para ello hemos emprendido una reforma judicial profunda, que satisfaga la vocación jurídica del pueblo de México.

El 28 de octubre de 1986, el Ejecutivo a mi cargo presentó al Poder Constituyente Permanente, por conducto de esa H. Cámara de Senadores, la iniciativa de decreto que reforma los artículos 17, 46 y 116 y deroga las fracciones VIII, IX y X del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma que mereció la aprobación correspondiente.

En virtud de esta reforma se enriquece y se adapta al presente la garantía de acceso a la jurisdicción, que se contiene en el artículo 17 constitucional y cuyos antecedentes se remontan hasta el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, para que funde plenamente, en lo filosófico y en lo jurídico, la función jurisdiccional a cargo del Estado, que constituye el objetivo central de la reforma judicial que hemos emprendido, el pueblo de México disfruta, así, de la seguridad de poder obtener justicia pronta, imparcial, gratuita y completa; que esa justicia le sea administrada por tribunales independientes, cuyos integrantes gocen del reconocimiento social a su preparación, experiencia, imparcialidad y honestidad.

La plena vigencia de los derechos del hombre y el respeto a sus libertades fundamentales constituyen la inspiración primaria de esta reforma constitucional, pues sólo así se justifica el mandato que prohíbe a la persona hacerse justicia por sí misma y ejercer violencia para reclamar su derecho.

Había sido permanente aspiración del constitucionalismo mexicano, que nuestra Carta Magna contuviera las bases para la organización y funcionamiento de los Poderes Judiciales de los Estados, pues su omisión había provocado una inconveniente heterogeneidad en las normas respectivas contenidas en las constituciones estatales; esta aspiración ha quedado colmada en el nuevo texto del artículo 116, a petición expresa del XIII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, que se celebró en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 16 de mayo de 1986, con lo cual nuestra Carta Fundamental cumple su vocación de constituir el estatuto nacional de la República al señalar las bases para la organización y funcionamiento de los Poderes Judiciales de los Estados, en congruencia con los valores afirmados en el nuevo texto del artículo 17 constitucional.

Los nombramientos de magistrados y jueces estatales deberá recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica; para que los jueces de primera instancia sean nombrados por los tribunales superiores de cada Estado; para que los magistrados que sean reelectos gocen de inamovilidad judicial; y para que magistrados y jueces perciban una remuneración adecuada e irrenunciable, que no podrá ser disminuida durante su encargo.

Con fecha 28 de diciembre de 1986 elevé a la atención del Órgano Revisor de la Constitución, por conducto de la H. Cámara de Diputados, una iniciativa de decreto que reforma los artículos 73 fracción VI, 79 fracción V, 89 fracción XVII, 110 primer párrafo, 111 primer párrafo y 127 y que deroga la

fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como objetivo central regular los instrumentos de participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal, iniciativa que se discutirá en el periodo extraordinario de sesiones del presente año, cuya convocatoria ya he solicitado.

En esta iniciativa, al proponer la reforma de la Base 5ª, que se decida al Poder Judicial del Distrito Federal, se consagran para la administración de justicia los mismos principios que se postulan para la organización y funcionamiento de los Poderes Judiciales de los Estados, para que los habitantes de la República entera disfruten de los valores que inspiran la reforma judicial, que asumimos como personal compromiso.

Para los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hemos propuesto los mismos requisitos que señala el artículo 95 de la Constitución para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; deberán dedicarse en exclusiva a la función jurisdiccional, en los términos del artículo 101 constitucional; y gozarán de la inamovilidad de que disfrutaban los integrantes del Poder Judicial Federal, si fueren reelectos.

En la iniciativa de 28 de octubre de 1986 ya citada, anuncié el propósito del Ejecutivo a mi cargo de someter a la consideración del Constituyente Permanente, una iniciativa de reformas constitucionales relativas al Poder Judicial de la Federación.

En la exposición de motivos manifesté que había llegado el histórico momento, que constituye una permanente aspiración de nuestra comunidad jurídica, de perfeccionar para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la función de supremo intérprete de la Constitución y de asignar a los tribunales colegiados de circuito el control total de la legalidad en el país, pues con ello se avanza en el fortalecimiento y vigencia del principio de división de Poderes, se consagra nuestro más alto tribunal a la salvaguarda de las libertades de los individuos y de la Norma Fundamental, se culmina el proceso de descentralización de la función jurisdiccional federal y se acaba en definitiva con el problema del rezago en asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia.

Para la preparación del proyecto de reformas constitucionales correspondiente, como lo anuncié en la propia exposición de motivos, consideré oportuno solicitar a la H. Suprema Corte de Justicia que aportara su experiencia y conocimientos, pues el Ejecutivo a mi cargo está convencido de que la colaboración entre los poderes de la Unión, bajo los principios de respeto y compromiso con el bien de México, produce los mejores resultados. Esta convicción ha quedado confirmada, una vez más, en la preparación de esta iniciativa y debe dejarse expreso reconocimiento a los CC. Ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, por sus valiosas aportaciones en la preparación de la iniciativa que hoy someto al Constituyente Permanente.

La presente iniciativa respeta y ratifica todos los principios que rigen a nuestro juicio de amparo, por haber probado su eficacia como medio de defensa para mantener incólume la supremacía de la Constitución y el respeto y exacto cumplimiento del orden jurídico nacional; el juicio de amparo constituye la más perfecta salvaguarda de los derechos y libertades del individuo frente a la eventual actuación ilícita o extralimitada de cualquier autoridad; el juicio de amparo ha merecido el reconocimiento nacional e internacional como el proceso singular, que mediante un mismo procedimiento y con la misma finalidad, substituye diversos medios parciales que otras legislaciones regulan.

Manuel Crescencio Rejón inicia la gestación del juicio de amparo, al incorporarlo a la Constitución yucateca de 16 de mayo de 1841, en la cual procedía contra cualquier ley o acto opuestos a ella o que lesionaran los derechos de los gobernados. Mariano Otero lo incorporó al Acta de Reformas a la Constitución Federal de 1824, promulgada el 21 de mayo de 1847, como un instrumento de tutela de las garantías que se consignan en las leyes secundarias. Entre ambos, apuntaron su doble finalidad: medio de tutela constitucional y forma de control de la legalidad ordinaria.



En la Constitución de 5 de febrero de 1857, en sus artículos 101 y 102, se consolida el juicio de amparo y se atribuye competencia al Poder Judicial Federal para conocer de actos o disposiciones legales de la autoridad que conculcasen las garantías individuales, que contienen los derechos fundamentales de los individuos, y también para resolver violaciones a la esfera de atribuciones de la autoridades federales y las autoridades locales. El contenido de las leyes secundarias provocó cuestionamientos respecto de la finalidad de control de legalidad del juicio de amparo, pues la Ley de Amparo de 20 de enero de 1869 prohibió expresamente el juicio de amparo promovido en contra de resoluciones judiciales; la Suprema Corte de Justicia reaccionó contravirtiendo este criterio, por estimar que la garantía de legalidad debía gozarla plenamente el individuo respecto de toda clase de procedimientos y resoluciones. De 1869 a 1882 se dio uno de los debates más trascendentes respecto del juicio de amparo, que contribuyó a su perfeccionamiento, y la Ley de Amparo de 14 de diciembre de 1882, aceptó la procedencia del juicio de amparo en materia de legalidad, sin distingo alguno.

La Constitución de 5 de febrero de 1917 consolida el proceso de perfeccionamiento del juicio de amparo, dejando clara su doble función de proceso eficaz para el control de la constitucionalidad y para el control de la legalidad, indispensables para la plena vigencia de nuestro estado de derecho.

La Constitución es la norma suprema del orden jurídico mexicano, la cual determina el contenido y proceso de creación de todas las normas que de ella dependen; en su parte dogmática, eleva a normas supremas los derechos y libertades de los individuos y les otorga la supremacía en el orden jerárquico de la normatividad en su conjunto, por lo que determina los contenidos de las normas creadas conforme a la Constitución; en su parte orgánica, establece los órganos y los procesos de creación de las normas de rango inferior, contenidas en leyes, tratados, reglamentos y actos de aplicación de las propias normas; por tanto, el orden jurídico nacional depende de la constitución tanto formal como materialmente: la parte dogmática establece la dependencia material y la parte orgánica contiene la dependencia formal.

El control de la constitucionalidad es el juicio que permite afirmar la existencia de concordancia, formal y material, entre la norma inferior y la norma suprema que es la constitución; la concordancia material se analiza respecto del contenido de la norma creada y el contenido de la parte dogmática de la Constitución, y a concordancia formal se concluye por el respeto del órgano y procedimiento para la creación de la norma inferior, con las disposiciones contenidas en la parte orgánica de la Constitución. El juicio de amparo es el medio jurídico a través del cual se lleva a cabo la función de control de la constitucionalidad de todas las normas que integran el orden jurídico nacional y de todos los actos de los órganos del Estado, por lo que se constituye en el procedimiento de defensa de la Constitución y de protección de los derechos y libertades de los individuos.

Ha sido decisión de México encomendar la defensa constitucional al Poder Judicial de la Federación, gracias al juicio de amparo, sin tener que recurrir a la creación de un órgano al cual encomendar esta trascendental tarea, distinto a los tres Poderes en que se deposita el Supremo Poder de la Federación, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución.

La defensa de la legalidad, también encomendada al juicio de amparo y al Poder Judicial de la Federación, es consecuencia del contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, los cuales contienen los valores que aseguran la igualdad de todos ante la ley; en el primero de ellos, se garantiza el derecho de audiencia, el derecho al debido proceso legal, y el derecho al pleno respeto del orden jurídico secundario, en toda clase de juicios; y en el segundo se garantiza el derecho a una causa legal para todo procedimiento y el derecho a la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad.

La violación a las normas contenidas en el orden jurídico secundario, que se presente en resoluciones judiciales o en cualquier acto de autoridad, constituyen indirectamente una violación a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y es el juicio de amparo el procedimiento idóneo para reparar la violación cometida.

El juicio de amparo solamente procede a petición de la persona que invoca la violación de una garantía individual, y la resolución que en el mismo se dicta tiene efectos limitados al caso concreto y su eficacia es exclusiva respecto del quejoso, sin que pueda formularse declaración general respecto de la ley o acto que motivó el juicio; sabia fórmula que debemos al genio de Mariano Otero y que se contiene en la fracción II del artículo 107 Constitucional vigente. Al eliminar efectos generales a la sentencia de amparo, se evitan conflictos entre poderes y se afirma el principio de seguridad jurídica, lo que culmina la configuración de nuestro juicio de amparo, que como se ha dicho es la "institución más suya, la más noble y ejemplar del derecho mexicano. y la única que con vida propia y lozana ha reflejado la realidad nacional."

El juicio de amparo satisface por sí solo las funciones que en el derecho extranjero son parcialmente atendidas por algún medio de defensa; cumple el cometido del "Habeas corpus" del Derecho anglosajón, del recurso de "exceso de poder" francés, de los diversos "writs" norteamericanos, de los recursos de "inconstitucionalidad de leyes" y de "casación" que se contienen en las legislaciones de otros países y es, en consecuencia, el más perfecto medio de control de la constitucionalidad y legalidad. Por ello se incorporó al artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Conferencia de Bogotá celebrada en 1947; se incluyó en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, proclamada en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948; y lo asumió la quinta Sesión de la Comisión de los Derechos del Hombre, cuyas conclusiones fueron incorporadas en la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950.

Pero la grandeza y eficacia del juicio de amparo, en el crecimiento demográfico, económico y social de México, han provocado la insuficiencia de los órganos del Poder Judicial Federal para cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia de manera pronta y expedita. El legislador mexicano ha intentado diversos sistemas, cada uno de los cuales ha sido rebasado por la realidad.

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional de 23 de octubre de 1950 se reconoce que "el problema más grave que ha surgido en el campo de la justicia federal, ha sido suscitado por el rezago de juicios de amparo que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fenómeno ha adquirido tan graves proporciones que entraña una situación de verdadera denegación de justicia"; para solucionarlo, se propuso y aprobó la creación de los tribunales colegiados de circuito, entre otras medidas. No obstante la eficiente actuación de los tribunales colegiados de circuito, el problema del rezago de los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia no ha podido ser superado, pues la distribución de competencias entre ambos órganos no satisface ni las finalidades políticas y jurídicas del juicio de amparo, ni las exigencias que presenta la complejidad de la vida social.

En 1950 no se optó por imponer restricciones a la interposición del juicio de amparo, decisión que hoy se ratifica pues en la conciencia del pueblo mexicano, el juicio de garantías le es propio, le afirma su confianza en el respeto al orden jurídico nacional y le otorga seguridad de que sus derechos y libertades fundamentales no podrán ser conculcados.

En la actual distribución de competencias entre la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito, ambos órganos comparten el control de la constitucionalidad, cada uno respecto de normas o actos diversos, y ambos órganos comparten el control de la legalidad, al revisar las resoluciones judiciales de toda la República, con distinción por cuantía, penalidad o características especiales de las cuestiones judiciales planteadas. Esta división de competencias no era la solución final desde el punto de vista político y jurídico, y además conservaba el inconveniente de orden práctico por el número de asuntos de los que corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia.

Por ello afirmamos en la iniciativa de reformas a los artículos 17, 46, 115 y 116 ya citada, que "no debe ser ni la cuantía ni la importancia jurídica de los problemas planteados en vía de amparo, lo que determine la esfera de competencia de nuestro máximo tribunal, sino la trascendencia política y jurídica de la función de intérprete definitivo de la Constitución".

El criterio general que propone esta iniciativa respecto de la distribución de competencias entre los órganos del Poder Judicial Federal, responde a las finalidades políticas y jurídicas del juicio de amparo y supera las dificultades prácticas que se han apuntado.

La presente iniciativa propone que la Suprema Corte de Justicia se dedique fundamentalmente a la interpretación definitiva de la Constitución, como debe corresponder al más alto tribunal del país.

Impedir que, con afectación de los derechos de los individuos, las autoridades federales o locales rebasen el marco constitucional de sus respectivas atribuciones, todo ello mediante la interpretación definitiva de la propia Constitución, son las más altas funciones de un tribunal de amparo. Funciones tales, de gran trascendencia política, en cuyo ejercicio se impone el debido respeto a la soberanía del pueblo, expresada en los dictados de la Ley Fundamental, deben corresponder preponderantemente al más alto Tribunal del país.

La Suprema Corte de Justicia como el órgano superior del Poder Judicial de la Federación debe ocupar su atención en la salvaguarda de la Ley Fundamental, por ser la función constitucional más destacada, de las que, en respeto al principio de división de Poderes, dan configuración a este Poder.

Es la trascendencia política que deriva de la atribución de fijar en definitiva el alcance de los textos constitucionales, lo que debe orientar el criterio para determinar la esfera de competencia del Máximo Tribunal, pues la observancia y respeto a la Constitución atañe al interés superior de la nación. La custodia de la supremacía de la Norma Fundamental y de su estricto cumplimiento es función que sirve para limitar la actuación de los Poderes activos y mantener la estabilidad del régimen político del país, por lo que fundamentalmente debe corresponder a la Suprema Corte de Justicia.

La Corte Suprema, sin un enorme volumen de negocios a su cuidado, impartirá una justicia mejor; y como órgano único que interpretando en definitiva sus mandamientos, vele por el respeto de la Ley Superior, reasumirá fundamentalmente las funciones que conciernen al Tribunal más alto de la nación.

La presente iniciativa propone que los tribunales colegiados de circuito conozcan de todos los problemas de legalidad, sin distingo de cuantía, penalidad o características especiales de las cuestiones judiciales involucradas, pues ello no varía la esencia de los problemas jurídicos planteados, ya que los órganos del Poder Judicial pronuncian sus sentencias respecto a las cuestiones jurídicas que las partes someten a su jurisdicción, y no respecto del interés económico del negocio, duración de la pena o características especiales en otras ramas.

Asignar el control de la legalidad, en su integridad, a los tribunales colegiados de circuito, contribuye al logro de la democracia económica que es convicción de los gobiernos emanados de la Revolución, al suprimir la distinción que sólo se basa en el monto que subyace al problema jurídico planteado.

Los tribunales colegiados de circuito han probado su capacidad para impartir justicia pronta, imparcial, gratuita y completa; la sociedad mexicana se ha beneficiado con la descentralización que su ubicación determina; la inamovilidad de los magistrados que integran estos tribunales ha contribuido a su independencia y objetividad; y el cuidado que ha observado la Suprema Corte de Justicia para la selección de sus miembros, les ha merecido la estima de la sociedad a su preparación, experiencia, imparcialidad y honorabilidad.

Si las proposiciones que esta iniciativa contiene merecen la aprobación del Poder Constituyente Permanente, el control de la constitucionalidad, que atañe al todo social, quedará sujeto básicamente al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, con sede en el Distrito Federal, y el control de la legalidad se atribuirá a los tribunales colegiados de circuito, que tienen su sede en los lugares que son cabecera de los propios circuitos, diseminados en todo el territorio nacional, con lo cual se culmina el proceso de descentralización de la justicia federal y se acerca la justicia al pueblo.

El eventual crecimiento de número de circuitos y de tribunales colegiados, en consecuencia, enfrentará menores dificultades políticas y presupuestales en el futuro y contribuirá a la más completa descentralización de la administración de justicia federal.

El sistema propuesto en esta iniciativa elimina, en definitiva, el problema del rezago de asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, pues el cumplimiento de las normas constitucionales se presenta normalmente en forma espontánea, por lo que sólo conocerá de aquellos casos de excepción en que se cuestiona la violación de un precepto constitucional o se requiere fijar su interpretación definitiva.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa propone la adición de una fracción propone la adición de una fracción XXIX-G al artículo 73; la adición de una fracción I-B al artículo 104 y la derogación de sus párrafos segundo, tercero y cuarto; la reforma del artículo 94; de los párrafos primero y segundo del artículo 97; del artículo 101; y del inciso a) de la fracción III, del primer párrafo y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI; VIII y XI del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de cumplir con los importantes e históricos objetivos de esta reforma constitucional.

Se propone la adición de una fracción XXIX-G al artículo 73 constitucional, para atribuir al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes que instituyan tribunales de los contencioso administrativo, para resolver controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal con los particulares. Esta facultad se encontraba impropriamente ubicada en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 104, por lo que la reforma propuesta le da su correcta ubicación.

La justicia contencioso administrativa es un aporte de la ciencia jurídica moderna, a la que México no podía permanecer ajeno, por lo que desde la reforma constitucional de 30 de diciembre de 1946 se le otorga reconocimiento constitucional respecto de la administración federal, y desde la reforma de 25 de octubre de 1967 se reconoció para la Administración Pública del Distrito Federal.

Se propone la adición de la fracción I-B al artículo 104, con similar contenido de los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 vigente, para que los tribunales de la Federación conozcan de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas de los tribunales de los contencioso administrativo a que se refiere la fracción XXIX-G del artículo 73. Por ello, se propone la derogación de los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del citado artículo 104.

Los recurso de revisión en contra de resoluciones definitivas de los mencionados tribunales de lo contencioso administrativo, se ha otorgado para que los órganos del Estado puedan proponer a la justicia federal las cuestiones que presentan problemas de control de la legalidad de los actos de dichos tribunales, dado que los órganos del Estado no disponen de la posibilidad de iniciar el juicio de amparo.

Se propone que estos recursos sean de la competencia de los tribunales colegiados de circuito, por plantear siempre problemas de legalidad, modificando la competencia que para conocer de los mismos tiene actualmente la Suprema Corte de Justicia, propuestas que son congruentes con los propósitos centrales de esta iniciativa.

Se propone la reforma del artículo 94 para eliminar, en su primer párrafo, el calificativo de que los tribunales colegiados lo son en materia de amparo y los tribunales unitarios lo son en materia de apelación, puesto que al asignar a los primeros la competencia para conocer de los recursos de revisión de resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo, ya no serán tribunales exclusivamente en materia de amparo.

Se ratifica la posibilidad constitucional contenida en el segundo párrafo del artículo 94, para que la Suprema Corte de Justicia funciones en Pleno o en Salas, según lo determine la Ley Orgánica correspondiente, para dar flexibilidad constitucional y dejar a la ley secundaria que lo decida en

definitiva, una vez que se agote el rezago de asuntos en la Suprema Corte y que se confronte con la realidad el nuevo sistema que se propone.

Se modifica el segundo párrafo del propio precepto para hacer potestativo el nombramiento de hasta cinco ministros supernumerarios, pues la nueva distribución de competencias puede hacer innecesaria su designación.

Se modifica el cuarto párrafo del artículo 94 para dar facultades al Pleno de la Suprema Corte para determinar el número, división en circuitos y jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, para evitar la rigidez existente a la fecha, que obliga a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando la administración de justicia requiere modificar estas circunstancias, lo cual técnicamente es innecesario puesto que sólo se requiere que la ley señale la competencia de materia y grado, según lo reconoce la doctrina moderna, y las demás circunstancias constituyen cuestiones administrativas que el Pleno de la Suprema Corte puede y debe resolver con la flexibilidad que imponen las cambiantes condiciones para asegurar el mejor servicio de justicia al pueblo.

Se propone en un nuevo sexto párrafo del artículo 94, que el Pleno de la Suprema Corte, tenga facultades para emitir acuerdos generales a fin de lograr la mayor prontitud en la impartición de justicia, mediante una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos de que competa conocer a la Suprema Corte de Justicia, pues independientemente del principio de especialización por materia de las Salas, en el nuevo sistema todas tendrán la competencia común para mantener el control de la constitucionalidad en el país, por lo que el Pleno de la Suprema Corte debe contar con una facultad que le dé la flexibilidad de distribuir mejor los asuntos, para que los justiciables logren justicia pronta.

Se propone la modificación de los párrafos primero y segundo del artículo 97, para que en el primer párrafo se amplíe a 6 años el término de nombramiento de los magistrados de circuito y los jueces de distrito, respecto del término de 4 años actualmente vigente, con lo cual se logra la congruencia en el sistema judicial nacional, puesto que los magistrados y jueces del Distrito Federal duran 6 años en el ejercicio de su encargo sin que exista razón alguna en detrimento de los miembros del Poder Judicial Federal. Se reforma el segundo párrafo del propio precepto, para hacerlo congruente con las nuevas facultades de que gozará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad a la reforma propuesta para el artículo 94.

Se propone la reforma del artículo 101 para incluir expresamente las actividades docentes, entre aquellas a las que pueden dedicarse los miembros del Poder Judicial de la Federación, sin incurrir en responsabilidad, dada la conveniencia para nuestras instituciones docentes, de no privarlas de los conocimientos y experiencia de los servidores públicos de la administración de justicia federal, pero se precisa que dichas actividades no podrán ser remuneradas, para evitar la dependencia que la remuneración puede implicar, con lo cual se preserva la independencia e imparcialidad que deben distinguir a los juzgadores.

El artículo 107 contiene los principios a los que deben sujetarse las controversias a que se refiere el artículo 103, el cual regula los casos de procedencia del juicio de amparo, por lo que requiere diversas modificaciones para el logro de los propósitos ya establecidos de la reforma judicial relativos al Poder Judicial de la Federación.

Se propone la reforma del inciso a) de la fracción III del artículo 107 para que el amparo proceda contra sentencias definitivas o laudos, como se encuentra en el precepto vigente, pero además respecto de resoluciones que pongan fin a los juicios que se ventilen ante tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, pues la experiencia forense ha demostrado que existen resoluciones que ponen fin al juicio sin que constituyan sentencias definitivas o laudos; resulta contrario a la economía procesal que si la resolución pone fin al juicio, se deba recurrir a un amparo indirecto, cuando para efectos del amparo dichas resoluciones tienen la misma entidad que las sentencias definitivas o laudos.

Se propone la reforma del primer párrafo de la fracción V y de su inciso b), así como una adición de un párrafo final a la propia fracción V, pues esta fracción se refiere al amparo directo contra sentencias definitivas o laudos, a efectos de incluir las resoluciones que pongan fin al juicio, por las razones ya invocadas; y para que de dichos amparos conozcan los tribunales colegiados de circuito por involucrar normalmente problemas de legalidad. De acuerdo al primer párrafo de la fracción IX del propio artículo 107, las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito son recurribles ante la Suprema Corte de Justicia si deciden sobre la inconstitucionalidad de una ley o establecen la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

Como ya se ha dicho en esta exposición de motivos, los problemas que se plantean en amparo pueden clasificarse en dos categorías diferentes, según se refieran a la violación directa o a la interpretación de un precepto de la Constitución Federal, o a las posibles violaciones de leyes ordinarias que constituyen una violación indirecta de los artículos 14 y 16 constitucionales. En el primer caso se está en presencia de un problema de constitucionalidad, y en el segundo ante un problema de legalidad.

Cuando se reclama la violación directa de una garantía individual, por haberse transgredido algún precepto de la Constitución, se está en presencia de un problema de constitucionalidad, de la competencia de la Suprema Corte de Justicia; cuando se reclama la violación indirecta del artículo 14 o del artículo 16 mencionados, como consecuencia de haberse infringido alguna disposición de la ley secundaria, se trata entonces de un problema de simple legalidad, de la competencia de los tribunales colegiados de circuito.

Se propone la reforma del inciso b) de la fracción V del artículo 107, para suprimir el calificativo de federales a los tribunales a que el propio inciso se refiere, para darle congruencia con la fracción XXIX-G del artículo 73 y con la fracción I-B del artículo 104 que ya se han explicado.

Se adiciona un párrafo final a la fracción V del artículo 107, para conceder a la Suprema Corte de Justicia la facultad de atracción respecto de los amparos directos que sean de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando por su importancia, la propia Suprema Corte de Justicia, estime que debe conocer de ellos, bien sea procediendo de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República.

Se propone la reforma de la fracción VIII del artículo 107, que se refiere al amparo indirecto y al recurso de revisión que procede contra las sentencias que dicten los jueces de Distrito, para que la Suprema Corte de Justicia, por las razones ampliamente fundadas en esta exposición de motivos, tenga competencia para conocer de los recursos de revisión en el caso de que subsista en el recurso el problema de constitucionalidad respecto de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados.

Se asigna, de esta forma, a la Suprema Corte de Justicia el control de la constitucionalidad de los dos primeros niveles normativos, en lo federal y en lo local, constituidos por las leyes, tratados y reglamentos.

Se deja al conocimiento de los tribunales colegiados de circuito solamente los problemas de constitucionalidad de reglamentos autónomos y municipales y actos concretos de autoridad, por ser ello indispensable para la eficaz impartición de justicia, y poder aprovechar, en óptimas condiciones, la descentralización de la justicia federal, por tratarse del nivel normativo inferior que requiere de la acción inmediata de la justicia federal que conceda el amparo y protección sin la dilación que implica asignar el conocimiento de la revisión a la Suprema Corte de Justicia.

Toda vez que la Suprema Corte de Justicia tendrá la facultad de atracción respecto de los amparos que sean de la competencia de los tribunales colegiados de circuito, la reforma propuesta permitirá sin nueva modificación al texto constitucional, que la Suprema Corte ejercite esta facultad de atracción,

para los problemas de constitucionalidad de reglamentos autónomos y municipales y actos concretos de autoridad, si el volumen de asuntos no le impide despacharlos con prontitud.

En el penúltimo párrafo de la fracción VIII del artículo 107, se concede igualmente la facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia, para conocer de los amparos en revisión que, por su especial entidad, considere conveniente conocer de ellos, procediendo al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito o del Procurador General de la República.

Se propone la derogación del segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107, para que la Suprema Corte de Justicia pueda conocer, en todo caso, de la revisión de las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, si deciden sobre la inconstitucionalidad de una ley o establecen la interpretación directa de un precepto de la Constitución, para preservar a la Suprema Corte como supremo intérprete de la Constitución y facilitar la interrupción de la jurisprudencia que eventualmente hubiese establecido al respecto.

Finalmente, se propone la reforma de la fracción XI del artículo 107 para evitar la duda que su texto actual propicia respecto a la autoridad ante la cual debe presentarse la demanda de amparo directo, cuando se solicite la suspensión del acto reclamado, recogiendo la práctica forense en el sentido de que la demanda de amparo se presente ante la propia autoridad responsable, quien es competente para decidir sobre la suspensión; se precisa que el quejoso debe acompañar copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público, y una para el expediente, corrigiendo el texto vigente que sólo exige una copia para el expediente y otra para la parte contraria.

El Ejecutivo a mi cargo expresa su convicción de que el sistema propuesto en la presente iniciativa fortalecerá al Poder Judicial de la Federación en su conjunto, restablecerá para la Suprema Corte de Justicia su carácter de Tribunal Constitucional, perfeccionará el principio de división de Poderes y contribuirá a mantener la solidez del régimen político y jurídico del país. La descentralización de la justicia federal en materia de legalidad y la eliminación del problema del rezago de los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia darán a México la más perfecta vigencia del Estado de Derecho, que es compromiso que comparto con todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me permito someter a la consideración del Poder Revisor de la Constitución la siguiente iniciativa de:

DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION XXIX-G AL ARTICULO 73, UNA FRACCION 1-B AL ARTICULO 104 Y UN PARRAFO FINAL A LA FRACCION V DEL ARTICULO 107; QUE REFORMA EL ARTICULO 94, LOS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 97, EL ARTICULO 101, EL INCISO A) DE LA FRACCION III, EL PRIMER PARRAFO Y EL INCISO B) DE LA FRACCION V Y LAS FRACCIONES VI, VIII, Y XI DEL ARTICULO 107; Y QUE DEROGA LOS PARRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 104 Y EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 107, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan la fracción XXIX-G al artículo 73, la fracción I-B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción, V del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los siguientes términos:

"Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:

I, a XXIX-F.

XXIX-G. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y los particulares, estableciendo las

normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

XXX."

"Artículo 104.

I.

I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refiere 18 fracción XXI X-G del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes, y siempre que esas resoluciones hayan sido dictadas como consecuencia de un recurso interpuesto dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las revisiones de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los tribunales colegiados de circuito no procederá juicio o recurso alguno;

II. a VI."

"Artículo 107.

I. a V.

Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo directo, por su especial entidad, deba ser resuelto por ella, podrá conocer del mismo, bien sea procediendo de oficio, o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito o del Procurador General de la República;

VI. a XVIII."

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el artículo 101, el inciso A) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso B) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

"Artículo 94, Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de veintiún ministros numerarios, y funcionará en Pleno o en Salas. Se podrán nombrar hasta cinco ministros supernumerarios.

En los términos que la ley disponga, las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito y las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

El Pleno de la Suprema Corte determinará el número, división en circuitos y jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito,

El propio tribunal en Pleno estará facultado para emitir acuerdos generales a fin de lograr, mediante una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que compete conocer a la Suprema Corte de Justicia, la mayor prontitud en su despacho.



La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución".

"Artículo 97. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán satisfacer los requisitos que exija la ley y durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren reelectos o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal; o algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.

.  
.  
.  
."

"Artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los respectivos secretarios, no podrán, en ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o cargo de la Federación, de los Estados o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo."

"Artículo 107...

I, y II.

III.

A) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser, modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo a resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del Estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;

B) y C)...

IV.

V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá directamente ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:

A)...

B) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;

C).

D).

.

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaría de los artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones;

VII....

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de Distrito, procede a revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia;

A) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;

B) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en revisión, por su especial entidad, deba ser resuelto por ella, conocerá del mismo, bien sea proceda al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito o del Procurador General de la República.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

IX y X. .

XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los tribunales colegiados de circuito, y la propia autoridad responsable decidirá al respecto; en este caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público, y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán', sobre la suspensión los juzgados de distrito.

XII. a XVIII."

ARTICULO TERCERO.- Se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107, de Constitución; Política de los Estados Unidos Mexicanos.

#### ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 15 de enero de 1988, previa su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a ustedes las seguridades de mi más distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION  
Palacio Nacional, a 6 de abril de 1987.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

MIGUEL DE LA MADRID H.

#### *2. Decreto de reforma del proceso constitucional de 10 de agosto de 1987<sup>468</sup>*

DECRETO por el que se adicionan la fracción XXIX-H al artículo 73, la fracción I-B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107; se reforma el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el artículo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107; y se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

#### DECRETO

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de las HH. Cámaras de Senadores y de Diputados de la LIII Legislatura Federal y de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 73, 94, 97, 101, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción XXIX-H al artículo 73, la fracción I-B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I. aXXIX-F...

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

---

<sup>468</sup> Disponible en: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4674288&fecha=10/08/1987), consultado el 12 de mayo de 2017.

XXX...."

"Artículo 104..

I...-

I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ella dicten los tribunales colegiados de circuito no procederá juicio o recurso alguno;

II. a VI..."

"Artículo 107...

I. a V...

La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por sus características especiales así lo ameriten.

VI a XVIII...."

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el artículo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito.

La Suprema corte de Justicia de la Nación se compondrá de veintiún ministros numerarios y funcionará en Pleno o en Salas. Se podrán nombrar hasta cinco ministros supernumerarios.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito y las responsabilidades que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

El Pleno de la Suprema Corte determinará el número, división en circuitos y jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito.

El propio Tribunal en Pleno estará facultado para emitir acuerdos generales a fin de lograr, mediante una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que compete conocer a la Suprema Corte de Justicia, la mayor prontitud en su despacho.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales

o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución."

"Artículo 97. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán satisfacer los requisitos que exija la ley y durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren reelectos o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal; o algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.

...

...

...

...

...

...

...

..."

"Artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los respectivos secretarios, no podrán, en ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

La Fracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo."

"Artículo 107. ...

I y II. ...

III. ...

a) Contra sentencia definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa o ello o que, cometida durante el procedimiento, afecta a la defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como

agrario en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a las estabilidad de la familia;

b) y c) ...

IV. ...

V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin juicio, o sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:

a) ...

b) En materia administrativa, cuando reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o juicios especiales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal:

c) ...

d) ...

...

VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará trámite y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y, en caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones;

VII. ...

VIII. contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de distrito, procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de justicia.

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y Reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;

b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión que por sus características especiales así lo ameriten.

En lo casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

IX. y X. ...

XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los tribunales colegiados de circuito, y la propia autoridad responsable decidirá al respecto; en todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al

Ministerio Público y una para el expediente. En lo demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los juzgados de distrito.

XII. a XVIII. .."

ARTICULO TERCERO.- Se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

#### ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 15 de enero de 1988, previa su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México D. F. a 29 de junio de 1987- Sen. Antonio Riva Palacio López, Presidente.- Dip. Mario Murillo Morales, Secretario.- Sen. Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expedido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de julio de mil novecientos ochenta y siete-Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.- Rúbrica.

### III. ARTÍCULOS PUBLICADOS DURANTE EL DOCTORADO





methaodos.revista de ciencias sociales

E-ISSN: 2340-8413

coordinador@methaodos.org

Universidad Rey Juan Carlos  
España

Massé Narváez, Carlos E.; Rivera Hernández, Juan  
La hermenéutica en la interpretación conforme de los derechos humanos en el orden  
jurídico mexicano  
methaodos.revista de ciencias sociales, vol. 2, núm. 1, mayo, 2014, pp. 36-44  
Universidad Rey Juan Carlos  
Madrid, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441542971004>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org



Sistema de Información Científica  
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

# La hermenéutica en la interpretación conforme de los derechos humanos en el orden jurídico mexicano

## *Hermeneutics in the interpretation in accordance of human rights in the Mexican legal order*

Carlos E. Massé Narváez

Universidad Autónoma del Estado de México, México.  
carmasse@gmail.com

Juan Rivera Hernández

Universidad Autónoma del Estado de México, México.  
jrivher\_jr@hotmail.com

Recibido: 18-1-2014

Modificado: 4-4-2014

Aceptado: 25-4-2014



---

### Resumen

Partimos de introducir al lector a la expresión: interpretación conforme, para enseguida realizar una conceptualización de las nociones a emplear en el análisis de los nuevos contenidos en materia de derechos humanos. Posteriormente abordamos los materiales jurídicos e interpretación conforme con base hermenéutica. Finalmente se plantea la necesidad de la formación hermenéutica, con ello se concluye el artículo.

**Palabras clave:** Autoridad, constitución, control de constitucionalidad, interpretación conforme, materiales jurídicos.

---

### Abstract

We proceed to introduce the reader to the expression: interpretation in accordance with then, perform a conceptualization of the concepts to use in the analysis of the new content in the field of human rights. Subsequently we are dealing with the legal materials and interpretation in accordance with base hermeneutics, turning to the competition in the interpretation correct. Finally there is the need for training hermeneutics, thereby terminating the paper.

**Key words:** Authority, Constitution, Judicial Review, Interpretation in Accordance, Legal Materials.

---

### Sumario

1. Introducción | 2. Los fundamentos de la interpretación conforme | 3. La interpretación conforme con base hermenéutica en la interpretación constitucional | 4. Los nuevos contenidos en materia de derechos humanos | 5. La interpretación conforme en el derecho comparado | 6. La interpretación conforme en México | 7. Implicaciones de la interpretación conforme como parámetro hermenéutico | 8. Competencia en la interpretación conforme: la necesidad de la formación hemenéutica | 9. Conclusiones | Referencias bibliográficas

---

## 1. Introducción

La "interpretación conforme" es el instrumento hermenéutico que encauza a la promoción, respeto, protección y eficacia de los derechos humanos, a fin de favorecer la protección más amplia o la máxima protección de las personas (principio *pro persona*). Al mismo tiempo, tal interpretación se realiza a través de la armonización de los derechos humanos contenidos en el orden fundamental y en los instrumentos internacionales sobre la materia. Y es precisamente con el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, reformado el 10 de junio de 2011, con el que se prevé este novedoso instrumento hermenéutico en el orden jurídico mexicano.

No obstante, si se abstraen los nuevos contenidos constitucionales en materia de derechos humanos, en consecuencia el uso y la finalidad de la "interpretación conforme" se transforma en un entendimiento complejo y discutible, por lo que concierne a los materiales jurídicos que deben armonizarse, y por lo que atañe a quienes emplean y conocen de aquella. Consecuentemente, se analiza esta figura con la finalidad de establecer la realidad jurídica en la cual se ubica, y que anticipadamente señalamos, no deja de ser indiscutible.

## 2. Los fundamentos de la interpretación conforme

Aún cuando la obligatoriedad de los instrumentos internacionales había sido formalmente establecida por el principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la Constitución mexicana de 1917, en el ejercicio del control de constitucionalidad aquellos habían sido generalmente ignorados, propiciando su ineficacia y el reenvío de ésta al control de constitucionalidad en México; situación que aparentemente en la primera década del siglo XXI se ha modificado, por ejemplo, a través de las facultades de los jueces, en específico, al realizar la interpretación constitucional. Justamente, para asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales fue necesario fortalecer la referida interpretación, lo cual aconteció al implantar la "interpretación conforme".

Para el entendimiento de la "interpretación conforme" es necesario mencionar algunos conceptos, como son: Constitución y autoridades<sup>1</sup>. La "Constitución" no posee univocidad en su concepto. A pesar de esto, ella puede describirse como el ordenamiento preponderantemente escrito establecido por el pueblo, para que por su medio se autodetermine, reserve derechos humanos, unifique su poder y señale la forma en que el mismo será representado, configurado y ejercido, lo que en conjunto conforma su contenido básico y abstracto. En virtud de esto se puede deducir que es en un solo ordenamiento en el que se refleja la cohesión y la unificación de las convicciones e intereses comunes en una época y lugar determinado, permitiendo el desarrollo de la convivencia de las personas, sus representantes en el poder y de estos entre sí. No obstante, como creación humana, la Constitución no es perfecta sino perfectible y se va adecuando al periodo de vida en que tenga que ser cumplida, de ahí que su actualización representa una forma de protección, para que se evite su sustitución. No obstante, si se considera que no es necesario realizar dicha actualización, entonces tiene que contrarrestarse el incumplimiento de sus imperativos cuando los individuos que decidieron su establecimiento y los representantes del poder público, no han cumplido sus mandatos, permisos, prohibiciones así como orientaciones, porque con motivo de los conflictos constitucionales, es decir, de la violación, inobservancia o incertidumbre recaídas sobre estos imperativos constitucionales, es como se produce el crecimiento de los problemas en la realidad política, económica, social y jurídica (Rivera, 2009: 163).

La idea de autoridad ha evolucionado a través de la historia, y en el contraste del tiempo y el espacio, puede considerarse como tal a un ser supremo, rey, señor feudal, etc. Sin embargo, a partir de las ideas de la Ilustración, a dicha idea se le confiere un enfoque que sirve de punto de inflexión hasta nuestros días. De manera que la estructura de las instituciones políticas en las democracias liberales

---

<sup>1</sup> El concepto "derechos humanos" es extenso. No obstante, alguna noción puede ubicarse en el artículo 1o. de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". O bien, en el artículo 1o. de la Ley Fundamental para la República Federal Alemana de 1949, expedida en Bonn: "La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público." (Bastida et al., 1992: 172). Conviene destacar que tal concepto se integra, además, de los principios de universalidad, igualdad, dignidad, intangibilidad, etc.

descansa en un principio célebre, el de la separación de poderes. Se le remonta al autor inglés John Locke, en su *Tratado del gobierno civil* (1690) y a Montesquieu en su *Espíritu de las leyes* (1748). Todos los regímenes políticos conocen una división entre varios órganos gubernamentales, cada uno más o menos especializado en una función. La separación de poderes, en el sentido preciso del término, no solamente consiste en esta división del trabajo: implica también que los distintos órganos gubernamentales sean independientes unos de otros (Duverger, 1970: 178). En consecuencia, la idea de "autoridad" se enlaza con los individuos que ejercen las funciones públicas del poder del Estado.

Además de las referidas funciones, en los Estados constitucionales contemporáneos laboran órganos constitucionales autónomos y órganos de relevancia constitucional, los cuales son instituidos para racionalizar el poder público. La idea de "autoridad" también se identifica en la doctrina con las nociones de "autoridad normativa" y "operador jurídico".

Según Joseph Raz (1990) la "autoridad normativa" es un tipo de autoridad práctica. Lo que quiere decir, a tenor de la terminología propuesta por el filósofo norteamericano, aceptada ampliamente en la discusión actual, que las autoridades normativas tienen que ver con las razones para la acción y no *prima facie* con la razones para la creencia de los individuos afectados (Caracciolo, 1991: 67-68).

Por otra parte, la voz "operador jurídico" está relacionada con aquellos ciudadanos y justiciables que integran o llegasen a integrar los tribunales judiciales. Más aún, tanto las nociones de autoridad normativa y operador jurídico están relacionadas con la actividad hermenéutica de la concreción del derecho (Castaño, 2009: 84 y 91). Con esto se infiere que la "autoridad", "autoridad normativa" u "operador jurídico" son los competentes para efectuar la interpretación jurídica, cuyos efectos prácticos trascienden a la realidad. Dentro de dichas interpretaciones se ubica la "interpretación constitucional", la cual contiene nuestro objeto de estudio

### 3. La interpretación conforme con base hermenéutica en la interpretación constitucional

La "interpretación conforme" se inserta en los diferentes catálogos de interpretación constitucional. El jurista Luis Vigo crea un catálogo de tal interpretación que nombra paradigmas de la interpretación jurídico-judicial, la cual se integra por las siguientes clasificaciones: Dogmático racionalista, irracionalista o arracionalista, político o negativista, herculeano, funcionalista o pragmático, procedimentalista, dialéctico, hermenéutico, analítico, prudencial-retórico (Vigo, 1993: 203-233). La última clasificación tiene analogía con nuestro objeto de análisis, ello porque dicho paradigma consiste en el esfuerzo interpretativo que compete a la "razón práctica", atento a que todo el conocimiento jurídico no tiene por objeto la contemplación, sino que su finalidad es dirigir o valorar, con mayor o menor precisión y rectitud, a la conducta humana en la que parece comprometida la justicia. Así nos apartamos tanto de los "irracionalismos" o "arracionalismos", como del defecto extremo contrario que atribuye la interpretación a una razón de naturaleza teórica o especulativa (Vigo, 1993: 229).

Por otra parte, el jurista italiano Riccardo Guastini al elaborar una teoría de la interpretación constitucional, en el que enlista ciertas técnicas de la misma interpretación, como son: interpretación literal, el argumento a contrario, la intención de los constituyentes, la interpretación restrictiva y el argumento de la disociación, la interpretación extensiva y la interpretación sistemática (Guastini, 2008: 67-72). De dichas técnicas la interpretación extensiva e interpretación sistemática tienen analogía con la "interpretación conforme". Ello porque en la interpretación extensiva se incluyen en su campo de aplicación algunos supuestos concretos que, interpretando a la letra, no entrarían dentro del mismo. De suerte que se justifica la interpretación extensiva esencialmente mediante la analogía, o sea, la semejanza. Por ejemplo, la constitución regula de una cierta manera la ley de presupuesto, mediante la analogía se extiende la misma regulación a toda ley en materia de finanzas públicas (Guastini, 2008: 69). En este sentido, la interpretación extensiva sería útil, en cuanto a que, por ejemplo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas incluye los "Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU," siendo la primera del mundo en conferir fuerza normativa a tales objetivos. De acuerdo con esto, mediante la analogía o semejanza, se extendería la misma regulación de la Constitución local, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al orden jurídico mexicano en general.

La interpretación sistemática consiste en cualquier interpretación que consista en decidir el significado de una disposición a la luz de otras disposiciones (previamente interpretadas), sobre la base de

la presunción de que el derecho es una totalidad consistente y coherente (consistente en sentido lógico – *consistency*; ausencia de contradicciones– y coherente en sentido axiológico –*coherence*, ausencia de armonía entre valores–) del derecho. Por ejemplo, se efectúa una interpretación sistemática cuando supone que cada término adquiere un significado diferente en función del contexto en el que se inserta (Guastini, 2008: 71-72). Justamente, la interpretación conforme obtendría lo mejor de las clasificaciones de las interpretaciones constitucionales, con la finalidad de ejercer su función de armonización de los derechos humanos en México. De ahí que su explicación es densa, no obstante su intención es la familiarización de los derechos humanos en diferentes contextos sociales. Sin embargo, es necesario explicar la naturaleza de la referida interpretación, una vez que ha sido implantada a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

#### 4. Los nuevos contenidos en materia de derechos humanos

Miguel Carbonell indica que la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 reúne distintos principios según los cuales se les da rango constitucional a los tratados internacionales, se incorpora la figura de la interpretación conforme, se adoptan parámetros internacionales de protección y tutela de los derechos fundamentales, se constitucionalizan las figuras del asilo y el refugio, se establece la protección y defensa de los derechos humanos como uno de los principios de la acción diplomática del Estado Mexicano, etc. (Herrerías, 2011: 11). De modo que, siguiendo al autor consultado, aquellos principios instaurados con la reforma fueron: 1) rango constitucional de los instrumentos internacionales; 2) interpretación conforme; 3) control difuso de convencionalidad; y 4) el asilo y refugio de extranjeros. Sin embargo, otros principios e instituciones establecidos también con tal reforma fueron: 5) principio *pro homine* o *pro personae*; 6) reconocimiento de los derechos humanos con ese *nomen iuris* en el texto constitucional, cuya inspiración tiene sustento en la corriente epistemológica *iusnaturalista*; 7) bloque de constitucionalidad; y 8) reconocimiento constitucional de las “garantías constitucionales” o procesos constitucionales de la libertad que protegen el bloque de constitucionalidad, lo cual remite a su vez al apartado procesal constitucional de la Constitución mexicana. Definitivamente, los principios e instituciones mencionados están íntimamente relacionados. Algunos de estos no están expresamente mencionados, por ejemplo, el principio *pro persona*, el control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad implícitamente forman parte de la Constitución mexicana. Para precisar la ubicación de cada uno de los principios e instituciones mencionados se presenta la Tabla 1, que además contiene el texto anterior a la reforma del artículo 1º. constitucional. Esta tabla ofrece la ubicación de nuestro objeto de análisis, y es precisamente en el párrafo segundo del artículo 1o. en el que se ubica la interpretación conforme.

Tabla 1. Comparativa de la reforma del artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTÍCULO 1º. CONSTITUCIONAL ANTES DE LA REFORMA	ARTÍCULO 1º. CONSTITUCIONAL REFORMADO 2011	PRINCIPIOS IMPLANTADOS: EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS
Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.	Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.	El párrafo primero del artículo 1o. reformado en 2011, explícitamente establece: El rango constitucional de los instrumentos internacionales de derechos humanos y el rango constitucional de las garantías constitucionales o instituciones procesales de derechos humanos. Con la frase “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte” implícitamente se establece el bloque de constitucionalidad. Y la frase anterior junto con el extracto “cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece” implícitamente implantan el control de convencionalidad. .../...

.../...	Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.	El párrafo segundo con la frase "Las normas relativas a los derechos humanos" implícitamente establece el bloque de constitucionalidad. Asimismo este párrafo junto con el enunciado "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia" implícitamente establece el principio <i>pro homine</i> o <i>pro personae</i> . Además en la lectura de este párrafo se observa la implementación explícita de la interpretación conforme.
	Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.	El párrafo tercero del artículo primero implícitamente establece el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.	Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.	
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.	Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.	

Fuente: *Diario Oficial de la Federación*, el diez de junio de dos mil once.

## 5. La interpretación conforme en el derecho comparado

La interpretación conforme surge en Alemania. En la doctrina y jurisprudencia de este país tiene el nombre original de *Verfassungskonforme Auslegung des Gesetzes*, no obstante que es utilizada con diversas denominaciones por los tribunales, cortes o salas constitucionales.

Para autores como Héctor Fix Zamudio y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (2011: 297 y 318) la interpretación conforme resuelve un problema que se plantea con la declaración general de inconstitucionalidad, en cuanto que sólo se acude a esta declaración cuando no es posible realizar una interpretación armónica de las normas generales impugnadas con los valores, principios y normas fundamentales, es decir, cuando la contradicción entre las disposiciones legislativas y la constitución es insalvable. En otras palabras, se salva la constitucionalidad de la norma a través de una posible interpretación conforme con la constitución de la disposición impugnada, lo que implica dejar intacto el texto, y que se le de un nuevo contenido normativo como resultado de dicha interpretación constitucional. En síntesis, es una doctrina que ha cobrado aceptación en Alemania, especialmente con base en la actuación del Tribunal Federal Constitucional Alemán. Se trata de una técnica interpretativa consistente en que cuando un precepto normativo pueda tener diferentes interpretaciones, la autoridad jurisdiccional debe seleccionar aquella que sea acorde con la constitución, de esta forma se tiende a dar preferencia a la constitucionalidad de la norma, evitando la declaración de inconstitucionalidad, o bien se logra la conservación de la norma dentro del sistema jurídico cuando no sea indispensable su expulsión.

Asimismo, la "interpretación conforme" puede tener semejanza con el "control de compatibilidad" de origen británico. Sobre este control Walter F. Carnota (2011: 51) menciona que es un mecanismo diseñado por la Ley de Derechos Humanos Británica de 1998 y se limita a constatar la incongruencia de la normativa doméstica con la internacional. Dicho control se ubica en inciso 2 del artículo 4 de la Ley de

Derechos Humanos Británica de 1998, el cual prevé: "Si el tribunal está convencido de que la regla es incompatible con un derecho fijado en la Convención, puede hacer una declaración de esa incompatibilidad". Con relación a este inciso el autor consultado establece las siguientes consideraciones:

Como puede apreciarse, la norma legal confiere un carácter notoriamente declarativo a la tarea del juzgador, máxime cuando según el inciso 6 del mismo dispositivo, "Una declaración bajo este capítulo ("declaración de incompatibilidad"): a) no afecta la validez, efecto continuo o ejecución de la regla sobre la que se expide; y b) no vincula a las partes en el procedimiento en la cual se efectúa". Ese cariz declarativo y no ejecutivo de la inspección de compatibilidad es la que mejor se avenía con la desconfianza que en general el "modelo de Westminster" profesa hacia los jueces en su relación con las normas que dicta el Parlamento. Lo central en este esquema es la pervivencia de las disposiciones sancionadas por el legislador, que representa al electorado. Concebido de este modo, entonces, el examen de compatibilidad no irroga el gran costo que representaría invalidar actos legislativos y privarlos de eficacia en relación con las partes del litigio. En definitiva, lo que obliga la Ley de Derechos Humanos es un "mandato interpretativo aumentado": los jueces deben interpretar las leyes "de conformidad" con los derechos humanos; cuando esa tarea de armonización no es factible, podrán emitir una declaración de incompatibilidad (Walter, 2011: 63).

De manera que el control de compatibilidad es el deber de los jueces británicos para interpretar las leyes de acuerdo con los derechos humanos; si esta labor es imposible realizar, el juzgador declararía la invalidez de la norma. Consiguientemente, el control de compatibilidad se ejerce en dos fases: 1) se efectúa una inspección de compatibilidad, es decir, se interpretan las normas británicas conforme a los derechos humanos; y 2) se declara la invalidez de la norma que no haya podido hacerse compatible con aquellos derechos contenidos en la Ley de Derechos Humanos Británica de 1998.

La aparición de esta ley propicia un nuevo paradigma del derecho en el *Common Law*. Así la doctrina considera que Gran Bretaña se encuentra en proceso de convertirse en un estado constitucional, signado por los frenos y contrapesos entre los diferentes órganos de gobierno, y un estado en el cual la judicatura tiene ahora un rol crucial que jugar en la determinación de los derechos individuales y en fijar los alcances de la acción gubernamental. Es el comienzo de la transformación de Gran Bretaña en estado constitucional lo que conforma la significación más profunda de la era de la reforma constitucional (Bogdanor, 2009: 289).

## 6. La interpretación conforme en México

En México, antes de la reforma de 10 de junio de 2011, no se había establecido "formalmente" la obligación de efectuar una inspección de compatibilidad como la que realizan los jueces británicos o el Tribunal Federal Constitucional Alemán. Sin embargo, en ocasiones los jueces mexicanos habían interpretado las leyes de acuerdo con los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, esto por ejemplo, durante la novena época del Semanario Judicial de la Federación, que contiene las jurisprudencias aplicables o vigentes emitidas desde el 4o. de febrero de 1995 hasta el 4o. de octubre de 2011 (Rivera, 2012: 148).

Los legisladores constitucionales, en el dictamen de la reforma que formalizó al objeto de estudio, determinaron que la "interpretación conforme" opera como una cláusula de tutela y garantía de los derechos, recurriéndose a las normas de los tratados internacionales de derechos humanos cuando haya necesidad de interpretación de los derechos constitucionalmente reconocidos. El efecto que se logra es una ampliación en la protección de los derechos humanos (Dictamen, 2012).

En tal sentido, la interpretación conforme en México tiene la finalidad de armonizar o hacer compatible los derechos humanos previstos en el orden jurídico nacional, y éstos con los derechos humanos de los instrumentos internacionales, esto es, armonizar el orden jurídico mexicano con el bloque de constitucionalidad (Rivera, 2013: 201-202).

Sin embargo, existe una imposición adicional al efectuar dicha labor en nuestro país. La armonización se orienta por el principio *pro persona*. Al respecto, José Luis Caballero Ochoa expone que la interpretación conforme se acompañó de tal principio, que es el criterio indispensable para el reenvío interpretativo de las normas sobre derechos humanos, pero que no puede desplegarse debidamente teniendo una limitación *a priori* de no contradicción con la Constitución. La interpretación conforme debe



correr en vía libre para que efectivamente pueda tener una mayor preponderancia la norma que acredita ser mayormente protectora, lo que en ocasiones puede, desde luego, jugar a favor del orden jurídico interno. Un sistema de reenvíos amplio y de interpretación en sede judicial en diálogo con la jurisprudencia internacional determina el alcance de la integración y de la norma que deba ser aplicada preferentemente en caso de conflicto (Ochoa, 2011: 112). Cabe destacar que la interpretación conforme sería ineficaz si no se admitiese que los instrumentos internacionales de derechos humanos pueden sobreponerse a la Constitución mexicana cuando aquellos otorguen una mayor protección a estos derechos.

Ahora bien, para Eduardo Ferrer Mac-Gregor la interpretación conforme se ha constituido como un método internacional en materia de Derechos Humanos (en Romero y Rangel, 2011: 469). El mismo autor menciona que su implantación en México impone el deber de realizarlo por todos los jueces. A su vez refiere que se basa en el paradigma español. En este sentido la doctrina considera que México ha implantado el funcionamiento de la nueva técnica interpretativa de las normas relativas a los derechos humanos prevista en la cláusula de interpretación conforme (constitucional y convencional), criterio hermenéutico, por cierto, "no disponible" por el intérprete; es decir, no es "optativo" para el juez, sino que constituye un mandato constitucional obligatorio cuando se trate e interpretar normas de derechos humanos (Ferrer, 2011: 344). Con todo, los nuevos contenidos constitucionales han propiciado una evolución significativa en materia de derechos humanos y en materia de interpretación constitucional a través de la "interpretación conforme", esto porque es una herramienta en el ejercicio del control de constitucionalidad.

#### 7. Implicaciones de la interpretación conforme como parámetro hermenéutico

Eduardo Ferrer Mac-Gregor (en Romero y Rangel, 2011: 469-470), establece una lista de las principales implicaciones de la interpretación conforme en nuestro país:

- Los destinatarios son todos, los particulares y autoridades; el legislador tiene que tomar en cuenta esto al producir normas y los jueces tienen que aplicar la interpretación conforme cada vez que conozcan un caso relativo a derechos humanos, y la administración pública también tiene que ajustarse a esta pauta.
- Es obligatoria por mandato constitucional.
- El objeto materia de la interpretación conforme no se limita a los derechos humanos de rango constitucional, comprende además los de jerarquía de infraconstitucional y a derechos humanos previstos en cualquier tratado.
- El objeto materia de interpretación conforme no se restringe al Título Primero de la Constitución, sino a todo su contenido.
- El objeto materia de interpretación conforme no se restringe a Tratados Internacionales específicos sobre derechos humanos, sino a cualquier tratado internacional.
- El objeto materia de interpretación conforme no se restringe a normas sustantivas, incorpora las adjetivas, relativas a derechos humanos.
- La expresión "tratados internacionales" contenidos en dicha cláusula comprende la connotación amplia del término que le otorga el artículo 2.1 de la Convención de Viena.
- La expresión "tratados internacionales" debe incluir la interpretación que establecen los órganos que el propio tratado autoriza para ello.
- Es un principio de armonización, pues vamos a interpretar la norma a la luz de la constitución y los tratados internacionales, para dar una sola interpretación.
- Se incorpora el principio pro persona, que implica la protección más amplia a la personas. La interpretación conforme debe hacerse atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
- El canon interpretativo tiene una estrecha relación con los diversos párrafos del artículo primero que en conjunto guardan relación con los artículos 99, 103, 107 y 133.

Como se observa, con la interpretación conforme se ejerce una labor de creación normativa por los órganos judiciales, y que por mandato del párrafo tercero del artículo 1o. constitucional, deben efectuar



también todas las autoridades normativas mexicanas, es decir, legisladores e integrantes de la administración pública, federales y locales, de nuestro país. En consecuencia, la labor de armonización efectuada, a través de la interpretación de mérito, se extiende más allá del *corpus iuris* interamericano y de su jurisprudencia, para comprender ahora a todos los derechos humanos previstos en los tratados internacionales (en general) y los criterios interpretativos que emitan los órganos que conforme al mismo tratado se encuentren legitimados para interpretarlos, especialmente los tribunales internacionales (como pueden ser los emitidos por el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional o el Tribunal Internacional del Mar), dado que, eventualmente, pueden producir criterios en materia de derechos humanos. Así, mientras el primer párrafo establece un "bloque constitucional" (normas que integran el texto constitucional), el segundo párrafo refiere a una "pauta" o "criterio hermenéutico" de las normas de derechos humanos (con independencia de su rango o jerarquía), que será el instrumento fundamental que utilicen los jueces en esa material (Ferrer, 2011: 34).

#### 8. Competencia en la interpretación conforme: la necesidad de la formación hermenéutica

A través de lo expuesto se infiere que por medio de la "interpretación conforme" se otorga sentido constitucional a una norma presuntamente inconstitucional, misma que sigue siendo válida a pesar de aparentar inconstitucionalidad literal.

En tal virtud, la "interpretación conforme" es competencia de las autoridades normativas o de los operadores jurídicos, sin embargo, según nuestra hipótesis, también debe ser competencia de la población en general para hacer viable y real la vigencia y eficacia de los derechos humanos.

Desde esta perspectiva, al instaurarse la interpretación conforme como instrumento hermenéutico, es necesaria la constante capacitación y actualización de las autoridades que deban proteger los derechos humanos, y no menos urgente pero también necesaria, la ampliación de la cultura de los derechos humanos en la población en general, lo que permitiría otorgarles eficacia.

#### 9. Conclusiones

Con los nuevos contenidos constitucionales en materia de derechos humanos vigentes desde el 11 de junio de 2011, se implantó la "interpretación conforme" como un instrumento hermenéutico que encamina o encauza a la promoción, respeto, protección y eficacia de los derechos humanos, a fin de favorecer a las personas su protección más amplia.

De manera que el objeto de análisis es una institución que, mediante la hermenéutica, tiene la finalidad de armonizar los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con aquellos contenidos en los instrumentos internacionales (tratados, convenciones, protocolos, declaraciones, jurisprudencia), así como con los derechos reservados en las Constituciones particulares de las Entidades Federativas y leyes de la materia, esto es, armonizar el orden jurídico mexicano con el bloque de constitucionalidad, de ahí que sirve como una herramienta en el ejercicio del control de constitucionalidad.

Tal armonización, con base hermenéutica, impone la constante capacitación y actualización de las autoridades que deben proteger los derechos humanos, y no menos urgente pero también necesaria la ampliación de la cultura de los derechos humanos en la población en general.

Cabe destacar que la interpretación conforme sería ineficaz si no se admitiese que los instrumentos internacionales de derechos humanos pueden sobreponerse a la Constitución mexicana cuando aquellos otorguen una mayor protección a estos derechos. Además, la interpretación conforme obtiene lo mejor de las clasificaciones de las interpretaciones constitucionales, con la finalidad de ejercer su función de armonización de los derechos humanos en México.

Finalmente, con el aplicación práctica de la interpretación conforme puede emerger un *ius constitutionale commune*, esto es, un derecho constitucional común dogmático. En otras palabras, los derechos humanos pudiesen conseguir validez y eficacia, dado que paulatinamente se les confiere un contenido formal y material semejante, a pesar de las diferentes culturas en las diversas naciones.

## Referencias bibliográficas

- Bastida, F. J., Varela, J. y Requejo, J. L. (2009 [1992]): *Derecho constitucional. Cuestionario comentado. I. Teoría de la constitución, principios estructurales. Órganos y funciones constitucionales*. Barcelona: Ariel.
- Castañón Zuluaga, L. O. (2009): "La cláusula de interpretación conforme y el principio *por persona* (Artículo 1o. segundo párrafo de la Constitución)", en Carbonel, M. y Salazar, P. Coords.: *La reforma constitucional de los derechos humanos. Un nuevo paradigma*: 103-133. México: UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Caracciolo, Ricardo (1991): "El concepto de autoridad normativa. El modelo de las razones para la acción", *Doxa. Publicaciones periódicas*, 10: 67-90.
- Carnota, W. F. (2011): "La diferenciación entre el control de constitucionalidad, control de convencionalidad y control de compatibilidad", *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, 15: 51-66.
- Duverger, M. (1970): *Instituciones políticas y derecho constitucional*. Barcelona: Ariel.
- Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respecto de la Minuta de Proyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos: 15. Disponible en web: <http://goo.gl/hqj5S>. [Consultado 25-08-2012].
- Ferrer Mac-Gregor, E. (2011): "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en Carbonel, M. y Salazar, P. Coords.: *La reforma constitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma*: 339-429. México: UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Fix-Zamudio, H. y Ferrer Mac-Gregor, E. (2011): *Derecho de amparo*. México: Porrúa, UNAM e Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Guastini, R. (2008): *Teoría e ideología de la interpretación constitucional*. Madrid: Trotta.
- Herrerías Cuevas, I. F. (2011): *Control de convencionalidad y efectos de las sentencias*. México: Ubijus.
- Raz, J. (1990): "Authority and Justification", en Raz, J. Ed.: *Authority*: 330 pp. Oxford: Blackwell.
- Rivera Hernández, J. (2009): "Hacia nuevas competencias de la Sala Constitucional del Estado de México". México: Universidad Autónoma del Estado de México. Tesis de licenciatura. (Inédito).
- (2013): "El amparo local en México. Análisis procesal constitucional". México: Universidad Nacional Autónoma de México. Tesis de maestría. (Inédito).
- (2012): "La jurisprudencia mexicana en las reformas constitucionales de 1994 y 2011", *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, 34: 131-159.
- Romero Ramos, J. C. y Rangel Hernández, L. M. (2011): "Crónica del IV Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional: El amparo del siglo XXI", *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, 16: 200-215.
- Vigo, R. L. (1993): *Interpretación constitucional*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

## Breve CV de los autores:

Carlos E. Massé Narváez es Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases desde 1984 hasta la fecha, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Asimismo, ha presentado ponencias y conferencias en distintos foros nacionales y extranjeros, relacionados con su práctica docente y su producción escrita. Actualmente es Investigador Nacional Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT (México), adscrito como investigador titular a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Sus campos de investigación: epistemología de las ciencias (investigación básica) y Estado neoliberal y grupos vulnerables (investigación aplicada).

Juan Rivera Hernández es Maestro en Derecho con *Mención Honorífica* por la Universidad Nacional Autónoma de México y Licenciado en Derecho con *Mención Honorífica* por la Universidad Autónoma del Estado de México. Miembro del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y de la European Public Law Organization.

# E



# INFORMACIÓN A FAVOR DE LA DEMOCRACIA

**Entrevista  
con el  
político  
Dr. Leonardo  
Morlino**

septiembre-diciembre de 2013

**¿Por qué  
Democracia  
es Igualdad?  
por Patricia  
Mercado**

no. 13 año 3

**Elección de  
Presidenta y  
Secretaria Ejecutiva  
del Consejo General**

**Suplemento  
especial por el  
60 aniversario  
del voto femenino  
en México**



**Yolanda Elías Calles Cantú**  
Presidenta del Consejo General

**María Esperanza Vega Mendoza**  
Secretaría Ejecutiva

**Alfredo Flores Ríos**  
Presidente de la Comisión de Organización Electoral y de Editorial y Biblioteca

**Magdiel Hernández Tinajero**  
Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información

**Demetrio Juaristi Mendoza**  
Consejero Electoral

**Jesús Uribe Cabrera**  
Presidente de la Comisión de Control Interno

**José Vidal Uribe Concha**  
Presidente de las Comisiones de Fortalecimiento del Régimen de Partidos y de Educación Cívica y Capacitación Electoral

**Martín Arango García**  
Partido Acción Nacional

**Sócrates Alejandro Valdez Rosales**  
Partido Revolucionario Institucional

**Carlos Lázaro Sánchez Tapia**  
Partido de la Revolución Democrática

**Jazmín Angelina García Vega**  
Movimiento Ciudadano

**Oscar Arturo Rodríguez Cervantes**  
Nueva Alianza

**Perla Patricia Flores Suárez**  
Partido Verde Ecologista de México

**Eugenio Plascencia Zarazúa**  
Director Ejecutivo de Organización Electoral

**Luis Octavio Vado Grajales**  
Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral

**Carlos Rubén Eguarte Mereles**  
Director General

**Arturo Rosendo de Santiago Valencia**  
Coordinador Administrativo

**Gabriela Benites Doncel**  
Coordinadora de Partidos y Asociaciones Políticas

**Juan Rivera Hernández**  
Coordinador Jurídico

**Raúl Islas Matadamas**  
Coordinador de Informática

**Héctor Maqueo González**  
Coordinador de Información y Medios

**Rosa María García Cortés**  
Encargada de Despacho de la Coordinación de Asesores de los Consejeros del Consejo

- 2 **Presentación**  
Lic. Yolanda Elías Calles Cantú, Presidenta del Consejo General
- 3 **Eligen Presidenta y Secretaria Ejecutiva del Consejo General**  
Coordinación de Información y Medios
- 4 **Entrevista con el Dr. Leonardo Morlino**  
Coordinación de Información y Medios
- 9 **La personalidad democrática**  
Por José Vidal Uribe Concha, Presidente de las Comisiones de Fortalecimiento del Régimen de Partidos y de Educación Cívica y Capacitación Electoral
- 10 **El Derecho procesal electoral en el Estado de Querétaro**  
Mtro. Juan Rivera Hernández, Coordinador Jurídico del IEQ
- 12 **Formación de Ciudadanía**  
Mtro. Luis Octavio Vado Grajales, Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral
- 15 **Suplemento especial con motivo del 60 aniversario del voto de las mujeres en México**
- 15 **Foro 'Participación Política de las Mujeres en el Estado de Querétaro'.**  
Commemoran el 60 aniversario del sufragio femenino en el Jardín Zenea.
- 17 **¿Por qué democracia es igualdad? por Patricia Mercado Castro.**
- 20 **Panel de Análisis 'Desafíos que enfrentan las mujeres en política. Experiencias y pronósticos'.**
- 24 **Publica el IEQ el libro "Los Derechos en los Tiempos del Género (de mujeres, feminismo y derechos) del Dr. Santiago Nieto Castillo.**
- 27 **Participación de la Presidenta del IEQ en acto conmemorativo del Instituto Electoral del Estado de Veracruz (IEEV).**
- 29 **Difusión del 'Informe y Estadística. Memoria del Proceso Electoral 2012' en los municipios de San Juan del Río y Jalpan de Serra, Qro.**  
Coordinación de Información y Medios
- 31 **Presentación de la 'Memoria Gráfica. Proceso Electoral Querétaro 2012'**  
Coordinación de Información y Medios
- 33 **Actividades de las Comisiones del Consejo General**  
Coordinación de Información y Medios
- 36 **Pláticas, conferencias y eventos**  
Coordinación de Información y Medios
- 39 **La Opinión de la Academia**  
Dra. En D. Gabriela Nieto Castillo, Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro
- 43 **Recomendaciones Bibliográficas**  
Mtro. Luis Octavio Vado Grajales, Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral
- 46 **Directorio de Partidos Políticos**

**Instituto Electoral de Querétaro**

Las Torres 102  
Residencial Galindas, Centro Histórico,  
C.P. 76177, Querétaro, Qro.

Tel. 01(442)101 98 00

**REGISTRO ANTE EL INDAUTOR**

Reserva de derechos al uso exclusivo  
Número: 04-2009-112514571400-102

Coordinación de Edición  
Integrantes de la Comisión de Editorial y Biblioteca

Redacción  
Mirian Tirado Ceciliano y Héctor Maqueo González  
Coordinación de Información y Medios

Diseño y formación  
Sergio Ríos Oviedo

Foto de portada  
Carlos González González

Se imprimió en  
Dzibal impresos calle Belisario Domínguez No.77  
Col. Las Misiones C.P. 76030

500 ejemplares

Las opiniones vertidas en la revista son responsabilidad de cada autor.



# El derecho procesal electoral en el estado de Querétaro

Por Juan Rivera Hernández, Coordinador Jurídico del IEQ

Un tema de interés para la consolidación democrática del Estado Constitucional es la protección de los derechos políticos-electorales. El interés lo asumen no sólo tratadistas, sino también actores políticos y operadores jurídicos, así como la sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución<sup>1</sup>.

Los diversos análisis sobre la cuestión de mérito no dejan de ser indiscutibles, no obstante son válidos si se dirigen como vertientes para obtener la efectividad de las disposiciones que reconocen o prevén aquellos derechos. Precisamente, el Derecho procesal electoral es una de estas vertientes,<sup>2</sup> el cual se vincula con el procesalismo científico, que creó la teoría general del proceso, y que es definida por el maestro Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, como la exposición de los: "principios, conceptos e instituciones comunes a todas las ramas de enjuiciamiento del derecho procesal."<sup>3</sup> Postulado que determinó, de acuerdo con el jurista Héctor Fix-Zamudio, la independencia de los estudios procesales, que se encontraban subordinados a la materia sustantiva.<sup>4</sup>

Desde esta perspectiva, el Derecho procesal electoral cuenta con un paulatino desarrollo dogmático y jurisprudencial, de manera que algunos de los principales impulsores de tal desarrollo, por ejemplo son las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como también un número importante de académicos.

Justamente, además del análisis dogmático y jurisprudencial, existe un entramado normativo en materia electoral, debido a que sobre el particular, además de legislación federal, las Entidades Federativas han implementado su propia normativa, ello con sustento en el régimen federal de nuestra nación.

En tal tesitura, el Estado de Querétaro es partícipe de la autonomía científica de los estudios del derecho procesal electoral, dado que el desarrollo jurisprudencial se ejemplifica a través de la obra: "Criterios Electorales 2004-2011"<sup>5</sup>. A su vez, la fuente de desarrollo legislativo en la materia indicada es la Constitución Política del Estado de Querétaro, y es precisamente la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro la que tiene la finalidad teleológica de regular el derecho procesal electoral en el Estado.

Sin embargo, a nuestro parecer, la Ley Electoral del Estado de Querétaro prevé un catálogo de procesos electorales que directamente se relacionan con la teoría del derecho procesal, constituyéndose en un orden jurídico ex profeso que regula las categorías de la acción, la jurisdicción y el proceso.

Consignientemente, son cinco los procesos electorales establecidos por la ley electoral de referencia: procedimiento ordinario, procedimiento especial, procedimiento de los funcionarios electorales, procedimiento en materia de fiscalización, financiamiento y gasto de los candidatos independientes, partidos políticos, coaliciones y asociaciones políticas, y finalmente, el procedimiento de retiro de propaganda electoral. Consecuentemente, consideramos que ellos pueden ser examinados desde el enfoque del *procesalismo científico*.

<sup>1</sup> Cfr. Häberle, Peter, *El Estado Constitucional*, 1ra. reimp., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, pp. 149-162.

<sup>2</sup> Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Aportaciones de Héctor Fix-Zamudio al derecho procesal constitucional", Domingo García Belaunde (pról.), Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Ensayos sobre derecho procesal constitucional*, México, Porrúa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2004, p. 8.

<sup>3</sup> Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, "La teoría general del proceso y la enseñanza del derecho procesal", *Revista Iberoamericana de derecho procesal* Madrid, España, 1968, p. 5.

<sup>4</sup> Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Prólogo", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, 5a. ed., México, Porrúa, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación A.C., 2006, t. I, p. XLI.

<sup>5</sup> México, Poder Judicial de Querétaro, Consejo Editorial, S. A. Obra publicada en cumplimiento del artículo 88 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro o ley local adjetiva en materia electoral: "Artículo 88. La Sala establecerá criterios obligatorios derivados de las sentencias que emitan, los cuales tendrán este carácter cuando tres recursos sean resueltos en el mismo sentido ininterrumpidamente.

Precisamente, la competencia de dichos procesos corresponde, en cuanto a su sustanciación, a la Secretaría Ejecutiva, no obstante su resolución es competencia del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. De esta manera, el organismo público autónomo ejerce funciones materialmente jurisdiccionales al conocer de los cinco procedimientos previstos en la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Lo anterior, se constituye en la categoría de la *jurisdicción procesal*.

Con relación al examen de la categoría de la acción procesal, aquellos procesos pueden ser promovidos a instancia de parte o de oficio, según las particularidades del marco jurídico de cada procedimiento.

Finalmente, con relación al análisis del proceso, la Ley Electoral del Estado de Querétaro<sup>6</sup> prevé los siguientes plazos para la sustanciación de los procedimientos de mérito:

**Procedimiento ordinario:** Prevención, tres días hábiles; admisión, cinco días hábiles, contestación al emplazamiento, cinco días hábiles; periodo de investigación, cuarenta días hábiles, plazo que puede ser ampliado por una sola vez hasta por un periodo igual al señalado; resolución, en un término no mayor de diez días hábiles.

**Procedimiento especial:** Regulado en el reglamento del procedimiento especial sancionador del Instituto Electoral de Querétaro, que señala que una vez concluido el periodo probatorio, la Secretaría Ejecutiva debe dictar acuerdo mediante el que pone el expediente en estado de resolución, procediendo a formular el proyecto correspondiente, para someterlo a consideración del Consejo en la sesión respectiva.

**Procedimiento de los funcionarios electorales:** Una vez que se recibe el escrito respectivo, en un término de cinco días se hace del conocimiento del funcionario presuntamente infractor, para que en un término de cinco días responda el emplazamiento. Enseguida, el Consejo General del Instituto determina lo conducente, en sesión que celebre dentro de los treinta días posteriores a la notificación del escrito referido.

**Procedimiento en materia de fiscalización, financiamiento y gasto de los candidatos independientes, partidos políticos, coaliciones y asociaciones políticas, así como el procedimiento de retiro de propaganda electoral:** La resolución de éste debe emitirse en un término no mayor a sesenta días naturales, contados a partir de la recepción de la denuncia por parte de la Secretaría Ejecutiva o cuando se haya iniciado de oficio (por ejemplo, a través de un Acuerdo del Consejo General), con excepción de aquellos asuntos en que por la naturaleza de las pruebas ofrecidas o de las investigaciones que se realicen, se justifique la ampliación del plazo indicado.

**Procedimiento de retiro de propaganda electoral:** Los partidos políticos y las coaliciones deben retirar toda su propaganda electoral a más tardar treinta días naturales después de celebradas las elecciones; aquellos deben dar aviso al Consejo General, a más tardar la segunda semana del mes de agosto del año de la elección; en caso de no hacerlo, las autoridades municipales deben proceder a su retiro; el Instituto Electoral de Querétaro debe reintegrar el gasto generado a los municipios con cargo al financiamiento público del partido político correspondiente; para tales efectos, las autoridades municipales, a más tardar el treinta y uno de enero del año siguiente al de la elección, deben remitir al Consejo General el informe respecto del gasto efectuado por dicha actividad, por partido o coalición, al mismo tiempo, tratándose de coaliciones, el descuento en el financiamiento público se debe dividir entre los partidos políticos coaligados en los términos acordados en el convenio de coalición, sin embargo, cuando el convenio no lo prevenga, el descuento se debe distribuir de manera igualitaria.<sup>7</sup>

Con base en lo expuesto, la autonomía científica del Derecho procesal electoral también se obtiene del apartado procesal de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Esta tesis puede ser atisbo de reflexión para la “sociedad abierta” de los intérpretes interesados en la protección de los derechos políticos-electorales y en la consolidación democrática en el Estado de Querétaro.

<sup>6</sup> Disponible en: <http://www.ieq.org.mx/contenido/marco/archivos/leyelectoral.pdf>, consultado el diez de enero de dos mil catorce.

<sup>7</sup> Cfr. Artículo 110 fracción IX de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Disponible en: <http://www.ieq.org.mx/contenido/marco/archivos/leyelectoral.pdf>, consultado el diez de enero de dos mil catorce.

*Diccionario*  
*de*  
**DERECHO PROCESAL**  
**CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL**

TOMO I

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR  
FABIOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ  
GIOVANNI A. FIGUEROA MEJÍA

*Coordinadores*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO • INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Ministro JUAN N. SILVA MEZA  
*Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
y del Consejo de la Judicatura Federal*

Consejero J. GUADALUPE TAFOYA HERNÁNDEZ  
Consejero DANIEL F. CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ  
Consejero MANUEL ERNESTO SALOMA VERA  
Consejero CÉSAR ESQUINCA MUÑOZ

Magistrado LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO  
*Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia*

Mtra. MARÍA JACQUELINE MARTÍNEZ URIARTE  
*Directora General de Derechos Humanos, Equidad de Género  
y Asuntos Internacionales*

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Dr. HÉCTOR FIX-FIERRO  
*Director*

Dra. MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ  
*Secretaria académica*

Dra. ELVIA LUCÍA FLORES ÁVALOS  
*Jefa del Departamento de Publicaciones*

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS  
Serie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 692

---

*Coordinadora editorial:* Elvia Lucía FLORES ÁVALOS

*Asistente editorial:* José Antonio BAUTISTA SÁNCHEZ

*Cuidado de la edición:* Leslie CUEVAS GARIBAY, Miguel LÓPEZ RUIZ  
Wendy Vanesa ROCHA CACHO

*Formación en computadora:* José Antonio BAUTISTA SÁNCHEZ

*Diseño de interiores y portada:* Edith AGUILAR GÁLVEZ

*Apoyo editorial:* Mayra Elena DOMÍNGUEZ PÉREZ, Cora Guadalupe GRACIA ROSAS  
Ajax GUTIÉRREZ VILLASCÁN



*Diccionario*  
*de*  
**DERECHO PROCESAL**  
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL

TOMO I



EDUARDO FERRER MAC-GREGOR  
FABIOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ  
GIOVANNI A. FIGUEROA MEJÍA  
*(Coordinadores)*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Primera edición: 24 de abril de 2014

DR © 2014. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Insurgentes Sur 2417, col. San Ángel, Delegación Álvaro Obregón,  
01000 México, D. F.

DR © 2014. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n  
Ciudad de la Investigación en Humanidades  
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.

Impreso y hecho en México

trate de personas que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio; es decir, grupos en condición de vulnerabilidad.

El incumplimiento, inexactitud u oscuridad de algún requisito da lugar a que el órgano jurisdiccional de amparo requiera al o la promovente para que en el plazo de cinco días subsane las irregularidades formales de la demanda. En caso de que no lo haga, la consecuencia es tenerla por no presentada. Si se cumple la prevención, la demanda y el escrito aclaratorio no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo; por tanto, deben ser considerados como un solo documento.

Sin embargo, no todos los requisitos son susceptibles de ser subsanados. No procede prevenir a la parte quejosa cuando se omite expresar los conceptos de violación, pues éstos son indispensables para conocer su pretensión; de lo contrario se le daría un plazo mayor al legal para plantear la demanda, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia P./J. 111/2004. Excepto cuando el amparo indirecto se promueva en términos de los arts. 15 y 109 de la Ley de Amparo, en cuyo caso la norma no exige que se expresen conceptos de violación, excepción que no debe confundirse con la suplencia de la queja prevista en el penúltimo párrafo del numeral 79 de la norma referida.

*See Leonel López Giannopoulos*

## AMPARO AGRARIO

El amparo agrario protege a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, lo que ha constituido la “socialización del amparo”.

En México, se pueden distinguir dos etapas para la comprensión de su diseño procesal: el origen, con su carácter de proceso constitucional específico de resguardo de los derechos sociales e individuales de grupos o entidades agrarias y de sus miembros competentes, y el de adaptación, al fenómeno contemporáneo de la Constitución convencionalizada.

El amparo agrario tuvo su origen en la reforma de 1962 al art. 107, frac. II, de la Constitución de 1917, que fue desarrollada por las modificaciones de 1963 a la Ley de Amparo, que estableció ventajas procesales en beneficio de los campesinos sujetos al régimen de reforma agraria (ejidatarios, comuneros y sus respectivas poblaciones), que permitieran equilibrar su situación en el proceso frente a los propietarios agrícolas y ganaderos y respecto de las autoridades administrativas federales encargadas del desarrollo de la propia reforma agraria, ya que se consideró que dichos campesinos, en su mayor parte, carecían de un adecuado asesoramiento jurídico para intervenir en las controversias agrarias.

Con estas reformas constitucionales y legales se configuró el quinto sector del amparo mexicano, el cual adquirió mayor trascendencia con motivo de la reforma de 1976 a la Ley de Amparo, la cual se dividió artificialmente en

dos libros, que antes no existían; el primero sobre el amparo en general, y el otro, de muy pocos artículos, respecto del amparo en materia agraria, pero sin abarcar todas las controversias sobre esta materia; es decir, únicamente en aquellas en que comparecieran como partes los campesinos sometidos al régimen de reforma agraria (arts. 107, frac. II, párrafos tercero y cuarto de la CPEUM, y 212 a 234 de la Ley de Amparo).

En 1992 se reformó el art. 27 constitucional, frac. XXIX, segundo párr., para la creación de los tribunales federales agrarios, conformados por un Tribunal Superior integrado por cinco magistrados y tribunales unitarios de carácter regional, que se encargan en la actualidad de conocer de los conflictos que con anterioridad competían a las autoridades administrativas agrarias, de acuerdo con la organización y procedimientos establecidos por las leyes Agraria y Orgánica de los Tribunales Agrarios, ambas publicadas el 26 de febrero de 1992.

Aun cuando la tendencia que se observa en el derecho de amparo mexicano, si bien todavía comprende de manera formal cinco procesos diversos, se pensó que en realidad se dirigía a conservar solo tres: i) hábeas corpus o amparo de la libertad e integridad personales; ii) amparo judicial o amparo casación, y iii) amparo contra leyes. En cambio, con las reformas del 6 de junio de 2011 en materia de amparo a la Constitución de 1917, y con la “nueva” Ley de Amparo de 2013, fisonomía que se integra además por: 1) el nuevo texto constitucional que se promulgó en la fecha indicada; 2) los cambios en materia de derechos humanos publicado el 10 de junio de 2011, y 3) lo resuelto por la Suprema Corte en el caso *Radilla vs. El Estado mexicano* (expediente varios 910/2010), en cumplimiento de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se confirma la existencia del amparo agrario y su adaptación a la máxima protección (principio *pro persona*) de los derechos humanos y los derechos nacionales de fuente internacional; en síntesis, la Constitución convencionalizada.

En esta segunda etapa, a nivel constitucional (art. 107, frac. II, párr. sexto) la estructura procesal del amparo agrario refiere que cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deben recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

Conforme a la “nueva” Ley de Amparo, en el amparo agrario son partes (art. 5o.): 1. El *quejoso*, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y quien aduce ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa con los actos o resoluciones provenientes de tribunales agrarios. 2. El *tercero interesado*, contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden agrario. El plazo para interponer la *demand*a de amparo es de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios (art. 17, frac.

III). La autoridad que lo conozca debe *suplir* la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en favor de los ejidatarios y comuneros, en particular cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios (art. 79). Se tiene por interpuesta la demanda, a pesar de no exhibir las copias correspondientes (art. 100). El amparo indirecto procede contra actos de tribunales agrarios realizados fuera de juicio o después de concluido (art. 107, frac. IV). La autoridad responsable, en su informe con justificación, además de los criterios generales, debe expresar el nombre y el domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual deben acompañar al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes (art. 117, párrafo quinto). La *suspensión* del acto reclamado procede de oficio y de plano (art. 126, párrafo tercero). Contra las sentencias de organismos jurisdiccionales especializados en esta materia procede el *amparo directo*, por lo que la materia agraria se ha incorporado al sector del amparo contra resoluciones judiciales o amparo casación (art. 170), tal y como acontecía con la ley abrogada.

Finalmente, el desarrollo que actualmente presenta no debe omitir el origen de su existencia, por lo que es conveniente destacar que después de la conquista, el *amparo novohispano o colonial* se erigió como interdicto de los derechos agrarios, o bien como un proceso constitucional de la libertad remoto en esta materia. Un ejemplo de aquél se originó con la demanda de amparo de los habitantes de Santiago Tlatelolco, quienes invocaban a la autoridad virreinal: "...suplicamos a Vuestra Magestad, pues somos leales Vasallos e Servidores mande sean restituydos e seamos amparados en nuestra posesión..."

Juan Riccio Hernández

## AMPARO CONTRA LEYES

El amparo contra leyes es un procedimiento jurisdiccional federal previsto en la Constitución, en el que se faculta al particular a instar a un órgano del Poder Judicial de la Federación para que instrumente un procedimiento en el que se analice una norma general en sentido material (leyes, reglamentos y tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano o cualquier decreto, acuerdo o resolución de observancia general) por estimar que se violan sus derechos humanos, y que por ello resulte contraria a la Constitución federal y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En esas condiciones, sus finalidades se centran en el respeto a la supremacía constitucional y el restablecimiento del orden constitucional que ha sido transgredido por el legislador.

Este procedimiento puede ser instrumentado tanto en la vía indirecta como en la directa, hipótesis que según Fix-Zamudio (2003: 960) permite

## CASO MIGUEL VEGA VS. JURISDICCIÓN LOCAL

El punto de inflexión del juicio de amparo en su dimensión contemporánea se ubica en el paradigmático caso *Miguel Vega vs. Jurisdicción local*, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos el 20 de julio de 1869, por la mayoría del tribunal pleno, y especialmente a través de la repercusión en la impartición de la justicia a nivel nacional, en específico en temas del control de legalidad, de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, del federalismo judicial y de la definición de dos sectores del propio proceso constitucional de la libertad: 1) el amparo contra leyes, y 2) el amparo contra sentencias o negocios judiciales. El contexto del caso Miguel Vega, juez de Culiacán, en el estado de Sinaloa, refiere a que promovió amparo en contra de la sentencia del Tribunal Superior de ese estado que lo condenó a la suspensión de un año en el ejercicio de su profesión de abogado.

Este asunto tuvo su origen en un proceso ordinario de naturaleza penal: un cargador, José Bañuelos, lesionó al jornalero Benito Pedro en la ciudad de Culiacán. El juez que conoció la causa fue Miguel Vega, quien determinó que el primero había actuado en legítima defensa en el contexto de una riña; en consecuencia, lo sancionó con dos meses y medio de prisión, y transcurrido este plazo tuvo por cumplida la pena.

La anterior decisión se recurrió en apelación, en la cual el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa consideró que por haber fallado en contra de ley expresa correspondiente a un Bando del 23 de diciembre de 1775, en la resolución que Miguel Vega emitió el 18 de diciembre de 1868, la sentencia del juez de letras de primera instancia debía estimarse ilegal, de manera que en el fallo del 18 de marzo de 1869, el tribunal de alzada revocó y sancionó al juez de acuerdo con las disposiciones legales que no eran de origen nacional sino español. Sin embargo, Miguel Vega interpuso amparo contra tal fallo, bajo el argumento de que el *ad-quem*, al suspenderlo en el ejercicio de su profesión, se había excedido en las facultades que le otorgaban los arts. 7o. y 8o. del Decreto de las Cortes de Cádiz de 1831, vigente en el estado de Sinaloa, México.

El juez de distrito al que le correspondió conocer del asunto desechó la demanda de amparo porque consideró que éste era improcedente debido a que se impugnaba una sentencia, ciertamente la resolución del tribunal de alzada, y que, por lo tanto, en el caso se actualizaba el supuesto del art. 8o. de la Ley de Amparo de 1869, que preveía: “Artículo 8o. No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales”, esto es, dicho precepto declaraba la improcedencia del “amparo directo” o “amparo casación”.

El desechamiento fue recurrido por el juez Vega ante la Corte Suprema de Justicia (actualmente, por disposición de la Constitución de 1917, Suprema Corte de Justicia de la Nación), la cual revocó la decisión del juez y ordenó que se abriese el juicio, y a pesar de la negativa del Tribunal Superior del Estado de Sinaloa para rendir el informe que le solicitó el juez de distrito, la referida Corte emitió los siguientes argumentos a fin de oponerse a la negativa de mérito: 1) que conforme al art. 9o. de la Ley del 20 de enero de ese año, en los juicios de amparo no era parte la autoridad cuya providencia había sido reclamada; 2) que el informe de que trataba el mismo artículo tenía el doble

objeto de esclarecer los hechos sobre que versara la queja, y abrir la puerta a la autoridad para que explicara y fundara la legalidad de sus procedimientos; 3) que la resistencia de dicha autoridad a rendir el informe debiese refluir en su propio perjuicio, pero no en el de los derechos del quejoso, ni mucho menos entorpecer la secuela del juicio, principalmente cuando por otros medios pudiese ser averiguada y conocida la verdad; 4) que en el caso esa verdad apareció, aun por los mismos conceptos del tribunal que se había negado a rendir el informe.

En seguida, la Corte Suprema, al analizar el conflicto constitucional materia del proceso, razonó: 1) que los tribunales de la Federación eran los únicos competentes para decretar si en tal caso debiese o no abrirse el juicio de amparo contra resoluciones judiciales; 2) que en el particular la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de sus facultades, había ordenado que se abriese el juicio, y 3) que decretada la apertura del juicio, oponerse a ello era tanto como resistir a la justicia, y discutirlo era tanto como disputar al Poder Judicial de la Federación el ejercicio de sus legítimas facultades, lo cual en ningún caso se debiese tolerar.

Finalmente, en la resolución del caso Miguel Vega, también conocido como el caso del Juez de Letras de Primera Instancia de Culiacán, se indicó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, al incumplir las prescripciones legales que tuvo que observar, había violado clara y terminantemente el art. 4o. de la Constitución Federal de 1857, según el cual a nadie se le podía impedir el ejercicio de su profesión sin ser juzgado y sentenciado en la forma regular, esto es, si hubiese afectado los derechos de terceros u ofendido o los de la sociedad. En consecuencia, resolvió: 1) revocar la sentencia del 17 de junio de 1968, pronunciada por el juez de distrito, que declaró la improcedencia del amparo que solicitó Miguel Vega, y 2) amparar y proteger al quejoso contra la providencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa que lo suspendió por un año en el ejercicio de su profesión de abogado.

Conforme a lo anterior es posible inferir que en los argumentos de la sentencia constitucional se efectuó, por el órgano vértice en la impartición de justicia, la interpretación a la Constitución de 1857. Dicha interpretación indicó que para efectos del juicio de amparo, en el ámbito de cualquier autoridad se incluirían los actos de las autoridades locales, en el particular la sentencia que suspendió a Miguel Vega en el ejercicio de su profesión. Para esto, se declaró implícitamente la inconstitucionalidad del art. 8o. de la Ley de Amparo de 1869. En tal virtud, se encaminó a que el control de legalidad se efectuase con el juicio de amparo, lo que maximizó el ámbito de protección de este proceso constitucional de la libertad y delineó el federalismo judicial mexicano, a pesar de menoscabar el vigor, a través de la práctica y de la jurisprudencia, del mencionado art. 8o.; la norma jurídica que cabe destacar era nada menos que la derogación del artículo 14 constitucional, sustento de la aplicación exacta y con puntualidad de las leyes civiles y penales en los procesos, y que debido a su implícita derogación fue como inició el debate, aún existente, sobre la procedencia del juicio de amparo en contra de las sentencias de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, y en general en contra de la

jurisdicción local o estatal y de la jurisdicción federal, por lo que existe la propuesta de la creación de un tribunal de casación, quien conocería y resolvería de la exacta aplicación de las normas por medio de un recurso de casación, proceso *ex profeso* de control de legalidad.

*Juan Rivera Hernández*

## CAUCIÓN

La caución proviene del derecho civil y puede consistir en depósito, prenda, hipoteca o fianza, lo cual implica una garantía real. Sin embargo, en materia penal el vocablo se combina con el de libertad, y entre ambos forman el concepto de libertad bajo caución, con lo cual se convierte en una medida cautelar de carácter real y personal a través de la cual la autoridad judicial puede dejar en libertad al probable responsable de la comisión de un delito que ha sido vinculado a proceso, siempre y cuando se cumplan las formalidades y requisitos previstos en la misma carta magna, la legislación procesal y otras normas aplicables, según el caso.

La libertad bajo caución llegó a ser contemplada como una garantía constitucional en los términos siguientes:

“Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculcado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

A. Del inculcado:

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculcado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley, o cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculcado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculcado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculcado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculcado.

La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional”.

Sin embargo, la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 modificó el texto para quedar en los términos siguientes:

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.



## CONSTITUCIÓN EN SENTIDO SUSTANCIAL

Se entiende por *Constituciones en sentido sustancial* todos los actos normativos a los que la doctrina de un ordenamiento reconoce relevancia constitucional, incluyendo, además de la Constitución formal (véase Constitución en sentido formal), también fuentes que no tienen dicho rango, pero que contribuyen a definir la “materia constitucional”, es decir, la estructura fundamental de una comunidad estatal (Spagna Musso). El concepto debe mantenerse separado tanto de aquel de Constitución material, entendida como un conjunto de decisiones políticas fundamentales que integran el texto constitucional (véase Constitución en sentido material), como del de “Constitución viviente”, que es la Constitución así interpretada y aplicada por los distintos actores políticos-instituciones (véase Constitución).

*Silvia Bagni*

*(traducción de Eduardo Ferrer Mac-Gregor)*

## CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1824

Precedida por el “Acta Constitutiva de la Federación”, del 1o. de abril al 3 de octubre de 1824 el Congreso discutió el proyecto de norma fundamental, que publicó el cuarto día del mismo mes, con la denominación de “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos”, que no fue simple copia de los patrones que le sirvieron de modelo, sino que en su articulado se percibe un esfuerzo por acoplar el funcionamiento de ciertas instituciones a la realidad de la época, de manera que se advierte una combinación de procesos y procedimientos para la tutela de las normas constitucionales que fueron adoptadas sin una clara comprensión de su alcance.

En este orden fundamental nace el precedente de la jurisdicción del amparo federal a través del art. 123. También esta Constitución crea el precedente de la jurisdicción del amparo local, por medio del art. 160. En conjunto, ambos preceptos instituyen una doble jurisdicción, sustento del federalismo judicial. Asimismo, ella instaaura el precedente del control de constitucionalidad y legalidad, de conformidad con el art. 137, frac. V, inciso 6. Además, contiene en los arts. 137, frac. I, y 38, un par de garantías constitucionales objeto de estudio del actual derecho procesal constitucional mexicano. Inclusive el nombre oficial de tal ley suprema verifica que el calificativo “federal” ha sido la estructura adoptada (con excepción del periodo de centralismo) por nuestra nación hasta la actualidad.

La tradición jurídica la ha considerado como la primera Constitución mexicana, la cual estuvo vigente hasta 1836, año en que se expidieron las “Siete Leyes Constitucionales” de corte centralista. En tal virtud, el Congreso Constituyente expresó en el preámbulo de ese documento fundacional que éste se expedía para fijar la independencia política, establecer y afirmar la libertad, y promover la prosperidad y la gloria de la nación mexicana; y en el singular marco histórico de un país recién emancipado que daba los primeros pasos en el camino de su organización jurídica, y con la esperanza de un pueblo que había derramado sangre, en once años de insurgencia El referido Congreso Constituyente dio término a sus labores el 4 de octubre, fecha

memorable en la que envió al Poder Ejecutivo, ya debidamente aprobada, la primera Constitución que tuvo vigencia.

En esta misma Constitución Federal, y debido a la influencia del orden jurídico norteamericano, se consagraron dos de los instrumentos que se desarrollaron con posterioridad para resolver los conflictos de carácter constitucional. En primer término las llamadas “controversias constitucionales”, inspiradas en el art. III, sección 2, de la ley fundamental norteamericana, ya que en el art. 137, frac. I, del orden fundamental de 1824, que se refiere a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, se dispuso, en su parte conducente: “Conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro estado de la Federación siempre que las reduzca a un juicio verdaderamente contencioso en que deba recaer formal sentencia y de las que se susciten entre un estado y uno o más vecinos de otro”.

También en dicha Constitución Federal se introdujo la garantía del “juicio político de los altos funcionarios de la Federación y de los estados”, con algunos matices, especialmente en cuanto al enjuiciamiento de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. En efecto, el art. 38 estableció las reglas del citado juicio político, que encomendó a cualquiera de las dos cámaras del Congreso General, en calidad de gran jurado. Aunque no existía una estricta separación entre la responsabilidad política y la imputación penal, pero se tomaba del modelo estadounidense la necesidad de seguir un procedimiento previo ante una de las cámaras del Congreso de la Unión, pero se apartaba del propio modelo en cuanto el proceso criminal no se seguía ante los tribunales ordinarios, sino ante la Suprema Corte de Justicia, con excepción del enjuiciamiento especial de los magistrados de la propia Corte, lo que influyó de cierta manera en el sistema del juicio político y penal de los funcionarios en la Constitución Federal de 1857.

A pesar de que no existe en la Constitución de 1824, a la cual está incorporada el Acta Constitutiva, precedente del juicio de amparo, esto es, no hay más que aquel artículo del Acta en el cual se dice que los derechos del hombre y del ciudadano serán protegidos por leyes sabias y justas; no obstante, dicha norma suprema sí previó una institución común a todas las ramas de enjuiciamiento del derecho procesal o una categoría procesal: la *jurisdicción*. Justamente en la última parte del inciso sexto de la frac. V del art. 137, que al mismo tiempo sobre el particular se inspiraba en la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787, se descubre una facultad con la que se invistió a la Suprema Corte de Justicia para “conocer de las infracciones de la Constitución y leyes generales, según se prevenga por la ley”, atribución que, podría suponerse, pudiera implicar un verdadero control de constitucionalidad y de legalidad, según el caso, ejercitado por dicho cuerpo jurisdiccional. Lo anterior constituye un precedente legislativo de la categoría procesal de la *jurisdicción* tanto para las controversias constitucionales como para el juicio de amparo, puesto que al encomendarse al más alto órgano jurisdiccional del país las violaciones constitucionales, se tutelaba la configuración del poder y se salvaguardaban los derechos fundamentales estatuidos por la propia Constitución; pero dicho precepto no llegó a reglamentarse y por lo mismo no tuvo aplicación, no obstante algún intento que se hizo para que la propia Corte co-

nociera de dichas cuestiones. Lo cierto es que predominó la influencia hispánica, ya que el Congreso de la Unión, con apoyo en la facultad exclusiva que le otorgó el art. 165 de la citada Constitución Federal para resolver las dudas sobre el alcance de los preceptos constitucionales, anuló varias leyes expedidas por los órganos legislativos de las entidades federativas, por considerarlas contrarias a la propia Constitución Federal.

Más aún, con base en el art. 137 de la Constitución Federal de 1824 se crea también el precedente de la *jurisdicción* del amparo local, ello debido a la existencia de instituciones duales en la impartición de la justicia. Precisamente, en México, la doble jurisdicción federal y local fue implantada desde los arts. 123 y 160. El primero dispuso: “El Poder Judicial de la Federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito, y en los juzgados de distrito”. El último previó: “El Poder Judicial de cada estado se ejercerá por los tribunales que establezca o designe la Constitución; todas las causas civiles o criminales que pertenezcan al conocimiento de estos tribunales serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia”. Estas normas supremas instituyeron el dogma del federalismo judicial, el que con motivo del reconocimiento contencioso que el Estado mexicano ha hecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amplía su horizonte de la adecuada relación entre los tribunales federales y locales a la adecuada relación entre éstos y la jurisdicción internacional.

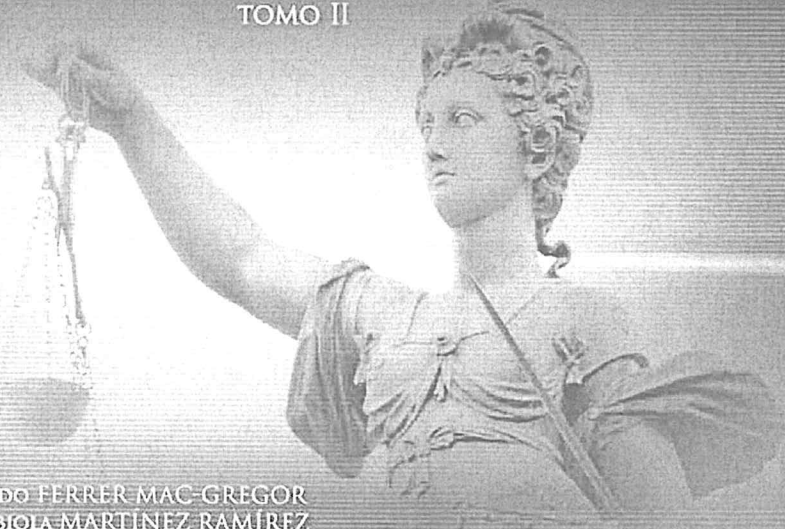
No es ocioso mencionar que la Constitución de 1824 adoptó la forma federal, y su evolución histórica puede describirse, en su etapa originaria, a partir de esta norma fundamental. Ciertamente, la referida evolución se circunscribe en las distinciones siguientes: 1) se establece un sistema federal basado en “estados” y “territorios” de la Federación; 2) no se instaura una fórmula de distribución de competencias específica; 3) se establece el bicameralismo, con una Cámara de Diputados y una de Senadores; 4) se define por el Congreso general, la residencia de los poderes federales, establecida en un distrito en el cual el propio Congreso ejercería las atribuciones del Poder Legislativo de un estado; 5) se previó un presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como titular del Poder Ejecutivo Federal; 6) se creó un Poder Judicial de la Federación, organizado en una Corte Suprema de Justicia, tribunales de circuito y juzgados de distrito, y 7) se instauró un Poder Judicial de cada estado, estructurado con los tribunales que establezca o designe la Constitución respectiva.

Conviene mencionar que el acceso a la justicia fue un derecho contenido en el art. 18 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824, que disponía: “Todo hombre que habite el territorio de la Federación tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia”. Sin embargo, a pesar de su estrecha relación con la norma fundamental de 1824, ésta lo omitió, y no fue sino hasta el art. 17 de la Constitución de 1857 cuando se estableció este derecho de carácter programático, que viene a constituir la categoría procesal de la *acción* de los procesos y procedimientos para la defensa de la Constitución.

*Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, tomo I, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 24 de abril de 2014 en Impresión Comunicación Gráfica S. A. de C. V., Manuel Ávila Camacho 689, col. Santa María Atzahuacán, delegación Iztapalapa, 09500 México, D. F. Se utilizó tipo *Baskerville* de 9, 10 y 11 puntos. En esta edición se empleó papel cultural 70 x 95 de 50 kilos para los interiores y pasta dura en heltex con tela y couché de 300 gramos para la camisa de los forros; consta de 2,500 ejemplares (impresión *offset*).

*Diccionario*  
*de*  
**DERECHO PROCESAL**  
**CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL**

TOMO II



EDUARDO FERRER MAC-GREGOR  
FABIOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ  
GIOVANNI A. FIGUEROA MEJÍA

*Coordinadores*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO • INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Ministro JUAN N. SILVA MEZA  
*Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
y del Consejo de la Judicatura Federal*

Consejero J. GUADALUPE TAFOYA HERNÁNDEZ  
Consejero DANIEL F. CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ  
Consejero MANUEL ERNESTO SALOMA VERA  
Consejero CÉSAR ESQUINCA MUÑOZ

Magistrado LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO  
*Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia*

Mtra. MARÍA JACQUELINE MARTÍNEZ URIARTE  
*Directora General de Derechos Humanos, Equidad de Género  
y Asuntos Internacionales*

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Dr. HÉCTOR FIN-FIERRO  
*Director*

Dra. MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ  
*Secretaria académica*

Dra. ELVIA LUCÍA FLORES ÁVALOS  
*Jefa del Departamento de Publicaciones*

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS  
Serie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 693

---

*Coordinadora editorial:* Elvia Lucía FLORES ÁVALOS  
*Asistente editorial:* José Antonio BAUTISTA SÁNCHEZ

*Cuidado de la edición:* Gilda BAUTISTA RAVELO, Leslie CUEVAS GARIBAY,  
Jaime GARCÍA DÍAZ, Rosa María GONZÁLEZ OLIVARES,  
Christopher Raúl MARTÍNEZ SANTANA, Ricardo HERNÁNDEZ MONTES DE OCA,  
Karla Beatriz TEMPLOS NUÑEZ

*Formación en computadora:* José Antonio BAUTISTA SÁNCHEZ

*Diseño de interiores y portada:* Edith AGUILAR GÁLVEZ

*Apoyo editorial:* Héctor Yeraldo ARIAS ALAMILLA, Mayra Elena DOMÍNGUEZ PÉREZ,  
Cora Guadalupe GRACIA ROSAS, Ajax GUTIÉRREZ VILLASCÁN

*Diccionario*  
*de*  
DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL

TOMO II



EDUARDO FERRER MAC-GREGOR  
FABIOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ  
GIOVANNI A. FIGUEROA MEJÍA  
*(Coordinadores)*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Primera edición: 24 de abril de 2014

DR © 2014. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Insurgentes Sur 2417, col. San Angel, Delegación Álvaro Obregón,  
01000 México, D. F.

DR © 2014. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n  
Ciudad de la Investigación en Humanidades  
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.

Impreso y hecho en México

ISBN 978-607-02-5293-8 (Obra completa)

ISBN 978-607-02-5295-2 (Tomo II)



ge la acción de hábeas data con la finalidad de proporcionar al ciudadano la facultad de conocer directamente sus datos personales y, en caso de ser necesario, rectificar la información almacenada en bases de datos.

La acción de hábeas data se define como “el derecho que asiste a toda persona —identificada o identificable— a solicitar judicialmente la exhibición de los registros —públicos o privados— en los cuales están incluidos sus datos personales o los de su grupo familiar, para tomar conocimiento de su exactitud; a requerir la rectificación, la supresión de datos inexactos u obsoletos o que impliquen discriminación... Esta herramienta tiende a proteger a la persona contra *calificaciones sospechosas* incluidas en registros (especialmente estatales, aunque también pueden serlo privados), que —sin darle derecho de contradecirlas— pueden llegar a perjudicarle de cualquier modo” (Ekmekdjian y Pizzolo, 1996). La particularidad de esta acción es que garantiza la defensa del derecho a la protección de datos personales ante una autoridad judicial, y no ante una autoridad administrativa, como sucede en el caso de los países europeos.

Actualmente, el concepto de hábeas data, surgido en Europa, es una forma de denominar el derecho de autodeterminación informativa o el derecho a la protección de datos personales, sin embargo, su naturaleza es diversa debido a la autoridad garante. El hábeas data implica el ejercicio del derecho frente a una autoridad judicial, a través del proceso respectivo; mientras que la autodeterminación informativa o protección de datos es frente a una autoridad que forma parte de la administración pública, cuyas resoluciones pueden ser recurridas judicialmente.

*Ángeles Guzmán*

### HOMINE LIBERO EXHIBENDO

El término *homine libero exhibendo* usualmente se refiere a un precedente de cualquier medio de preservación de los derechos de la persona frente al poder autoritario y, en particular, del juicio de amparo, aun cuando recientemente puede considerarse un referente de la doctrina alemana *Drittwirkung* de protección horizontal de los derechos fundamentales, esto porque su procedencia no fue para revisar actos de las autoridades romanas, sino para combatir la privación de la libertad efectuada con dolo por los particulares. Su connotación proviene de la antigua Roma y se le atribuye el carácter de interdicto exhibitorio, distinguiéndose de los interdictos prohibitorios y restitutorios. Como tal, fue establecido por el edicto del pretor a efecto de *proponitur tuenda libertatis causa: videlicet, ne homines liberi retineantur á quoquam*. Se encuentra en la Ley I, libro XLIII, título XXIX, del Digesto, dedicado al derecho y al proceso privado: “Ley I. Dice el pretor: Exhibe al hombre libre que detienes con dolo malo. 1. Este interdicto se propone por causa de defender la libertad: esto es, para que ninguno retenga los hombres libres”. Además de esta ley, las disposiciones sobre las que se sustentó fueron: “Ley II. No se diferencian mucho de los siervos aquellos a quienes no se les permite la libertad de ir por donde quieran. Ley III. A lo que también miro la Ley Favia: este interdicto no impidió la ejecución de la Ley Favia; porque también se podrá pedir por él, y esto no obstante, pro-

poner la acusación de la Ley Favia: al contrario, el que pide por la Ley Favia esto no obstante, podrá también usar de ese interdicto, y otro de la acción de la Ley Favia. Ley IV. Si alguno retuviese al hombre libre ignorando su estado, si lo retiene con dolo malo, se le precisará a que lo exhiba”.

Con base en el Digesto se deduce que el interdicto *homine libero exhibendo* consistió en un procedimiento para la defensa de las personas libres que eran detenidas con dolo, es decir, arbitrariamente por particulares, de tal manera que se les exhibía (*quem liberum dolo malo retines, exhibeas*) ante el pretor (*id est in publicum producere, et videndi tangendique hominis facultatem præbere*) a través de un procedimiento sumarísimo, el cual, bajo las condiciones y limitantes de la ley Favia, no se debía alargar ni aun con motivo del delito que importara este atentado, porque *neque hoc interdictum aufert legis Faviæ executionem*. Todo ofendido podía intentarlo (*nemo prohibendus est libertati favere*) sin que por esto el pretor dejara de tener facultad de elegir al que debía proseguirlo, cuando muchos lo intentaban. En otras palabras, cuando una persona era puesta en prisión, sin el debido fundamento, y más aún, de una manera arbitraria, en alguna de las cárceles particulares que tenían los grandes patricios, por sí o por intermedio de alguna otra persona, podía el afectado ocurrir ante el pretor para que éste expidiera un interdicto que obligaba a quien mantenía preso al solicitante a que le exhibiera el cuerpo del detenido, que quedaba bajo su jurisdicción, siendo el pretor quien resolvía sobre la justicia o injusticia del caso. El interdicto, en consecuencia, no se concedía en contra de las autoridades, sino en contra de los particulares. El procedimiento tenía tal eficacia que no se debía prolongar, ni aun con motivo de la averiguación del delito que importara ese atentado contra el hombre libre, porque desde el momento en que era protegida la libertad del solicitante del interdicto, la averiguación, respecto del procedimiento criminal que pudiera existir, se seguía por cuerda separada conforme a la antigua legislación romana.

Al constituirse los edictos de los pretores, en resoluciones que contenían las bases conforme a las cuales este funcionario dictaba sus decisiones en los casos concretos que se sometían a su conocimiento, y con esta facultad, suplían las lagunas u omisiones de la legislación; los edictos constituían una fuente sui generis del derecho, junto con la ley, la costumbre, etcétera, y además se debe destacar, que el edicto que estableció el interdicto *homine libero exhibendo* fue de carácter perpetuo (*hoc interdictum perpetuum est*) y adquirió fuerza de derecho consuetudinario debido a la presencia constante de determinados principios que se transmitían obligatoriamente de un edicto a los sucesivos.

En cuanto a los interdictos, que se constituyeron en una petición dirigida al pretor para que ordenara a la contraparte a observar determinada conducta o abstenerse de cierta actividad, cabe precisar que aquéllos no se instituían en sentencia, sino en órdenes condicionales y administrativas, dirigidas a un ciudadano a petición de otro ciudadano. Por tanto, en el contexto de su desenvolvimiento histórico, los interdictos demostraron su aproximación respecto a la protección de los derechos personales, entre ellos los de carácter fundamental. Sin embargo, cabe destacar que el interdicto *homine libero exhibendo* no era un procedimiento que tuviera como finalidad defender una organización,

un régimen constitucional, sino exclusivamente reparar prisiones arbitrarias decretadas por particulares.

El interdicto *homine libero exhibendo* puede tener un rasgo de semejanza con el hábeas corpus, dado que éste también procedía contra particulares; sin embargo, también puede considerarse que no guarde dicha relación debido a que la acción derivada de este interdicto pertenecía al derecho civil, por lo que su naturaleza jurídica fue diferente a la institución de derecho público que estableció el pueblo inglés. También puede constituir un precedente para el amparo mexicano, en lo que concierne al amparo libertad; no obstante, similares reflexiones que para el hábeas corpus negarían tal precedencia. Pero, desde una perspectiva contemporánea, de acuerdo con la teoría *Drittwirkung* y la protección procesal horizontal de los derechos fundamentales, puede indicarse que el interdicto *homine libero exhibendo*, como proceso constitucional de la libertad remoto, es precedente del amparo contra particulares.

*Juan Rivera Hernández*

### *HORROR VACUI*

El principio de conservación del derecho, contemplado desde un punto de vista teórico, coincide con una exigencia práctica: intentar, en la medida de lo “posible”, por vía interpretativa, huir del vacío que se provoca cuando una disposición legal es declarada inconstitucional.

Esta idea se eleva como particularmente útil, sobre todo si se tiene en cuenta que la eliminación definitiva de un texto normativo es un suceso bastante grave por las consecuencias que el vacío puede producir, especialmente si el legislador no se preocupa de colmarlo rápidamente con nuevas leyes a las que pueda atribuírseles un significado conforme con la Constitución (Monteleone, Girolamo, 1984), o, dicho de otra forma, cuando el legislador carece de la agilidad necesaria para cubrir de inmediato el hueco que deja la ley expulsada del ordenamiento jurídico, y esa laguna genera una gran confusión jurídica para los ciudadanos y para todos los poderes públicos (García de Enterría, Eduardo, 2006).

Con frecuencia, la anulación y la laguna que se crean pueden originar una situación de mayor inconstitucionalidad en la solución práctica de los problemas que la ley anulada regulaba. Ciertamente es que problemas de este tipo no se pueden resolver desde un plano meramente teórico, prescindiendo completamente de la experiencia y del conocimiento de datos realmente esenciales, como el tiempo necesario para que se agote el inter legislativo, o las consecuencias probables de una larga carencia de normas sobre una determinada materia. De ahí que la preocupación por evitar los “vacíos legislativos” o “lagunas” no sea meramente doctrinal, sino que ha estado presente, en mayor o menor grado, en la jurisprudencial de los tribunales o cortes constitucionales.

De hecho, también con la intención de evitar las consecuencias que acompañan a la declaración de inconstitucionalidad, y en cierto sentido como deducción ineludible del *horror vacui*, la práctica jurisprudencial de algunos sistemas de justicia constitucional, como el alemán, han implementado sentencias denominadas “exhortativas”, “apelatorias” o de “recomendación al legisla-

organizados), y finalmente también se ha llegado a abarcar de manera paulatina la tutela de los derechos humanos afectados por los llamados “poderes privados o sectores privados en situación de preeminencia”.

Héctor Fix-Zamudio

#### RECURSO “OBEDEZCASE PERO NO SE CUMPLA”

El recurso “obedézcase pero no se cumpla” tuvo lugar cuando dentro de los regímenes hispánico y novohispánico se violaba de un modo manifiesto el derecho natural, el cual debía prevalecer sobre las costumbres y las leyes, y si estas se oponían a aquel, no debían ser cumplidas ni ejecutadas, sino solamente obedecidas con actitud pasiva, efectuándose un “control de naturalidad” que se supone se realizó para examinar o revisar el ejercicio de autoridad del virrey, y, en última instancia, del rey en la época del Medievo.

La palabra “obedecer” proviene del latín *obedire*, cuya ortografía arcaica era *oboedire*, siendo el diptongo *oe* conmutativo con *u* o *au*; de donde el equivalente *abaudire*: el prefijo *ob* se hace descender del sánscrito *abhi*, que indica la posición de una persona o cosa o su actitud ante otra persona o cosa. Etimológicamente la voz “obedecer” expresa la actitud de una persona que escucha a otra, actitud de atención y respeto; pero nada más que una actitud. En tanto que la palabra “cumplir”, del latín *complere* significa acabar de, llenar, completar, perfeccionar; es decir, expresa una acción. Obedecer pero no cumplir, se le otorgó el significado de escuchar en actitud reverente, atender y juzgar con propio criterio, oyendo a la vez que la voz del que manda, la voz superior de la razón y de la ley natural que pide hacer el bien y evitar el mal: y, si hay un conflicto entre aquella y esta, no cumplir, sino representar respetuosamente al rey.

El recurso “obedézcase pero no se cumpla” era una especie de apelación al soberano español, y con la conquista de la Nueva España, al virrey, que suspendía la orden del rey en espera de su resolución ya mejor informado, porque los negocios del reino no estaban sujetos al libre arbitrio del aquel, ya que debían sujetarse a las normas de justicia o del derecho natural, porque de no ser así, el rey dejaba de serlo, siendo el principio básico que este no podía dictar leyes injustas, y si ordenaba algo que pudiera producir el mal, era por defecto de información: *obrepción*, si era inocente, bien porque al dictar sus órdenes desconocía que lo podía vulnerar, y *subrepción*, si era dolosa, esto es, si había sido engañado para obtener un beneficio a pesar de causar agravio al propio derecho natural.

El recurso no se consignó expresamente por alguna regulación sistemática de los estatutos que integraron el derecho español, sino que fue producto de la costumbre jurídica, traducida en prácticas inveteradas que comenzaron a observarse a través de los fueros en el Medievo, en tanto que estos fueron los documentos legislativos que contenían los privilegios de los habitantes de una ciudad, la organización política, en general, el derecho de la misma, en el que preponderaron las costumbres locales. De suerte que dicho recurso tomó carta de naturalización en la costumbre jurídica a principios del siglo XVI y constantemente se daban casos de su aplicación concreta. Se solicitaba amparo al rey, a quien se ilustraba sobre los hechos, contra el rey que había manda-

do algo por obrepción u subrepción. La finalidad del recurso era cuidar al rey del rey mismo, como indicó la Partida.

En el recurso, el parámetro de control era el derecho natural, que de conformidad con la ley 238 de estilo, el orden y prelación en la aplicación del derecho por los jueces españoles correspondía, en primer término, a los principios de tal derecho, cuyo contenido resultaba esencialmente de espíritu cristiano; luego se aplicaban las costumbres razonables, es decir, aquellas que no se confrontaran con el referido derecho natural; y por último, debía aplicarse el derecho positivo. En consecuencia, el derecho natural era supremo, y en estos términos fue previsto en las Siete Partidas del Rey Alfonso X, Partida tercera, título XVIII, ley XXXI: "Contra derecho natural no debe valer privilegio, ni carta de emperador, ni de rey, ni de otro señor. Y si la diere, no debe valer". También en las Siete Partidas (Partida segunda, título XIII, ley XXV) fue establecida la obligación de los gobernados de "guardar al rey de sí mismo, no dejándole hacer cosa alguna que redunde en daño de su cuerpo, o de su linaje, o de su reino, y esto se hace de dos modos: por consejo y por obra. Los que le dejan errar a sabiendas, merecían pena como traidores". Asimismo, en el Libro primero, título I, ley XXII, de la Recopilación de las Leyes de España, efectuadas en 1567, bajo el reinado de Felipe II, fue regulado sobre el particular: "Los ministros y jueces *obedezcan y no cumplan* nuestras cédulas y despachos, en que intervengan los vicios de subrepción y obrepción". Posteriormente, en la Novísima Recopilación de Leyes de España, promulgada en 1805 bajo el reinado de Carlos IV, tanto el derecho natural e implícitamente el recurso de mérito fue previsto en el Libro III, título IV, ley IV: "Se *obedezcan y no cumplan* las cartas contra derecho en perjuicio de partes, aunque contengan qualesquier cláusulas derogatorias. Muchas veces por importunidad de los que nos piden las cartas, mandamos dar algunas cartas contra derecho: y porque nuestra voluntad es, que la nuestra justicia florezca, y aquella no sea contrariada, establecemos que si en nuestras cartas mandáremos algunas cosas en perjuicio de partes, que sean contra ley ó fuero ó derecho, que tal cosa sea *obedecida y no cumplida*; no embargarte que tal carta se haga mención general ó especial de la ley ó fuero, ó ordenamiento contra quien se diere, ó contra las leyes y ordenanzas por Nos fechas en Córtes por los Procuradores de las ciudades y villas de nuestros Reinos".

Desde una perspectiva contemporánea, este recurso no puede considerarse, en sentido estricto, como un precedente del amparo, debido a que no existía un verdadero enjuiciamiento sobre la existencia de actos concretos de violación al derecho natural. En otras palabras no existía una jurisdicción encargada de la tutela de aquel derecho, y de ahí que se considera que carece de las características propias del juicio de amparo. No obstante, en sentido amplio, si bien podían tener acceso al recurso únicamente las autoridades de la época, por su medio pudo presentarse una rudimentaria observancia al derecho natural, el cual, tal como lo concibe la razón y lo explicaban filósofos y juristas, era la Constitución, y los actos del rey contrarios al mismo debían obedecerse, pero no cumplirse. De manera tal, las órdenes del rey contrarias a este derecho podían repararse por medio de este recurso, cuando las autoridades de la época le hacían notar el menoscabo que causaba al derecho natural

con sus dictados. Esto es así, debido a que se consideraba que el soberano español, como legislador, no podía querer el mal, ni ordenar cuestión alguna contraria a los principios de aquel, y si eso sucedía, era porque se encontraba mal informado o porque se le habían ocultado los hechos.

Debe advertirse por tanto que las órdenes del rey a través del recurso “obedézcase pero no se cumpla”, se encontraban sujetas a un “control de naturalidad”, siendo que quizá dicha forma de ejercer el control pudiera tener cierto nexo con los efectos prácticos de la “cuestión de inconstitucionalidad”, utilizada por los jueces contemporáneos para manifestar, ante la magistratura constitucional, sus dudas acerca de la posible inconstitucionalidad de una ley aplicable a determinada litis, y en virtud del resultado que de esta derive, obedecer la ley infractora pero no cumplirla para el caso concreto sujeto a su conocimiento y resolución.

Juan Ricera Hernández

## REDUCCIÓN AL ABSURDO

De modo general, el término argumento se refiere a la expresión de un razonamiento mediante el cual se intenta refutar o probar una tesis con el fin de convencer a alguien de la verdad o falsedad de la misma. En el discurso jurídico, la función del argumento es explicitar las razones de apoyo de una interpretación del derecho o de los hechos que se disputan.

El argumento de la reducción al absurdo, conocido por su formulación latina como *reductio ad absurdum*, también es denominado razonamiento “apagógico”, palabra de origen griego que significa “llevar algo fuera de un lugar”, y que Platón utilizaba en el sentido de desviación del razonamiento. Este argumento designa un tipo de razonamiento que consiste en probar una proposición,  $p$ , asumiendo la falsedad de  $p$ , y demostrando que la falsedad de  $p$  se deriva de una proposición contradictoria con  $p$ .

El argumento de reducción al absurdo o apagógico tiene por objeto demostrar la verdad de una tesis determinada de manera indirecta, probando que la contradictoria de la tesis es opuesta a otra tesis considerada como verdadera. Este argumento se sustenta en la existencia de una o varias tesis cuya verdad no ha sido refutada, a la que o a las que se opone otra tesis cuya falsedad se pretende afirmar. De manera que las consecuencias de esta segunda tesis se revelen contrarias a una tercera ya demostrada o tomada por verdadera, por lo que debe concluirse que la primera o las primeras tesis han de reputarse verdaderas y la segunda ha de ser rechazada.

Es un razonamiento lógico que se funda en el principio de no contradicción, que consiste en probar una tesis por la exclusión o refutación de todas las tesis alternativas. Esto se debe a que si una proposición implica su contraria entonces debe ser falsa, pues en un sistema lógico dos tesis contradictorias no pueden ser simultáneamente verdaderas. Es un método de demostración de la verdad de una proposición a partir de la afirmación de que es verdad, probando que si no lo fuera conduciría a una contradicción.

En el ámbito jurídico, el argumento apagógico se define como el argumento que permite rechazar una interpretación de un texto normativo de en-



## JURISFIRMA

El jurisfirma fue un proceso foral para preservar de infracción de fueros y evitar contrafueros, liberando de toda violencia al oprimido al moderar, conforme a derecho, los injustos arrebatos, lo mismo de los reyes y sus jueces, que de quienes habitaban el reino.

Por medio del proceso foral aragonés de jurisfirma, *firma juris*, firma de derecho, o proceso de firma de derecho, se mantenía a alguno en la posesión de los bienes o derechos que se suponían pertenecerle, y precisamente a través de él podía el justicia mayor avocarse al conocimiento de cualquiera causa incoada ante otro tribunal, garantizando de los efectos de la condena impuesta por este, los bienes de los que recurrían a su asistencia. En consecuencia, se decretaba por el justicia mayor, y después, cuando desapareció este juez del Medievo, lo decretaría la Audiencia de Aragón, la más absoluta prohibición a quien lo obtenía, de molestarlo en sus derechos, en su persona o en sus bienes, según fuese el objeto del pedimento. En tal sentido, por el carácter de juez supremo que se le otorgó al funcionario competente del proceso foral de jurisfirma, y los derechos que encaminaba a salvaguardar el mismo proceso, puede considerarse un precedente de los procesos constitucionales contemporáneos.

Con este procedimiento jurídico no solo se garantizaba a la persona en sí, sino también se garantizaba a la propiedad, en relación con la misma, no pudiendo aquella ser presa, ni tampoco despojada de sus bienes, sino hasta que se hubiese dictaminado la sentencia, en el juicio correspondiente, a cuyo fin el que pedía el amparo por medio de este proceso foral, daba fianza como garantía de su derecho, y a su vez confería firma el justicia mayor, de donde se originaron las llamas firmas —*ne pendiente apellatione*—. El firmar el derecho o apellidar (de estas formas se denominaba el acto por el cual se promovía el proceso) se realizaba no solo contra actos de jueces, constituyéndose en el control de legalidad de los actos de tribunales inferiores, sino también en contra de oficiales e incluso de particulares. Más aún, las firmas tuvieron un carácter revisorio, a manera de la casación, en donde el justicia mayor amparaba las libertades del reino, en contra de las arbitrariedades que hubiesen cometido o que pudieran cometer el monarca y las demás autoridades.

El jurisfirma fue estatuido en el Privilegio General, otorgado por Pedro III, en 1283, y elevado a la condición de fuero, por Pedro IV, en 1348, el cual ha sido comparado con la Carta Magna inglesa. Existían diversos tipos de firmas de derecho: *a)* las comunes o volanderas (denominadas así por la extensión y generalidad de su aplicación), que podían ser simples o motivadas; *b)* las causales, divididas en posesorias o titulares; *c)* las de agravios hechos y temidos; y *d)* las de apelación.

La decadencia y desuso de los procesos de firma se aprecia en el Reglamento de 26 de septiembre de 1835, sobre administración de justicia; y posteriormente en los Decretos de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, y especialmente por el decreto de 29 de julio de 1707, expedido por el primer rey borbónico, Felipe V.

*Juan Rivera Hernández*

toridades, electorales y no electorales, administrativas, legislativas o jurisdiccionales, siempre que su actuación, activa u omisiva, tenga efectos jurídicos en materia electoral.

En resumen, la frase “justicia electoral”, actualmente, tiene una connotación demasiado amplia, porque incluye al: 1) derecho procesal electoral, orgánico y dinámico, relativo a todos los juicios y recursos jurisdiccionales electorales; 2) derecho procedimental electoral, es decir, el que tiene por objeto a los recursos electorales de naturaleza administrativa, contra las autoridades y los partidos políticos; 3) derecho procesal constitucional, en cuanto a la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar leyes electorales, federales y locales, consideradas contrarias a la CPEUM; 4) derecho penal electoral, correspondiente a la tipificación de determinadas conductas como delitos electorales, federales y del fuero común; 5) derecho procesal penal electoral, que tiene por objeto al proceso, juicio o causa, con motivo de la comisión de delitos electorales; 6) derecho administrativo sancionador electoral, que tiene por objeto las conductas electorales ilícitas, tipificadas y sancionadas como infracciones administrativas electorales, así como las reglas jurídicas sobre la denuncia o queja y el procedimiento para tramitar y dictar resolución; finalmente, se puede incluir al 7) derecho procesal laboral electoral, que comprende los juicios y recursos, administrativos y jurisdiccionales, a favor de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y del TEPJF, para dirimir las diferencias y/o controversias que surgen con motivo de la correspondiente relación laboral.

Recientemente, en países como Chile, Ecuador, Perú y República Dominicana, donde se han instituido tribunales electorales similares al de México, se empieza a usar la voz derecho procesal electoral y, como sinónima, la dicción “justicia electoral”; sin embargo, es necesario hacer la correspondiente conceptualización, clasificación y sistematización, en beneficio de la ciencia jurídica y del Estado de derecho democrático.

*Flacio Calvén Rivera*

## JUSTICIA MAYOR

En la Edad Media existe un precedente del juez constitucional y del juez convencional: el justicia mayor, quien al conocer y resolver los procesos forales aragoneses (los de mayor arraigo eran de manifestación de personas, de inventario, de jurisfirma o firma de derecho, y de aprehensión), “amparaba” a las personas y a sus bienes en contra de los actos excesivos y arbitrarios de la autoridad real y eclesiástica, que constituían contrafuero (parangón de los actos inconstitucionales) en perjuicio de los mismos, asegurándose este funcionario del cumplimiento de los privilegios de los habitantes de la ciudad, la organización política, y, en general, el derecho de la misma (en el que preponderaron las costumbres locales), todo ello estatuido, por ejemplo, en un alto ordenamiento, como lo fue el Privilegio General, otorgado por Pedro III, en 1283, y elevado a la condición de fuero por Pedro IV, en 1348, el cual ha sido comparado con la Carta Magna inglesa.



En el Reino de Aragón el justicia mayor era juez supremo. Ejercía elevadísimas funciones, era el último intérprete de las leyes, conocía de las causas del rey, era considerado como un baluarte contra la opresión, pues él, en caso de duda, decidía si eran conformes a las leyes los decretos u órdenes reales, y si debían en consecuencia ejecutar o no; él amparaba a los particulares cuando contra ellos o sus bienes se cometía algún atentado o se temía que se cometiese por las autoridades; y contra sus fallos, que debían obedecerse en todo el reino, no prevalecían ni las órdenes del soberano. Así habían llegado los aragoneses a asegurar sus derechos naturales.

La finalidad funcional del justicia mayor de Aragón (juez que también existió en el Reino de Castilla), que implicó al mismo tiempo la causa de su creación, se precisó en el *Pacto de Sobrarbe*, en cuyo punto V se disponía: “Para que nuestras libertades no padezcan detrimento ni daño, habrá: juez medio sobre el Rey y sus súbditos, a quien sea lícito apelar el que recibiere agravio, o de los que recibiese la República o sus leyes, para su remedio”.

El justicia mayor de Aragón tuvo dos tipos de facultades: unas de índole político y otras de naturaleza estrictamente jurisdiccional. En relación con estas últimas, realizaba funciones de juez medio entre el rey y sus vasallos, como se estableció en el Fuero de Sobrarbe, y se encargaba de resolver los procesos forales aragoneses, precedentes de los procesos constitucionales.

Debido a la abundante demanda de sus funciones, se le autorizó en 1348 para que nombrase un lugarteniente, quien le auxilió en sus labores, autorización que se extendió posteriormente a dos en 1352, los cuales desde 1461 fueron designados por insaculación de la bolsa formada con este objeto por los diputados del reino. En 1592, las Cortes de Zaragoza aumentaron a cinco el número de lugartenientes. La agrupación de estos funcionarios se denominó *justiciazgo*.

Si bien la figura del justicia mayor nació a finales del siglo XII e inicios del XIII, es decir, a mitad de la Edad Media, su esfera tutelar de mayor desarrollo fue en los siglos XIV a XVI (1436 a 1520), especialmente al sustanciar el proceso foral de manifestación de personas. Desde esta perspectiva, el justicia mayor tenía como función más importante y prestigiosa el recordar a quienes gobernaban que las leyes las debían de cumplir todos, empezando por el que las promulgaba. Así, ya en el juramento de los reyes de Aragón decía: “Te hacemos Rey si cumples nuestros Fueros y los haces cumplir, si no, no”. Se infiere que el justicia mayor constituye un precedente del amparo, en cuanto a la categoría procesal de la *jurisdicción*, así como un antecedente de los jueces constitucionales y convencionales contemporáneos, por ser el guardián e intérprete del sistema jurídico español de la Edad Media.

La aparición de la inamovilidad de este juez supremo (garantía de la independencia judicial entonces y ahora, objeto de estudio del derecho constitucional procesal), y en consecuencia de la irrenunciabilidad del cargo, causó su fortaleza pero también trastornos. Mas la inamovilidad requirió a su vez de otra garantía: la de la inviolabilidad de la persona. Problema conexo con el de responsabilidad del justicia y sus lugartenientes, que fue abordado en el fuero de 1436, esto es, el *justiciazgo* se robusteció al establecerse que solo el conjunto de las Cortes y el rey podía hacerlo responsable.

Cabe destacar que el justicia mayor sufrió diversos avatares por defender las leyes y soportó represalias transcendentales en diversos momentos de la historia, y en específico cuando en las Cortes de Tarazona, de 1592, se establece que el cargo de justicia dejaba de ser inamovible y podía ser proveído el cargo por el rey. De suerte que, el justiciazgo quedó mermado y a merced del soberano español, acontecer que se ejemplificó con la orden de ejecución del último verdadero justicia, don Juan de Lanuza. La desaparición del justiciago se confirma con la expedición de los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, en 1707.

*Juan Ríosca Hernández*

### JUSTICIA TRADICIONAL INDÍGENA (USOS Y COSTUMBRES)

La locución “justicia tradicional indígena” es de nuevo cuño en la doctrina jurídica contemporánea. En efecto, la teoría jurídica de la última parte del siglo XX ha delineado las características de la justicia indígena y su relación con otras ciencias sociales. Se advierte que la contribución científica de diversas ciencias sociales (como la antropología, la etnología, la sociología, entre otras) ha sido determinante y ha permitido contar con un cuerpo doctrinario que ha posibilitado la articulación de una auténtica perspectiva sobre los derechos de los pueblos indígenas. Dicho en otras palabras, la doctrina jurídica ha delimitado diversos ejes de reflexión, a partir de los planteamientos de otras disciplinas sociales para establecer una teoría jurídica de los usos y costumbres indígenas. Esto, sobre todo porque los usos y costumbres indígenas como núcleo del sistema jurídico indígena establecieron desafíos a los clásicos principios de la modernidad jurídica: derechos colectivos frente a derechos individuales; culturalización de los derechos humanos; emancipación social frente a la regulación estatal, entre otras cuestiones. Dichas temáticas nacieron con un componente de marginalidad en el discurso jurídico y por ello su obligado desarrollo en otras disciplinas. Un ejemplo claro de lo anterior es la creación de la teoría del derecho de las minorías indígenas, cuya articulación fue realizada sobre los planteamientos realizados por la filosofía política anglosajona. Sin embargo, es dable apuntar que las diversas teorías de los derechos fundamentales y el reconocimiento constitucional de la justicia indígena han contribuido al debate nacional y su relación con la exuberante doctrina y principios jurídicos del derecho comparado en materia de pueblos indígenas.

El nacimiento de los derechos indígenas, como reclamos institucionales, ha estado marcado por la paradoja. En América Latina, algunos países tienen una población indígena significativa y solo hasta tiempos recientes, el sistema jurídico ha regulado los derechos de dichas poblaciones. Justamente, la falta de regulación jurídica de los pueblos indígenas en el espectro constitucional provocó que la realidad indígena fuera objeto de un olvido institucional. De hecho, la relación entre las políticas públicas y los pueblos indígenas se encuentra todavía en gestación en un buen número de países latinoamericanos. Sin embargo, las razones de omitir la mención de los pueblos indígenas en los ordenamientos jurídicos no son gratuitas; al contrario, respondió al paradigma jurídico planteado por la modernidad y dominado

ción ha sido la defensa de su independencia, esto ha encontrado un refrendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, en su interpretación de los alcances de la garantía de independencia judicial estadual, ha establecido grandes criterios, de los que se pueden destacar el establecimiento de requisitos mínimos que las Constituciones locales deben contemplar —*cfr.* Collí Ek, Víctor, “La doctrina constitucional sobre la independencia judicial estatal en México. Voz de la Suprema Corte”, *Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia*, 20, 2012—.

Estos requisitos implican la previsión de: *a)* número de magistrados determinado del órgano cúspide del Poder Judicial de los estados; *b)* los jueces de primera instancia; *c)* cualquier órgano en el que se deposite el ejercicio del Poder Judicial del estado; *d)* órgano del Poder Judicial del estado que se encargue de la administración, vigilancia y disciplina de los servidores del Poder Judicial del estado, así como el garantizar las condiciones de su ingreso, formación y permanencia, donde entran a la escena los consejos de la judicatura local; *e)* las atribuciones esenciales del órgano cúspide; *f)* el o los órganos que participan en el procedimiento y el mismo procedimiento para nombrar magistrados; *g)* los requisitos mínimos para ser nombrado juez; *h)* las bases generales que acotan las causas de remoción de los magistrados; *i)* el órgano u órganos competentes —colegiados— para conocer y resolver el procedimiento para remover magistrados; *j)* las bases generales que acotan las causas de remoción de los jueces; *k)* el órgano competente —colegiado— para resolver sobre la remoción de los jueces; *l)* el procedimiento de remoción de los jueces, *m)* un sistema que garantice la permanencia de los magistrados.

*Víctor Manuel Collí Ek*

### MAGNA CARTA LIBERTATUM

La *Magna Carta Libertatum* es la Gran Carta de las libertades que el Rey Juan Plantagenet (mejor conocido como Juan Sin Tierra) fue obligado por sus barones a conceder y firmar cerca de Runnymede, el 15 de junio de 1215. Representó el primer documento fundamental para la concesión de los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, prohibió al soberano establecer nuevos impuestos sin el previo consentimiento del Parlamento, y garantizó a todos los hombres que no pudieran ser encarcelados sin antes haber tenido un juicio regular (*habeas corpus*), reduciendo así el poder arbitrario del rey en términos de arresto preventivo y detención. En el transcurso de los siglos, la *Magna Carta* ha sido varias veces modificada, pero sigue siendo hasta la fecha una de las fuentes escritas de la Constitución no codificada del Reino Unido.

*Justin O. Piosim*  
*Traducción R. Tolentino*

### MANIFESTACIÓN DE PERSONAS

El proceso foral aragonés de *manifestación de personas* era un medio de defensa *ex profeso* de salvaguardia y custodia de la libertad personal que estatúa el *privilegio general*. Su función teleológica es comparada con el interdicto *homine*

*libero exhibendo* y con el *habeas corpus*, precedentes español, romano e inglés, de los procesos constitucionales de la libertad contemporáneos.

La *manifestación de personas* se define como la facultad del justicia mayor o de sus lugartenientes de emitir una orden de mandato a cualquier juez u otra persona que tuviera ante sí a un preso, pendiente o no de causa, para que se lo entregasen, a fin de que no se hiciese violencia alguna contra él antes de que se dictase sentencia; después de lo cual, si la sentencia no estaba viciada, el justicia ordenaba la entrega del preso a la autoridad que sobre él había sentenciado, a fin de que dicha sentencia se cumpliera del modo ordinario.

A través del proceso de *manifestación de las personas* se apartaba a la autoridad de su acción contra la persona previniendo toda arbitrariedad o tiranía en favor de los aragoneses y de quienes habitasen Aragón, aunque no fuesen naturales del reino. Se demandaba por quien, preso o detenido sin proceso o por juez incompetente, recurría al justicia contra la fuerza de que era víctima y, en su virtud, en ciertos casos quedaba libre un día, aunque en lugar seguro y si examinado el proceso debía seguirse, el presunto reo era custodiado en la cárcel de los manifestados, donde, al amparo del *justicia mayor*, esperaba, sin sufrir violencias, el fallo que recayera. Ese procedimiento garantizaba a las personas en su integridad y en su libertad.

La *manifestación de personas* tuvo su época de máximo prestigio durante el periodo foral, ya que fue solo hasta entonces cuando esa clase de procesos se dieron en todas sus categorías y en todos sus tipos en la fase *post foral*, esa clase de procesos comenzó a disminuir notoriamente, tanto en sus antiguos prestigios y eficacia, supuesto que fue abolida la manifestación de las personas, quedando ésta en manos de los jueces reales, con lo que, naturalmente, se perdió uno de los privilegios que más cualificaban a las llamadas “libertades aragonesas”. El verdadero origen, así como la auténtica significación de la *manifestación de personas*, fue el siguiente: el de librarlas de la opresión que padecieron, ya fuese por torturas, o bien, de alguna prisión inmoderada, que hubiese sido decretada por los jueces reales.

Al igual que el *jurisfirma*, el proceso foral aragonés de *manifestación de personas* desaparece mediante los decretos de Nueva Planta del 29 de junio de 1707, y especialmente por el decreto del 29 de julio de 1707, expedido por Felipe V, primer rey borbónico.

Finalmente, debe advertirse que la *manifestación de personas* es un precedente del amparo porque tiene análoga estructura procesal y similares efectos a éste, en específico, dentro de su sector conocido por la doctrina como *amparo libertad* o *hábeas corpus*.

Juan Rivera Hernández

## MARBURY VS. MADISON

Si las revoluciones francesa y americana, con sus grandes declaraciones de derechos, pueden considerarse como el hito histórico a partir del cual se inicia el largo periplo del derecho constitucional en la afirmación de la dignidad humana y los valores de libertad e igualdad, la sentencia dictada el 24 de febrero de 1803 por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso

ría existir. En efecto, un órgano jurisdiccional interpreta las normas de referencia (en nuestro caso la constitución) al hilo de los procesos que sustancia, pero no debe tener como objeto de una de sus atribuciones competenciales la interpretación misma. Tampoco es procedente la citada atribución referida a la reforma constitucional. La apertura del mecanismo de reforma constitucional activa el poder constituyente constituido, que permanece latente desde la aprobación de la carta magna. Ello es una manifestación de soberanía, trasunto de la que se produjo en el período constituyente y que ha objetivado la propia norma básica. Así las cosas, la jurisdicción constitucional no debe entrar en tal proceso de reforma.

Ante esos excesos entendemos que lo procedente es efectuar una reforma normativa que elimine tales competencias no adecuadas, aunque si esto no se efectúa siempre será útil la prudencia y el rigor del magistrado constitucional. Para ello su sólida formación es requisito imprescindible.

*José Julio Fernández Rodríguez*

## PROCESOS CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD

La expresión “procesos constitucionales de la libertad” tiene dos significaciones. Por una parte se utiliza para identificar el conjunto normativo diferenciado del ordenamiento jurídico que prevé garantías constitucionales de salvaguardia y custodia de los derechos fundamentales. Una segunda connotación refiere a su carácter científico, es decir, al sector de la disciplina del derecho procesal constitucional que estudia de manera sistemática a aquellas garantías consagradas en el orden fundamental para tutelar los derechos humanos establecidos en la propia normativa constitucional o en los tratados internacionales sobre la materia, y en los países con una estructura federal, a las garantías constitucionales que se encaminan a proteger los derechos fundamentales de los ordenamientos, constituciones o estatutos de los Estados, provincias o comunidades autónomas, y en el marco de las competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, los reconocidos en las Constituciones nacionales y en el derecho internacional de los derechos humanos.

Esta denominación se inspira en uno de los primeros estudios del procesalista italiano Mauro Cappelletti, publicado en el año de 1955, bajo el título: *La giurisdizione costituzionale delle libertà: primo studio sul ricorso costituzionale (con particolare riguardo agli ordinamenti tedesco, svizzero e austriaco)*, con el que puso de manifiesto la tendencia contemporánea de introducir mecanismos específicos de protección a los derechos y libertades fundamentales, como una propuesta para su incorporación en su natal Italia. El propio profesor Florentino años más tarde se refería a una dimensión supranacional de la jurisdicción constitucional.

En consecuencia, la expresión “jurisdicción constitucional de la libertad”, acuñada por don Mauro Cappelletti, ha sido acogida desde hace tiempo por un sector importante de la doctrina, la cual se ha utilizado para nombrar al contenido o sector de la novel disciplina procesal, aún cuando enseguida dicho sector se renombró “Derecho procesal constitucional de la libertad”, y recientemente, en otra concertación doctrinal, posiblemente ins-

pirada en la clásica división de las constituciones contemporáneas, pero que no olvida la perspectiva originaria, la doctrina ha nombrado al contenido de la materia “procesos constitucionales de la libertad”, nombre que sirvió para identificar algunos trabajos presentados en el *V Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional*.

Juan Rivera Hernández

## PROCESOS CONSTITUCIONALES TÍPICOS

Ya afirmamos en la voz referida a procesos constitucionales atípicos que un proceso constitucional, en general, es aquel proceso que afecta a una cuestión básica del poder público, que, por ello, se encuentra tratada en la Constitución. Un concepto material de Constitución reclama la existencia de una serie de temas que deben recogerse necesariamente en la misma. De ahí que los procesos que aluden a esos elementos básicos de la carta magna los denominamos procesos constitucionales, que servirán para garantizar la supremacía constitucional y/o los derechos constitucionales. De los valores a los que responde el orden jurídico fundamental de la carta magna derivan esos contenidos materiales de lo constitucional.

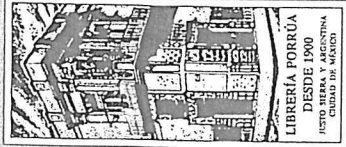
La “tipicidad” de los procesos que comentamos ahora viene dada por su conexión con la naturaleza de la jurisdicción constitucional. Serán, por lo tanto, los contenciosos característicos de esta institución y que configuran la dimensión material del concepto de la misma. Los procesos constitucionales típicos se han ido perfilando históricamente con la evolución de la jurisdicción constitucional hasta que a día de hoy se puede sostener que integran el elemento material de su definición. De esta forma, entendemos que son tres: el control de constitucionalidad de la ley, la defensa extraordinaria de los derechos fundamentales y la garantía de la distribución del poder.

Un concepto válido de jurisdicción constitucional exige la concurrencia de dos elementos, uno material y otro formal. El elemento formal está integrado por una serie de notas propias de la jurisdicción (actuación independiente y por lo general rogada, sometida a derecho, basada en razonamientos jurídicos y en el principio de contradicción) y por una serie de rasgos de índole constitucional que le otorgan al órgano respectivo una posición de autonomía estatutaria, administrativa y financiera. El elemento material, a su vez, se conecta con el ejercicio por parte del órgano que ejerce jurisdicción constitucional de una serie de competencias relativas a ciertos procesos que, de esta forma, caracterizan a la institución. Estas acciones procesales características son los tres procesos constitucionales típicos señalados. De este modo, estamos ante los típicos procesos constitucionales que estudia el derecho procesal constitucional y que conforman su núcleo básico, dando lugar a unas competencias especializadas de la jurisdicción constitucional. Así las cosas, y desde esta construcción teórica, las competencias típicas de la jurisdicción constitucional ocupan un lugar clave en la naturaleza y configuración del órgano, y no un mero papel complementario.

El control de constitucionalidad de la ley es, sin duda, el proceso más representativo del derecho procesal constitucional y el que evidencia con ma-

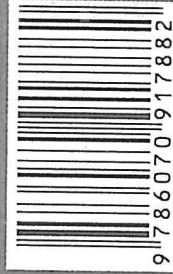
*Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional*, tomo II, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 24 de abril de 2014 en Impresión Comunicación Gráfica S. A. de C. V., Manuel Ávila Camacho 689, col. Santa María Atzahuacán, delegación Iztapalapa, 09500 México, D. F. Se utilizó tipo *Baskerville* de 9, 10 y 11 puntos. En esta edición se empleó papel cultural 70 x 95 de 50 kilos para los interiores y pasta dura en heltex con tela y couché de 300 gramos para la camisa de los forros; consta de 2,500 ejemplares (impresión *offset*).





**DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL LOCAL**  
NUEVAS EXPRESIONES A LA LUZ DEL PARADIGMA  
DE LOS DERECHOS HUMANOS  
UNA GUÍA PRÁCTICA  
EDUARDO FERRER MAC-GREGOR  
ENRIQUE URIBE ARZATE  
COORDINADORES

*El derecho procesal constitucional local* se ha reconfigurado a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Hoy todos los jueces de nuestro país son jueces de constitucionalidad y convencionalidad, lo que implica una nueva visión del quehacer judicial, de las fuentes del derecho y de la debida articulación entre las jurisdicciones estatales, federal e interamericana, guiados por el principio *pro persona*. Este libro analiza una variedad de temas a la luz de las nuevas expresiones del paradigma de los derechos humanos para comprender el nuevo rol del juez local.



BP  
DPC

103

**DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL LOCAL**

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR • ENRIQUE URIBE ARZATE



**BIBLIOTECA PORRÚA  
DE  
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL**

# DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL LOCAL

NUEVAS EXPRESIONES A LA LUZ DEL PARADIGMA  
DE LOS DERECHOS HUMANOS  
UNA GUÍA PRÁCTICA

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR  
ENRIQUE URIBE ARZATE  
COORDINADORES



**EDITORIAL PORRÚA  
MÉXICO**



Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional

10



EDUARDO FERRER MAC-GREGOR  
MÉXICO

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Investigador Nacional del SNI, nivel III. Director de la *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*. Sus libros más recientes son *El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma constitucional y la nueva ley de amparo* (con Rubén Sánchez, 7a. ed., Porrúa-UNAM, 2014), *Los derechos sociales y su justicia-bilidad directa* (con Miguel Carbonell, UNAM-Flores Editores, 2014), *Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional* (II tomos, coord. con Fabiola Martínez y Giovanni A. Figueroa, 2a. ed., UNAM, 2014), y *Panorámica del derecho procesal constitucional y convencional* (UNAM-Marcial Pons, 2013).

ENRIQUE URIBE ARZATE  
MÉXICO

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de justicia constitucional y derechos humanos. Profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Autor de libros y artículos especializados en los temas propios de su línea de investigación. Líder del Cuerpo Académico de Estudios constitucionales y de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Director fundador de la revista *Prospectiva jurídica*. Miembro del SNI nivel II.

DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL LOCAL

NUEVAS EXPRESIONES A LA LUZ  
DEL PARADIGMA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Una guía práctica

# DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL LOCAL

NUEVAS EXPRESIONES A LA LUZ  
DEL PARADIGMA DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

Una guía práctica

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR  
ENRIQUE URIBE ARZATE  
(*Coordinadores*)



EDITORIAL  
P O R R U Á  
AV. REPÚBLICA  
ARGENTINA, 15



MÉXICO, 2014

Derechos reservados © 2014, por  
Eduardo FERRER MAC-GREGOR  
Enrique URIBE ARZATE  
Dirección

Las características de esta edición son propiedad de  
EDITORIAL PORRÚA, S.A. de C.V. — 08  
Av. República Argentina, 15, 06020 México, D.F.

Queda hecho el depósito que marca la ley

ISBN 978-607-09-1788-2

IMPRESO EN MÉXICO  
PRINTED IN MEXICO

## CONTENIDO

PRESENTACIÓN .....	XI
PRÓLOGO .....	XIII
FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL LOCAL <i>Alfredo Gómez Vásquez</i> .....	I
EL CONTROL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA EN LAS LEGISLACIONES PROCESAL-CONSTITUCIONALES LOCALES <i>Laura Rangel Hernández</i> .....	13
EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y “CONVENCIONALIDAD” POR LOS JUECES LOCALES EN MÉXICO <i>Júlpiter Quiñones Domínguez</i> .....	49
CONFERENCIA MAGISTRAL QUINTO CONGRESO MEXICANO SOBRE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL <i>Jorge Mario Pardo Rebolledo</i> .....	75
RETOS DE LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL LOCAL EN MÉXICO <i>Miguel Ángel Rodríguez Vázquez</i> .....	89

EFICACIA DE LA SENTENCIA INTERAMERICANA Y LA COSA JUZGADA INTERNACIONAL: VINCULACIÓN DIRECTA HACIA LAS PARTES (*RES JUDICATA*) E INDIRECTA HACIA LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION AMERICANA (*RES INTERPRETATA*) (SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CASO GELMAN VS. URUGUAY)  
*Eduardo Ferrer Mac-Gregor*.....

111

EL AMPARO LOCAL EN MÉXICO: ANÁLISIS PROCESAL CONSTITUCIONAL  
*Juan Rivera Hernández*.....

177

EL DERECHO A LA LIBERTAD FRENTE A LOS MECANISMOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL  
*María Guadalupe Sánchez Trujillo*.....

211

EL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL DE LA SUPREMA CORTE MEXICANA CON EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TRAS LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DEL 2011  
*Alfonso Herrera García*.....

243

ARTICULACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO Y LOS JUICIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
*Ernesto Martínez Andreu*.....

277

DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL ESTATAL  
*Reynaldo Robles Martínez*.....

287

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL LOCAL: NUEVAS EXPRESIONES A LA LUZ DEL PARADIGMA DE LOS DERECHOS HUMANOS  
*Manuel González Oropeza*.....

309

EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES FEDERADAS. RELACIONES CON EL ORDEN NACIONAL Y EL INTERNACIONAL  
*Néstor Pedro Sagüés*.....

329

FEDERALISMO JUDICIAL EN MÉXICO

*Juan Manuel Acuña Roldán*.....

341

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN NO JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. RETOS Y PERSPECTIVAS DE LOS ORGANISMOS O COMISIONES LOCALES DE DERECHOS HUMANOS  
*Cuauhtémoc de Dienheim Barriguela*.....

361

LA ÉTICA DEL JUEZ ELECTORAL EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA  
*Valeriano Pérez Maldonado*.....

379

## PRESENTACIÓN

La expansión que ha experimentado el Derecho Procesal Constitucional en los últimos años resulta innegable. En la hora presente los estudios especializados sobre la materia se incrementan en cantidad y calidad, especialmente en la comunidad latinoamericana.

Esta evolución que se vislumbra con vigor en los países de nuestra región, se debe, por una parte, a la proliferación de reformas legales de los distintos instrumentos procesales que otorgan efectividad a la normativa constitucional y a la dimensión que están alcanzando los diversos tipos de magistratura constitucional, sean como tribunales constitucionales autónomos, salas constitucionales o a través de las nuevas atribuciones conferidas a las cortes supremas, motivando una interpretación dinámica de las cartas fundamentales; y por otra, a la dedicación y esfuerzo realizado por procesalistas y constitucionalistas en establecer los criterios científicos de la disciplina para su consolidación como reciente parcela del saber jurídico.

Muestra de lo anterior es la creación desde la década de los ochenta del siglo pasado, del *Centro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional* en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Rosario, Argentina, refundado en agosto de 2003 en el *Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional*. Este Instituto ha celebrado hasta la fecha VIII Encuentros: *I Encuentro* (Rosario, Argentina, 2003); *II Encuentro* (San José, Costa Rica, 2004); *III Encuentro* (La Antigua, Guatemala, 2005); *IV Encuentro* (Santiago de Chile, 2006); *V Encuentro* (Cancún, México, 2008); *VI Encuentro* (San Juan, Argentina, 2009); *VII Encuentro* (Santo Domingo, República Dominicana, 2011) y *VIII Encuentro* (Cádiz, España, 2012).

Nuestro país no podía mantenerse al margen de este movimiento. A más de tres lustros de la reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994, que creara un sistema integral de mecanismos de defensa de la normativa suprema; y en la actualidad con el inicio de la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación*, producto de las trascendentes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo de junio de 2011, se advierte la preocupación y necesidad de seguir profundizando en el estudio sistemático de las garantías constitucionales (a nivel local, federal e internacional), que iniciara Héctor Fix-Zamudio hace más de cincuenta años.

En este contexto, la *Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional* pretende introducir a la comunidad jurídica mexicana de la mejor doctrina sobre la materia, ahora que de manera progresiva la disciplina adquiere carta de naturalización en los programas de las principales facultades, escuelas y departamentos de derecho a nivel de licenciatura y posgrado.

Eduardo FERRER MAC-GREGOR  
*Director de la Biblioteca Porrúa  
 de Derecho Procesal Constitucional*

## PRÓLOGO

Esta memoria que hoy nos permitimos presentar, deriva de los trabajos presentados por destacados especialistas, en el V Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, denominado Derecho Procesal Constitucional Local. Nuevas Expresiones a la luz del Paradigma de los Derechos Humanos.

Dicho evento académico de talla internacional tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, del 6 al 8 de mayo de 2013.

Con la participación del Poder Judicial del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos de la misma entidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, la finalidad de este evento académico se cumplió, al reunir a expertos en los temas relacionados con los derechos humanos y el aspecto procesal de su respeto y garantía.

Vale destacar la presencia de los Conferencistas Magistrales en dicho evento, tales como el Dr. Diego García-Saayán, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Dr. Héctor Fix-Zamudio, Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como el Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Dr. Manuel González Oropeza, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del destacado constitucionalista Dr. Néstor Pedro Sagüés, Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.

## EL AMPARO LOCAL EN MÉXICO: ANÁLISIS PROCESAL CONSTITUCIONAL\*

JUAN RIVERA HERNÁNDEZ  
Integrante del Instituto Mexicano  
de Derecho Procesal Constitucional

En el proceso constitucional de la libertad... sólo hay (necesariamente) un recurrente, y eventualmente uno o más "terceros" ("interesados" o "no interesados" en el proceso)... auxiliares voluntarios del juez constitucional, tanto en la búsqueda oficial de la verdad, como en el examen sobre la efectividad de la pretendida infracción constitucional... interesados en contradecir las instancias del recurrente.\*\*

Mauro CAPPELLETTI

### I

En los estudios jurídicos un tema de interés es la protección de los derechos que reciben el calificativo de hu-

\* El documento contiene la "Introducción. Razón del estudio" de la Tesis de Maestría, que se defenderá para la obtención del Grado de Maestro en Derecho, en la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La primera versión se presentó como ponencia en la "Mesa temática 4: Procesos constitucionales de la libertad", del V Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Derecho procesal constitucional local. Nuevas expresiones a la luz del paradigma de los derechos humanos, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, del 6 al 8 de mayo de 2013.

\*\* CAPPELLETTI, Mauro, La jurisdicción constitucional de la libertad. Con referencia a los ordenamientos Alemán, Suizo y Austriaco, trad. Héctor Fix-Zamudio, México, UNAM, Instituto de Derecho Comparado, Imprenta Universitaria, 1961, p. 103, 77-79. Obra original, *La giurisdizione costituzionale delle libertà: primo studio sul ricorso costituzionale (con particolare riguardo agli ordinamenti tedesco, svizzero e austriaco)*, Milán, Dott. A. Giuffrè, 1955 (Quaderni dell'associazione fra gli studiosi del processo civile, VII).



manos o fundamentales. Los tratadistas orientan sus obras con base en la materia que a su parecer otorga una mejor explicación sobre la cuestión de mérito. Ello crea diferentes aproximaciones teóricas porque el objeto de estudio se interrelaciona con el derecho constitucional, la ciencia política, la filosofía del derecho, el derecho internacional, entre otras disciplinas, y además, también se presenta esta relación, con las materias que tienen la labor de explicar el fenómeno de la defensa de la Constitución, el que si bien, es un tema de la doctrina, en el ámbito de su aplicación práctica, propicia creaciones legislativas y debates jurisprudenciales.

Este abundante análisis no deja de ser indiscutible, no obstante son válidos si se dirigen como vertientes para obtener la efectividad de las disposiciones que reconocen o prevén aquellos derechos. Precisamente, el Derecho procesal constitucional es una de estas vertientes,<sup>1</sup> el cual se vincula con el procesalismo científico, que creó la teoría general del proceso, y que es definida por el maestro Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, como la exposición de los: "principios, conceptos e instituciones comunes a todas las ramas de enjuiciamiento del derecho procesal."<sup>2</sup> Postulado que determinó, de acuerdo con el jurista Héctor Fix-Zamudio, la independencia de los estudios procesales, hasta entonces subordinados a la materia sustantiva.<sup>3</sup>

El Derecho procesal constitucional tiene periodos en su conformación, a la luz de las aportaciones de Hans Kelsen; Niceto Alcalá-Zamora y Castillo; Eduardo J. Couture; Piero Calamandrei; Mauro Cappelletti; Héctor Fix-Zamudio,

<sup>1</sup> Cfr. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, "Aportaciones de Héctor Fix-Zamudio al derecho procesal constitucional", Domingo García Belaunde (pról.), Ferrer Mac-Gregor; Eduardo, *Ensayos sobre derecho procesal constitucional*, México, Porrúa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2004, p. 8.

<sup>2</sup> ALCALÁ-ZAMORA y Castillo, Niceto, "La teoría general del proceso y la enseñanza del derecho procesal", *Revista Iberoamericana de derecho procesal* Madrid, España, 1968, p. 5.

<sup>3</sup> Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Prólogo", en Ferrer Mac-Gregor; Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, 5a. ed., México, Porrúa, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación A.C., 2006, t. I, p. XLI.

quien es considerado su fundador conceptual y sistemático;<sup>4</sup> Domingo García Belaunde;<sup>5</sup> Néstor Pedro Sagüés;<sup>6</sup> y, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.<sup>7</sup> A partir de esa conformación científica es posible examinar la protección de los derechos fundamentales. Evidentemente el análisis es desde el enfoque del derecho procesal.

En este sentido, Héctor Fix-Zamudio desarrolló un concepto de defensa de la Constitución que representa, según Diego Valadés, "un aporte original a la teoría de la Constitución y que es un criterio que supera la tradicional perspectiva de la conservación del orden estatuido, para atribuir al cambio constitucional un papel relevante en la preservación del orden constitucional mismo."<sup>8</sup> Igualmente, el jurista mexicano explicó el referido objeto de estudio dentro del análisis del amparo. Así, nace una obra sobre la protección procesal de los derechos fundamentales, esto es, por medio de su tesis de licenciatura: "La garantía jurisdiccional de la constitución mexicana (Ensayo de una es-

<sup>4</sup> Cfr. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen Científico* (1928-1956), Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 65-138.

<sup>5</sup> Cfr. GARCÍA BELAUNDE, Domingo, "Sobre la jurisdicción constitucional", en Quiroga León, Aníbal (comp.), *Sobre la jurisdicción constitucional*, Lima, Pontificia Universidad Católica de Perú, Fondo Ed., 1990, pp. 33-37.

<sup>6</sup> Cfr. Sagüés, Néstor Pedro, *Derecho procesal constitucional de la provincia de Santa Fe*, Argentina, Rubinzal-Culzoni, 1994, p. 11.

<sup>7</sup> Cfr. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, "La nueva sala constitucional en el estado de Veracruz", en Ferrer Mac-Gregor; Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, 3a. ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2002, t. III, pp. 3075-3087. Ferrer Mac-Gregor; Eduardo, "Hacia un derecho procesal constitucional local en México", *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, 9a. ed., Uruguay, Konrad-Adenauer-Stiftung A. C., 2003, pp. 229 y 245. Además, el procesalista mexicano "...ha impulsado doctrinariamente esta disciplina, tanto por la elaboración, coordinación o compilación, de diversas obras relacionadas con la misma, tal es el caso de la más reciente en conmemoración de quien es fundador del derecho procesal constitucional y que se intitula "La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho", cuya obra consta de doce tomos, bajo el sello editorial de la UNAM-IIJ, publicada en coordinación con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en 2008." Rivera Hernández, Juan, "Derecho procesal constitucional del Estado de México", *Revista El Jurista, Barra de Abogados del Estado de México*, Primera Época, enero-junio 2009, núm. 2, p. 176.

<sup>8</sup> VALADÉS, Diego, "Prefacio", en Fix-Zamudio, Héctor; *Estudio de la defensa de la constitución en el ordenamiento mexicano*, 2a. ed., México, Porrúa, UNAM, 2005, pp. XXVII y XXVIII.

tructuración procesal del amparo)", México, UNAM, Facultad de Derecho, 1955.<sup>9</sup>

A pesar de constituir un preámbulo para esa época, fue carente el desarrollo dogmático procesal constitucional.<sup>10</sup> No obstante, a partir de la última etapa de conformación científica de la vertiente referida,<sup>11</sup> al amparo es posible concebirlo como la garantía constitucional<sup>12</sup> que comprende la acción, la jurisdicción y el proceso, y que encauza hacia la efectividad de los derechos fundamentales.

De la misma manera, el contenido de la disciplina, si bien con algunas modalidades, aquellas categorías procesales, considera el Maestro Héctor Fix-Zamudio, tienen aspectos peculiares en el derecho procesal constitucional, por lo que con base en el pensamiento del procesalista italiano Mauro Cappelletti, es posible señalar que su contenido a la luz de la acción, la jurisdicción y el proceso, comprendería tres aspectos, que sólo pueden separarse para efectos de estudio, pero que en la práctica están estrechamente interrelacionados.<sup>13</sup> Desde esta perspectiva, el desatacado jurista mexicano nombró al contenido o

<sup>9</sup> Cfr. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen...* *op. cit.*, pp. 120-138. Rivera Hernández, Juan, "Derecho procesal constitucional del Estado..." *op. cit.*, pp. 174 y 175.

<sup>10</sup> Véase Conclusión Séptima. Rivera Hernández, Juan, "Hacia nuevas competencias de la Sala Constitucional del Estado de México," Tesis de licenciatura, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 10. de julio de 2009, p. 167.

<sup>11</sup> Esto es, de la "...definición conceptual y sistemática (1955-1956), bajo el pensamiento de Fix-Zamudio al encuadrar el fenómeno en la dogmática procesal y otorgarle sistematización científica," Gonzáles Pérez, Jesús, "Prólogo", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Derecho procesal constitucional. Origen...* *op. cit.*, p. 13.

<sup>12</sup> Sobre las "garantías constitucionales", segundo categoría fundamental del concepto "defensa de la Constitución" (la primera se nombra "protección de la constitución"; véase, Fix-Zamudio, Héctor, "Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal...* *op. cit.*, 2006, t. I, p. 273; Fix-Zamudio, Héctor, *Introducción al Derecho Procesal Constitucional*, México, FUNDAR, 2002, p. 72; y, del mismo autor, Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional (1940-1965), México, UNAM, 1968, pp. 17 y 18. Asimismo véase Rodríguez Domínguez, Elvito A., "Derecho procesal constitucional. Precisiones conceptuales", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal...* *op. cit.*, 2006, t. I, pp. 489 y 490.

<sup>13</sup> Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, *Introducción al derecho...* *op. cit.*, pp. 89 y 90.

dimensiones de tal disciplina: jurisdicción constitucional de la libertad, jurisdicción constitucional orgánica y jurisdicción constitucional transnacional.<sup>14</sup> Enseguida, Eduardo Ferrer Mac-Gregor lo renombró: derecho procesal constitucional de las libertades, derecho procesal constitucional orgánico y derecho procesal constitucional transnacional;<sup>15</sup> además, descubrió, bautizó y delimitó científicamente a una nueva dimensión que nombró: derecho procesal constitucional local.<sup>16</sup>

Recientemente existe otra concertación doctrinal, posiblemente inspirada en la clásica división de las constituciones contemporáneas, pero que no olvida la perspectiva originaria, de manera que el contenido de la materia se nombra: procesos constitucionales de la libertad, procesos constitucionales orgánicos,<sup>17</sup> y, probablemente, procesos constitucionales supranacionales,<sup>18</sup> aunque éstos bien pueden ser parte de otra disciplina, esto es, del Derecho procesal in-

<sup>14</sup> FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido..." *op. cit.*, pp. 285-298.

<sup>15</sup> Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "La nueva sala constitucional en el estado de Veracruz..." *op. cit.* Mismo autor; "Hacia un derecho..." *op. cit.*, pp. 231 y 234.

<sup>16</sup> Cfr. Corzo, Edgar y Vega Gómez, Juan, "Relatorias. Mesa 4. Instrumentos de justicia constitucional", en Márquez Romero, Raúl (coord.), *Conclusiones y relatorias del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2002, p. 78. La versión ampliada y revisada de esta ponencia, aparece en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Aportaciones de Héctor Fix-Zamudio al derecho procesal constitucional", en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, 5a. ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2006, t. I, pp. 219-221. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Aportaciones de Héctor Fix-Zamudio..." *op. cit.*, pp. 16-18. Asimismo, Cfr. Rivera Hernández, Juan, "Derecho procesal constitucional del Estado..." *op. cit.*, p. 176. Rivera Hernández, Juan, "Hacia nuevas competencias..." *op. cit.*, pp. 92 y 93.

<sup>17</sup> Cfr. "Mesas temáticas 4 y 5, del V Congreso Mexicano de Derecho Pro-

cesal Constitucional. "Derecho procesal constitucional local. Nuevas expresiones a la luz del paradigma de los derechos humanos", 6 al 8 de mayo de 2013, sede Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

<sup>18</sup> El nombre otorgado a estos procesos se inspira en el subtema "Amparo Internacional", de Fix-Zamudio, Héctor, y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, *Derecho de amparo*, México, Porrúa, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, pp. 267-286. Los autores inician la delineación de los procesos constitucionales supranacionales y mencionan con relación a la jurisdicción que: "...los tribunales supranacionales pueden dividirse en tribunales internacionales, y tribunales transnacionales, cuya diferencia resulta fundamental." *Ibidem*, p. 255.

ternacional.<sup>19</sup> Y quizá es conveniente subdividir al primer y segundo contenido, respectivamente, en: procesos constitucionales de la libertad federales y procesos constitucionales de la libertad locales; y, procesos constitucionales orgánicos federales y procesos constitucionales orgánicos locales. Ello con base en la forma del gobierno de las naciones.

Justamente, de acuerdo al constante cambio de los ordenamientos constitucionales y la importancia conferida a los derechos humanos en los órdenes jurídicos internacionales, se observa que su protección procesal no sólo es competencia de las jurisdicciones nacionales, sino también de las jurisdicciones supranacionales. Al respecto, el maestro Mauro Cappelletti indicó: "La repercusión tan amplia que asume actualmente la infracción de los derechos fundamentales del individuo, tiene su origen en que casi siempre tutelan intereses que trascienden a los mismos pueblos y a los ordenamientos nacionales (además de los particulares), y por ello son fácilmente comprensibles los esfuerzos para establecer en el plano internacional, una protección jurisdiccional de tales derechos."<sup>20</sup>

Más aún, algunas naciones se constituyen con una estructura federal,<sup>21</sup> en donde la referida protección puede

<sup>19</sup> Los procesos constitucionales supranacionales serían también un sector del Derecho procesal constitucional, pero esos mismos procesos serían, como se mencionó, el contenido del Derecho procesal internacional. A manera de aproximación sobre esta materia suponemos que se integraría por dos dimensiones. La primera serían los procesos internacionales universales del sistema universal de protección de los derechos humanos. La segunda se constituiría por los procesos internacionales regionales, subsectores Europeo, Interamericano y Africano. Ello con base en los sistemas regionales de protección de derechos humanos.

Por consecuencia, desde el Derecho procesal constitucional, los procesos constitucionales supranacionales, tienen la función de encaminar a la protección, además de ciertas cuestiones "orgánicas", de los derechos de "libertad" que indicaba el destacado procesalista Mauro Cappelletti. Y para efectos de estudio, en el Derecho procesal internacional, a dichos procesos se les atribuiría el calificativo de "internacionales", los cuales estarían encaminados a la salvaguarda del derecho internacional de los derechos humanos.

<sup>20</sup> CAPPELLETTI, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad...* op. cit., p. 2. Se debe destacar que al interpretar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un tribunal internacional resolvió que las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, deben ser respetadas por los Estados, independientemente de su estructura federal o unitaria. Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Opinión Consultiva OC-16/99", El derecho a la información sobre la Asistencia consular en el marco de las

estar a cargo de dos jurisdicciones "autóctonas", es decir, de la jurisdicción federal y de la jurisdicción local, y es probable que coexistan, por ejemplo, un amparo federal y un amparo local, así como un amparo supranacional, los cuales conformarían, a nuestro parecer, el ideal sobre una eficaz "jurisdicción constitucional de la libertad".<sup>22</sup> Alemania, desde mediados del siglo XX, y México, con sus diferencias respectivas,<sup>23</sup> serían ejemplo de ello.

Garantías del debido proceso legal, Opinión solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, serie A, núm. 16, de 10 de octubre de 1999, párrafo 140: "Asimismo, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, [un] tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo". La Corte ha constatado que no se desprende la intención de establecer una excepción a lo anteriormente señalado. Por lo tanto, la Corte concluye que las disposiciones internacionales que conciernen a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, inclusive la consagrada en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, deben ser respetadas por los Estados americanos Partes en las respectivas convenciones, independientemente de su estructura federal o unitaria."

<sup>22</sup> Cfr. CAPPELLETTI, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad...*, op. cit., p. 7.

<sup>23</sup> En Alemania a través del artículo 90, inciso 3, de la Ley del Federal sobre el Tribunal Constitucional, existiría una institución "análoga" al amparo local. Esta supuesta se justificaría en el contexto de los estudios de derecho comparado que efectuó Cappelletti. Él mencionó: "la Ley (ordinaria) de la República Federal Alemana, de 12 de marzo de 1951, que entró en vigor el 17 de abril del mismo año, y reformada el 21 de julio de 1956, que contiene las disposiciones 'sobre el Tribunal Constitucional Federal [Bundesverfassungsbeschwerde]', y con la que se introdujo en Alemania una importantísima figura jurídica, o sea, la llamada Verfassungsbeschwerde (recurso constitucional), con lo que me ha parecido que se ha dado un paso verdaderamente importante para... la efectividad de los derechos del hombre..."

El "recurso constitucional" consiste en un medio de reclamación jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional Federal... y que debe ejercitarse por los ciudadanos particulares para la tutela de sus "derechos fundamentales" y de algunas otras situaciones subjetivas lesionadas por un acto de cualquiera autoridad pública.

En cuanto a la analogías con el amparo mexicano -institución tanto más interesante, cuanto que surgió en la primera mitad del siglo XIX y ha constituido una de las mayores y más duraderas victorias de la lucha por la libertad y la independencia mexicanas- son absolutamente ignoradas por los estudiosos del otro lado de los Alpes, en tanto que la Verfassungsbeschwerde es a su vez, igualmente ignorada por lo mexicanos...

El amparo mexicano y la Verfassungsbeschwerde son, por el contrario, relacionados por Biscaretti Di Ruffia, *Diritto costituzionale...* (3, Nápoles, 1954)...



Consignientemente, el amparo puede ser estudiado, además de las materias sustantivas, por el Derecho procesal constitucional. Consecuentemente, de conformidad con esta disciplina, el amparo federal y el amparo local, serían objeto de estudio de los procesos constitucionales de la libertad, porque este contenido examinaría a "...los instrumentos consagrados a nivel constitucional para tutelar los derechos humanos establecidos en la propia normativa constitucional o en los tratados internacionales sobre la materia."<sup>24</sup> Además, el amparo local sería también objeto de análisis de los procesos constitucionales de la libertad locales, porque esta subdivisión estudiaría a los distintos instrumentos encaminados a proteger los derechos fundamentales de los estados, provincias o comunidades autónomas,<sup>25</sup> y en el marco de las competencias y de las regulaciones procesales correspondientes,<sup>26</sup> los derechos reconocidos en las constituciones nacionales y en el derecho internacional de los derechos humanos.

p. 437." Cfr. CAPPELLETTI, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad...*, op. cit., p. 15.

De esta manera, el recurso constitucional "local" análogo al amparo local se instituye en el inciso 3o. del artículo o parágrafo 90, de la ley sobre el Tribunal Constitucional Federal (última reforma publicada en el Boletín Oficial Federal, de 12 de julio de 2012), que prevé: "Das Recht, eine Verfassungsbeschwerde an das Landesverfassungsgericht nach dem Recht der Landesverfassung zu erheben, bleibt unberührt." Disponible en: <http://goo.gl/sNjz8>, consultado el 2o. de mayo de 2013. La traducción al español es la siguiente: Permanece inalterado el derecho a promover una reclamación [recurso] constitucional ante el Tribunal Constitucional del Land, conforme al derecho de la Constitución del mismo. Cfr. Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad...* op. cit., p. 79.

<sup>24</sup> FERRER, MAC-GREGOR, Eduardo, *Aportaciones de Héctor Fix-Zamudio...* op. cit., p. 14.

<sup>25</sup> Cfr. *Ibidem*. Al respecto, también señala: "Si bien en ciertos países como Argentina y Alemania ha tenido un desarrollo considerable, recientemente también en España, mediante la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, se ha introducido una nueva competencia al Tribunal Constitucional para conocer de los conflictos en defensa de la autonomía local." (Énfasis original). *Idem*.

<sup>26</sup> Cfr. Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339. Disponible en: <http://goo.gl/qfE7O>, consultado el 10 de mayo de 2013.

## II

Al plantear lo anterior en el contexto del constitucionalismo mexicano, en consecuencia puede formularse la siguiente pregunta: Si el amparo federal<sup>27</sup> encauza a la salvaguarda y custodia, con excepción de los derechos político-electorales,<sup>28</sup> de los "derechos humanos"<sup>29</sup> ¿Debería existir el amparo local? La posible respuesta se sustenta en la descripción histórica de éste.

En México, la doble jurisdicción federal y local fue instituida desde los artículos 123 y 160 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. El último prevé: "El poder judicial de cada Estado se ejercerá por los tribunales que establezca o designe la constitución; todas las causas civiles o criminales que pertenezcan al conocimiento de estos tribunales serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia."<sup>30</sup> Dicho mandato constituyó el dogma del federalismo judicial, el que "... con motivo del reconocimiento contencioso que el Estado Mexicano ha hecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el federalismo judicial mexicano amplía su horizonte de la adecuada relación entre los tribunales federales y locales... a la adecuada relación de éstos y los órganos jurisdiccionales internacionales."<sup>31</sup> Sin embargo, este dogma ha carecido de aplicación práctica.

<sup>27</sup> En la tradición jurídica al amparo federal se le nombra juicio de amparo, juicio de garantías, amparo directo e indirecto, entre otros.

<sup>28</sup> Estos derechos son tutelados por el juicio para la protección de los derechos político-electorales, según lo prevé el artículo constitucional 99 fracción V. Disponible en: <http://goo.gl/AKzd>, consultado el 26 de abril de 2013.

<sup>29</sup> En la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, con el nombre "derechos humanos" se sustituyó al catálogo de "garantías individuales" contenido en la Constitución mexicana original de 1917 (Cfr. Artículo 1o. Disponible en: <http://goo.gl/71lkj>, consultado el 26 de abril de 2013), pero en la tradición jurídica aquellos se denominan "derechos fundamentales", nombre que probablemente no genera confusiones epistemológicas entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo.

<sup>30</sup> Por su parte, el artículo 123 estableció: "El poder judicial de la federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito, y en los juzgados de distrito." Disponibles en: <http://goo.gl/LuwV9>, consultado el 2o. de mayo de 2013.

<sup>31</sup> Rivera Hernández, Juan, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa, núm. 16, julio-diciembre 2011, p. 240.

A pesar de lo anterior, la protección procesal de los derechos fundamentales surge como una competencia de la jurisdicción local. Precisamente, el amparo nace en el texto de la Constitución de Yucatán de 1841;<sup>32</sup> e inclusive existe un primer escrito de demanda de 7o. de julio de 1842, conocido como Caso o Amparo Valay,<sup>33</sup> con el que emerge una pretendida aplicación práctica de esta garantía constitucional.

De tal manera, el amparo local desde su surgimiento en el texto de la Constitución de Yucatán de 1841, quizá contó con una configuración que hubiese permitido la defensa de los derechos de los pobladores frente a la actividad irregular del Estado. Ello motivó la preocupación por la defensa jurisdiccional de los derechos establecidos en las entidades federativas de Tabasco en 1857, Campeche en 1861 e Hidalgo en 1870.<sup>34</sup>

Sin embargo, el amparo de Yucatán sirvió de inspiración para la implementación del amparo federal, por lo cual su decadencia jurídica quizá se debe a la resolución del caso “Miguel Vega”, y su falta de desarrollo tal vez es resultado de los efectos que ha tenido el amparo federal “directo”, en contra las resoluciones de la jurisdicción local. De ahí se infiere que el problema del objeto de investigación es desde su existencia histórica.

### III

Más aún, se debe destacar que la doctrina nombra amparo local “...a los instrumentos de protección de derechos fundamentales previstos en las Constituciones de las enti-

<sup>32</sup> Artículos 8o., 9o. y 62 apartado 1o. de la “Constitución Política de Yucatán de 1841”, en Suprema Corte de Justicia de la Nación, Homenaje a Manuel Crescencio Rejón, México, 1960, pp. 97-98 y 111-112. Disponible en: <http://goo.gl/56qHp>, consultado el 18 de abril de 2013.

<sup>33</sup> Cfr. NARVÁEZ H., José Ramón, Historia social de la defensa de los derechos en México. El origen del juicio de amparo en la península yucateca, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007, pp. 67-69.

<sup>34</sup> Cfr. GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, “El amparo en negocios judiciales. El caso de Miguel Vega”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, t. X-1998, p. 387. Disponible en: <http://goo.gl/JRZN5>, consultado el 18 de abril de 2013.

dades federativas”,<sup>35</sup> o simplemente a aquél “instrumento protector de los derechos fundamentales”,<sup>36</sup> o bien, al que es utilizado “para la protección de los derechos humanos previstos en las constituciones estatales”.<sup>37</sup> Con esto se supone que el amparo local es un medio de defensa ex profeso de salvaguarda y custodia de dichos derechos.

Además de los conceptos doctrinales, se observa una nueva conciencia constitucional<sup>38</sup> por la defensa de tales derechos. Así, ciertas entidades federativas lo han implantado para obtener la protección de los que han reservado en sus Constituciones locales o particulares.

### IV

Sin embargo, esa implantación ha creado una serie de debates sobre su viabilidad en el ámbito de la impartición de la justicia constitucional en México, lo cual puede problematizarse desde dos perspectivas: desde el ámbito de las entidades federativas y desde el ámbito de la federación.

En el ámbito de las entidades federativas se observan problemas de eficacia del amparo local en las etapas de su establecimiento y que pueden dividirse en antecedentes remotos (genealogía, que se integra por los precedentes o influencias, pre-origen y origen), en antecedentes mediatos (siglo XX en Chihuahua 1921 y 1994)<sup>39</sup> y en antecedentes inmediatos (configuración contemporánea desde el 2000 hasta su posible implementación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

<sup>35</sup> SERNA DE LA GARZA, José María, Impacto e implicaciones constitucionales de la globalización en el sistema jurídico mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, p. 275.

<sup>36</sup> BUSTILLOS, Julio, Federalismo judicial a través del amparo. Relación entre las jurisdicciones federal y locales a través del instrumento protector de los derechos fundamentales, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, p. 65.

<sup>37</sup> FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *Hacia un derecho procesal constitucional...* op. cit., p. 244.

<sup>38</sup> RIVERA HERNÁNDEZ, Juan, *Hacia nuevas competencias...* op. cit., pp. 1 y 2.

<sup>39</sup> La clasificación relativa a los antecedentes mediatos se inspira en el subtema “Amparo local”, de Fix-Zamudio, Héctor, y Ferrer Mac-Gregori, Eduardo, *Derecho de amparo...* op. cit., pp. 247-265, en específico p. 255.

En el ámbito de los antecedentes inmediatos pueden enlistarse las siguientes problemáticas:

Primera. En los estados de Chihuahua, Veracruz, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Coahuila de Zaragoza, que han implantado al amparo local, se observa un primer problema: el nominal. Dicha garantía constitucional en Chihuahua se nombra "queja",<sup>40</sup> en Veracruz se denomina "juicio de protección de derechos humanos",<sup>41</sup> en Tlaxcala se llama "juicio de protección constitucional",<sup>42</sup> en Querétaro se designa "juicio de protección de derechos fundamentales",<sup>43</sup> y "juicio de protección de derechos colectivos o difusos",<sup>44</sup> en Nayarit se nombra "juicio de protección de derechos fundamentales",<sup>45</sup> en Oaxaca se designa "juicio para la protección de los derechos humanos",<sup>46</sup> en Chiapas se nombra "medio de defensa efectivo",<sup>47</sup> en Coahuila de Zaragoza se denomina "acceso a la justicia".<sup>48</sup> Es decir, en el orden jurídico de estas entidades federativas no existe una garantía constitucional llamada "amparo local".

<sup>40</sup> Artículo 200 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Disponible en: <http://goo.gl/zxYQ2>, consultado el 26 de abril de 2013.

<sup>41</sup> Artículo 64 fracción I de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Disponible en: <http://goo.gl/CRJol>, consultado el 26 de abril de 2013.

<sup>42</sup> Artículo 81, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, Disponible en: <http://goo.gl/V7r9>, consultado el 20. de mayo de 2013. Y, artículos 10., fracción I, 65 a 72 de la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala. Disponible en: <http://goo.gl/e8okP>, consultado el 20. de mayo de 2013.

<sup>43</sup> Artículos 100 a 114 de la Ley de Justicia Constitucional de Querétaro, publicada en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga", el 27 de marzo de 2009. Disponible en: <http://goo.gl/O9GvX>, consultado el 18 de abril de 2013.

<sup>44</sup> Artículos 115 a 119 de la Ley de Justicia Constitucional de Querétaro, publicada en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga", el 27 de marzo de 2009. Disponible en: <http://goo.gl/O9GvX>, consultado el 18 de abril de 2013.

<sup>45</sup> Artículos 88 a 107 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit. Disponible en: <http://goo.gl/IzyiX>, consultado el 26 de abril de 2013.

<sup>46</sup> Artículos 106 apartado B fracción V, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Disponible en: <http://goo.gl/AcskB>, consultado el 26 de abril de 2013.

<sup>47</sup> Artículo 30., fracción VIII, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 13 de noviembre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/ORZH1>, consultado el 21 de mayo de 2013.

<sup>48</sup> Artículo 154 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 26 de noviembre de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/6depD>, consultado el 21 de mayo de 2013.

No obstante, siguiendo el esquema del procesalismo científico y tomando como referencia al estudio sobre el particular, el objeto de investigación debe ser nombrado simplemente "amparo local", sin atribuirle el calificativo de "recurso" o "juicio", porque se considera, de acuerdo con el maestro Héctor Fix-Zamudio, a "...dichos términos equivalentes, no obstante su diverso significado, ya que el recurso es un medio de impugnación y juicio es el equivalente tradicional hispánico de proceso, (aún cuando estrictamente 'juicio' signifique el razonamiento del juez en el fallo)."<sup>49</sup>

Segunda. En las entidades federativas que lo han implantado, se percibe un segundo problema. El relativo a las diversas magistraturas constitucionales locales y, en consecuencia, al estatuto del juez constitucional local. De manera que la competencia se otorga en Chihuahua al Supremo Tribunal de Justicia del Estado,<sup>50</sup> en Veracruz a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia,<sup>51</sup> en Tlaxcala al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control Constitucional del Estado,<sup>52</sup> en Querétaro a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado,<sup>53</sup> en Nayarit a la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado,<sup>54</sup> en Oaxaca a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia,<sup>55</sup> en Chiapas como

<sup>49</sup> Fix-Zamudio, Héctor, "La garantía jurisdiccional de la constitución mexicana... *op. cit.*", p. 108.

<sup>50</sup> Artículo 200 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Disponible en: <http://goo.gl/zxYQ2>, consultado el 2 de mayo de 2013.

<sup>51</sup> Artículo 64 fracción I de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Disponible en: <http://goo.gl/CRJol>, consultado el 26 de abril de 2013.

<sup>52</sup> Artículo 81, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, Disponible en: <http://goo.gl/V7r9>, consultado el 20. de mayo de 2013. Y, artículos 10., fracción I, 65 a 72 de la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala. Disponible en: <http://goo.gl/e8okP>, consultado el 20. de mayo de 2013.

<sup>53</sup> Artículo 2 de la Ley de Justicia Constitucional de Querétaro, publicada en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga", el 27 de marzo de 2009. Disponible en: <http://goo.gl/O9GvX>, consultado el 20. de abril de 2013.

<sup>54</sup> Artículos 88 a 107 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit. Disponible en: <http://goo.gl/IzyiX>, consultado el 20. de mayo de 2013.

<sup>55</sup> Artículos 106 apartado B fracción V, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Disponible en: <http://goo.gl/AcskB>, consultado el 20. de mayo de 2013.



una competencia implícita del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado,<sup>56</sup> y en Coahuila de Zaragoza como una competencia implícita del Tribunal Superior de Justicia del Estado.<sup>57</sup> Esta diversidad se amplía en materia de substanciación y resolución del proceso constitucional, como también, en los requisitos y métodos de elección de los jueces de amparo local.

Tercera. No se prevé en un Código de procesos constitucionales, sino que en estas entidades federativas aquél se instituye en diversas legislaciones procesales constitucionales. Así lo establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y la Ley del Control Constitucional de este Estado, la Ley de Justicia Constitucional de Querétaro, la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Constitución Política del Estado de Chiapas y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cuarta. La aplicación práctica del amparo local. En temas como a sí realmente es utilizado, al plazo en el que es substanciado, y al sentido y efecto de la resolución, máxime por la diversidad del nombre, de la magistratura constitucional competente y de la legislación procesal constitucional que lo prevé.

Quinta. El establecimiento implícito e innominado del amparo local en las entidades federativas restantes. Con ello se supone y destaca que todas las entidades federativas cuentan con el amparo local, dado que implícitamente en los textos de sus constituciones particulares, se reconoce la exigencia que tiene la jurisdicción local, para la protección de los derechos fundamentales, aún cuando éste carezca de desarrollo reglamentario, o establecimiento jurisprudencial, tal y como por ejemplo ocurre, con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

<sup>56</sup> Artículo 57, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 13 de noviembre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/0RZfH1>, consultado el 21 de mayo de 2013.

<sup>57</sup> Artículo 136, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 26 de noviembre de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/6depD>, consultado el 21 de mayo de 2013.

"local",<sup>58</sup> que ha sido implantado implícitamente por el artículo 116 constitucional, fracción IV, inciso I), pero que por falta de reglamentación es una creación interpretativa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación<sup>59</sup> o de las jurisdicciones locales.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Cfr. BECERRA RAMÍREZ, José de Jesús, y Sánchez Hoyos, Bertha, "El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en las entidades federativas", en Corona Nakamura, Luis Antonio *et al.* (coords.), Justicia constitucional local, México, UNAM, Posgrado de Derecho, Tribunal Electoral del Estado de Jalisco del Poder Judicial, 2013, pp. 67-92. Becerra Ramírez, José de Jesús, Meza García, José Guillermo, "La reforma constitucional y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el Estado de Jalisco", en Corona Nakamura, Luis Antonio *et al.* (coords.), *Justicia constitucional local...* *op. cit.*, pp. 93-115.

<sup>59</sup> La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al pronunciarse sobre la protección de los derechos político-electorales, ha recondicionado a la jurisdicción local, los conflictos de dicha naturaleza. Ello, a partir de la jurisprudencia que reconoce la existencia de medios de impugnación en materia electoral, dentro de los cuales se ha ubicado al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano "local". Precisamente, al resolver diversas demandas, correspondientes a diferentes entidades federativas, como son por ejemplo las identificadas en los expedientes SUP-JDC-65/2010 (Hidalgo), SUP-JDC-3149/2012 (Jalisco), SUP-JDC-3220/2012 al SUP-JDC-32 23/2012 (Estado de México), SUP-JDC-3239/2012 y SUP-AG-231/2012 ACUMULADOS (Baja California); el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de sus sentencias, así como la Sala Regional Toluca del mismo Tribunal (al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano ST-JDC-137/2011 [Hidalgo]), han reconocido la existencia de medios de impugnación en diversas entidades federativas, que si bien tienen reconocimiento a nivel de su constitución local, lo cierto es que al momento de resolver dichos asuntos, no se preveía un desarrollo legal de estos medios impugnativos, por lo que aquella jurisdicción federal ha optado por encauzar tales conflictos a los tribunales locales para que sean ellos quienes los conozcan.

<sup>60</sup> Anteriormente se había observado que, por ejemplo, en el caso del Estado de México, "...podría señalarse una clara manifestación de omisión en contra de nuestra Constitución y que en la actualidad aún padecemos, [la cual] surge al tener presente el artículo 13 de la Constitución mexicana, cuando este señala en su parte conducente: 'Artículo 13.-... la ley... garantizará la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.' Después de haber consultado la ley de la materia electoral, o sea, el Código Electoral del Estado de México, es como el principio contenido en el artículo 13 aún es retórico, porque no existe la institución instrumental que asegure —en palabras de la Constitución, garantice— la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. En dicho Código se señala en el artículo 303, que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México es competente para conocer de los recursos de revisión. Y por su parte el Tribunal Electoral es competente para conocer de los recursos de apelación y de los juicios de inconformidad. Estos tres constituyen los medios de impugnación que tienen por objeto garantizar la legalidad y certeza de los actos y resoluciones de los órganos electorales,

según lo establecido por el artículo 301. Sin embargo, si bien, en la fracción III del artículo 81 se indica como un fin del Instituto Electoral mexiquense el de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; todo queda como una declaración que recuerda la ideología de los franceses cuando indicaban que bastaba con reconocer los derechos humanos para que quedaran plenamente salvaguardados. De todo esto, aún falta la legislación que haga posible la realización del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Con relación al Código Electoral del Estado de México." Rivera Hernández, Juan, "Hacia nuevas competencias... *op. cit.*, pp. 157 y 156.

Sin embargo, existen casos en los que los propios tribunales electorales de las entidades federativas, en cumplimiento a los mandatos de sus constituciones, y a pesar de la inexistencia de desarrollo legal de los medios de impugnación en materia político-electoral, han asumido por cuenta propia la competencia para conocer de las violaciones a los derechos político-electorales, con fundamento, como se mencionó, en el artículo 116, fracción IV, inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ejemplo de ello son Jalisco y Baja California.

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco emitió un acuerdo aprobado el 8o. de diciembre de 2011, en el cual estableció que "...tiene competencia para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previstos por el artículo 70, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita y en plenitud de jurisdicción resolver lo que en derecho corresponda..." Véase: Acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que define el nombre, siglas y Procedimiento para la sustanciación y resolución del Medio de impugnación previsto en la fracción IV del Artículo 70 de la constitución política del estado de Jalisco, inherente a las impugnaciones de actos y Resoluciones que violen los derechos político electorales De los ciudadanos, ello con motivo de la Sentencia dictada con fecha treinta de noviembre del Año en curso, por la sala superior del tribunal Electoral del poder judicial de la federación, en el Expediente SUP-JDC-12640/2011." Disponible en: <http://goo.gl/1TKMD>, consultado el 22 de mayo de 2012.

El Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California amplió las hipótesis de procedencia del recurso de inconformidad local para incluir un medio de impugnación en los que se planteó la violación a derechos político-electorales. Ello, mediante la jurisprudencia que se identifica con el rubro: "Medio de impugnación idóneo a interponerse contra actos que afecten derechos políticos-electorales de los ciudadanos ante el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California. Recurso de inconformidad. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 8, fracción IV, incisos a), c) y e), 68 fracción III de la Constitución Política; 245, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 6, 7 y 9 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, todos del Estado de Baja California, deriva la competencia de este Tribunal para conocer de violaciones a los derechos políticos electorales de los ciudadanos, acorde a lo dispuesto en el precepto 5 de la Constitución local, al instaurar un sistema de medios de impugnación para garantizar el principio de legalidad que dará definitividad a las diversas etapas de los procesos electorales, garantizando la protección de

Entonces, el amparo local implícito e innominado se establece en las constituciones de: 1) Aguascalientes,<sup>61</sup> 2) Baja California,<sup>62</sup> 3) Baja California Sur,<sup>63</sup> 4) Campeche,<sup>64</sup> 5) Colima,<sup>65</sup> 6) Durango,<sup>66</sup> 7) Distrito Federal,<sup>67</sup> 8) Guanajuato,<sup>68</sup>

los derechos políticos de ciudadanos, a votar, ser votado y de asociación, de ahí, que resulte irrelevante la falta de previsión expresa del medio de impugnación a interponerse por el recurrente contra la negativa de su afiliación como miembro activo a un partido político en específico, al ser procedente el recurso de inconformidad, dada la similitud que guarda dicho acto, con los que son susceptibles de ser combatidos por ese medio de impugnación; de lo contrario, se haría nugatoria la garantía de acceso a la justicia consagrada en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, denegándose la posibilidad de impugnación de los actos atentatorios de aquellos derechos." TJE-CO-07/2007. Precedentes: Recurso de Inconformidad MI-004-2007. Pedro Salas Hernández. 12 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Recurso de Inconformidad MI-007-2007. Jaime Razo Torres. 12 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Recurso de Inconformidad MI-006-2007. Christopher Leonardo Neto Morín. 20 de marzo de 2007. Unanimidad de votos.

<sup>61</sup> Artículos 2o., párrafo cuarto, en relación con el 57, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 25 de junio de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/T0dL4>, consultado el 21 de mayo de 2013.

<sup>62</sup> Artículos 7o., párrafo primero, en relación con el 63, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 30 de noviembre de 2012, núm. 53, secc. II. Disponible en: <http://goo.gl/kih5D>, consultado el 21 de mayo de 2013.

<sup>63</sup> Artículos 7o., párrafo cuarto, en relación con el 97, fracción XIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, última reforma publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 30 de abril de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/gNiKC>, consultado el 21 de mayo de 2013.

<sup>64</sup> Artículo 6o., de la Constitución Política del Estado de Campeche, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 13 de septiembre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/Br9RZ>, consultado el 21 de mayo de 2013.

<sup>65</sup> Artículos 1o., fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, última reforma publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 1o. de enero de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/z9mss>, consultado el 21 de mayo de 2013.

<sup>66</sup> Artículos 1o., en relación con el 96, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, última actualización de 22 de octubre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/q8mDY>, consultado el 21 de mayo de 2013.

<sup>67</sup> Artículos 16, en relación con el 76, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero de 2011. Disponible en: <http://goo.gl/p0avw>, consultado el 21 de mayo de 2013.

<sup>68</sup> Artículos 4o., en relación con el 89, fracción XV, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de Guanajuato, el 15 de mayo de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/RuY1X>, consultado el 21 de mayo de 2013.



- 9) Guerrero,<sup>69</sup> 10) Hidalgo,<sup>70</sup> 11) Jalisco,<sup>71</sup> 12) Estado de México,<sup>72</sup> 13) Michoacán de Ocampo,<sup>73</sup> 14) Morelos,<sup>74</sup> 15)

<sup>69</sup> Artículos 1o., párrafo segundo, en relación con el 89, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 30 de septiembre de 2011. Disponible en: <http://goo.gl/B3-9RZ>, consultado el 21 de mayo de 2013.

<sup>70</sup> Artículos 4o., párrafo tercero, en relación con el 99, inciso A, fracción XIII, de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 25 de febrero de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/guWQ>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>71</sup> Artículos 4o., párrafo cuarto, en relación con el 62, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 20 de marzo de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/W75J2>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>72</sup> Artículos 5o., párrafo tercero, en relación con el 88 Bis, fracciones I y IV, y 137, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, última reforma publicada en la Gaceta de Gobierno, el 11 de octubre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/Q3TV0>, consultado el 22 de mayo de 2013. Cabe destacar que en el protocolo de investigación de la licenciatura, que se convirtió en la tesis con el título: "Hacia nuevas competencias de la Sala Constitucional del Estado de México", se había planteado otorgar una nueva competencia a la Sala Constitucional de referencia, para el conocimiento de lo que en aquél momento se había desarrollado como una adición al artículo 88 Bis, fracción V, en los siguientes términos: "V. Substanciar y resolver la acción para la protección de los derechos humanos, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, que otorga esta Constitución." Para tal efecto, se razonó: "Es así como nos preguntamos ¿porqué no dejar que el agraviado decida [sic. elija] la jurisdicción que lo restituya en el goce de sus derechos humanos violados? Con la utilización de la acción para la protección de los derechos humanos se cree sería posible desarrollar un federalismo judicial, que no es otra cosa que la participación de los tribunales locales en las funciones —que sin mayores argumentos— se estima son competencia exclusiva de los tribunales federales" (Enrique Uribe Arzate, s.p.i.), y se reduciría el centralismo judicial que a través del juicio de amparo se ha generado." Posteriormente, antes de la impresión y defensa de la tesis, se eliminó el amparo local, dado que la propuesta de reforma se reflejaría en el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Desde esta perspectiva, debe comprenderse, que la protección de los derechos fundamentales es una cuestión delicada y, siguiendo al maestro Mauro Cappelletti, su inadecuada tutela, provocaría la ineficacia de tales derechos, por ello se considera que esta labor debe fundamentarse en una teoría general de los derechos humanos, y, para ello, se estima conveniente desarrollar una propuesta de adición al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la que se expone en este documento, con la finalidad de obtener el ideal sobre una eficaz "jurisdicción constitucional de la libertad".

<sup>73</sup> Artículos 1o., párrafo tercero, en relación con el 74, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 28 de enero de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/iAwcb>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>74</sup> Artículos 2o., párrafo primero, en relación con el 99, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, última reforma

Nuevo León,<sup>75</sup> 16) Puebla,<sup>76</sup> 17) Quintana Roo,<sup>77</sup> 18) San Luis Potosí,<sup>78</sup> 19) Sinaloa,<sup>79</sup> 20) Sonora,<sup>80</sup> 21) Tabasco,<sup>81</sup> 22) Tamaulipas,<sup>82</sup> 23) Yucatán<sup>83</sup> y 24) Zacatecas.<sup>84</sup>

Ahora bien, en el ámbito de la federación surgen los siguientes cuestionamientos:

publicada en el Periódico Oficial, el 10 de septiembre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/2RwT9>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>75</sup> Artículos 1o., párrafo tercero, en relación con el 96, fracción XIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 17 de noviembre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/feAD2>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>76</sup> Artículos 7o., párrafo cuarto, en relación con el 90, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 9o. de enero de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/PqYIg>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>77</sup> Artículos 12, párrafo segundo, en relación con el 103, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 8o. de marzo de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/4Eizc>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>78</sup> Artículos 7o., párrafo segundo, en relación con el 91, fracción XIII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 6o. de noviembre de 2010. Disponible en: <http://goo.gl/J2Qv0>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>79</sup> Artículos 4o. Bis, párrafo segundo, en relación con el 105, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 3o. de octubre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/HKjJZ>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>80</sup> Artículos 1o., párrafo segundo, en relación con el 117, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, última reforma publicada en el Boletín Oficial, el 27 de septiembre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/yiH0k>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>81</sup> Artículos 4 ter, párrafo tercero, en relación con el 55, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 26 de septiembre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/CloRh>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>82</sup> Artículos 16, párrafo quinto, en relación con el 114, apartado A, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 5o. de marzo de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/kNmWq>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>83</sup> Artículos 2o., párrafo primero, en relación con el 69, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, última reforma publicada en el Diario Oficial, el 31 de agosto de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/iR7bm>, consultado el 22 de mayo de 2013.

<sup>84</sup> Artículos 10, 21, párrafo tercero, en relación con el 100, fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, última reforma publicada en el Diario Oficial, el 6o. de abril de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/iR7bm>, consultado el 22 de mayo de 2013.

Primero. La no definitividad de las sentencias. Esto es, la jurisdicción federal a través del amparo federal directo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de lo que Cappelletti denominó "recurso de amparo individual a nivel supranacional",<sup>85</sup> o bien, que Carlos Ayala nombró "amparo interamericano",<sup>86</sup> son jurisdicciones que pueden corregir las sentencias de los tribunales de los estados.

Segundo. La eficacia de los derechos fundamentales. Si la protección está a cargo de las jurisdicciones federal y local es probable que se genere una teoría no uniforme sobre la protección de estos derechos.

## V

En otras palabras, los argumentos en contra del amparo local pudiesen centrarse en los siguientes: 1. El margen que han de tener los jueces de amparo locales en la interpretación en una situación de derechos fundamentales homologados de manera idéntica en la Constitución general y la Constitución local;<sup>87</sup> 2. La no definitividad de las sentencias de amparo local debido a su revisión por medio del amparo federal;<sup>88</sup> 3. "... en todos los casos, las Constituciones y legislaciones secundarias, tratan de proteger derechos humanos y fundamentales que el amparo en materia federal salvaguarda, por lo que considero que se está haciendo una duplicidad de funciones, ya que no refieren que derechos humanos o fundamentales resguardan las Constituciones y que no están contempladas en la Cons-

<sup>85</sup> "Se tiene así una forma de 'recurso de amparo' individual, o si se prefiere, de *Verfassungsbeschwerde*, a nivel supranacional..." Cappelletti, Mauro, *Dimensiones de la justicia en el mundo contemporáneo* (Cuatro estudios de derecho comparado), trad. Héctor Fix Fierro, México, Porrúa, 1993, p. 63.

<sup>86</sup> AYALA CORAO, Carlos M., *Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos de protección de derechos humanos*, Caracas, San José, Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, Editorial Jurídica Venezolana, 1998, pp. 76-81.

<sup>87</sup> Serna de la Garza, José María, *Impacto e implicaciones constitucionales...* op. cit., p. 275.

<sup>88</sup> Bustillos, Julio, *Federalismo judicial a través del amparo...* op. cit., p. 6. Este autor plantea la siguiente pregunta: "¿se justifica la procedencia del amparo federal contra el amparo local cuando se presentan violaciones directas o "indirectas" a la Constitución federal?" *Idem*.

titudin Federal."<sup>89</sup> 4. La falta de confianza en la independencia judicial local; y, 5. El desinterés de las personas y autoridades por las instituciones locales.

Como réplica a estos argumentos consideremos estas hipótesis: José María Serna de la Garza señala con relación al primer razonamiento: "... estimamos que una respuesta razonable y moderada consistiría en considerar que el juez de amparo local estaría obligado a aplicar la jurisprudencia definida del Poder Judicial de la Federación."<sup>90</sup> Julio Bustillos menciona con relación al segundo argumento: "... creemos que en muchos aspectos, principalmente en cuestiones de defensa de derechos fundamentales locales, el amparo local desplazará paulatinamente al amparo federal (por lo menos en la práctica jurisdiccional de los estados), debido al carácter tan formalista que el propio amparo federal ha arropado con el tiempo (de igual manera que le ocurrió a la casación)."<sup>91</sup> Hipótesis que en parte quizá es superada como resultado de la publicación de la "nueva" ley de amparo, el pasado dos de abril de dos mil trece.<sup>92</sup> Sin embargo, sería cierta en cuanto a que es más cercano a la sociedad. Y opinamos que con una reforma constitucional sobre el particular, y la existencia del "control difuso de convencionalidad", se puede responder el tercer, cuarto y quinto razonamiento.

## VI

Por tanto, consideremos esta hipótesis general:  
Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1o. tercer párrafo, que todas

<sup>89</sup> MIRANDA CAMARENA, Adrián Joaquín, Ruiz Pérez, José de Jesús, "Amparo local", en Corona Nakamura, Luis Antonio et al. (coords.), *Justicia constitucional...* op. cit., p. 171.

<sup>90</sup> SERNA DE LA GARZA, José María, *Impacto e implicaciones constitucionales...* op. cit., p. 275.

<sup>91</sup> BUSTILLOS, Julio, *Federalismo judicial a través del amparo...* op. cit., p. 84.  
<sup>92</sup> "Ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2o. de abril de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/s7518>, consultada el 11 de abril de 2013.

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger los derechos humanos, y en el párrafo segundo del mismo artículo se prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone en los artículos 2o., que el Estado mexicano se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades del mismo orden jurídico internacional; 8o., apartado 1, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden de cualquier carácter; 8o., apartado 2, inciso h), que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a la garantía mínima, del derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior; 25, inciso 1, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la misma Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales; y, 25, inciso 2, que el Estado mexicano se compromete: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

En consecuencia, se debería implementar el amparo local en todas las entidades federativas para otorgar eficacia al artículo 1o. constitucional párrafos segundo y tercero, y a los artículos 2o., 8o. apartados 1 y 2, inciso h), y, 25, apartados 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, debido a que esta garantía constitucional sería una competencia originaria de la jurisdicción local, de acuerdo con el nuevo paradigma de orden jurídico mexicano y de su contemplación explícita o implícita en las Constituciones locales, constituyéndose en una vía de acceso mediata para el ejercicio del derecho humano de "acceso a la justicia", "tutela judicial efectiva", o "derecho a la tutela jurisdiccional".

Desde esta perspectiva, se abstraerá que por virtud de los artículos constitucionales 1o., 40, 41, párrafo primero, 107 fracción XII, 124, y 133, así como del derecho internacional de los derechos humanos,<sup>93</sup> el amparo local debería ser implementado.

La idea se sustentaría también en las siguientes consideraciones: 1. La tutela al acceso a la justicia; 2. La existencia del control difuso de convencionalidad; 3. El ejercicio del

<sup>93</sup> Artículo 8o. de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley." Disponible en: <http://goo.gl/3YVt>, De Los Derechos Y Deberes Del Hombre: "Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente." Disponible en: <http://goo.gl/VKuL1>, consulta: el 3o. de mayo de 2013. Artículo 2o., apartado 3, en sus incisos a), b) y c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." Disponible en: <http://goo.gl/Orfj4>, artículo 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, del Convenio Europeo de Derechos Humanos: "Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales." Disponible en: <http://goo.gl/Tl8pR>, consultado el 3o. de mayo de 2013. Cfr: Ayala Corao, Carlos M., *Del amparo constitucional al amparo interamericano...* op. cit., pp. 17 a 24.



federalismo judicial; 4. El abatimiento del rezago del amparo federal; 5. La cercanía y generación de confianza en el poder judicial local por parte de la sociedad; 6. La promoción del uso de instituciones locales; 7. El fomento a la cultura jurídica de los derechos humanos en el ámbito estatal.

## VII

Todo esto parece confirmar que el amparo local es un tema de la impartición de justicia, en virtud de que el problema de la protección de los derechos humanos (recordemos que este es el nombre que reciben los derechos fundamentales en México), reviste gran importancia en la vida pública del país, y prueba de ello son las reformas constitucionales en materia de amparo y en materia derechos humanos del dos mil once.<sup>94</sup> Así como la elaboración de declaraciones políticas. Como serían los “Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades” en el que se ubica el “Defender a los derechos humanos como política de Estado” de “El Pacto por México”, y que prevé: “México requiere que el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos sean una constante de su cultura y del actuar de sus gobernantes.”<sup>95</sup> Como también, la “Contribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Generación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Nacional de Derechos Humanos”, en el que se propone “reconocer a los derechos humanos como límite formal y material ineludible para la actuación de todos los órganos del Estado.”<sup>96</sup> Y también, el “Informe de México: Avances y Desafíos en Materia de Derechos Humanos”, en el apartado “Política Exterior Mexicana en Materia de Derechos Humanos y Apertura al Escrutinio Nacional”, que con énfasis indica:

El liderazgo de México en la construcción de la institucionalidad internacional de derechos humanos corresponde a la

<sup>94</sup> Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6o. y 10 de junio de 2011, respectivamente. Disponible en: <http://goo.gl/Kak9Y>, y <http://goo.gl/OplIH>, consultado el 11 de abril de 2013.

<sup>95</sup> Disponible en: <http://goo.gl/j3DkQ>, consultado el 15 de abril de 2013.

<sup>96</sup> Disponible en: <http://goo.gl/d93sk>, consultado el 2o. de mayo de 2013.

búsqueda de la implementación nacional de los más altos estándares de derechos humanos mediante el reconocimiento de obligaciones plasmadas en nuevos instrumentos, la aplicación de proyectos específicos de cooperación, la aceptación de recomendaciones de mecanismos de derechos humanos o la promoción de cambios estructurales, fortalecimiento institucional y reformas legales para superar los rezagos.<sup>97</sup>

Asimismo, la preocupación por los derechos humanos no sólo la ha asumido el Estado mexicano, sino que se creó una “Propuesta de Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, elaborada por las Organizaciones de la Sociedad Civil y por académicos y académicas especialistas en derechos fundamentales”, la cual señala un sexto objetivo fundamental consistente en: “Reforzar las garantías y mecanismos de protección de los derechos humanos.”<sup>98</sup>

## VIII

Además, dada la estructura y el extenso número de derechos humanos que actualmente deben observarse por los habitantes y las autoridades de nuestro país, es posible que aquellos entren en conflicto respecto al que otorgue una mayor protección de las personas (principio pro homine o persona), por ejemplo, en caso de contradicción entre una norma de derechos humanos prevista en la constitución o la legislación y una norma de derechos humanos prevista en un tratado, del bloque de constitucionalidad establecido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que cabe destacar es un principio que obliga a analizarlos, conjunta y sistemáticamente y siempre con base en el referido principio pro persona.

En este sentido, la solución de dichos conflictos se ha encomendado a los Tribunales de la Federación, y en última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

<sup>97</sup> Informe de México: Avances y desafíos en materia de derechos humanos, 2da. Ed., México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, 2011, p. 57.

<sup>98</sup> México, Talleres de Mar de Letras, 2008, p. 13. Disponible en: <http://goo.gl/VGbXy>, consultado el 3o. de mayo de 2013.

a través del control de constitucionalidad, que tiene como uno de sus objetivos el solucionar las colisiones entre derechos humanos en los casos concretos que deben ser observados, y para ello la jurisdicción federal utiliza diversas "... técnicas argumentativas, como la ponderación que permite resolver este tipo de problemas".<sup>99</sup>

Pero, si el titular del derecho aún se encuentra insatisfecho con la protección (o falta de protección), éste puede acceder al Sistema Interamericano de Derechos Humanos,<sup>100</sup> en el que se ubica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ejerce el control de convencionalidad, y quien puede emitir otra resolución diversa a la adoptada a nivel nacional.

Más aún, la aplicación de los principios de ponderación y proporcionalidad que se subsume en el contexto de las teorías relativas sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales que se ha considerado una teoría interpretativa uniforme, capaz de brindar un sentido coherente al sistema de normas, porque para aquella estos derechos comprenden un núcleo indisponible para los poderes constituidos, incluido el legislador ordinario; en consecuencia, se supone que dicha aplicación del principio de ponderación y de proporcionalidad, según Arturo Zaldívar, "... en el sistema jurídico mexicano está aún en sus primeras etapas; no ha alcanzado un nivel adecuado de persuasividad ni ha derivado un sistema uniforme de precedentes, lo que sería deseable para racionalizar y hacer transparente el método de resolución de conflictos entre principios constitucionales de derechos humanos."<sup>101</sup>

De este modo, la labor del encuentro del derecho humano que otorgue una mayor protección de las personas, posiblemente comprendería el federalismo judicial mexicano,

<sup>99</sup> ZALDÍVAR Lelo de Larrea, Arturo, *Hacia una nueva ley de amparo*, México, UNAM, 2002, p. 92.

<sup>100</sup> Objeto de estudio del sector de los procesos internacionales regionales interamericanos del Derecho procesal internacional, y del sector de los procesos constitucionales supranacionales del Derecho procesal constitucional.

<sup>101</sup> ZALDÍVAR Lelo de Larrea, Arturo "Prólogo", en Silva García, Fernando, *Deber de ponderación y principio de proporcionalidad en la práctica judicial*, México, Porrúa, 2012, pp. VIII y IX.

debido a que esa misión debería ser compartida por los tribunales de la federación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, también, por los tribunales locales, quienes tienen que hacer vigentes, según dispone el citado artículo 1o. constitucional y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,<sup>102</sup> en el marco de sus competencias, a los derechos contenidos en la Constitución local, en la Constitución nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos. De esta manera, se presume que el amparo local sería útil para tal efecto, porque sin poder apartarnos de la idea del Maestro Mauro Cappelletti: "Verdad es que por su misma naturaleza los derechos fundamentales, o al menos alguna parte de ellos... tienen confines muy vagos... de manera que las normas que los establecen, por la indeterminación de sus propios contornos permiten en quien aplica, un amplio margen de discrecionalidad en su interpretación. Pero si esto hace más delicada la tarea del intérprete (y esa será una razón de más para imponer la exigencia de un tipo particular de proceso "constitucional" y de un juez particular, *superiorem non recognoscens*, especializado y calificado en dicha interpretación, la que adquiere de esta manera caracteres acentuadamente creativos...".<sup>103</sup> Es como, la labor conjunta, local, federal e internacional sería el método que constituiría "... un sistema coherente de precedentes que abone a la racionalidad de las

<sup>102</sup> Véase la jurisprudencia con el rubro: "Control constitucional local. Es válido establecer un tribunal constitucional y un sistema de medios para exigir la forma de organización de los poderes y la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito estatal. La superioridad de la Constitución de cada Estado de la Federación sobre el resto de sus normas internas, tiene fundamento en los artículos 40, 41, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que resulta válido establecer un tribunal y un sistema de medios para el control constitucional local, que tenga por finalidad controlar y exigir judicialmente la forma de organización de los Poderes estatales, en cuanto a su régimen interior y la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, en el ámbito del orden estatal, en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal." Jurisprudencia, 10a. época, Pleno, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, t. 1, p. 288.

<sup>103</sup> CAPPELLETTI, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad... op. cit.*, pp. 6 y 7. Y sobre este tema también advierte "... no es posible, sin embargo, en los ordenamientos en los cuales exista una eficaz "jurisdicción constitucional de la libertad". *Ibidem*, p. 7.

decisiones en los casos difíciles."<sup>104</sup> Ello corregiría la idea de que "...a partir de los desarrollos que se han venido dando en estados como Veracruz y Tlaxcala, al juego interpretativo de los derechos se ha sumado, de manera todavía tímida e incipiente, un nuevo actor: el juez constitucional local."<sup>105</sup> Así como, la consistente en que: "...la justicia constitucional es una, y que otras son la justicia federal y la justicia local. El federalismo judicial sólo será posible si se respetan estos principios. Pero en nuestra vida práctica y en nuestras leyes los jueces federales poseen no sólo la función de ser jueces de derecho federal, son además jueces constitucionales, lo que acumula en sus manos un poder rayano en la mesura."<sup>106</sup>

## IX

No obstante, para el Jurista Serna de la Garza, la proyección procesal a la que encauza el amparo local crearía una novedad.

... en cuanto a los derechos humanos previstos en las Constituciones locales que no tienen homólogo en la Constitución general, pero sí en convenciones y tratados internacionales, los jueces de amparo local deberían seguir la interpretación de los órganos con la competencia originaria para hacerlo respecto de las convenciones y tratados, en la medida en que esa interpretación exista (así lo ordenan expresamente las Constituciones de Veracruz, Tlaxcala y Sinaloa...). De no ser ese el caso, o bien en la hipótesis de que existan derechos previstos en las Constituciones locales, pero no en tratados (ni en la Constitución general), se abre el camino para el desarrollo original de esos derechos por parte de la justicia constitucional local. (Énfasis añadido).<sup>107</sup>

<sup>104</sup> ZALDÍVAR Lelo de Larrea, Arturo "Prólogo", en Silva García, Fernando, *Deber de ponderación y... op. cit.*, p. X.

<sup>105</sup> Serna de la Garza, José María, *Impacto e implicaciones constitucionales... op. cit.*, p. 277.

<sup>106</sup> Solorio Ramírez, Daniel, "Retornar al federalismo judicial (... a propósito de la iniciativa presidencial para una nueva ley de amparo)", Revista bien común y gobierno, México, edit. Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C., año 7, núm. 8, septiembre 2001, pp. 30 y 31.

<sup>107</sup> SERNA DE LA GARZA, José María, *Impacto e implicaciones constitucionales... op. cit.*, p. 277.

Desde esta perspectiva, es importante señalar que la estructura procesal del amparo local se constituiría con base en el principio de subsidiariedad. En efecto, éste no estaría diseñado como un sustituto del amparo federal.<sup>108</sup> Ello por- que de las decisiones políticas fundamentales,<sup>109</sup> se abstraer la idea de que los tribunales locales son los primeros llamados a respetar y proteger los derechos humanos, por ser los más cercanos a la sociedad, en el entendido de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede intervenir en caso de que el gobierno de las entidades federa- tivas haya fallado en el cumplimiento de sus obligaciones, con la intención de no menoscabar el acceso a la justicia o a la tutela judicial efectiva de las personas que hayan pre- sentado el amparo local para la tutela de sus derechos.

Simultáneamente, esta subsidiariedad emerge de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que

—Los juzgadores de todo el país están obligados a verificar que las leyes que se aplican se ajustan a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos...

—Así lo determinó el Pleno del Alto Tribunal al resolver la consulta a trámite en el expediente varios 912/2010.

En la resolución también se precisa que los juzgadores de todo el país están obligados a verificar que las leyes que aplican se ajustan a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, es decir, están obligados a realizar un control de convencionalidad dentro de un modelo de control difuso de constitucionalidad.

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque

<sup>108</sup> Cfr: *Ibidem*, p. 245. Autor quien a la vez fundamenta su argumento en las ideas de Toro Huerta, Mauricio Iván del, "El principio de subsidiariedad en el derecho internacional de los derechos humanos con especial referencia al sistema interamericano", en Becerra Ramírez, Manuel, *La Corte Interamericana de Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento*, México, UNAM, 2007, p. 24.

<sup>109</sup> Cfr: FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Una constitución viva y dinámica (Discurso pronunciado en la presentación del libro 'Estudios jurídicos en torno a la constitución de 1917 en su septuagésimo aniversario')", Colección Cuadernos, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Honorable Cámara de Diputados, vol. 1, 4° de febrero de 1992, pp. 4 y 5.



sus disposiciones no se vean limitadas por disposiciones internas que sean contrarias a su objeto y fin.

Por tal razón, el control difuso (de constitucionalidad y convencionalidad) debe realizarse entre las normas de derecho interno, en relación con la Constitución Federal y la mencionada Convención, tomando en cuenta no solamente su texto sino también a la interpretación realizada por la Corte Interamericana.

En ese sentido, el Alto Tribunal resolvió que los jueces de todo el país podrán dejar de aplicar al caso concreto las normas que resulten contrarias a la Constitución Federal o los tratados internacionales, sin que ello implique una declaración de inconstitucionalidad, que sigue reservada a la justicia federal.

La decisión se tomó con base en el párrafo 339 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del caso Radilla Pacheco, a partir de la interpretación del nuevo artículo 1º y del 133 de la Constitución Federal.<sup>110</sup>

Y también se considera que la subsidiariedad es conveniente porque nos adherimos a las reflexiones del jurista mexicano Serna de la Garza:

No creo que debamos avanzar hacia un nuevo sistema de control de constitucionalidad/convencionalidad por el camino fragmentado de decisiones judiciales que en el agregado resulten en un nuevo esquema, sino más bien por el camino de un proceso de reforma constitucional y legal que identifique modelos alternativos, los valore, y decida el mejor diseño para las circunstancias, características y necesidades de nuestro país.

En suma, debemos estudiar en sus aspectos técnicos el sistema difuso, sus problemas, sus posibilidades, sus implicaciones y sus variantes.<sup>111</sup>

De esta manera, el amparo local no sería un medio de defensa ordinario sino un medio de defensa constitucional

<sup>110</sup> Cfr: "Restringe SCJN fuero militar; en cumplimiento con la sentencia emitida por la corte interamericana de derechos humanos en el caso radilla pacheco", Comunicado 127/2011 del 14 de julio de 2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: <http://goo.gl/DZKJZ>, consultado el 20 de mayo de 2013. Véase Serna de la Garza, José María, *Impacto e implicaciones constitucionales...* op. cit., p. 279.

<sup>111</sup> SERNA DE LA GARZA, José María, *Impacto e implicaciones constitucionales...* op. cit., pp. 287 y 288.

que conforme a su naturaleza, tiene el carácter de extraordinario, por lo que procedería únicamente respecto de aquellos actos contra los cuales el orden jurídico de las entidades federativas no conceda recurso alguno, por virtud del cual, puedan repararse los perjuicios que dichos actos ocasionan a los derechos humanos.<sup>112</sup>

Entonces, con el amparo local, el amparo federal y el amparo supranacional interamericano, los derechos humanos quedarían protegidos por un sistema de doble instancia.<sup>113</sup>

## X

De ahí que, se propone una propuesta de adición al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente desde 1917. Ésta se inspira en el derecho comparado. Precisamente en el artículo 90, inciso 3 de la Bundesverfassungsbeswerde, que prevé una institución análoga al amparo local: "Permanece inalterado el derecho a promover una reclamación [recurso] constitucional ante el Tribunal Constitucional del Land, conforme al derecho de la Constitución del mismo."<sup>114</sup>

El texto de la propuesta de adición del artículo 116 constitucional sería el siguiente:

Existe el derecho a promover un amparo local ante la magistratura constitucional de cada entidad federativa, conforme al derecho de su constitución particular y con base en los siguientes principios:

1. La legitimación a favor de cualquier persona o recurrente, que reclame el violación de sus derechos humanos.

<sup>112</sup> Cfr: Amparo directo 1060/2008, Morelia, Michoacán. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.

<sup>113</sup> Cfr: ARENAS BÉJIZ, Carlos Emilio, "La codificación de la justicia constitucional en las entidades federativas. Memorias de la Cuarta Mesa Redonda, México, 2008, p. 48.

<sup>114</sup> La Ley sobre el Tribunal Constitucional Federal (última reforma publicada en el Boletín Oficial Federal, de 12 de julio de 2012) prevé originalmente: "Das Recht, eine Verfassungsbeschwerde an das Landesverfassungsgericht nach dem Recht der Landesverfassung zu erheben, bleibt unberührt." Disponible en: <http://goo.gl/sNjz8>, consultado el 20 de mayo de 2013. Cfr: Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad...* op. cit., p. 79.

2. La conformación de la jurisdicción local a través del Tribunal Constitucional local, del Tribunal de Casación local, Colegiados y Unitarios), de los Juzgados de Primera Instancia y de los Juzgados Locales;<sup>115</sup> otorgándose la competencia para conocer del amparo local, a los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito, trasladándose todas las competencias de legalidad, al Tribunal de Casación local y a los Tribunales Unitarios Regionales de Circuito.<sup>116</sup> Cabe mencionar que dicha jurisdicción local también contendría un sistema de medios de impugnación para la protección de los derechos político-electorales.

3. El establecimiento de un recurso de revisión de la sentencia de amparo local, ante el Tribunal Constitucional local, y en su caso, a petición de éstos, aquella revisión la pudiese conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

4. La integración del Tribunal Constitucional local por cinco magistrados, y los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito, por tres magistrados, los cuales:

a. Deberán cubrir mínimo los requisitos del artículo 94 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus primeras cuatro fracciones, con la propuesta de reforma a la fracción tercera de poseer, el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, así como de posgrado, con una antigüedad de un año, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello y con reconocimiento de programa de calidad en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,<sup>117</sup>

b. Deberán ser propuestos y nombrados mediante insaculación por los Consejos de las Judicaturas locales;

Adicionalmente, se prevé en un artículo transitorio la “compatibilidad de constitucionalidad”, al que deberán so-

<sup>115</sup> Cfr. Artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, última reforma publicada el 27 de septiembre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/yiH0k>, consultado el 22 de abril de 2013.

<sup>116</sup> Cfr. Artículo 43 y 43 BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, última reforma publicada el 27 de septiembre de 2012. Disponible en: <http://goo.gl/HIJX>, consultado el 22 de abril de 2013.

<sup>117</sup> Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Número 3702-II, miércoles 6 de febrero de 2013. Disponible en: <http://goo.gl/A6tgg>, consultado el 23 de abril de 2013.

meterse todas las Constituciones locales, y que llevará a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (dado que se presupone es el Tribunal Constitucional mexicano); así como, una Opinión Consultiva, que realizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante solicitud del Estado mexicano, con base en lo previsto por el artículo 64, inciso 2,<sup>118</sup> una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya efectuado las anteriores compatibilidades. Lo anterior es con el objetivo de verificar que las Constituciones locales no contravienen las estipulaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para generar una primera teoría general de los derechos humanos en México, y en consecuencia, las entidades federativas estén en posibilidad de iniciar los cambios jurídicos e institucionales necesarios, sometiéndose a los lineamientos de la propuesta de adición, originándose la “era” del amparo local en México.

## XI

De manera tal, sin poder apartarnos de las consideraciones del maestro Mauro Cappelletti, al expresar:

<sup>118</sup> Dicho artículo 64, inciso 2, establece: “2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquier de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.” Disponible en: <http://goo.gl/RXryL>, consultado el 20 de mayo de 2013. Sobre estas opiniones solicitadas a la jurisdicción supranacional, señala Lorena González Volio: “En consecuencia la Corte estableció que la facultad que le otorga el artículo 64 de la Convención, en el sentido de emitir opiniones consultivas sobre la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, incluye igualmente la competencia para emitir dichos dictámenes respecto de las reservas que puedan haberse formulado a esos instrumentos.

.... la Corte ha aceptado consultas sobre proyectos de reforma constitucional o legislativa que evidentemente no han entrado en vigor, y no son una “ley” en sentido estricto.” González Volio, Lorena, “La competencia de la Corte Interamericana a la luz de su jurisprudencia y su nuevo reglamento”, en: Gaceta 9. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2002, pp. 9 y 10. Véase OC-4. Disponible en: <http://goo.gl/t6lWt>, consultado el 20 de mayo de 2013.

De tal manera, en sentido amplio, la noción “ley” del artículo 64, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pudiese contemplar a las Constituciones locales.



He creído necesario prepararme... he investigado y seguiré investigando, la existencia... de cualquier institución capaz de realizar en forma efectiva los derechos fundamentales, examinando, además, las causas y formas de su establecimiento y los problemas que puede hacer surgir. Un modo, diríamos, diferenciado, reforzado, diferente por su estructura, y fundamentalmente por sus efectos, del que se persigue en los juicios ordinarios. Es esta diferenciación y, por tanto, la existencia en el ámbito de la 'jurisdicción constitucional' de un tipo particular de 'jurisdicción constitucional de la libertad' (*Grundrechtsgerichtsbarkeit*), la que falta en Italia, y su ausencia determina, en el mayor de los casos, la inadecuación de la tutela y, consiguientemente, provoca la ineficacia del derecho, o más precisamente, de la 'situación activa' contenida en la Constitución. (Énfasis original) <sup>119</sup>

Pueden formularse tres conclusiones generales. El amparo local sería:

1. Un acceso a la justicia eficaz y cercano a las personas;
2. Una competencia originaria de la jurisdicción local, de acuerdo con el nuevo paradigma de orden jurídico mexicano y de su contemplación explícita o implícita en las Constituciones locales; y,
3. Una vía de acceso mediatizada para el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, o derecho a la tutela jurisdiccional.

<sup>119</sup> Cappelletti, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad...* op. cit., p. 5.

## EL DERECHO A LA LIBERTAD FRENTE A LOS MECANISMOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ TRUJILLO  
Universidad Anáhuac Mayab

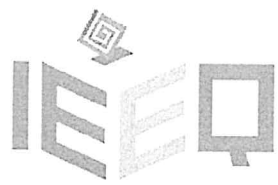
### I. INTRODUCCIÓN

Es común que presenciemos hechos que manifiestan una abismal desigualdad política, social y jurídica. Asomarse a la calle es suficiente para encontrarnos con niños, mujeres y hombres en situación de calle, comercio informal, planeación urbana que excluye a discapacitados, colonias marginales sin servicios públicos, comunidades campesinas e indígenas desplazados, entre muchos más problemas que atentan contra los derechos humanos.

Es posible que el hombre común asuma que este escenario es normal, que las cosas son como deben ser, tal vez muchos se quejen por las injusticias que les toca presenciar e inclusive vivir en carne propia, pero serán los menos, los que piensen que algo se puede hacer o que existen instrumentos jurídicos de carácter procesal constitucional que pueden en alguna medida ayudarle a salvaguardar sus derechos humanos.

Sin embargo en la actualidad esto se presenta como un estado de desencanto ante un Estado de Derecho que no funciona como tal. Un Estado que en su apreciación no hace nada por protegerlo y promoverlo en sus necesidades primigenias y que enarbola a través de sus derechos humanos.

En este trabajo se aborda particularmente el derecho humano a la libertad como un conjunto de derechos, es



Instituto Electoral del  
Estado de Querétaro

# EXPRESIONES

LETRAS CIUDADANAS A FAVOR DE LA DEMOCRACIA

No. 20

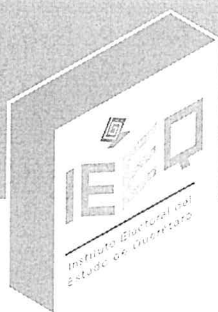
No. 20

**Entrevista**  
con el politólogo  
**Adam Przeworski**

**3ra. Cátedra**  
**Mexicana Brasileña**  
Guillermo O'Donnell

**Entrega**  
**IEEQ**  
Iniciativa de la  
Ley Electoral  
del Estado

**Aprueba**  
**Consejo General**  
**Plebiscito en**  
**El Marqués**



## DIRECTORIO

**Gerardo Romero Altamirano**  
Consejero Presidente del Consejo General y Presidente de la  
Comisión de Vinculación

**Luis Octavio Vado Grajales**  
Consejero Electoral, Presidente de las  
Comisiones Editorial y Jurídica

**Yolanda Elías Calles Cantú**  
Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión de Igualdad  
Sustantiva

**Gema Nayeli Morales Martínez**  
Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión de  
Organización Electoral

**Gabriela Benites Doncel**  
Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión de  
Fiscalización

**Jazmín Escoto Cabrera**  
Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión de  
Educación Cívica

**Carlos Rubén Eguiarte Mereles**  
Secretario Ejecutivo

**Miguel Ángel Torres Olguín**  
Representante del Partido Acción Nacional

**Sócrates Alejandro Valdéz Rosales**  
Representante del Partido Revolucionario Institucional

**José de Jesús Acosta Talamantes**  
Representante del Partido de la Revolución Democrática

**José Luis Aguilera Ortiz**  
Representante del Partido Movimiento Ciudadano

**Abel Espinoza Suárez**  
Representante del Partido Nueva Alianza

**Perla Patricia Flores Suárez**  
Representante del Partido Verde Ecologista de México

**José Antonio Zumaya de la Mora**  
Representante del Partido Encuentro Social

**Carlos Peñafiel Soto**  
Representante del Partido Morena

**Ricardo Domínguez Álvarez**  
Representante del Partido del Trabajo

**María Pérez Cepeda**  
Directora Ejecutiva de Educación Cívica

**José Eugenio Plascencia Zarazúa**  
Director Ejecutivo de Organización Electoral

**Juan Rivera Hernández**  
Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

**Oscar Hinojosa Martínez**  
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública

**Héctor Maqueo González**  
Coordinador de Comunicación Social

**Raúl Islas Matadamas**  
Coordinador de Informática

**Gloria Luz Duarte Valerio**  
Coordinadora Jurídica

**Arturo Rosendo de Santiago Valencia**  
Coordinador Administrativo



**Adam Przeworski**  
Politólogo, profesor de la Universidad  
de Nueva York

Instituto Electoral del Estado de Querétaro  
Av. Las Torres No. 102, Residencial Galindas,  
C.P. 76177, Santiago de Querétaro, Qro.

Tel. 01(442) 101 98 00, 01(800) 400 2003

Coordinación de Edición  
Comisión Editorial y Coordinación de Comunicación Social  
Redacción  
Mirian Tirado Cecilliano y Héctor Maqueo González  
Coordinación de Comunicación Social  
Diseño y formación  
Sergio Ríos Oviedo  
Foto de portada  
Coordinación de Comunicación Social

Se imprimió en  
UMA PUBLICITAS, Agencia de publicidad y marketing  
Palmas Syca No. 202, int. 22-A,  
Condominio Palmas II, Fraccionamiento Palmares  
Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro.

en el mes de octubre de 2016.  
Primera edición 1000 ejemplares

Las opiniones vertidas en la revista son  
responsabilidad de cada autor y del entrevistado.

[www.ieeq.mx](http://www.ieeq.mx)

REGISTRO ANTE EL INDAUTOR

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo,  
con número 04-2016-030811001900-102

La opinión

La  
libertad  
en el goce  
de los

de  
re  
chos

fundamentales  
basada en  
precedentes<sup>1</sup>

Por Juan Rivera Hernández,  
titular de la  
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

En el sistema jurídico mexicano, la libertad en el goce de los derechos fundamentales depende de la voluntad del legislador.

En 2011, mediante la voluntad del legislador se dispuso que todas las autoridades<sup>2</sup> protegieran los derechos de las personas, con mayor libertad, inclusive fuera de las limitaciones de la ley, pero dentro de los mismos derechos humanos y en el ámbito de sus competencias.

De esta manera, las autoridades pueden hacer realidad los derechos de las personas, con independencia del material jurídico en el que se encuentren.

Más, ese postulado fundamental que, desde 2011, tiene carácter supremo y constitucional, posee la limitación consistente en que las autoridades pueden conocer y resolver solo lo que sea su competencia.

<sup>1</sup>Documento que se relaciona con las investigaciones doctorales que tienen por títulos: "La problemática teórico-práctica del proceso constitucional en México (1987-2012)" y "Los procesos constitucionales de la libertad. Con referencia al sistema interamericano y mexicano de protección de los derechos humanos".

<sup>2</sup>Para un concepto de autoridad cfr. Caracciolo, Ricardo, "El concepto de autoridad normativa. El modelo de las razones para la acción", Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho, Alicante, Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, núm. 10, y Raz, Joseph, "Authority and justification", en Raz, Joseph (ed.) Authority, Oxford, Basil Blackwell, 1990.



Esta limitación propicia un efecto de remisión y regreso para que sea la propia voluntad del legislador que establezca cómo las autoridades pueden realizar la libertad de referencia, esto confiriéndoles competencia mediante lo que tenga a bien prever en sus leyes, objetivo en el cual participa por disposición jurídica, la jurisprudencia.<sup>3</sup>

Sin embargo, las autoridades deben cumplir la ley y resolver con apoyo en ella, las circunstancias particulares de los casos que son competentes para conocer; así, mediante sus decisiones, pueden proteger la libertad indicada.

Las decisiones que asumen las autoridades constituyen los precedentes mediante los cuales se puede realizar la voluntad del legislador constitucional.

***“Las decisiones que asumen las autoridades constituyen los precedentes mediante los cuales se puede realizar la voluntad del legislador constitucional”***

Justamente, el precedente tiene su origen en la solución de conflictos en los que se tiene que hacer efectivo y real la justicia de los derechos fundamentales, dado que como ha indicado John Rawls: “Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales.”<sup>4</sup>

Con la emisión de los precedentes, las autoridades pueden asegurar la libertad en el goce de los derechos humanos, sin embargo al tener como origen un conflicto, el propio precedente requiere que su núcleo, el cual se constituye con las razones para resolver en un sentido, este provisto de elementos culturales de legalidad pero también de conocimiento en derechos humanos, entonces, los operadores jurídicos requieren estar capacitados en dichos temas, al mismo tiempo que el servicio profesional de carrera debe establecer mecanismos orientados a que se establezcan los requerimientos para conocer qué es la mayor protección de la persona en el sistema jurídico mexicano, relacionándolo con el

ámbito de las competencias del servicio público y de la persona a la que se le otorgaría la encomienda pública.

Con en el precedente, en el sistema jurídico mexicano se puede, sino propiciar una Constitución convencionalizada, como lo ha concebido Néstor Pedro Sagüés,<sup>5</sup> si es posible que las autoridades, todas, como ordena la Constitución, establezcan en la realidad una ley constitucionalizada, ciertamente la ley que sea de su competencia, esto es, que se interprete conforme y de modo compatible con el sistema de fuentes del orden jurídico mexicano constituido por la ley, la Constitución misma y la jurisprudencia nacional que delinea el sistema jurídico en nuestro país, sin perjuicio de que esta pueda estar más cercana al sentido de la jurisprudencia convencional interamericana y que pudiera desarrollar un diálogo jurisprudencial con los sistemas regionales y universal de protección de derechos humanos.

***“Es posible indicar como hipótesis que una manera de realizar la libertad en el goce de los derechos fundamentales, serían los precedentes que emiten todas las autoridades”***

Sin perder de vista las anteriores precisiones, con un paradigmático orden fundamental contenido per se en el artículo 1 constitucional, es posible indicar como hipótesis que, una manera de realizar la libertad en el goce de los derechos fundamentales serían los precedentes que emiten todas las autoridades en el ámbito de su competencia, con la posibilidad de que estos cada vez más favorezcan “...en todo tiempo a las personas la protección más amplia (artículo 1 constitucional)”, ello con independencia de que los derechos de las personas les pertenezcan con justicia; precisamente que ese derecho se base en la verdad y se pruebe con elementos objetivos que lo sustenten, sin soslayar en ello la labor de todas las autoridades, porque no solo es obligación de la persona el acreditar su derecho o derechos fundamentales, sino la autoridad, con equidad procesal, puede hallar tal verdad.

La  
libertad  
en el goce  
de los

<sup>3</sup>Cfr. Rivera Hernández, Juan, “La jurisprudencia mexicana en las reformas constitucionales de 1994 y 2011”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, Poder Judicial de la Federación, 2012, núm. 34.

<sup>4</sup>Rawls, John, Teoría de la justicia, trad. de María Dolores González, 2da. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 17.

<sup>5</sup>Sagüés, Néstor Pedro, “Constitución convencionalizada”, en Ferrer Mac- Gregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni Figueroa (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, México, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, t. I, pp. 186-189.